



La horrible noche

El conflicto armado
colombiano en
perspectiva histórica

Forrest Hylton





La horrible noche

El conflicto armado
colombiano en
perspectiva histórica

Forrest Hylton



FO
LIOS

La horrible noche

El conflicto armado
colombiano en
perspectiva histórica





La horrible noche

El conflicto armado
colombiano en
perspectiva histórica

Forrest Hylton

Medellín
2017



La horrible noche: El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica
Colección Folios

© Vicerrectoría de Investigación Editorial Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas Centro Editorial

ISBN: 978-958-783-006-4 (papel) ISBN: 978-958-783-007-1 (IBD) ISBN: 978-
958-783-008-8 (digital) Primera edición
Medellín, 2017

Preparación editorial

Centro Editorial Facultad Ciencias Humanas y Económicas Diseño de la
Colección Folios: Melissa Gaviria Henao Corrección y Diagramación del texto:
Publi_libros S. A. S.

Conversión a ePub

Mákina Editorial

<https://makinaeditorial.com/>

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin
autorización escrita de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

303.609861

H95 Hylton, Forrest *La horrible noche : el conflicto armado colombiano en perspectiva histórica* / Forrest Hylton. -- Medellín : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020.
1 recurso en línea (203 páginas). (Colección Folios) ISBN : 978-958-783-008-8
1. CONFLICTO ARMADO - HISTORIA - COLOMBIA. 2. VIOLENCIA - HISTORIA - COLOMBIA. 3. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - HISTORIA - COLOMBIA. I. Título. (Serie) Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín

A la memoria de
Michael F. Jiménez (1948-2001),
un maestro sin igual, y
a Alberio “el Nueve” Lopera (1966-2015),
un guerrero de la paz.

Contenido

AGRADECIMIENTOS

PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN: RECORDAR EN COLOMBIA

CAPÍTULO 1

Republicanism radical y popular, 1848-1880

CAPÍTULO 2

De la reacción a la rebelión, 1880-1930

CAPÍTULO 3

La Pausa Liberal, 1930-1946

CAPÍTULO 4

La Violencia, 1946-1957

CAPÍTULO 5

El Frente Nacional: cierre político, 1957-1982

CAPÍTULO 6

Negociar la guerra sucia, 1982-1990

CAPÍTULO 7

Paz fragmentada, soberanía parcelada, 1990-1998

CAPÍTULO 8

Involución, 1998-2002

CAPÍTULO 9

El filo del precipicio, 2002-2005

CAPÍTULO 10

La guerra como paz, 2005-2006

CONCLUSIÓN: AMNESIA POR DECRETO

EPÍLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

ÍNDICE ANALÍTICO

AGRADECIMIENTOS

Gracias a Perry Anderson, Charles Bergquist, Robin Blackburn, Lina Britto, Rafael Britto, Valeria Coronel, Luis Duno-Gottberg, José Antonio Figueroa, Lesley Gill, Jorge González, Greg Grandin, Myriam Londoño, Nivedita Menon, Tim Mitchell, Carlos Ortega, Arzoo Osanloo, Christian Parenti, Raúl Prada, Marcus Rediker, Emir Sader, James Sanders y Sinclair Thomson. A Tariq Ali, por la idea de transformar lo que inicialmente era un ensayo en un libro. A Tom Penn, por ayudarme pacientemente a llevarlo a imprenta. A Peter Linebaugh, por los buenos consejos al comienzo del proceso, así como a Aijaz Ahmad casi al final. A Mike Davis, por impulsar el proyecto desde el principio, sin su estímulo probablemente no hubiese sido publicado. A Steele, mi hijo, quien quiso ayudarme a terminarlo y me dio muy buenas razones para hacerlo. A Gonzalo Sánchez, quien corrigió imprecisiones, ayudó con la bibliografía, me rescató de caer en errores panfletarios y me dejó saber cómo las condiciones en las cuales viven los intelectuales colombianos dan forma a su trabajo. Los errores empíricos y de interpretación son, por supuesto, míos.

En abril de 2006, tuve la fortuna de discutir con anticipación la introducción y los primeros capítulos del libro con diversos participantes en un seminario sobre cultura, poder y fronteras en la Universidad de Columbia;

en el seminario del Centro Internacional para Estudios Avanzados de la Universidad de Nueva York, discutí la introducción y varios de los capítulos finales.

Estoy en deuda infinita con los abogados, periodistas, activistas de derechos humanos y sindicales, feministas, organizaciones vecinales, estudiantes y profesores colombianos que con sus agudas percepciones sobre la realidad política nacional me ayudaron a comprenderla durante numerosas entrevistas y conversaciones informales entre 1999 y 2006. Su irreprimible sentido del humor y su firme compromiso con valores y principios profundamente humanos continúan siendo una fuente de inspiración. A todos y cada uno, gracias.

PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Se cuenta que a mediados de los años noventa, Gabriel García Márquez le dijo a Carlos Fuentes que había llegado la hora de tirar los libros al mar porque la realidad había sobrepasado cualquier ficción. Justo ahí está el nudo gordiano con el que se enfrentan los escritores que intentan representar la actualidad colombiana, siempre tan llena de sorpresas, proclive a superar la capacidad imaginativa de cualquiera.

Al escribir este libro jamás se me ocurrió que el escándalo de la parapolítica, con el cual salieron a la luz pública las relaciones entre el *uribismo* y los paramilitares desmovilizados en las regiones, se pudiera haber desatado a lo largo de 2007 y 2008, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Corte Suprema de Justicia, el Polo Democrático y el movimiento de los familiares de las víctimas. Tampoco pude concebir eventos como el ensayo de “guerra preventiva” que inauguró el bombardeo sobre territorio ecuatoriano el 1º de marzo de 2008, mucho menos que tal acción fuera usada como cortina de humo para distraer al público sobre los alcances de la parapolítica. ¿Cómo pensar que la extradición de los jefes paramilitares a los EE. UU. en mayo de 2008 pudiera ocurrir sin desatar una guerra interna y sin que ellos hablaran de sus vínculos con empresarios,

políticos, policías y fuerzas armadas colombianas, sobre todo en Antioquia, cuna del narco-paramilitarismo?

Por otra parte, ¿cómo imaginar que al ganar la presidencia, después de asesinar a sus máximos dirigentes, Juan Manuel Santos buscaría partir las aguas turbias de la historia colombiana en dos e iniciar diálogos de paz con las Farc en La Habana, todo ello sin cambiar el modelo económico minero-energético y con el senador Álvaro Uribe como principal opositor? ¿Cómo imaginar que de esas negociaciones podrían salir palabras plasmadas en papel, igual de esperanzadoras a las de la Constitución de 1991, e igualmente carentes de un sujeto político que les diera vida? Y, por último, ¿cómo imaginar que sin finalizar el conflicto, y desde el Estado, la memoria histórica sería institucionalizada a través del Centro de Memoria Histórica con una serie de informes dirigidos por el autor del prólogo de este libro?

En fin, desde la publicación de este libro en inglés a finales de 2006 han sido muchos los acontecimientos que jamás hubiera podido imaginar debido al carácter casi ficticio de sus desenlaces. En todo caso, el propósito era otro: ayudar a entender la actualidad colombiana con relación al pasado, partiendo de la premisa de que sin una perspectiva histórica sobre el conflicto armado es imposible pensar salidas democráticas posibles, que no sean ni superficiales ni inviables. En otras palabras, la idea era examinar el pasado como cimiento sólido y profundo de una interpretación sobre el presente.

Aunque en los últimos años este tipo de aproximaciones se ha vuelto un lugar común, en 2006 era una idea heterodoxa, si no herética. Los acontecimientos insospechados que he mencionado y más, pese a lo insólito de sus desarrollos, se encuentran anclados en la historia que este libro busca analizar a fin de revelar las tramoyas

de los nuevos “libretos” de la ficción mediática, más allá de las ilusiones y fantasmagorías que buscan proyectar. Dicho esto, espero que no lancemos los libros al mar, mucho menos si son clásicos.

Aunque fue escrito en inglés y traducido al francés y al portugués, en español el libro adquiere mayor sentido. En manos de lectores colombianos jóvenes, curiosos y críticos, el texto cobrará un significado más amplio y más consistente con los propósitos pedagógicos del autor. El encuentro con ese público ha sido postergado por demasiados años y me alegra inmensamente concretarlo con la imprenta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Espero que el texto sea un pequeño aporte a la discusión crítica, colectiva y pública sobre un futuro democrático, más allá de la guerra.

Chicago, febrero de 2015

PRÓLOGO

Gonzalo Sánchez Gómez

Profesor emérito de Historia, Universidad Nacional de Colombia
Director Centro Nacional de Memoria Histórica

*Este libro es el producto de un encantamiento.
El encantamiento con Colombia de este joven investigador americano
que reparte sus preocupaciones investigativas
entre la Colombia de Álvaro Uribe y la Bolivia de Evo Morales.*

La deuda intelectual que he podido rastrear en la breve correspondencia que he tenido con el autor determina en gran medida su perspectiva. Formado en la escuela de la historia social británica (E. Hobsbawm, E. P. Thompson, Christopher Hill), remozada con los estudios subalternos de los orientalistas (Ranjit Guha, Partha Chatterjee) y con el ojo crítico del intelectual y militante propalestino Edward W. Said, el encantamiento de Forrest Hylton le llevó a buscar la lógica o, si se quiere, la crítica de la razón del conflicto en Colombia. A la postre, y seguramente muy a pesar de su espíritu combativo, la pesquisa le dejó la sensación de que la historia colombiana está dominada por un insuperable movimiento pendular que oscila entre la irrupción de la protesta y la demanda radical-popular, y la subsiguiente oleada represiva, cuya respuesta inevitable es

a su vez la rebelión armada. Esta última se traduce, por la vía de la recurrencia, en lo que el autor llama *hipertrofia militar de la resistencia popular*. Esa es al menos una de las facetas que deja entrever este libro profundo y militante.

El libro, repito, es producto de un encantamiento, pero es también producto de un desencanto, el desencanto del autor con los enfoques de la violencia que se han venido generalizando y según los cuales esta no tiene nada que ver con la situación socioeconómica, con el cierre o restricciones del sistema político, o con la pobreza que revelan a diario las estadísticas comparadas. Desprovistos de toda explicación hemos venido quedando mudos frente a una especie de entronización de lo que podríamos llamar *la inmaterialidad de la violencia*. El texto es un mentís, una vigorosa respuesta a estos vaciamientos de razones y sentidos y una búsqueda clara de la sustancia del conflicto colombiano.

En su desarrollo el texto está organizado alrededor de tres elementos o bloques temáticos destacables en la larga duración:

El primero se refiere a la forma específica de construcción del orden político, a lo largo del siglo XIX, caracterizada por la debilidad del Estado, la centralidad de los partidos y la fragmentación de las élites, en cuyas hegemonías no resueltas yace una de las principales razones de las crónicas guerras civiles. En realidad las élites son tan fragmentadas como la topografía del país. Pero a esa fragmentación tampoco escapan las fuerzas contestatarias, llámense sindicatos, organizaciones campesinas, guerrillas o frentes políticos. En este contexto, la “democracia oligárquica” y bipartidista se ha mantenido con violencia, pero sin los sobresaltos institucionales que en otros países produjeron los populismos, las revoluciones sociales agrarias o las dictaduras. Más aún, el

republicanismo radical popular, que tuvo una irrupción vigorosa y promisorio entre 1849 y 1854, y que puso a Colombia, según el autor, a la vanguardia del reformismo liberal y de la movilización política republicana en el mundo atlántico, fue desarticulado primero con la Regeneración a fines del siglo XIX y de nuevo a mediados del siglo XX con *La Violencia*. Adicionalmente, y en contraste con una tradición que ha puesto particular atención a las filiaciones ideológicas, Forrest Hylton, sin descartar estas, se interesa más por las prácticas, los rituales y la política cotidiana de los de abajo (indígenas, artesanos, afrocolombianos, colonos y comunidades campesinas) lo que le imprime un sello especialmente dinámico a los cambiantes escenarios que describe y analiza en este enjundioso texto.

El segundo eje temático se refiere a la dinámica del orden social, que también desde el siglo XIX se mueve en torno a las luchas por la tierra, a los procesos de colonización y de migración intrarrural o rural urbana, y a los infructuosos esfuerzos de ruptura de los campesinos con las redes clientelistas. Después de repetidos altibajos de reforma y violencia, esta arquitectura social culmina al filo del milenio con la aplastante contrarreforma agraria - una moderna refeudalización del campo por parte de los paramilitares y narcotraficantes, que no es solo expropiación -concentración de la propiedad, sino reversión de los limitados procesos de democratización rural de décadas precedentes y reconfiguración de las hegemonías y las exclusiones en un amplio número de departamentos, las divisiones territoriales de Colombia-.

El tercer núcleo argumentativo se pregunta por los modos de estructuración del poder y la violencia, desde los años cincuenta del siglo XX hasta la época actual, en un escenario de competencia entre la soberanía limitada del

Estado y las pretensiones de soberanía concurrente de insurgencia y contrainsurgencia, concurrencia cuyo resultado más abultado es la privatización de los poderes de coerción.

Desde luego, esta privatización enormemente descentralizada trae otras secuelas: ha oscurecido, mucho antes de que Michael Ignatief en su brillante *The warrior's honor* lo hubiera constatado como una de las características de las guerras contemporáneas, las fronteras entre civiles y combatientes. En ese terreno han sentado funesta doctrina en Colombia presidentes como Laureano Gómez en los años cincuenta, y Turbay Ayala con su Estatuto de Seguridad a fines de la década de los setenta, cuyo sabor a Guerra Fría encuentra eco todavía hoy bajo la fórmula de la Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los momentos son, desde luego, distinguibles, pero hay algo en común a todos estos regímenes, incluido el actual: manifiestan una irreprimible repugnancia por ideas como las de *resistencia civil, comunidades o territorios de paz, neutralidad indígena*, y, en general, todo esfuerzo de deslinde de los cuerpos armados. La población es vista, o como prolongación del ejército, o como prolongación de la insurgencia.

Haciéndole eco a esta constatación de Hobsbawm: "Descubrí un país en el que la imposibilidad de hacer una revolución social ha hecho que la violencia sea la esencia constante, universal y omnipresente de la vida pública", quizás pueda decirse que para el autor de *La horrible noche*, la historia del país ha sido una historia de contención obstinada de una profunda demanda de revolución social. Una revolución social derrotada, primero, por la Regeneración en la *era del capital*, a fines del siglo XIX; abortada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y, en especial, durante la violencia de los años

cincuenta; y finalmente truncada con el colapso de la Unión Soviética, la crisis del socialismo real y las involuciones del ciclo revolucionario centroamericano, con breves destellos reformistas entre uno y otro ciclo.

Las consecuencias de tal trayectoria histórica son desde luego duraderas. No es la misma la mentalidad de un país que ha tenido una revolución, aunque después esta haya sido interrumpida (caso México o Nicaragua), que la de un país que se ha mostrado incapaz de realizarla. En los primeros, el ejercicio del poder popular, así fuera transitorio, dejó una enorme confianza en la capacidad transformadora de la acción colectiva, en tanto que en el segundo, el caso de Colombia, se ha acentuado un profundo pesimismo histórico frente a la posibilidad del cambio radical. Esto explicaría también por qué en Colombia pesa tanto la memoria como trauma sobre la memoria como celebración heroica.

Esta no es desde luego una pura y simple evidencia. Tal singularidad solo resulta comprensible en el marco de una cuidadosa reflexión histórica. El “dónde estamos” solo se nos aclara en la medida en que logremos establecer los determinantes estructurales, es decir, el “de dónde venimos”. Es cierto que a lo largo del siglo XIX Colombia era representativa de las innumerables guerras civiles que agitaron el subcontinente. Pero, en tanto para la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XX las guerras civiles se habían convertido en un anacronismo, y se abrían a experiencias de incorporación social y política, bajo la fórmula del populismo (Vargas en Brasil, Perón en Argentina), Colombia habría de padecer esa prolongada guerra civil no declarada, llamada *La Violencia*, definida por Eric Hobsbawm como una compleja “revolución frustrada”. Colombia dejó entonces de ser representativa y

se convirtió cada vez más en excepcional en el contexto de la política latinoamericana.

Tomando nota de esta singularidad, el libro es pues un viaje al descubrimiento de la excepcionalidad colombiana, una excepcionalidad comprensible solo, según el autor, en el contexto de la historia global de América Latina y de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos y con el capitalismo occidental.

Introducción: recordar en Colombia

El olvido es un elemento clave del sistema, como de la historia colombiana. Es un factor de poder.

Jacques Gilard, *Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad* (1988)

CONTEXTO

A finales de 2005, cerca de trescientos representantes de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas confluyeron en Quibdó, capital del Chocó, con el propósito de delinear estrategias para sobrevivir en una guerra donde ellos, o más bien, las comunidades que representan y su modo colectivo y no liberal de administrar los recursos y el territorio, son el blanco. De acuerdo a la Constitución colombiana de 1991, considerada como una de las más progresistas del mundo, los indígenas tienen derecho a

tener autonomía a través de los cabildos, que funcionan como células de gobierno local, lo cual incluye manejo colectivo de la tierra y autodeterminación, tanto política como cultural. En 1993, bajo la Ley 70, los afrocolombianos obtuvieron derechos semejantes a aquellos consagrados en la Constitución para los pueblos indígenas: títulos de tierra colectivos manejados por consejos comunales. Tanto los afrocolombianos como los pueblos indígenas se construyeron como ciudadanos y comunidades democráticas sobre tradiciones no liberales.

En un país de una abrumadora mayoría mestiza, en la que el discurso del mestizaje ha jugado un papel fundamental en la construcción y reelaboración del nacionalismo colombiano a lo largo de los siglos XIX y XX, estos grupos han vivido bajo peligro de extinción.¹ Como parte de un movimiento social más amplio que lucha por consolidar su presencia en la escena nacional, y basándose en los derechos existentes conquistados a través de procesos de organización que comenzaron en los años setenta y culminaron en la Asamblea Constituyente de 1991, delegados indígenas y afrocolombianos redactaron cuatro cartas que presentaban el *dramatis personae* y explicaban resumidamente los temas más importantes de la fase actual del conflicto colombiano, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos sesenta años. Más de una década después de la conquista de la ciudadanía, el departamento del Chocó aún tenía las tasas más altas de pobreza y mortalidad infantil en un país en el que más de la mitad de la población vivía en la pobreza, sobre todo en el campo donde el nivel llegaba a 85 %.² Las comunidades y resguardos estaban desposeídos por el accionar de tres grupos: las insurgencias armadas, las contrainsurgencias narco-paramilitares y las Fuerzas Armadas colombianas junto a la Policía Nacional –estos últimos con un apoyo por

parte del gobierno de los EE. UU. que supera con creces la asistencia dada a las Fuerzas Armadas de ningún otro país, excepto Egipto, Israel, Irak y Afganistán-.³

Las comunidades representadas en la VII Conferencia de la Solidaridad Interétnica esbozaron una visión de los conceptos de *identidad, territorio, cultura, autonomía e independencia* diferente a la sostenida por los grupos que amenazan su existencia por medio de la “expropiación violenta”. A los del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la insurgencia más pequeña del país y que ha estado en gran medida ausente de la región por largo tiempo, les pidieron respeto por la autonomía política y la soberanía territorial: *les reiteramos que ustedes no deben permanecer en los territorios de las comunidades negras ni en los resguardos indígenas*. Fundado a mediados de la década de los sesenta y a partir de los años ochenta con fuerte arraigo en las regiones petroleras del norte del país y en los enclaves de exportaciones multinacionales (de carbón, oro y esmeraldas), el ELN contaba con entre 3500 y 4000 combatientes hasta 2002. A diferencia de la mayoría de las áreas donde el grupo ha operado, su presencia en Chocó es reciente. La represión estatal y especialmente paramilitar contra su limitada base de apoyo los ha debilitado o derrotado en áreas rurales donde por mucho tiempo han dominado. Todas sus milicias urbanas han sido diezmadas. De ahí que, en 2005, comenzaron conversaciones preliminares para un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual quedó trancado a partir de 2007.

A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se les pidió que se mantuvieran al margen de las deliberaciones de los cabildos indígenas y los consejos comunales afrocolombianos. Las Farc se formaron a mediados de la década de los sesenta y tenían entre 18 000

y 22 000 combatientes en sus filas hasta 2002. Para mediados de los años noventa tenían presencia en más de la mitad de todos los municipios, con gran poder en la selva, en los Llanos y en las zonas de frontera poco pobladas del sur y el sureste. Para finales de esa misma década, las Farc y el ELN influyeron en la política de más del 90 % de los municipios fronterizos. En la carta dirigida a las Farc, estas fueron objeto de duras críticas por su “intromisión” en los consejos comunitarios y los cabildos indígenas. La carta afirma que las Farc comprometen la autonomía, impiden el libre desarrollo de las actividades cotidianas, sirve de pretexto para la ausencia de inversión social que debe hacer el Estado, impide la aplicación de los reglamentos internos y afecta nuestra propia seguridad [...] las Farc estigmatizan a nuestra gente con acusaciones infundadas que no se pueden contradecir y crean un manto de sospecha sobre quienes van y vienen de las zonas rurales a las cabeceras municipales, como supuestos informantes del Ejército.⁴

Aunque hechos representativos de la degradación del conflicto armado en Colombia, los ataques insurgentes y la intimidación a comunidades afrocolombianas y resguardos indígenas no se comparan con la cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Durante el Plan Colombia (2000-2005) financiado por los EE. UU., esta cifra pasó del 65 % a cerca del 80 % del total.

Aunque las guerrillas hacen uso de tácticas terroristas como la utilización de bombas, el secuestro, el asesinato selectivo y la extorsión, estas no se pueden comprender calificándolas de “terroristas”. Hacer de las guerrillas los responsables de la mayoría de los problemas del país, algo común en ciertos círculos académicos y en los medios de comunicación, es poner la historia al revés, pues se pasa

por alto el hecho de que durante toda la vida republicana y nacional de Colombia el terror estatal ha suministrado el oxígeno sin el cual el terror insurgente “no podría arder por mucho tiempo”.⁵

A diferencia de la insurgencia, el dominio paramilitar ha estado íntimamente vinculado con la política oficial, lo que se evidencia en mayor grado en la zona de Antioquia, patria chica del presidente Álvaro Uribe Vélez, así como en los Santanderes, el Eje Cafetero y la costa Atlántica. La mejor definición de los paramilitares es la de ejércitos privados que

sin ser militares, colaboran con los militares o desempeñan tareas que debieran ser realizadas por los militares mismos, como es la de combatir a las guerrillas. O, más exacta y crudamente, se ocupan de los trabajos sucios e impresentables de esta lucha: la matanza de sospechosos de colaborar con la guerrilla (“paraguerrilleros”) y el desplazamiento de masa de población civil y desarmada que puede servirle a la guerrilla de “agua para el pez”, según la metáfora maoísta.⁶

Finalmente, al presidente Uribe se le recordó que después de que las comunidades denunciaron el incremento de los cultivos de coca y tráfico de drogas en la región desde 2003, bajo el amparo paramilitar, el Gobierno se cruzó de brazos. Aparte de señalar colectivamente territorios ocupados para la “expropiación violenta”, bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas, sus acciones fueron nulas. También se le hizo un llamado a cumplir con sus deberes como gobierno y, recordando su denuncia sobre la coordinación paramilitar y militar en 2004, protestaron contra la puesta en práctica del modelo neoliberal de exportación agrícola a expensas de sus comunidades:

pone en peligro nuestros títulos colectivos, afecta la fragilidad de nuestro ecosistema, lesiona nuestra cultura agrícola, afecta los cultivos tradicionales, crea una economía de enclave, agrava la crisis alimentaria e implica un largo proceso de acumulación de capital que solo beneficiará a los grandes inversionistas, en detrimento de nuestras propias comunidades... los cultivos de palma africana, lejos de ser una alternativa de prosperidad, representan un componente de la estrategia contrainsurgente que agrava el conflicto en el departamento del Chocó y nos convierte en peones de nuestra propia desgracia.

El documento se refiere a inversionistas, a acumulación de capital y a economías de enclave, aspectos decisivos en la integración colombiana a los circuitos de producción, consumo y distribución dominados por los EE. UU., los cuales han resultado del viraje económico de la década de los setenta con el que se dio inicio al desplazamiento del café y de la industria manufacturera protegida.⁷ Los delegados mencionaron una estrategia de contrainsurgencia que violando el Protocolo II de la Convención de Ginebra exige lealtad y colaboración de parte de los ciudadanos con la Policía y las Fuerzas Armadas, la cual, como efecto alterno, ha ayudado a expandir los monocultivos de exportación con efectos nocivos para el ecosistema y los pueblos que lo habitan.

La carta al presidente Uribe también señalaba el dominio paramilitar sancionado por el Estado en las regiones fronterizas periféricas donde el gobierno central nunca ha tenido poder y donde compañías petroleras, bananeras, auríferas y madereras han funcionado como fuente básica de recursos (condición necesaria para la expansión y la consolidación insurgente en las décadas de los ochentas y noventas). A manera de continuidad con los

precedentes establecidos durante la época de La Violencia en la década de los cincuentas, el presidente Uribe comenzó a institucionalizar la impunidad paraestatal con el propósito de fortalecer la autoridad del gobierno central sobre las zonas de frontera. La expropiación violenta se comparaba a la de inicios de la década de los cincuenta, con tres millones de desplazados en el siglo XXI, principalmente en enclaves multinacionales de exportación o en áreas fronterizas recientemente pobladas. En la mayoría de los casos, dicha expropiación fue llevada a cabo con la excusa de luchar contra el “enemigo interno”.⁸

Aunque las élites de los partidos políticos ya no lideran el proceso, la derecha paramilitar y, en menor grado, las insurgencias continúan desplazando por la fuerza a los campesinos de sus tierras.⁹ Por lo tanto, los delegados de la Conferencia de la Solidaridad Interétnica exigieron el fin de la impunidad, de la expropiación y del desplazamiento forzado, así como la indemnización por los crímenes cometidos contra sus comunidades. Además de apoyar un plan para la reincorporación de excombatientes paramilitares a la vida civil, la carta al presidente Uribe advertía también que dicha desmovilización podría traer como consecuencia el surgimiento de “nuevas estructuras paramilitares”. Por ello, la misiva abogaba por *el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil [...] en un ambiente de respeto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición*. En defensa de la “autonomía”, pidieron que *no se haga en nuestros territorios ni, mucho menos, que la reinserción se convierta en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales*.

El énfasis puesto sobre aspectos como memoria, verdad, justicia, reparación y expropiación fue una respuesta a las omisiones que en estos sentidos presenta la Ley 975 del

presidente Uribe sobre desmovilización paramilitar, la cual fue modificada por orden de la Corte Constitucional a finales de 2006.¹⁰ Como Human Rights Watch destacó, la ley no hizo nada por dismantelar el poder paramilitar y “violaba flagrantemente” normas internacionales sobre asuntos de verdad, justicia e indemnización a las víctimas y a sus familias.¹¹ Con su extensa costa Pacífica, su espesa selva, su densa red fluvial y su frontera montañosa con Panamá, Chocó se convirtió en un corredor estratégico para la contrainsurgencia que, al menos por el momento, ha derrotado a las Farc. Tanto la insurgencia como la contrainsurgencia han obligado a las comunidades afrocolombianas e indígenas a pagar impuestos y tributos, mientras se han disputado el uso de su territorio para la siembra de coca, el procesamiento y transporte de cocaína y el tráfico de armas. Se puede decir lo mismo de la enorme frontera agrícola en el oriente del país, poblada mayormente por mestizos.

Vale la pena repetir que los grupos contrainsurgentes trabajaron con el ejército colombiano, se infiltraron en las instituciones oficiales, se desmovilizaron bajo una ley que regulaba su impunidad y se convirtieron en un para-Estado que estaba a la vez por fuera y por dentro del Estado oficial. Sin embargo, hasta 2002 los insurgentes lucharon por derrocar el Estado colombiano, al menos en teoría, llegando a controlar más del 40 % del territorio nacional. Mientras más apoyos del gobierno norteamericano han recibido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contrainsurgente, más fuerte se ha tornado el para-Estado. Sin duda, esta ha sido una de las consecuencias más severas de una política contrainsurgente diseñada para fortalecer un Estado débil.

La guerra colombiana ha traído como consecuencia el mayor desplazamiento interno de población en el mundo,

según cifras de 2007. Dentro de este fenómeno, la población afrocolombiana y los pueblos indígenas representan un porcentaje desproporcionadamente alto.¹² Siendo el tercer país en tamaño de la región, Colombia tiene la segunda población más grande de afrodescendientes en América Latina.¹³

A largo plazo, estos modelos de expropiación reflejan la continuidad histórica en la tenencia de tierra, la explotación de recursos naturales y el uso del terror político en una república democrática parlamentaria que se fundó sobre los problemas sin resolver heredados de la conquista, la colonización y la esclavitud.¹⁴ Bajo el colonialismo español, por ejemplo, los esclavos africanos eran traídos desde Cartagena, principal puerto de comercio de esclavos en la región Andina, para trabajar en minas de oro y en fincas ganaderas en Chocó, lo que provocó el desplazamiento o la expropiación de los grupos indígenas. Buscando escapar de una economía extractiva de enclave y de latifundios de gran extensión con propietarios ausentes, los indígenas, al igual que los esclavos liberados y fugitivos, huyeron hacia las regiones selváticas que son hoy el ojo del huracán.¹⁵

La Conferencia de la Solidaridad Interétnica exhortó a todas las partes a buscar una salida política y negociada al conflicto, en oposición a una solución militar, y ofreció una visión de paz, seguridad, democracia, justicia y sobre todo verdad distinta a la ofrecida por el Estado, la derecha paraestatal y las insurgencias. Algunas formas comunitarias de democracia no liberal y de ciudadanía, vinculadas a un nuevo movimiento electoral de izquierda, representan un avance, pero aun tomando en cuenta sus múltiples debilidades internas, el camino está obstaculizado por las violentas restricciones tanto del

sistema político como del modelo económico neoliberal reinante.

Objetivo

Aunque la guerra civil en Colombia ha sido una de las más largas y violentas, muchas veces no se toma en cuenta su trasfondo histórico. Considerado el país latinoamericano menos entendido y estudiado en los EE. UU., ganó su puesto en el mapa de los planificadores de la contrainsurgencia del siglo XXI.¹⁶ Si se consideran la proximidad geográfica entre Colombia y los EE. UU., así como la amplitud y profundidad del compromiso militar entre ambos a lo largo de la Guerra Fría, el silencio relativo que muestran la academia y el debate público no pueden sino despertar inquietudes.

Con el propósito de vincular y esclarecer el pasado y el presente, este libro se ha basado casi en su totalidad en el trabajo de otros investigadores destacados, particularmente historiadores y científicos sociales, así como de periodistas y activistas de los derechos humanos.¹⁷ La bibliografía existente sobre el periodo contemporáneo por lo general contiene un capítulo sobre la historia de la violencia política en Colombia, sin embargo, una perspectiva histórica más profunda para comprender el momento actual es necesaria. No obstante, las síntesis históricas existentes descartan a los movimientos populares como tema central para enfatizar, en cambio, las acciones de las élites, los dos partidos políticos que estas han dominado y el surgimiento del Estado-nación.

Este libro intenta remediar este problema en la literatura sobre el tema. Es cierto que en proporción a la progresiva hipertrofia de las insurgencias, la movilización popular en Colombia ha sido comparativamente débil y

fragmentada desde la década de los cincuenta, por lo menos. Pero no siempre fue así. Los movimientos populares han marcado la historia colombiana con efectos duraderos en coyunturas específicas. Una comprensión de su historia nos daría una visión más completa del Estado-nación, de los partidos y de la formación de la clase dominante. También ayudaría a explicar los niveles extraordinariamente altos de la violencia política en Colombia, lo que la condujo por un rumbo diferente y a ser más sangrienta que en los países vecinos durante la Guerra Fría, considerada la era más oscura del terror político en América Latina desde la Conquista. Mientras los movimientos y los partidos electorales socialdemócratas llegaban al poder en toda Sudamérica a comienzos del siglo XXI, en Colombia la violencia representa “una invasión progresiva de más y más espacios de la esfera pública y privada” convirtiéndose en “el factor ordenador-desordenador de la política, la sociedad y la economía”.¹⁸

La afirmación principal de este libro es que para comprender la guerra civil colombiana hoy, es necesario apreciar las múltiples capas de los conflictos previos y el peso acumulado de las contradicciones sin resolver.¹⁹ El pasado y el presente se “iluminan recíprocamente” e indican el peligro, en el caso colombiano, de repetir el trauma político y colectivo.²⁰ El conflicto contemporáneo en Colombia refleja el pasado, con importantes transferencias de propiedad y tierra a los más ricos y poderosos, además de una amnesia oficial hacia los crímenes de guerra —decretados en nombre de la “paz” y la “reconciliación nacional”—. Por estas razones es que ubico en el escenario central los debates actuales sobre memoria, verdad, justicia y reparaciones a las víctimas. Como nos recuerda un estudioso del terror estatal en América Latina, “la recuperación empieza con la memoria”,

y este libro se presenta como parte de la lucha por recuperar y preservar la memoria de una tragedia cuya magnitud es imposible de comprender.²¹ Un efecto a largo plazo del uso del terror político en Colombia, y en otras partes del mundo, ha sido borrar el recuerdo de las alternativas políticas a las que el terror respondió.

Temas

En las altas esferas políticas en Washington y Bogotá se argumenta a menudo que Colombia padece de una cultura de la violencia, como si los colombianos tuviesen una propensión innata a matarse los unos a los otros.²² Como comúnmente se plantea, esta es una explicación ahistórica y tautológica de por qué la política colombiana está caracterizada por altos niveles de terror, en contraste con sus países vecinos, los cuales más bien gozan de gobiernos de centroizquierda y variadas formas de movilización popular. Este planteamiento pasa por alto el hecho de que hasta el final del siglo XIX, Colombia, al contrario de Brasil, México, Chile y Argentina, se definía “no por su violencia masiva, sino por la falta de la misma”.²³ Bien sea al considerar las comparaciones con otros países de la región o la diferencia entre los siglos XIX y XX, generalmente los investigadores advierten sobre el error de interpretar la violencia de finales siglo XX como el resultado lógico de los patrones del siglo XIX. Las pruebas históricas son insuficientes para respaldar la idea de que una “cultura de violencia” explica la política colombiana.

Para explicar el inusual rumbo de Colombia, dos versiones clásicas de la historia comparativa latinoamericana recalcan la durabilidad de la democracia oligárquica, institucionalizada a través de dos partidos

políticos.²⁴ Más recientemente, la idea de una “oligarquía” ha estado sujeta a críticas escépticas, aunque todavía es útil para comprender la violencia en Colombia en relación con un orden político excluyente.²⁵ Podemos definir a la oligarquía como un grupo casi corporativo, donde la mayoría de sus miembros disfrutaban de privilegios basados en su ascendencia y en algo parecido al estamento, complementados por la aparición de nuevos elementos, principalmente de la clase media y, ocasionalmente, de la clase obrera y campesina. Con elecciones presidenciales celebradas puntualmente cada cuatro años, la democracia oligárquica colombiana cuenta con el sistema bipartidista de más larga data en el mundo; de hecho, la diarquía conservadora-liberal ha sobrevivido casi 150 años, manteniéndose en apariencia intacta hasta el siglo XXI, a pesar de las elecciones legislativas controladas por la representación proporcional.

Después de 1848, cuando se estableció el dominio liberal y conservador, ninguna fracción de la oligarquía unía en un proyecto hegemónico a las clases dirigentes como a un todo junto a los grupos subordinados; ninguna podía representar sus intereses como los de la nación. Aunque esto era común en Europa y América Latina en el siglo XIX, en Colombia duró hasta el siglo XXI. Por consiguiente, las élites fueron forzadas a establecer pactos políticos con grupos subordinados que no llevaron a cabo rituales públicos de respeto y mucho menos asimilaron las normas y valores de sus gobernantes.²⁶ Por el contrario, estos grupos exigieron y lucharon por la igualdad; pero en vez de la hegemonía capitalista burguesa, basada en el liderazgo moral e intelectual, el clientelismo católico autoritario, financiado por el aumento de los capitales con la exportación de café y el Partido Conservador, dominó por un periodo de cincuenta años después de 1880 y anuló la

ola de movilización popular democrática y radical que había caracterizado a Colombia durante la *era del capital* (1848-1875).

El revanchismo y el grado de desarrollo tecnológico creciente se complementaron durante el *boom* de exportación de café durante la *era del capital* en Colombia, la cual, en vez de conducir a una expansión de la autoridad del gobierno central, fortaleció a los dos partidos políticos en un país geográficamente fragmentado, donde las oligarquías terratenientes mantuvieron la supremacía regional y local ante los desafíos venideros. En mi opinión, el poco alcance del gobierno central, la influencia de los dos partidos, el acentuado regionalismo basado en la tenencia de la tierra y la desunión de la clase dominante han sido las constantes en la historia republicana.

A medida que la frontera cafetera se establecía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sectores campesinos identificados con el progreso capitalista y el mestizaje aseguraron sus derechos de propiedad e incorporación política a uno de los dos partidos a través de redes de crédito y clientelismo.²⁷ La mayoría, compuesta por campesinos mestizos, así como las minorías afrocolombianas e indígenas, tenían derechos de propiedad precarios, una limitada incorporación partidista y, además, vivían bajo amenaza de violencia o expropiación. Cuando las reformas iniciadas desde arriba coincidieron con la movilización de los de abajo en la década de 1860 y nuevamente en la de los treinta, los terratenientes reaccionaron movilizando a sus clientes para proteger sus privilegios, su monopolio político y el control sobre su propiedad a lo largo del campo. Estos movimientos de contrarreforma, así como los movimientos populares radicales a los que respondieron, eran organizados en el ámbito local y regional, lo cual reflejaba la naturaleza

fracturada y principalmente rural de la riqueza de los terratenientes, el poder político y la autoridad en Colombia hasta entrada la década de los cincuenta.

El contraste entre Colombia y el resto de América Latina en las décadas de los treinta y cuarenta no podía ser más marcado: México con Cárdenas, Argentina con Perón, Brasil con Vargas, Bolivia con Toro y Busch o, como se muestra en estudios recientes, Cuba con Batista, República Dominicana con Trujillo y Nicaragua con Somoza.²⁸ Es decir, el populismo fue un triunfo rotundo que como forma de política que incluía a los excluidos de las repúblicas oligárquicas se anticipaba a la amenaza, verdadera o imaginada, de una revolución social. Aunque la clase media y segmentos de las viejas oligarquías pudieron haberse beneficiado más que otros grupos, la clase obrera y la clase campesina obtuvieron más y mejores beneficios que los que habían conseguido hasta entonces.

Pero en Colombia el populismo fue vencido entre las décadas de los treinta a los cuarenta y cuando levantó cabeza otra vez en las décadas de los setenta y ochenta, fue decapitado por el terror estatal y paraestatal. Irónicamente, esto solo ha logrado debilitar aun más la ya frágil legitimidad del gobierno central y ha reforzado, al menos militar y territorialmente, a las insurgencias y a la contrainsurgencia. Los estudiosos del tema creen, por consenso, que esto hace que la situación de Colombia sea única.²⁹ Por mi parte sostengo que cuando el gobierno central intentó hacer la reforma agraria bajo la presión de los movimientos populares democráticos y radicales, esta fue obstruida y la contrarreforma se fortaleció desde las regiones y los municipios. Como la guerra sectaria se extendió en las décadas de los cuarenta y cincuenta, cientos de miles de familias campesinas mestizas desplazadas colonizaron fronteras agrarias en regiones de

tierras bajas escasamente pobladas por grupos indígenas, o se asentaron en las periferias urbanas de numerosas ciudades intermedias colombianas, en zonas alejadas del epicentro de autoridad del gobierno central.

El gobierno central delegó la represión, primero, a través de la guerra sectaria entre los dos partidos y, después, a través de la contrainsurgencia de la Guerra Fría, cuando se enfrentó a los desafíos insurgentes. Ambos mecanismos de represión de la protesta, la organización y la movilización social fueron moneda común durante los regímenes de terror estatal contrainsurgente que comenzaron en Guatemala en 1954 y continuaron con Brasil y Bolivia en 1964 hasta extenderse por todo el Cono Sur en la década de los setenta. Como en muchos lugares del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, los mecenas del gobierno de los EE. UU. mantenían: “cierta distancia sin dejar de involucrarse” en América Latina y “el terror contrarrevolucionario estaba inextricablemente relacionado con el imperio”.³⁰

Aun así, dos rasgos caracterizaron de manera particular el terror de Estado en Colombia. En primer lugar, ciertos segmentos de la clase campesina vinculados con las élites a través de intermediarios de clase media y que soñaban con adquirir propiedad, ahuyentaron de la región a otros segmentos de su misma clase por medio del despliegue de terror, desalojo y expropiación —algo más o menos análogo a lo que Marx llamó la “acumulación primitiva” de capital en el campo inglés, pero con el elemento distintivo en el caso colombiano de violencia partidista, insurgente o contrainsurgente entre la propia clase campesina—.³¹ En segundo lugar, con el tiempo, las organizaciones contrainsurgentes obtuvieron una relativa autonomía del Estado, convirtiéndose en un para-Estado. Esto concentró la tierra en cada vez menos manos, inclusive

redistribuyéndose una pequeña cantidad de la misma entre un selecto número de clientes subalternos.³² Las ciudades crecieron junto a los asentamientos de fronteras agrarias abiertas, donde se replicó la dinámica anterior del conflicto.³³ En el transcurso de apenas cincuenta años los colombianos pasaron de ser una sociedad en la que dos tercios de la población vivía de y en el campo —patrón y campesino; criollo, mestizo, mulato, indio y negro—, a una donde dos tercios habitan las ciudades.

Aunque Colombia se ha convertido en una sociedad que gira en torno a una red de ciudades conectadas por aire y tierra, los terratenientes conservan el dominio político en muchas regiones y localidades. La política colombiana puede ser vista como un sistema parlamentario semiautoritario en el que los terratenientes, en vez de entrar en conflicto con grupos emergentes de industriales y comerciantes, se han fusionado con ellos.³⁴ La actividad comercial, caracterizada por una división poco clara entre lo lícito e ilícito, le ha proporcionado continuamente a la oligarquía iniciativas frescas, cuando sectores de movilidad social ascendente trataron y lograron hacer parte de la oligarquía a través de iniciativas empresariales violentas y despiadadas.³⁵

Las nuevas élites comerciales y manufactureras relacionadas con el negocio de exportación de café se unieron a la oligarquía terrateniente a finales del siglo XIX, por lo que en vez de debilitar el poder del latifundismo dentro la oligarquía, lo reforzó. La alianza reaccionaria caracterizó a la *república cafetera* bajo el dominio conservador después de la Guerra de los Mil Días finalizada en 1903, sobrevivió intacta el desafío *gaitanista* en la década de los cuarenta, proporcionó las bases para las políticas del Frente Nacional durante la década de los ochenta y, gracias a la “guerra contra las drogas” dirigida

por el gobierno norteamericano, asumió nuevas dimensiones con el aumento constante del negocio de la cocaína en la década de los noventa. El narcotráfico invirtió en los sectores de construcción, comunicación y servicios; sus importaciones de contrabando se vendían a precios más bajos que los de la industria nacional. Como *latifundistas*, las élites poseían la mayor parte de las mejores tierras y los bienes raíces urbanos del país. Arraigado en estas formas excluyentes de tenencia de la tierra, el poder político continuó dispersándose desde un centro débil hacia las regiones, especialmente en las áreas fronterizas.

El “déficit crónico” del Estado colombiano es bien conocido entre investigadores y aquellos que viven en medio del conflicto. Especialistas y actores sociales con opiniones opuestas sobre la política colombiana concuerdan en que el Estado colombiano es débil y su autoridad frágil. En cualquier interpretación sobre la violencia en Colombia, la fragilidad de la presencia estatal debe clasificarse como uno de los principales factores que explican la fuerza de la insurgencia y la contrainsurgencia. La soberanía siempre ha estado circunscrita y fragmentada regionalmente. El gobierno central nunca ha monopolizado legítimamente la fuerza, ni ha administrado la mayoría del territorio bajo su jurisdicción. Esto ha traído como resultado un largo periodo de conflicto entre facciones de la élite que se volcó en guerra civil a finales del siglo XIX y a mitad del siglo XX.

Sin embargo, para finales de la década de los cincuenta, el dominio bipartidista sobre la representación política formal fue sostenido gracias a un compromiso compartido con la economía de mercado en la que el Estado jugaba un papel limitado. El anticomunismo de la Guerra Fría, por su parte, cimentó la unión de los dos partidos a lo largo del Frente Nacional. La riqueza, especialmente en lo referente

a propiedad de la tierra, se mantuvo fuertemente concentrada y su distribución fue bastante desigual, aunque un periodo de crecimiento económico sostenido, basado en la exportación de café y la manufactura para el mercado interno, amplió la clase media urbana y provincial en ciudades y municipios a lo largo de los sesenta. El consenso de la élite absorbió a segmentos de grupos subordinados, a través de redes de crédito y clientelismo, incorporándose cada vez más a este orden una nueva clase media, así como subalternos de la clase campesina y obrera. Pero, con la criminalización de la protesta, la disidencia y la misma pobreza que las políticas económicas gubernamentales reprodujeron, el Frente Nacional excluyó a la mayoría del campo y periferias urbanas.

La contrainsurgencia del Frente Nacional estimuló el crecimiento de la insurgencia. Fue así como en las décadas de los setenta y ochenta, las áreas rurales y urbanas recién colonizadas y sin presencia estatal se convirtieron en terreno fértil para los movimientos electorales de izquierda con alcance nacional, multiétnicos y de distintas clases sociales, donde las guerrillas tenían influencia. Puesto que estos movimientos/partidos eran liderados por insurgentes que buscaban abrir el sistema político o derrocarlo, las milicias de los terratenientes —con el apoyo de una nueva facción de la clase dirigente de empresarios de la cocaína— lucharon para proteger el derecho a la propiedad privada de la amenaza “subversiva”, liquidando a la izquierda civil.

Creadas como auxiliares del Ejército y de las fuerzas policiales del Estado, las cuales eran incapaces de ponerle punto final a la propagación de la insurgencia, las organizaciones paramilitares estaban listas para convertirse en los nuevos gobernantes de las regiones a comienzos del siglo XXI. El suyo fue un “gangsterismo que se había convertido en sociedad”.³⁶ Las organizaciones

paramilitares evolucionaron en un para-Estado, penetrando los partidos políticos así como las agencias gubernamentales, desde la Corte Constitucional hasta los servicios de inteligencia, nominalmente bajo el control presidencial. En muchas regiones, las organizaciones paramilitares administraron el territorio y monopolizaron las instituciones públicas. Por su parte, las insurgencias funcionaron como pequeños Estados tributarios, cobrando impuestos a traficantes de cocaína, a empresas extractivas transnacionales y a hacendados, así como a los habitantes de sus “zonas”. Los regímenes de “soberanía parcelada” y de “paz fragmentada” condujeron a una crisis internacional humanitaria que sobrepasó las fronteras nacionales y amenazó la soberanía de los Estados vecinos.³⁷ Estos son, entonces, en resumen los principales rasgos de la historia y la política de un país que se ha convertido en el más firme aliado del gobierno de los EE. UU. en el hemisferio occidental, además del principal receptor de su ayuda militar.

1. Polos tan opuestos en la interpretación de la historia colombiana como Eduardo Posada Carbó y Charles Bergquist concuerdan que el país republicano se construyó sobre el discurso y la práctica del mestizaje. Ver Eduardo Posada Carbó, *La nación soñada* (Bogotá: Norma, 2006), y la reseña escrita por Charles Bergquist, “La ciudad soñada”, *Journal of Latin American Studies* 39:3 (2007), 670-71.
2. Para estadísticas sobre el Chocó, ver Grace Livingstone, *Inside Colombia: Drugs, Democracy, and War* (New Brunswick, NJ: RUP, 2004), 75. Para la historia de la extracción de recursos naturales en el Chocó entre la década del setenta y ochenta, ver Peter Wade, *Blackness and Race Mixture* (Baltimore, MD, y Londres: jhup, 1995), 131-48. Para categorías raciales tales como mestizo y negro, ver *Ibid.*, 8-28. Una nota sobre las estadísticas: asumo que son parte de luchas políticas para definir la verdad en vez de ser abstracciones numéricas neutrales, y las uso más con el propósito de ilustrar que para ser científicamente preciso.
3. Para cifras sobre la ayuda militar y policial de EE. UU. a Colombia ver Adam Isacson, *Number Three No More*, 19 de abril de 2005: cipcol.org.

4. "No en nuestros territorios", 15 de noviembre de 2005: www.codhes.co Jon Wiener, "Mike Davis talks about the 'Heroes of Hell'", *Radical History Review* 85 (2003), 227-37.
6. Antonio Caballero, "¿Infiltrados o reinsertados?", *Semana*, 30 de Abril de 2006.
7. Para el concepto de economías de enclave, ver Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, *Dependency and Development in Latin America*: "En las economías de enclave el capital extranjero invertido *se origina en el exterior*, es incorporado en los procesos productivos locales y parte de éste se transforma en sueldos e impuestos. Su valor se incrementa por la explotación de las fuerzas laborales locales, que transforman los recursos naturales y producen bienes que hacen efectivo en el *mercado externo*". (Berkeley: UCP, 1979[1971]. Énfasis en el original), XIX. Para una discusión crítica, ver Catherine LeGrand, "Living in Macondo: Economy and Culture in a United Fruit Company Banana Enclave in Colombia", en Gilbert M. Joseph, Catherine C. LeGrand y Ricardo D. Salvatore, eds., *Close Encounters of Empire: Writing the History of US-Latin American Relations* (Durham, NC: DUP, 1998), 334-37.
8. Iván Orozco Abad, "La democracia y el tratamiento del enemigo interior", *Análisis Político* 6 (enero-abril 1989), 54-79.
9. Cifras tomadas de Human Rights Watch, "Colombia: Resumen de país", enero de 2006: www.hrw.org. Sobre desplazamiento, ver Nora Segura Escobar, "Colombia: guerra y desplazamiento forzoso", *Análisis Político* 43 (mayo-agosto 2001), 85-106. Sobre género y desplazamiento, ver Donny Meertens, "Victims and Survivors of War in Colombia: Three Views of Gender Relations", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000: Waging War and Negotiating Peace* (Wilmington, DE: Scholarly Resources, 2001), 151-70; para bibliografía, ver Flor Alba Romero, "Población desplazada por *la violencia* en Colombia y otros países", *Análisis Político* 34 (mayo-agosto 1998), 126-43.
10. Para temas de justicia, indemnizaciones y reconciliaciones, ver Iván Orozco Abad, "La posguerra colombiana", *Análisis Político* 46 (mayo-agosto 2002), 78-99.
11. Human Rights Watch, "Colombia: Resumen de país", enero de 2006: www.hrw.org
12. Como en toda América Latina, las categorías raciales no son rígidas y la identificación racial cambia según los procesos políticos y los resultados. De acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos del gobierno colombiano, aproximadamente uno de cuatro colombianos era afrodescendiente, mientras que, según el ex gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, la verdadera cifra era de entre 36 y 40%. Un 80-85 % de pueblos indígenas representaban un estimado de entre ochocientos mil a un millón de personas, tal vez 2 % de una población nacional de 44 millones de personas, de acuerdo a la Organización Nacional de Indígenas Colombianos y a la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos. Ver Luís Gilberto Murillo, “El Chocó: el corazón africano de Colombia”, *Colombia Update: Colombia Human Rights Network* (invierno/primavera 2001), 12-13.

13. Cabe señalar que gracias al alcance de la ideología y práctica del mestizaje nacionalista, muchos de ellos se consideraran a sí mismos como “costeños”, “vallunos”, o “guajiros”—más que “negros” o “afrodescendientes”— frente a sus compatriotas de otras regiones.
14. Para el concepto de colonialismo interno en Colombia y América Latina, ver Peter Wade, *Blackness and Race Mixture*, 147-48; Peter Wade, *Race and Ethnicity in Latin America* (Londres: Pluto Press, 1997), 64-67. Esquemáticamente hablando, las formaciones sociales estructuradas por el colonialismo interno reproducen, con frecuencia en nuevas formas, relaciones de violencia, dominación y explotación derivados del colonialismo. En América Latina, la pequeña minoría que se encuentra en las altas esferas (donde la riqueza y el poder político se concentra más que en cualquier otra región del mundo) es mayoritariamente criolla, mientras que los sectores intermedios generalmente se adhieren al ideal criollo cualquiera que sea su identificación racial.
15. Ver William F. Sharp, *Slavery on the Spanish Frontier: The Colombian Chocó, 1680-1810* (Norman, OK: UOP, 1976).
16. Ver Roland Marchal y Christine Messiant, “Las guerras civiles en la era de la globalización: nuevos conflictos y nuevos paradigmas”, *Análisis Político* 50 (enero-abril 2004), 20-34. Para una comparación de Colombia con Italia, Líbano y Angola, ver Nazih Richani, *Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia* (Albany, NY: Sunyp, 2002), 157-71.
17. Un número importante de trabajos de ciencias sociales e historia no se citan más abajo. No pretendo ser exhaustivo; debido a que mi trabajo es esencialmente interpretativo, cito solo trabajos que utilice. A aquellos no-especialistas que estén interesados en leer más les recomiendo consultar los ensayos bibliográficos incluidos en David Bushnell, *The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of Itself* (Berkeley: UCP, 1993); Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Divided Land, Fragmented Society* (Londres: OUP, 2001); y Ricardo Peñaranda, “The War on Paper: A Balance Sheet on Works Published in the 1990s”, en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia 1990-2000* (Wilmington, DE: Scholarly Resources, 2001), 179-94.
18. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región Andina* (Bogotá: Norma, 2004), 19.
19. La caracterización del conflicto es el tema del debate en curso. Seguí a tres estudiosos de la vida rural colombiana: William Ramírez Tobón, “¿Guerra civil en Colombia?”, *Análisis Político* 46 (mayo-agosto 2002), 151-63; Darío Fajardo, “La internacionalización de la guerra”, en Jairo Estrada Álvarez, comp., *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra: aspectos globales y locales* (Bogotá: UN, 2002), 71; Alfredo Molano, “¿Neutralidad?”, *El*

Espectador, 8 de mayo de 2005. Ver también Alfredo Rángel, "Guerra civil de baja intensidad", *El Tiempo*, 23 de mayo de 2005.

20. Fernand Braudel, "History and the Social Sciences" (1958), en *On History*, trad. Sarah Matthews (Chicago: UCP, 1980), 37; Fernand Braudel, "La historia operacional: la historia y la investigación del presente" (1971), *Contrahistorias 2* (marzo-agosto 2004), 29-40; Marc Bloch, *The Historian's Craft* (Neva York: A. Knopf Books, 1953), 43-47; y Edward Hallett Carr, *What is History?* (Cambridge: CUP, 1961), 28-29, 35, 69. En Colombia, el trabajo realizado por Darío Betancourt y Marta Luz García resalta esta conexión. Ver Daniel Pécaut, "Los aportes de Darío Betancourt Echeverry", en Gonzalo Sánchez *et al.*, *Los intelectuales y la política* (Bogotá: UN, 2004), 107-19.
21. Alison Brysk, "Recovering from State Terror: The Morning After in Latin America", *Latin American Research Review*, 38: 1 (febrero 2003), 239; Elizabeth Jelin, *State Repression and the Labors of Memory* (Minneapolis, MN: UMP, 2003), 46-49.
22. Me refiero a interpretaciones comunes que plantean una predilección por la violencia, que no está ubicada en el tiempo ni sujeta a cambios. Mientras estas interpretaciones prevalecen en las esferas políticas, otras visiones como la de Álvaro Tirado Mejía resaltan el desarrollo de instituciones educativas, cultura política y regulación de la vida privada más autoritarias bajo la Regeneración y a través de la violencia (1880-1964). Estos argumentos, por supuesto, merecen una consideración seria. Ver Fabio López de la Roche, "Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas", en López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana* (Bogotá: CINEP, 1990), 119-20.
23. James E. Sanders, *Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia* (Durham, NC: DUP, 2004), 197. Mary Roldán, *Blood and Fire: la violencia in Antioquia, 1946-1953* (Durham, NC: DUP, 2002), 14. Ver también Malcolm Deas, "Algunas interrogantes sobre la relación entre las guerras civiles y la violencia", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, eds., *Pasado y presente de la violencia en Colombia* (Bogotá: Cerec, 1986), 41-46; y David Bushnell, "Politics and Violence in Nineteenth-Century Colombia", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *The Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective* (Wilmington, de: Scholarly Resources, 1992), 11-30.
24. Cardoso y Faletto, *Dependency and Development*, 96-99; Tulio Halperín Donghi, *The Contemporary History of Latin America* (Durham, NC: DUP, 1992[1967]), 282, 383.
25. Ver Daniel Pécaut, *Orden y violencia: Colombia, 1930-1953*, vol. I (Bogotá: Siglo XXI, 1987), 18; David Bushnell, *The Making of Modern Colombia*, 284; Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994* (Bogotá: Norma, 1995), 237.

26. Además de Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks* (Nueva York: International Publishers, 1971[1929-1935]), mi comprensión de la hegemonía de la clase dominante y la fragmentación territorial se ha visto influenciada también por el libro de Antonio Gramsci, *The Southern Question*, presentado y traducido por Pasquale Verdicchio (West Lafayette, IN: Bordighera, Inc. 1995).
27. Siguiendo las palabras de Catherine LeGrand, *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936* (Albuquerque, NM: UNMP, 1986), 207, uso el término “campesino” para referirme a “pequeños cultivadores rurales que dependen del trabajo familiar para producir lo que consumen. Los aparceros, arrendatarios, pequeños propietarios y pobladores de la frontera serían, de acuerdo a esta definición, llamados campesinos”. Los campesinos son forzados a pagar tributo en productos comestibles, ganado, servicios laborales y, más frecuentemente, en dinero a una gama de funcionarios e instituciones religiosas y de Estado.
28. Daniel James, *Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976* (Cambridge: UCP, 1988); Jeffrey Gould, *To Lead as Equals: Rural Protest and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979* (Chapel Hill, NC: UNCP, 1990); Alan Knight, “Populism and Neo-Populism in Latin America, especially Mexico”, *Journal of Latin American Studies* 30: Parte 2 (mayo 1998), 223-48; Alan Knight, “Revolutionary and Democratic Traditions in Latin America”, *Bulletin of Latin American Research* 20:2 (2001), 147-186; Robert Whitney, *State and Revolution in Cuba: Mass Mobilization and Political Change, 1920-1940* (Chapel Hill, NC: UNCP, 2001); Richard L. Turits, *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime, and Modernity in Dominican History* (Durham, NC: DUP, 2004). Entre los ensayos clásicos tenemos a Ernesto Laclau, *Politics and Ideology in Marxist Theory* (Londres, NLB, 1982), 143-98; y Carlos Vilas, “Latin American Populism: A Structural Approach”, *Science and Society* 56:4 (invierno 1992-1993), 389-420.
29. Jeremy Adelman en “Andean Impasses”, *New Left Review* 18 (noviembre-diciembre 2002), 41-72, describe a Perú y Venezuela como carentes de tradiciones populistas. Como Fernando Coronil sostiene en “Magical Illusions or Revolutionary Magic? Chávez in Historical Context”, *NACLA Report on the Americas* 33:6 (mayo-junio 2000), el régimen de Chávez se puede entender de mejor manera si se compara con los antecedentes históricos del populismo petrolero de la década de los setenta. A comienzos de esa década tanto el régimen de Velasco en Perú como la administración de Pérez en Venezuela eran populistas —especialmente si los comparamos con el presidente colombiano Misael Pastrana (1970-1974)—. Ver Marco Palacios, “Presencia y ausencia populista: un contrapunto colombo-venezolano”, en *Análisis Político* 39 (enero-abril 2000), 33-51.
30. Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War* (Chicago: UCP, 2004), 188.

31. Para acumulación primitiva, ver Karl Marx, *Capital*, vol. 1 (Nueva York: Penguin, 1992[1867]), 871-940; David Harvey, *The New Imperialism* (Oxford: OUP, 2003); Silvia Federici, *Caliban and the Witch* (Nueva York: Autonomedia, 2004); Retort, *Afflicted Powers* (Nueva York: Verso, 2005); Mike Davis, *Planet of Slums* (Nueva York: Verso, 2006). Mientras el marxismo clásico veía la acumulación primitiva como una etapa en el desarrollo histórico precedente a la revolución industrial, es más útil considerarlo como una característica recurrente y permanente del desarrollo capitalista en el que la fuerza laboral se crea a través de la expropiación y privatización de tierras, bosques y ríos que forman las bases materiales de la vida colectiva y comunitaria.
32. Tomado de Antonio Gramsci, “subalterno” ha sido definido en el contexto del estudio del colonialismo y nacionalismo en Asia del sur como “un nombre para el atributo general de subordinación, bien sea que se exprese en términos de clase, casta, edad, género y estudios o de cualquier otra manera” [...] Reconocemos que, por supuesto, esa subordinación no puede ser entendida excepto como uno de los términos constitutivos en una relación binaria en la que la otra parte es la dominante”. Ranajit Guha, “Preface”, *Subaltern Studies I: Writing of South Asian History and Society* (Delhi: OUP, 1982), vii. Lo uso para señalar la heterogeneidad de los grupos subordinados en Colombia.
33. En “La colonización de La Macarena en la historia de la frontera agrícola”, en Alfredo Molano *et al.*, *Yo le digo unas cosas... La colonización de la reserva Macarena* (Bogotá: FEN, 1989), 203; Darío Fajardo denominó esto como el ciclo de “violenciainmigración-colonización-violencia”.
34. Nada particular en el siglo XIX o principios del siglo XX, como está esbozado en Barrington Moore, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy* (Boston: Beacon Press, 1969), 437-38.
35. Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, 280.
36. Barrington Moore, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*, 215.
37. Tomé prestada la primera frase de Perry Anderson, *Passages from Antiquity to Feudalism* (Londres: Verso, 1974), 148, y la última de Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, 58.

capítulo

1

Republicanism radical y popular,

1848-1880

Debemos ser tratados como ciudadanos de una república y no como esclavos de un sultán Los bogas afrocolombianos de Dagua, 1878

Este capítulo presenta los aspectos generales en materia económica, demográfica y política de la Colombia republicana en sus primeros tiempos y analiza la historia social de la política. A pesar de los rasgos de dominio oligárquico que Colombia compartió con repúblicas vecinas posteriormente a las guerras de independencia, durante la llamada *era del capital* (1848-1875), la movilización política radical popular la puso a la cabeza de las democracias republicanas atlánticas.¹ Al observar con más detalle el

Cauca, una de las regiones colombianas clave en el siglo XIX, queda demostrado que, al contrario de lo que muchos estudiosos han asumido, los grupos y clases étnicas y raciales oprimidos lucharon por el derecho a un lugar en la nueva república, forjando tradiciones políticas que desafiaban la esclavitud y los procesos coloniales. Una mirada más detallada a estas tradiciones nos aleja de las imágenes estáticas y desligadas de la historia que sostienen que una oligarquía terrateniente todopoderosa y unida logró dominar a una clase campesina dependiente y desafortunada, para revelarnos dinámicas locales y regionales más complejas. En contraste con el largo periodo de reacción que le siguió y en comparación con los vecinos de la época, Colombia se distinguió por su política radical popular.

DE ARRIBA HACIA ABAJO

Después de las guerras de independencia, Colombia surgió como una de las naciones latinoamericanas más devastada, desunida y deprimida económicamente, con miserables comunicaciones, poco comercio exterior, sin instituciones bancarias y con una baja capacidad fiscal. Las obras públicas eran inexistentes y el mercado interno era minúsculo. Un ejemplo de ello es que para el año de 1890 costaba más transportar café de Medellín a Bogotá que de Medellín a Londres.² En las décadas de 1850 y 1860, breves *booms* en las exportaciones de quinina y tabaco, este último con un pico de demanda durante la guerra civil estadounidense, no condujeron a una transformación socioeconómica y la pobreza de la aristocracia de Bogotá — consumista en exceso e improductiva— era el tema de duras críticas.³ Debido a la escasez de créditos, los

prestamistas antioqueños, que se habían enriquecido gracias a las ganancias del comercio alrededor de la minería del oro a finales de la era colonial e inicios de la republicana, operaron como financistas sin intentar aglutinar facciones dirigentes alrededor de ellos. En 1854, incluso armaron un escándalo al decir que se separarían de Colombia para volverse parte de los EE. UU.⁴

La diferenciación geográfica extrema ha sido siempre un factor ineludible en la política colombiana y ha permitido que las élites afiancen su poder en lo referente a tierras, cargos políticos y participación en el mercado en los ámbitos regional y local. El país está rasgado por tres grandes cordilleras que se abren en forma de abanico desde el sur, y que a su vez están divididas por los ríos Cauca y Magdalena. Hacia el sureste se extiende una vasta extensión de tierras bajas tropicales que tijeretean el ecuador, entrecruzadas por innumerables ríos que desembocan en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Hacia el norte y el oeste se extienden las costas del Caribe y el Pacífico y la selva impenetrable del istmo de Panamá, mientras que en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, se encuentran las principales reservas de petróleo del país. La mayoría de la población ha estado siempre concentrada en las regiones montañosas subtropicales más frías. Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura promedio de 14°C. Pero las ciudades propiamente dichas estuvieron por siglos separadas por tortuosos caminos y montañas intransitables, tal como permanecieron para los campesinos en las zonas fronterizas.

La pésima conexión vial y el aislamiento geográfico han tenido un efecto crítico en la conformación de los grupos dirigentes. El control militar centralizado era intrínsecamente más difícil en Colombia que en sus

vecinos; relativo a la población, el Ejército fue siempre cerca de un tercio del tamaño de los ejércitos de Perú o Ecuador.⁵ Aunque tampoco pudieron escapar a la lógica de la fragmentación territorial, los grupos civiles y la Iglesia adquirieron roles mucho más estelares como líneas de transmisión del poder que en cualquier otro lugar. Al delegar autoridad en los dirigentes partidistas locales, los terratenientes-comerciantes-abogados de Bogotá ayudaron a intensificar, en vez de mitigar, las divisiones y desigualdades regionales. La ciudadanía de la Colombia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX no adoptó un sentido de pertenencia común con la nación representada por un gobierno central, sino con la membresía exclusiva a uno de los dos partidos políticos. La política, definida en términos de amigo-enemigo, fue un asunto de suma cero en las regiones y municipios, y las afiliaciones partidistas trascendieron las líneas raciales, de clase, étnicas y regionales.⁶

Aunque los dos partidos han derramado la sangre el uno del otro con frecuencia, el paradigma político clásico de división oligárquica entre conservadores y liberales, estructurado a lo largo de líneas ibéricas, ha persistido. Característico de los nuevos Estados independientes latinoamericanos del siglo XIX, este sistema en el que una élite dominante de terratenientes, abogados y comerciantes manipulaba un sufragio restringido en el que aquellos que tenían el voto eran clientes en vez de ciudadanos, se dividía típicamente en dos alas. Mientras los conservadores eran primero y ante todo devotos del orden y, como sus contrapartes en Europa, de la religión, por lo que sostenían una alianza cercana con la Iglesia católica, los liberales se declararon a sí mismos a favor del progreso y fundamentalmente anticlericales. En cuanto a lo económico, pese a que las diferencias ocupacionales no

eran particularmente pronunciadas y mucho menos decisivas, la riqueza terrateniente tendía a estar concentrada más dentro del ala conservadora, a la vez que las fortunas comerciales estaban principalmente repartidas entre los liberales. Aparte del anti-clericalismo liberal, no había mayores líneas ideológicas divergentes. La división civil, casi puramente sectaria, estaba salpicada por pronunciamientos y tomas de poder por parte de los jefes militares rivales, en nombre pero no siempre con la aprobación de uno u otro de los partidos políticos opuestos.

Aunque el país estaba dividido entre dos grandes lealtades políticas, esto no mostró un patrón regional sistemático. Al comienzo de la República, pocas zonas exhibieron un predominio claramente definido como de uno u otro partido, con dos excepciones: el Litoral Caribe era liberal y Antioquia era conservadora.⁷ El poder era una maraña intrincada de rivalidades locales a todos los niveles, comunidades o municipios, codo a codo dentro de cada región. Liberales y conservadores fueron desde el comienzo, y continúan siendo, altamente facciosos como organizaciones nacionales.

Originalmente, la división entre liberales y conservadores tenía una fundación ideológica racional en la sociedad colombiana. Los liberales eran miembros de la élite de terratenientes, abogados y comerciantes con una mentalidad laica, seguidores de Santander y hostiles a lo que se entendía como los compromisos militaristas y clericales del último periodo de la carrera de Bolívar como Libertador. Los conservadores, que tenían vínculos más cercanos con la aristocracia colonial o los círculos oficiales, se identificaban con el orden centralizado y la disciplina social de la religión. Las ideas importaban en las disputas entre ambos, comenzando con la directriz del gobierno de Santander de que el tratado de Bentham sobre legislación

penal y civil fuese de estudio obligatorio en la Universidad de Bogotá ya para el año 1825 (algo inconcebible hasta en Inglaterra inclusive cincuenta años después). La furiosa reacción clerical finalmente condujo a la reintroducción de los Jesuitas —quienes habían sido expulsados de las colonias por la monarquía española en 1767— para dirigir escuelas secundarias; y luego sobrevino su reexpulsión en 1850.⁸

DE ABAJO HACIA ARRIBA

Colombia estaba a la vanguardia de la revolución liberal en el mundo atlántico del siglo XIX y los líderes del Partido Liberal, confiados de su misión histórica, estaban comprometidos con las reformas radicales. La esclavitud y la pena de muerte fueron abolidas, el Estado y la Iglesia fueron separados, los fueros clericales fueron levantados, el divorcio fue legalizado, el Ejército fue reducido y comenzó el sufragio universal para los hombres. En este escenario, las comunidades indígenas, vistas como parte de un legado colonial pernicioso que debía ser superado, no hallaron cabida. La República debía estar fundada sobre las bases de pequeños propietarios minifundistas, una visión que echaba sus raíces en el pensamiento de Bolívar.

En el Cauca los afrocolombianos, indígenas y pobladores de la frontera provenientes de Antioquia presionaron por sus derechos y participaron activamente en política. Una cultura política radical y democrática de “regateo republicano” se desarrolló a partir de 1848. Los subalternos votaron en las elecciones y participaron en los concejos municipales, en las sociedades democráticas, en demostraciones, boicots, disturbios, motines y guerras civiles, haciendo de Colombia una de las democracias

republicanas más participativas del mundo durante la *era del capital* (1848-1876). En ningún otro país del llamado mundo atlántico de 1850 y comienzos de 1860, los descendientes de esclavos africanos podían votar y unirse a sociedades democráticas. En ningún otro país, los miembros de las comunidades indígenas ejercieron su derecho al voto como ciudadanos.

En la década de 1850 ninguna facción de gobierno era lo suficientemente poderosa para implantar una hegemonía regional, mucho menos nacional. Cada sector que aspiraba al poder estatal tenía que, en diversos grados, forjar alianzas a nivel local y regional con grupos que habían sido anteriormente privados del derecho al voto y cuyas demandas incluían el fin de las desigualdades derivadas de los patrones de dominación y explotación coloniales. Las élites del Cauca tenían que lidiar con artesanos y trabajadores-ciudadanos-soldados rurales tanto indígenas, como afrocaucanos y colonizadores antioqueños. Los gobernantes y los gobernados en Colombia no tenían un entendimiento compartido de democracia republicana ni un compromiso conjunto por la igualdad. Mientras que para los conservadores y muchas élites regionales liberales la democracia no debía dar paso a una “república de iguales” en la cual la “anarquía” reinaría; para los afrocaucanos la igualdad significaba el final de la esclavitud y del dominio de los hacendados conservadores, así como el acceso a la propiedad de la tierra. Para los indígenas de Cauca, por su parte, la igualdad significaba el derecho a existir como colectividad a fin de ejercer la administración colectiva de la tierra y practicar el autogobierno de la comunidad. En el norte del Cauca, en los poblados de colonizadores antioqueños, la igualdad significaba protección contra los especuladores conservadores comerciantes de tierras.

El choque entre liberales y conservadores, entonces, no se basaba solamente en asuntos de educación, ni tampoco era un problema entre élites. La revolución liberal de 1849-1853 estuvo precedida y se profundizó con las sublevaciones (zurriagos) de insurgentes exesclavos afrocolombianos en su mayoría, contra los hacendados conservadores del Valle del Cauca, con saqueos, incendios, destrucción de cercas y ocupaciones de tierras en toda su extensión a partir de 1850. La hacienda del clan conservador líder, *Japio*, fue ocupada al final de la guerra en 1851, ya que los afrocaucanos ejercían la tenencia comunal de la tierra y el uso colectivo de los bosques y ríos. Estos sembraron para producir y comercializar tabaco y azúcar libres del dominio de los hacendados. En Bogotá, los artesanos radicales republicanos, estimulados por las barricadas parisienses de 1848 y los escritos de Proudhon y Louis Blanc, también se movilizaron. Como en Europa, los liberales colombianos abandonaron a sus artesanos partidarios a los rigores del libre comercio y comenzaron a disolver tierras indígenas. No prescindieron de sus aliados afrocaucanos, en vez de eso, fomentaron la propagación de las llamadas *sociedades democráticas* que supervisaban el desempeño de los funcionarios electos, presentaban peticiones al gobierno nacional y local sobre asuntos como educación primaria, derechos sufragistas, pensiones, distribución de tierras, acceso a la Cámara de los Comunes e impuestos sobre el aguardiente.

Las divisiones liberales, debido al miedo racial y al rechazo a los liberales insurgentes afrocaucanos, trajeron como consecuencia un resurgimiento de los conservadores en las elecciones de 1853, el cual estaba apoyado por una alianza efímera forjada con los indígenas que se oponían a la privatización de las tierras comunes que beneficiaba a los especuladores ávidos de corteza de quina (quinina). En

1854, José María Melo dirigió un levantamiento liberal que encontró apoyo entre los artesanos republicanos radicales de Bogotá, pero que causó que muchas élites liberales apoyaran dedicadamente a los conservadores. En el Cauca, los conservadores, redefiniendo la guerra civil como un estallido de vandalismo criminal, se vengaron de los recién acuñados ciudadanos-soldados-trabajadores afrocaucanos al hacer más estrictas las leyes de vagos y maleantes, reinstaurar la pena de muerte y tratar de vedar las sociedades democráticas. Aunque los derechos sufragistas no fueron abolidos, la meta era privar del derecho al voto a los exesclavos y para ello se usaron una variedad de medios, incluido el terror. Los liberales pagaron caro el haber subestimado el peso de las comunidades indígenas, pero los conservadores no fueron lo suficientemente astutos para diseñar una contraparte a las sociedades democráticas, a fin de cimentar una alianza con los resguardos indígenas.

A finales de la década de 1850, Tomás Cipriano de Mosquera, líder de los conservadores del Cauca antes de 1848 y descendiente de la “familia real de Nueva Granada”, guió con la insurgencia liberal. Junto al clan conservador de los Arboleda, con quienes tenían estrechos vínculos, los Mosquera eran los mayores terratenientes de la región. Mosquera luchó bajo el mando de Bolívar y ocupó importantes puestos bajo los gobiernos protoconservadores, pero en su puja para derrocar a Mariano Ospina desertó para irse al lado liberal y buscó aliados entre los afrocaucanos, indígenas y pobladores antioqueños. Los liberales pidieron revocar las leyes de vagancia, la pena de muerte, a la vez que demandaron detener la arremetida contra los resguardos indígenas. Reconocieron el autogobierno de las comunidades a través de la Ley 90 de 1859, protegieron a los pobladores

antioqueños de los especuladores (con quienes el conservador Ospina tenía conexiones personales) en la zona montañosa de Quindío y congelaron, asimismo, los impuestos de consumo sobre el licor.

Como los conservadores no lograron forjar alianzas duraderas con las comunidades indígenas, los liberales le sacaron provecho a las masas de seguidores afrocaucanos para derrotar a sus rivales en una guerra civil (1860-1863) en la que, de acuerdo con un conservador, las tropas de Mosquera estaban “compuestas de negros, zambos y mulatos, asesinos y ladrones del Valle del Cauca”. Las fuerzas populares de piel oscura pelearon bajo el mando de Mosquera, aunque de los grupos indígenas, solo los Páez (Nasa) se pusieron abiertamente del lado de los liberales. Los conservadores alienaron a los antiguos aliados indígenas, al reclutar a hombres adultos y colgar a aquellos que se resistían. Contaban con una base de apoyo de parte de los minifundistas mestizos y de algunas veredas o pueblos antioqueños.

Una vez que Mosquera asumió la presidencia en 1863, el Cauca se convirtió en la región a la cabeza, ya que Mosquera le devolvió los derechos sufragistas a los estados (devolviendo así el derecho al voto de los afrocaucanos), embargó las tierras de la Iglesia, descentralizó la Constitución, abolió las leyes de vagos y la pena de muerte y reconoció tanto los resguardos indígenas como los derechos de los pobladores. Los magistrados y diputados en la legislatura estatal, así como los presidentes estatales y los concejos municipales, eran elegidos cada dos años. Los liberales controlaban los resultados de las elecciones estatales, pero los conservadores ganaron puestos en las legislaturas y compitieron en las elecciones locales.

La combinación de políticas liberales, supremacía electoral e irrupción de la democracia popular radical y

participativa dentro del Partido Liberal obligó a que surgiera un conservadurismo más intransigente, clerical e internamente colonial. Con la división entre las élites liberales y sus aliados subalternos siguiendo líneas raciales y de clase, y con el aumento en los enfrentamientos sobre los significados de una democracia republicana a finales de la década de 1870, se había llegado a los límites de la alianza entre liberales y sectores subalternos.

TERMIDOR TROPICAL

Las élites liberales no estaban dispuestas a dismantelar las haciendas, lo que habría reconfigurado radicalmente el poder político basado en la tenencia de la tierra y en la explotación de la mano de obra esclava. La propiedad privada estaba siendo atacada, los bandidos y ladrones de ganado surgían de las montañas cercanas, los arrendatarios y aparceros se negaban a trabajar o a pagar la renta. Decididos a detener la ola creciente de lo que ellos denominaban como “anarquía” bajo el mando de los liberales radicales, los demás segmentos de las élites liberales conocidos como los *Independientes* rompieron filas. La sagrada trinidad era “familia, propiedad y religión”. Los Independientes tenían el apoyo de los antiguos pobladores antioqueños liberales en María, así como de los minifundistas blancos y mestizos del norte del Cauca. Las comunidades indígenas permanecieron neutrales.

Esta nueva constelación de alianzas permitió que los conservadores dirigieran un sangriento pero exitoso golpe en el Cauca entre 1878-1879, lo que puso fin al experimento republicano radical de esta región.⁹ Los conservadores, contrarios a lo que denominaban

“democracia salvaje”, en la que los “elementos bárbaros predominaban”, apoyaron con fervor a los Independientes y estaban decididos a recular tantos cambios nuevos como fuese posible. A finales de la década de 1870, encontraron un vehículo político —las *sociedades católicas*— a través del cual consiguieron el apoyo de los colonos de la frontera, algunos de ellos exliberales, para llevar adelante tal proyecto. Al proveer educación religiosa, las sociedades católicas combatían agresivamente las reformas educativas anticlericales de los liberales. El conservadurismo modernizado, promovido por los Independientes caucanos y los minifundistas republicanos populares, llevó al contragolpe conocido como la Regeneración bajo el mando de Rafael Núñez.

Esta perspectiva de la historia del conflicto étnico, racial y de clases revela que en cualquier búsqueda por un futuro más equitativo, democrático y pacífico, los colombianos pueden mirar atrás, hacia una cultura política que se caracterizó por los amplios canales de participación abiertos por los subalternos desde la década de 1850 hasta la de 1870. Esto muestra que la propagación del clientelismo autoritario que caracterizó el final del periodo evolucionó como una reacción contra la amenaza que se cernía sobre la propiedad privada, los privilegios de clase y el monopolio político. La Regeneración (el tema del siguiente capítulo) afectó la vida política en el siglo xx tan profundamente que muchas veces se olvida lo vitales que fueron y han sido las tendencias democráticas que le precedieron.

1. “Democracias republicanas atlánticas” se refiere a los sistemas en los EE. UU., Europa y América Latina que no fueran ni dictaduras ni monarquías sino regímenes parlamentarios. Ver Eric Hobsbawm, *The Age of Capital, 1848-1875* (Nueva York: Vintage Books, 1975).

2. Malcolm Deas, "The Fiscal Problems of Nineteenth-Century Colombia", *Journal of Latin American Studies*, 14:2 (1982), 287-328.
3. Miguel Samper, *La miseria de Bogotá* (Bogotá: El Republicano, 1867), citado en Daniel Pécaut, *Orden y Violencia*, vol. I, 33.
4. Daniel Pécaut, *Orden y violencia*, 29-37.
5. James Payne, *Patterns of Conflict in Colombia* (NuevaHaven, CT: YUP, 1968), 121-22.
6. Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad* (Bogotá: Espasa, 2001), 56-57; David Bushnell, *The Making of Modern Colombia*, 126. Con la posible excepción de México o Uruguay, esa identificación con los partidos políticos no se dio tan profundamente en ninguna otra parte de la región.
7. Para el proceso a través del cual Antioquia se volvió una región conservadora, ver Nancy Applebaum, *Muddied Waters: Race, Region, and Local History in Colombia, 1846-1948* (Durham, NC: DUP, 2003), 45-47. Para el predominio liberal en la costa Atlántica ver Helen Delpar, *Red Against Blue: The Liberal Party in Colombian Politics, 1863-1899* (Tuscalooza, AL UAP, 1981), 16-21; Eduardo Posada Carbó, *The Colombian Caribbean: A Regional History, 1870-1950* (Oxford: OUP, 1996), 235-51.
8. Frank Safford y Marco Palacios, *Colombia: Divided Land, Fragmented Society*, 115, 126, 142, 151, 204.
9. Esto es comparable con la experiencia de los EE. UU. después de la Reconstrucción, cuando se llevó a cabo un ataque contra las comunidades indígenas y afroamericanas, así como contra sus libertades y derechos, en nombre del "progreso" agroindustrial. Ver Nell Irvin Painter, *Standing at Armageddon: The United States from 1877-1916* (NuevaYork: W. W. Norton, 1988).

capítulo

2

De la reacción a la rebelión,

1880-1930

Tres razas distintas y de encontrados caracteres forman la población de la República. Cada estado tiene climas, costumbres y trabajos diversos. No hay sino dos vínculos que los unen: la lengua y la religión. No han podido quitarnos el idioma, y se esfuerzan de arrancarnos las creencias. ¡Bárbaros los que tal hacen! Quisieran reducirnos a la condición de hordas beduinas, siempre en guerra las unas con las otras. Echaron a Dios del gobierno y de las leyes, lo expulsaron de la educación superior, y ahora os diré el resultado: si aún no estamos arruinados sin remedio es porque Cristo aún reina en los hogares y en las conciencias.

Monseñor Rafael María Carrasquilla, 1885

La implementación de un proyecto centralista autoritario, supervisado por la Iglesia católica y el Partido Conservador, marcó el periodo posterior a 1880 y a lo largo de cincuenta años. Dicho proyecto proscribía la política popular radical y democrática al fortalecer un clientelismo arraigado en el *boom* de la exportación cafetera, el cual comenzó en la década de 1880, y permitió un rol nacional a las élites bancarias y comerciales conservadoras de Antioquia. Este grupo de empresarios pagaron y se beneficiaron de la fundación de municipios en la frontera cafetera, en donde se les brindaba a los aparceros y arrendatarios dispuestos a migrar la esperanza de acceder a tierras propias. La figura idealizada del colono paisa, encarnada por gente de piel clara y su pequeña parcela, se convirtió en la medida del progreso nacional, en contraste con los arrendatarios, aparceros o las comunidades de piel oscura —indígenas y afro— del Cauca.¹

CAPITALISMO CAFETERO Y CLIENTELISMO

La Regeneración que comenzó en 1880 puso en marcha cinco décadas de reacción, que truncaron las esperanzas de ciertos sectores liberales que deseaban ver a Colombia al lado de las democracias atlánticas más destacadas. Las élites de Colombia, principalmente, “desistieron del intento de incorporar ciudadanos disciplinados, y más bien concentraron sus esfuerzos en gobernar a sujetos recalcitrantes”.² La Constitución de 1886 fortaleció el poder central, dando al presidente la autoridad de designar gobernadores provinciales y extendiendo los periodos de permanencia en los cargos —que pasaron de dos a seis años para el poder ejecutivo y de dos a cuatro para el legislativo— con el fin de reducir la frecuencia de las

elecciones. Las demostraciones públicas fueron prohibidas, las sociedades democráticas perseguidas y el “orden” se convirtió en la consigna del día. El país estaba “ideológicamente encarcelado” y sus guardianes eran los gramáticos católicos, amantes del castellano, como Miguel Antonio Caro, arquitecto de la Constitución de 1886.³

Los subalternos eran forzados a trabajar y obedecer a los criollos, mientras que la esfera de la política fue reducida a fin de excluirlos. Un ejército profesional reemplazó a las milicias populares y la pena de muerte fue reinstaurada para detener los ataques a la propiedad. El nuevo Concordato con el Vaticano aseguró un vínculo estrecho con las corrientes más autoritarias de la Iglesia. Para fortalecer la fe en Colombia y dirigir el sistema de escuelas públicas, la jerarquía católica enviaba olas sucesivas de fanáticos religiosos provenientes de otros escenarios de lucha europeos o latinoamericanos, curtidos por la guerra ideológica. A fines de siglo, la Regeneración aplastó la resistencia liberal asociada con la emergente burguesía cafetera durante la sangrienta Guerra de los Mil Días (1899-1903), la cual dejó 100 000 muertos. El presidente Marroquín abandonó Panamá a manos de los EE. UU., cuyo dominio de los asuntos hemisféricos fue indiscutible a partir de ese momento.⁴

La Regeneración cimentó el control oligárquico, que no había sido seriamente amenazado durante la Guerra de los Mil Días, y cerró los caminos para la participación democrática que una coalición heterogénea de trabajadores rurales, abogados municipales de clase media —también conocidos como *tinterillos*— y artesanos urbanos, había abierto después de la mitad del siglo.⁵ Los indígenas, afrocolombianos, artesanos y, sobre todo, campesinos mestizos vieron sus derechos ciudadanos restringidos bajo el mando de los conservadores, mientras que la “raza”

católica antioqueña, mitificada en la imagen del colono paisa, se convirtió en el eje cultural de un nuevo orden político y económico.

El camino antidemocrático y autoritario de Núñez estaba pavimentado por los cuerpos de aquellos que lucharon por proyectos republicanos alternativos, más participativos e incluyentes, y fijó los parámetros para la política nacional hasta el siglo XXI. Las razones para tal persistencia evidentemente tienen que ver con la topografía: desde la llegada de la Regeneración, la configuración geográfica de Colombia concedió a las élites conservadoras y liberales una ventaja logística excepcional en la imposición de controles clientelistas parroquiales desde arriba, a la vez que obstaculizó o suprimió las movilizaciones nacionales desde abajo. Después de que las élites liberales tropezaran con sus propias contradicciones en la década de 1870, lo que los partidos perdieron en cohesión horizontal, lo ganaron en adhesión vertical por parte de sus seguidores. Las intensas fuerzas ideológicas y materiales de su mutua contención se aplicaban en los ámbitos íntimos de las bases. La fuerza excepcional del clientelismo establecido durante la Regeneración le debe mucho, sin duda, a la ubicación particular de estas presiones.

Otra característica de las zonas rurales colombianas que reformó al clientelismo y le dio un giro político inusual apareció a partir de 1870, cuando grandes extensiones de tierras de la frontera agrícola fueron descubiertas como terreno ideal para el cultivo de café, lo que les dio a los comerciantes colombianos un importante producto básico de exportación, que generó ganancias sustanciales y la perspectiva de una transformación capitalista. Como una extensión de las fincas cafeteras venezolanas, el cultivo del grano comenzó en Santander para luego desplazarse con

los campesinos hacia el oeste, en Cundinamarca, donde fue cultivado por grandes terratenientes. Para finales de siglo, los cafetales se extendían en zonas de Tolima, Antioquia y Viejo Caldas (Caldas, Risaralda, Quindío). Después de la Primera Guerra Mundial, Colombia se había convertido en el segundo mayor productor del mundo después de Brasil, bajo unos patrones muy distintos a los del líder mundial. En Brasil y Guatemala predominaban las grandes plantaciones donde trabajaban campesinos endeudados o trabajadores jornaleros. En Colombia, en cambio, estas grandes propiedades eran más modestas, llegaban rápido a los límites de su accionar, como en el caso de Santander, y tenían menos peso en el patrón general de cultivo; mientras que las parcelas pequeñas o medianas eran cada vez más numerosas, aunque no en la misma medida que en Costa Rica. Comparada con las grandes *fazendas* de São Paulo, la base social de la agricultura de café en Antioquia, Viejo Caldas y partes de Tolima le ofreció a los arrendatarios y apareceros la oportunidad de ser dueños de su tierra y de tener control sobre la producción, en lo que llegó a conocerse como el *Eje Cafetero*. Medida en términos de distribución de tierra, la economía de exportación del café era comparativamente democrática. Con importantes excepciones regionales, tales como Cundinamarca y el este del Tolima, la producción no estaba controlada por los que sembraban para el patrón, sino por familias campesinas que trabajaban en terrenos de pequeña y mediana extensión a altitudes de nivel medio, entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, a partir de 1890 la comercialización de la cosecha siempre estuvo en manos de la élite financiera y bancaria de Antioquia, la cual daba créditos a los pequeños hacendados, arrendatarios y aparceros, compraba la producción y financiaba su exportación.⁶ Los pequeños

productores fueron, de esta manera, empujados a un conflicto con los acreedores y con los especuladores de bienes raíces sobre títulos de tierras, términos de venta para sus cosechas y comercio de contrabando en licor. Aun en grandes propiedades en Cundinamarca, los comerciantes-terratenientes, como hicieran los hacendados en el Cauca antes que ellos, tenían que lidiar con arrendatarios rebeldes que cazaban furtivamente, robaban, contrabandeaban e invadían los predios, hacían tratos bajo cuerda y armaban motines en contra del aumento de los impuestos.⁷ Aunque los márgenes de ganancia dependían de la supervivencia de un monopolio oligárquico, tanto en el mercado como en la política partidista, los hacendados estaban lejos de ser todopoderosos.⁸ No obstante, en el Eje Cafetero de las cordilleras Occidental y Central, los vínculos entre los minifundistas de abajo y los poderosos distribuidores de arriba marcaron las relaciones de producción e intercambio comercial durante el periodo de gobierno conservador. Esta fue la clave para la construcción de la nación mestiza dirigida por criollos más o menos blancos. Los vínculos coloniales de dependencia se reproducían bajo nuevas formas, que reforzaban los lazos clientelistas verticales e idealizaban al colono paisa, cafetero deferente pero independiente y, más importante aún, ni negro ni indígena, más bien mestizo con la posibilidad material de “blanquear la raza”. Con pocas excepciones, en otras partes de América Latina este patrón ha dado paso a una amplia política urbana en la que partidos populistas radicales —forjando coaliciones entre clases, que incluyen a sindicatos, sectores medios en expansión y campesinos movilizados— han exigido cambios estructurales en la organización del Estado, la sociedad y la economía, lográndolos aún a pequeña escala. En Colombia, por el contrario, nunca fue el caso.

ASCENDENCIA ANTIOQUEÑA

La región más rica y poderosa de todas las zonas cafeteras en Colombia era Antioquia, cuya élite se distinguía por su lealtad a la Iglesia, el culto al “orden”, la *fetichización* del “progreso” capitalista, la devoción al mestizaje dirigido desde arriba por hombres blancos, el compromiso compartido con un gobierno tecnocrático y bipartidista. El aumento de las fuerzas conservadoras —durante un periodo de segregación racial basado en el racismo científico en el mundo negro atlántico (el sur de los EE. UU., Brasil, Cuba) y de liberalismo en detrimento de las etnias indígenas en Mesoamérica y los Andes— tuvo su base económica en el *boom* de exportación de café. El control del café, particularmente en lo que se refiere a transporte, crédito y distribución, ayudó a que los banqueros/comerciantes de Medellín se convirtieran en los fabricantes industriales punteros del país. Las élites paisas disfrutaron de preeminencia política nacional desde 1910 hasta 1930.

El movimiento de pobladores hacia las fronteras cafeteras en las tierras del centro y oeste, considerada la transformación histórica más importante del periodo conservador, llevó a una mayor igualdad en el acceso a la tierra, pero no a la riqueza general o al acceso a los recursos o al poder político. Sí consiguió que buena parte de los colonos cafeteros, en su grandísima mayoría mestizos, se alinearan con las élites de uno de los dos partidos.⁹ El *boom* de exportación de café también trajo consigo el desarrollo de la banca e instituciones crediticias modernas, el crecimiento de la industria manufacturera (de bebidas, textiles, procesamiento de comida, vidrio y manufacturas con hierro) que inicialmente se basó en el trabajo de las mujeres inmigrantes, así como en la

construcción de una nueva infraestructura de transporte.¹⁰ En 1914, conexiones férreas unieron a Medellín con Puerto Berrío y el río Magdalena, y en 1915 a Cali con Buenaventura y el Pacífico, lo que hizo del Valle del Cauca y de su modernizada industria azucarera un polo rival del desarrollo capitalista al polo de punta, es decir, el asentado en Antioquia y el Eje Cafetero.

Para fomentar las exportaciones de café y la producción industrial para el mercado interno, el gobierno conservador, apoyado por el Partido Liberal de oposición, financió por primera vez obras públicas y educación. La ingeniería, institucionalizada en la Escuela de Minas de Medellín a partir de 1888, produjo futuros presidentes (Pedro Nel Ospina y Mariano Ospina Pérez) y guió la implementación de proyectos tecnocráticos. Inspirada en la University of California-Berkeley's School of Mines, la Escuela de Minas fue el semillero de socialización para el cuadro de dirigentes del nuevo orden. La escuela ayudó a formar una élite de comerciantes educados en la técnica pero no en las ciencias naturales experimentales o sociales y mucho menos en las artes. Esta élite no solo sobrevivió sino también prosperó en la Regeneración. Las doctrinas del Papa León XIII reconciliaban el positivismo científico aplicado con la fe tradicional.¹¹

Estos desarrollos eran contemporáneos con los discursos racistas "científicos" y las prácticas de colonialismo interno con respecto a indígenas, mestizos y afrocolombianos en la periferia regional y en el Eje Cafetero. En profundo contraste con las élites caucanas, cuyas opiniones estaban divididas en cuanto a la relación con los afrocaucanos, los dirigentes paisas integraron exitosamente elementos de la cultura popular mestiza en una ideología regional y racial hegemónica e internamente coherente de poder blanco y de medios empresariales: un

yanquismo tropical.¹² Los comerciantes antioqueños se beneficiaron de la extracción de recursos naturales como oro y petróleo, desarrollaron extensas haciendas ganaderas diseñadas para alimentar una población urbana en vías de expansión (que se quintuplicó entre 1912 y 1951) y fomentaron una cultura nacional de pequeña agricultura comercial de café. Debido a que las empresas estadounidenses controlaban las industrias bananeras, auríferas y petroleras, las fortunas de los industrialistas, banqueros y comerciantes *paisas* giraban en torno al control del café, de los créditos, de la industria manufacturera y de la especulación en bienes raíces. Aun con el café, en todo caso, el control lo ejercían en última instancia las firmas de importación norteamericanas, la política de gobierno y los consumidores de los EE. UU.¹³

De esta manera, los colombianos ingresaban permanentemente en la economía capitalista mundial bajo el liderazgo de los elementos de su élite más avanzados técnicamente pero más retrógrados social e ideológicamente. Así, mientras el trabajo organizado en su fase socialista y anarcosindicalista se estaba haciendo sentir en el resto de la región latinoamericana antes de la Primera Guerra Mundial, en Colombia el dominio conservador recibía un nuevo soplo de vida debido al crecimiento en las exportaciones de café. La producción había pasado de un millón de sacos en 1913 a dos millones en 1921 y a tres millones en 1930. Después de la Primera Guerra Mundial, el capital extranjero invirtió en el sector cafetero y Wall Street abrió generosas líneas de crédito en lo que luego se conoció como la *danza de los millones* —lo que refrescó a la élite exportadora, pero no le dio tregua ni a los arrendatarios y aparceros ni mucho menos a los artesanos, proletarios, indígenas o comunidades afrocolombianas—. Como resultado del informe presentado

por Walter Kemmerer, profesor de economía de Princeton que dirigió una misión a nivel continental para evaluar las finanzas en los gobiernos suramericanos, los préstamos de los EE. UU. se agotaron para 1927 y la fuga de capital sumergió a la economía colombiana en una depresión. En 1929, un cambio decisivo ocurrió en la política elitista cuando los precios del café cayeron súbitamente de 60 a 34 centavos el kilo, lo que significó un desastre para la economía de exportación, el cual se consumó posteriormente con el colapso de Wall Street en octubre de ese año. Los conservadores se dividieron cuando los líderes de la Iglesia apoyaron a candidatos rivales en la sucesión para las elecciones de 1930.¹⁴

¿UN NUEVO MUNDO?

La burguesía antioqueña “había intentado convertir a Colombia en su propia imagen idealizada, pero había fallado” y los signos de un nuevo radicalismo popular estaban despertando aun cuando las exportaciones de café alcanzaron nuevos toques.¹⁵ La política autoritaria de la Regeneración y el dominio conservador trabajaron en función de expandir los derechos de propiedad de un sector de pobladores fronterizos a fin de incluirlos en redes bipartidistas de clientelismo. Esta medida de democracia económica reforzó el conservatismo político, pero dejó a la mayoría de los subalternos (afrocolombianos, comunidades indígenas y gran parte de los mestizos de la frontera agrícola) dando tumbos, lejos del alcance de un gobierno central. Los grupos subordinados pedían ser defendidos del poder de los terratenientes. En 1914, un aparcerero llamado Quintín Lame fue nombrado líder supremo de las tribus indígenas de Colombia, aunque no hablaba la lengua

nativa, nasa. Lame había luchado del lado conservador en la Guerra de los Mil Días y, como cualquier otro soldado-campesino andino de este periodo, él y su movimiento exigieron al Estado que protegiese las formas de ciudadanía colectiva y no liberal frente a las ofensivas de los terratenientes reaccionarios.¹⁶ Debido a sus esfuerzos organizativos, Lame pasó una década dentro y fuera de la cárcel, pero el movimiento que dirigió, conocido como la *Quintinada*, ganó terreno a través de ocupaciones colectivas de tierras al sur de Colombia, pasando del Cauca al Tolima en 1922.¹⁷

Los ánimos políticos se vieron marcadamente alterados puesto que las ideas anarcosindicalistas y socialistas habían comenzado a avanzar en el movimiento obrero que le siguió a las revoluciones mexicana y rusa y a la Primera Guerra Mundial, al tiempo que el capital estadounidense comenzaba a hacer sus primeras incursiones en América del Sur.¹⁸ En 1926, el primer vehículo independiente de la tutela del Partido Liberal y Conservador, el Partido Socialista Revolucionario (PSR), organizó una lucha proletaria en los enclaves de exportación transnacional del Caribe y a lo largo de las fronteras cafeteras. El segundo vicepresidente del PSR, Raúl Eduardo Mahecha —un sastre veterano del bando liberal de la Guerra de los Mil Días— ayudó a fundar el sindicato de los trabajadores de petróleo, USO, y en 1926 encabezó una huelga en contra de la Tropical Oil (una subsidiaria de Jersey Standard) en el Magdalena Medio, donde, a lado y lado del río del mismo nombre, se encuentran los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca. La primera vicepresidenta del partido y oradora legendaria, María Cano, hija de una familia oligarca de Medellín perteneciente al mundo del periodismo, realizó una gira por las zonas rurales del país entre 1925 y 1927,

organizando huelgas y haciendo campaña a favor del cambio radical. Entre noviembre y diciembre de 1928, Cano fue una de las líderes, junto a Mahecha, de la legendaria huelga de cuatro mil trabajadores de la industria bananera contra la United Fruit cerca de Santa Marta.

En la versión de esta huelga inmortalizada por Gabriel García Márquez en *Cien años de soledad*, miles de trabajadores eran masacrados y cargados en furgones de mercancías rumbo al mar mientras el recuerdo de la represión era borrado a través de la amnesia oficial.¹⁹ En realidad, el incidente fue minuciosamente investigado y hecho público por un joven abogado que recientemente había regresado de la Italia de Mussolini. Un diputado de la cámara baja del Congreso, Jorge Eliécer Gaitán, usó la masacre para lanzar su carrera como el primer político populista dentro del Partido Liberal, consolidando así su alianza con los liberales de izquierda de la costa Atlántica.²⁰ En su estudio sobre Gaitán, Herbert Braun lo describe, acertadamente, como un reformista pequeñoburgués; pero al darle voz oficial a las demandas populares y colocar “la cuestión social” en el centro del debate parlamentario nacional, Gaitán se ganó la enemistad de la fracción oligarca dominante dentro de su propio partido, así como la de la derecha más conservadora. Ganó también el amor de las clases medias y populares.²¹

En 1929, los *Bolcheviques del Líbano* del PSR se alzaron en una insurrección fallida en el norte de Tolima. Esta fue la primera revuelta explícitamente socialista en Colombia y representó la alianza que los artesanos radicales e intelectuales provinciales habían forjado con los arrendatarios, aparceros y pequeños parcelarios.²² En efecto, los campesinos tomaron la ofensiva, organizando

tomas de tierras a lo largo de todo el Eje Cafetero, y el proletariado de los enclaves de exportación llevó a cabo una de las mayores huelgas que hasta la fecha se haya dado contra las multinacionales en Colombia. El capitalismo cafetero-exportador bajo el mando conservador católico creó esperanzas en cuanto a la tenencia de una parcela, al control del trabajo y a gozar de salarios más altos, promesas que no pudo cumplir. Incluso antes de la fuga de capitales y la Gran Depresión, el efecto conjunto de las promesas incumplidas y la vasta movilización popular a la que dieron pie, marcó el derrumbe de dicho modelo.

En un proceso de mestizaje partidista dirigido desde arriba por hombres blancos, las regiones se racializaban a medida que sectores privilegiados de campesinos eran incorporados a redes de mecenazgo y clientelismo. Aquellos que estaban excluidos de los beneficios del capitalismo cafetero se movilaron en protestas. La rebelión indígena campesina se extendió a partir de 1914, los sindicatos atacaron los enclaves capitalistas de petróleo y banano después de 1925 y una ola de toma de tierras por parte de campesinos mestizos e indígenas se esparció por las fronteras cafeteras en 1928. Por medio de la acción directa y la formación de partidos revolucionarios de izquierda, los movimientos populares radicales alcanzaron más independencia y autonomía frente a los dos partidos que la que gozaban en el pasado.

1. Para formación racial y la *racialización* de Antioquia y el Cauca a partir de 1880, ver Nancy Applebaum, *Muddied Waters*, 31-51. Para Antioquia, el Chocó y la costa Atlántica, ver Peter Wade, *Blackness and Race Mixture*, 66-105.
2. Los párrafos anteriores resumen los capítulos 3-6 de James E. Sanders, *Contentious Republicans*, 58-183. La cita aparece en la página 184.
3. Gonzalo Sánchez, "Intelectuales... poder... y cultura nacional", en Gonzalo Sánchez, *et al.*, ed., *Los intelectuales y la política*, 60-65; Malcolm Deas, *El poder y la gramática* (Bogotá: Norma, 1993). Ver también, Miguel Ángel

- Urrego, "La noción de la ciudadanía bajo la Regeneración: Colombia, 1880-1900", en Rossana Barragán *et al.*, eds., *El siglo XIX: Bolivia y América Latina* (La Paz: Muela del Diablo, 1997), 651-62.
4. Para la Guerra de los Mil Días, y lo particular de la economía, política, y geografía cafetera en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ver Charles Bergquist, *Coffee and Conflict in Colombia: Origins and Outcome of the War of a Thousand Days, 1886-1910* (Durham, NC: DUP, 1978).
 5. Charles Bergquist, "La guerra popular en la Guerra de los Mil Días", *Análisis Político* 52 (septiembre-diciembre 2004), 77-89.
 6. En términos marxistas, el excedente era principalmente extraído en el punto de intercambio y no en la producción, como se observa en Charles Bergquist "The Labor Movement in Colombia (1930-1946)", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia*, 68.
 7. Michael Jiménez, *Struggles on an Interior Shore*, manuscrito no publicado.
 8. Mariano Arango, *Café e industria 1850-1930* (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1977); Absalón Machado, *El café: de la aparcería al capitalismo* (Bogotá: Punta de Lanza, 1977); Charles Bergquist, *Coffee and Conflict*; Michael Jiménez, "Traveling Far in Grandfather's Car: The Life Cycle of Central Colombian Coffee Estates: The Case of Viotá, 1900-1930", *Hispanic American Historical Review*: 2 (1989), 185-219; Michael Jiménez, "At the Banquet of Civilization: The Limits of Planter Hegemony in Early-Twentieth-Century Colombia", en William Roseberry *et al.*, eds., *Coffee, Society, and Power in Latin America* (Baltimore, MD: JHUP, 1995), 262-93.
 9. Debido a la propagación de dueños de pequeñas parcelas, algunos científicos sociales norteamericanos de mediados del siglo XX y excepcionalistas antioqueños alabaron al capitalismo cafetero encabezado por los *paisas*, y lo acogieron como un proceso de modernización capitalista democrática. Ver James Parsons, *Antioqueño Colonization in Western Colombia* (Berkeley: UCP, 1949); William Paul McGreevy, *An Economic History of Colombia, 1845-1930* (Cambridge: CUP 1971); Keith Christie, "Antioqueño Colonization in Western Colombia: A Reappraisal", *Hispanic American Historical Review* 58:2 (mayo 1978), 260-63; Ann Twinam, *Miners, Merchants, and Farmers in Colonial Colombia* (Austin, TX: UTP, 1982), 20-21.
 10. Ann Farnsworth-Alvear, *Dulcinea in the Factory: Medellín's Industrial Experiment, 1900-1950* (Durham, NC: DUP, 2000).
 11. Gonzalo Sánchez, "Intelectuales... poder... y cultura nacional", 68-69; Fabio López de la Roche, "Cultura política de las clases dirigentes en Colombia", en de la Fabio López Roche, ed., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, 111. Ver también, Frank Safford, *The Ideal of the Practical: Colombia's Struggle to form a Technical Elite* (Austin, TX: UTP, 1976); Alberto Mayor Mora, *Ética, trabajo, productividad en Antioquia* (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1984); Pamela Murray, "Engineering Development: Colombia's

School of Mines, 1887-1930", *Hispanic American Historical Review*, 74:1 (1994), 63-82.

12. Nancy Applebaum, *Muddied Waters*, 33-40.
13. Mario Arango, *Los funerales de Antioquia la grande* (Medellín: J. M. Arango, 1990); Fernando Botero Herrera, *Medellín, 1890-1950: historia urbana y juego de intereses* (Medellín: Udea, 1996); Michael F. Jiménez, 'From Plantation to Cup': Coffee and Capitalism in the United States, 1830-1930", en William Roseberry *et al.*, eds., *Coffee, Society, and Power in Latin America* (Baltimore MD, JHUP, 1995), 38-64.
14. Vernon Lee Fluharty, *Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia* (Pittsburgh: UPP, 1957); Paul Drake, *The Money Doctor in the Andes: The Kemmerer Missions, 1923-33* (Durham, NC: DUP, 1989); Charles Bergquist, "The Labor Movement in Colombia (1930-1946)", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia* 57.
15. Mary Roldán, *Blood and Fire*, 31.
16. Brooke Larson, *Trials of Nation-Making: Liberalism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910* (Cambridge: CUP, 2004), 252.
17. Joanne Rappaport, *The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes*, 2.a ed. (Durham, NC: DUP, 1998), 114.
18. Gary Long, "The Dragon Finally Came: Industrial Capitalism, Radical Artisans and the Liberal Party in Colombia, 1910-1948", Ph. D. Thesis, University of Pittsburgh, 1995.
19. Eduardo Posada Carbó, "Fiction as History: The *bananeras* and Gabriel García Márquez's *One Hundred Years of Solitude*", *Journal of Latin American Studies*, 30:2 (1998), 395-414. Marco Palacios observa la falta de consenso sobre el número exacto de masacrados: el cónsul norteamericano calculó la cifra en mil, el líder del ataque, Alberto Castrillón, mil quinientos y el general a cargo de la masacre 47; ver Marco Palacio, *Entre la legitimidad y la violencia*, 120. David Bushnell, citando a Roberto Herrera Soto y Rafael Romero Castañeda, considera como "definitiva" la cifra de entre 60-75. *The Making of Modern Colombia*, 180.
20. Ver W. John Green, *Gaitanismo, Left Liberalism and Popular Mobilization in Colombia* (Gainesville, FL: UFLP, 2003).
21. Herbert Braun, *The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia* (Madison, WI: UWP, 1986), 8-9, 45-46, 54-55. Braun sostiene que el *gaitanismo* tuvo poco impacto sobre los trabajadores organizados, pero Green muestra lo contrario.
22. Gonzalo Sánchez, *Los bolcheviques del Líbano* (Bogotá: Mohan, 1976).

capítulo

3

La Pausa Liberal,

1930-1946

Colombia fue, y sigue siendo, prueba de que la reforma gradual en el marco de la democracia liberal no es la única, ni siquiera la más plausible alternativa de revoluciones sociales, incluyendo aquellas que fracasaron o que fueron abortadas. Descubrí un país en el que la imposibilidad de hacer una revolución social ha hecho que la violencia sea la esencia constante, universal y omnipresente de la vida pública.

Eric Hobsbawm, *Interesting Times: A Twentieth-Century Life* (2002) A pesar de que sus efectos fueron duraderos, el largo periodo de dominación conservadora se apoyó en bases inestables y sufrió de una contradicción básica: dio pie a expectativas de propiedad sobre una parcela que no podían ser satisfechas. La *Pausa Liberal*, entre 1930 y 1946, fue anunciada por olas de movilización masiva. Nuevas fuerzas se integraron perfectamente con la

izquierda del Partido Liberal —agrupada alrededor del liderazgo carismático de Jorge Eliécer Gaitán— para constituir el primer movimiento popular radical de alcance nacional. De hecho, el nacionalismo de Gaitán representaba una alianza de clases, era multiétnico y antioligárquico y por su carácter incluyente permitía a la clase trabajadora colombiana superar sus debilidades con respecto a las firmas y empresarios capitalistas.¹ En 1945, la urbanización acelerada, la clase media y trabajadora politizadas y la presión campesina a favor de las reformas agrarias conllevaron una disminución del peso político de los propietarios en todo el continente. Sin embargo, en Colombia, los propietarios vencieron a los arrendatarios y aparceros, al igual que los industrialistas superaron a los sindicatos.

Mientras que en otras partes de la región las movilizaciones masivas crearon nuevos partidos, forzaron la reforma agraria y la legislación laboral y derrocaron gobiernos, en Colombia ni el populismo urbano ni la social democracia agraria perduraron como fuerza nacional.²

POPULISMO INCIPIENTE

En la primera mitad de los años treinta, trabajadores organizados, movimientos campesinos radicales, el Partido Comunista Colombiano y Gaitán experimentaron con organizaciones y movilizaciones fuera del Partido Liberal para luego reincorporarse al mismo a partir de 1935. En conjunción con esta nueva ola de movilización popular radical, la cual tenía para ese momento un horizonte y un enfoque nacional, la tibia reforma agraria liberal y la legislación laboral encontraron una fuerte oposición por parte del Partido Conservador. Los conservadores,

bendecidos por la Iglesia católica, redoblaron sus esfuerzos para gobernar sin contrincantes en áreas rurales y para buscar un equilibrio por el territorio que los liberales habían ganado en las ciudades. De este modo, a pesar de que la social democracia triunfó en toda América Latina a finales de la Segunda Guerra Mundial, la contrarrevolución católica se irguió en Colombia al paso del terror político institucionalizado.

Una vez que la base económica del mandato conservador se quebró temporalmente y su cohesión política se vio deshecha, a los liberales se les abrió una puerta para recuperar la Presidencia luego de cincuenta años a la deriva. Su candidato, Olaya Herrera, había sido embajador en Washington en el gobierno de los conservadores, con quienes mantenía buenas relaciones, y aunque triunfó su voto fue menor a aquel de los rivales conservadores combinados. Gaitán se separó del Partido Liberal en 1933 para fundar la Unión Nacional de la Izquierda Revolucionaria (Unir) aprobando la fundación de ligas campesinas para competir con aquellos apoyados por el Partido Liberal y, crucialmente, contra los del Partido Comunista Colombiano (PCC).³

El PCC fue fundado en 1930 por líderes del PSR, dos de los cuáles, José Gonzalo Sánchez y Dimas Luna, habían liderado el movimiento de la *Quintinada* indígena a principios de los años veinte. Hubo cierta continuidad con las movilizaciones de Cauca y Tolima, e inicialmente el PCC dio prioridad a las luchas campesinas en las fronteras cafeteras, específicamente en Tolima y Cundinamarca, donde las mayores plantaciones pertenecían a banqueros-comerciantes de Bogotá, Alemania y Estados Unidos. El PCC estableció ligas para capitalizar durante la ola de ocupaciones de tierras luego de 1928 y, a principios de los años treinta, ganó legitimidad política a través de su

“agrarismo revolucionario” basado en la “formación y protección de comunidades minifundistas autónomas”.⁴ Gaitán acusó al PCC de haber evadido etapas de desarrollo histórico: mientras las ligas campesinas comunistas aspiraban a acomodarse en la revolución socialista, la Unir fue designada para remover los bloques feudales en el desarrollo de la agricultura capitalista. El campo era un terreno político altamente conflictivo y competitivo a principios de los años treinta —Tercer Período de la Internacional Comunista, considerado el más sectario— y el PCC consideraba a la Unir como su principal contrincante político, sobre todo en el Tolima y Cundinamarca.⁵

Cuando los liberales ganaron de nuevo sin oposición alguna, los conservadores sabotearon las elecciones. El máximo líder liberal era Alfonso López Pumarejo, descendiente de una familia de banqueros y terratenientes, antiguo empleado de la banca estadounidense de inversión Baker-Kellogg. Por haberse criado en Inglaterra y en los Estados Unidos, sus admiradores consideraban a López Pumarejo como el Roosevelt de los Andes. La “Revolución en Marcha” que él proclamaba, aún limitada, era más radical en su retórica que en sus reformas, lo cual fortaleció las esperanzas de redistribución populista y de arbitraje del Estado en los conflictos de clase.⁶ Los impuestos subieron, el gasto público se dirigió a escuelas y a la red vial y la legislación laboral fue liberada, lo que abrió las puertas a un mayor crecimiento de la sindicalización, proceso que había comenzado bajo el mandato de Olaya. Lo que es aun más importante es que las expectativas populares sobre los resultados de la participación política se dispararon.

Se hicieron grandes esfuerzos, principalmente, en la revisión de la Constitución de 1886, con el fin de asegurar la separación de la Iglesia y el Estado, lo que junto a otras

medidas fue suficiente para traer a Gaitán de vuelta al bando liberal en 1935. Alineado con las políticas del Frente Popular, estas políticas impulsaron al PCC a influenciar el régimen de López, desmovilizando sus ligas campesinas y renunciando a sus ambiciones revolucionarias vanguardistas.⁷ Con el apoyo del PCC —partido que dominaba los sindicatos claves en el sector de transporte y en los enclaves de exportación— López creó la Confederación de Trabajadores de Colombia (ctc), con el objetivo de convertir el trabajo organizado en un bloque clientelista bajo la tutela del Partido Liberal.

DOS PASOS ATRÁS

A pesar de que la *República Liberal* duró hasta 1946, su promesa se derrumbó durante el segundo periodo de López, entre 1942 y 1945. López, involucrado en escándalos de corrupción, rechazó reformas tales como la de la jornada laboral de ocho horas o la de seguridad social, las cuales eran de gran importancia para los sindicatos. Asimismo, López se negó a la aplicación de la Ley 200 y en 1944 la cambió por la Ley 100, también conocida como “la Revancha”.⁸ La Ley 100 ponía de manifiesto la incapacidad del Partido Liberal para resolver “la cuestión agraria” entre campesinos y propietarios, además de que subrayó la influencia de estos últimos dentro de la clase dominante. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Patriótica Económica Nacional (Apen) promovieron la Ley 100, con lo que cerraron las puertas a los aparceros y sus sueños de convertirse en minifundistas independientes. Dicha ley protegía la propiedad y los contratos laborales, prohibía el

cultivo de cosechas que pudieran competir en el mercado y legalizaba la expulsión de aparceros y arrendatarios. Los grupos hacendados con mayor antigüedad tenían la posibilidad de crear alianzas con la nueva élite de exportación de café a fin de preservar sus privilegios. La Ley 100 también abría las puertas para la guerra de clases entre los terratenientes dominantes y los arrendatarios y aparceros movilizados en Cauca, Tolima y Cundinamarca, donde la lucha campesina había sido fuerte en los años treinta.

Una interpretación importante de este periodo sugiere que el movimiento laboral anticapitalista, en alianza con los movimientos campesinos e indígenas de los años veinte, fue cooptado e institucionalizado en los treinta, incluso cuando las luchas campesinas se intensificaron, lo que llevó a la aprobación de la Ley 200 en 1936. La Ley 200 fue una de las reformas más importantes del siglo xx en Colombia. Dicha ley establecía la ocupación efectiva de la tierra como base legal de tenencia (“la tierra es para quien la trabaja”), sin embargo, se ha planteado que dicha victoria parcial de los trabajadores del café —era parcial porque los propietarios se beneficiaban mucho más— conllevó el aislamiento de sindicatos militantes en otros sectores, tales como el petrolero y de transporte, por haber asegurado el acceso legal a tierras fronterizas en los años treinta. Por más que el sector de transporte creció y se fortaleció no pudo afectar el área central de la economía con eje en el cultivo del café. De ahí la fragmentación subsiguiente del movimiento laboral como un todo y, en consecuencia, el fortalecimiento de los dos partidos tradicionales. Mucho antes de La Violencia, las políticas de clase independientes habían sido eclipsadas, mientras los minifundistas mayormente mestizos en el Eje Cafetero ganaban parcelas familiares a la vez que eran integrados a uno de los dos

partidos. A la par, Gaitán y los trabajadores sindicalizados eran encajados en el bando del Partido Liberal. Durante La Violencia, la competencia entre los campesinos para evitar la “proletarización”, mediada por las prácticas clientelistas y por la asociación de cultivadores de café, tomó un giro fanáticamente sangriento, mientras que el movimiento sindical se vio replegado.

Mientras que en otras partes de Latinoamérica el campesinado movilizado jugaría un papel clave en las coaliciones radicales, en Colombia la solidaridad entre los trabajadores desapareció luego de que los cultivadores de café conquistaron sus terrenos familiares en los años treinta y cuarenta.⁹ A pesar de que este hecho explica el desarrollo clave del campo cafetero, también ignora el desafío radical que el *gaitanismo* representaba como el primer movimiento nacional-popular en la historia de Colombia, capaz de unir a lo largo del país a los grupos subalternos que habían sido fragmentados por divisiones raciales-étnicas, regionales y de clase. También minimiza la importancia del mensaje del gaitanismo alrededor de la lucha de clases tanto por parte de los proletarios rurales, arrendatarios y aparceros excluidos del derecho a la propiedad, como por parte de la mayoría de trabajadores urbanos por fuera de los sindicatos.¹⁰

A principio de los años cuarenta, luego de la recuperación de las exportaciones cafeteras de 1936 y después de casi una década con un crecimiento anual de manufacturas del 10 %, emergió un consenso entre los grupos dominantes por el cual se determinó que era tiempo de regresar a la ortodoxia económica liberal que había prevalecido en el mundo capitalista hasta los años treinta. Las reformas sociales y las políticas prolaborales no tenían cabida. En 1944 la élite conservadora manufacturera urbana creó la Asociación Nacional de Industriales de

Colombia (Andi) y, en 1945, los comerciantes de café crearon Fedecafé. A pesar de que tuvieron diferencias en la década siguiente, estos gremios, unidos por endogamia, dictaron las políticas económicas de los gobiernos sucesivos a espaldas de la opinión pública.¹¹ La Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) fue establecida por la Iglesia católica en Medellín en 1946 y se convertiría en el modelo por excelencia para las federaciones de trabajadores sindicalizados.

El liberal Alberto Lleras Camargo, intelectual marxista en su juventud y posteriormente embajador de Colombia en Washington, tomó el poder luego de que López Pumarejo renunciara antes de culminar su periodo. Lleras Camargo acrecentó la represión en contra de los sindicatos y en 1945 aplastó la huelga comunista de trabajadores del río Magdalena. Su sindicato, Fedenal, había sido el más exitoso de la CTC y era el único en haber logrado que todo el personal de la empresa estuviera bajo dominio del sindicato. Al conectar las montañas andinas con la costa Atlántica, los trabajadores de Fedenal (navegantes, carpinteros de barcos, estibadores y mecánicos) llevaban el café colombiano a los mercados mundiales. Su posición estructural en la economía les dio la oportunidad de paralizarla. Su derrota en 1945, por tanto, representó el mayor retroceso de la clase trabajadora como un todo.

HACIA LA VIOLENCIA

Gaitán estaba limitado por sus propias contradicciones: no era capaz de abandonar el Partido Liberal, pero tampoco podía cumplir con las exigencias de su base dentro del sistema oligárquico bipartidista. Sin embargo, solo Gaitán —el abogado defensor de los trabajadores, quien había

ejercido puestos de senador, concejal, alcalde de Bogotá, ministro de Educación y del Trabajo— luchó contra dichos procesos a través de canales oficiales, lo que le ayudó a ganar seguidores entre el electorado liberal. A pesar de que el liderazgo del PCC se resistía a él, Gaitán gozaba del apoyo del Partido Comunista y los sindicatos petroleros, de transporte y de telecomunicaciones, los cuales lo apoyaban entusiastamente.¹² Cuando el sistema liberal lo sacó del panorama como el candidato del partido para la presidencia en 1946, Gaitán se postuló por su propia cuenta. A pesar de que Gaitán ganó en muchas ciudades — Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Santa Marta— el resultado fue dividir el voto liberal y permitir que ganara el candidato conservador, Mariano Ospina Pérez, tal como lo habían planeado los conservadores.

Se dice que el periodo conocido simplemente como *La Violencia* —el momento definitivo del corto siglo XX para Colombia— comenzó con la muerte de Gaitán en 1948. Pero eso implicaría restarle tres años, si no dos décadas. Para entender sus raíces es necesario retroceder hasta los orígenes de la República Liberal.¹³ Cuando el dominio conservador se terminó en 1930, las tensiones que venían aumentando dentro del país comenzaron a explotar. Los recuerdos de la masacre partidista de la Guerra de los Mil Días —cuando los líderes liberales y conservadores movilizaron sus milicias campesinas para que se mataran en una batalla que le costó la vida a uno de cada veinticinco colombianos— aún estaban vivos en muchas localidades. Apenas Olaya Herrera asumió el poder, los liberales tomaron su venganza en Santander y en Bogotá.¹⁴ El miedo de los conservadores no era del todo irracional. Una vez que los liberales se habían afianzado en el poder, echaron mano de la intimidación, la violencia policial y el

fraude. En retaliación, los conservadores boicotearon cada elección presidencial hasta 1946. A principios de los años cuarenta, los liberales convirtieron la Policía en un apéndice de su partido, acción que tendría graves consecuencias durante la violencia, cuando la Policía se volvió “conservadora”. A lo largo de la *Pausa Liberal* se dio un escenario amenazador de asesinatos selectivos en los municipios, mientras que la polarización política y la violencia terrateniente, aun cuando estaba considerablemente localizada, continuaba propagándose.

Si en Boyacá y en los Santanderes la lógica del “pleito defensivo” entre las comunidades locales contrincantes, cada una con recuerdos y miedos de penosas heridas, se implantó desde el principio, dos desarrollos nacionales excedieron esta dinámica subyacente.¹⁵ El primero fue el cambio en el balance electoral entre los dos partidos una vez que cierto grado de urbanización había tenido lugar, que en Colombia era aún bastante moderado. La fuerza de la lealtad conservadora había dependido de la influencia del clero, el cual era mucho más fuerte en los municipios y en el campo que en las ciudades. Una vez que la proporción de los habitantes urbanos sobrepasó cierto umbral en 1940, los liberales comenzaron a controlar una mayoría permanente en las votaciones, lo cual fue evidente en las elecciones presidenciales de 1946, las cuales perdieron. No obstante, los dos candidatos liberales totalizaron más del 60 % de los votos, nivel que se convirtió en la norma desde entonces.

Por parte de los conservadores la pérdida de poder había incrementado la influencia del ala más extremista del partido. Bajo el carismático liderazgo de Laureano Gómez, el partido se inclinaba a expandir su dominio en el interior del país para recuperar las pérdidas en las ciudades. Apodado el *Hitler Criollo* por sus adversarios, Gómez había

sido visto en ese momento y a partir de allí, como un demagogo fascista puesto que llevaba a su partido a extremos fanáticos y sumergía al país en la guerra civil. En el mundo incestuoso de la élite política colombiana, Gómez fue buen amigo tanto de López Pumarejo como de su sucesor, Eduardo Santos, así como se benefició de antiguos vínculos financieros. Contaba con el apoyo clave y sólido de los gremios, como Fedecafé y la Andi. A mediados de los años treinta, Gómez había hecho denuncias devastadoras de Mussolini y Hitler, pero él mismo era un integrista católico.

En los años treinta y cuarenta Latinoamérica estaba llena de movimientos y líderes, no todos reaccionarios, que estaban fascinados con el éxito del fascismo alemán e italiano: Toro y Busch en Bolivia, Vargas en Brasil y Perón en Argentina. Lo distinto en Colombia era que el mismo tipo de atracción llevó a Gómez y a su partido hacia Franco, como una versión tradicionalista y religiosa de contrarrevolución, libre de cualquier connotación populista de los regímenes italianos o alemanes. El resultado fue una intensificación retórica —a niveles de la Guerra Civil Española— de las enemistades históricas con el liberalismo, en ese momento presentado como indistinguible del comunismo. Los insultos verbales racistas y caricaturas de Gaitán y de sus seguidores fueron implacables. Gaitán era conocido entre las élites políticas bogotanas como *el Negro* Gaitán, un epíteto que basado en sus rasgos fenotípicos de mestizo pobre y debido a sus seguidores afrocolombianos y caribeños buscaba ridiculizarlo y descalificarlo. Los negros eran “perezosos”, “indisciplinados” e “inmorales”. Los hispanófilos y la *reconquista católica* los pondrían en su sitio, a ellos y a sus líderes en los sindicatos de trabajadores de los ríos, ferrovías y vías.¹⁶

Como lo hizo Núñez setenta años atrás, Gómez pretendía hacer regresar a la sociedad colombiana a una idealizada totalidad colonial interna en la que los subalternos conocieran su lugar. Pero Gómez vivió en la época de guerra total y ayudó a promover el terror político a niveles antes impensables. A mediados de los años cuarenta se presentó un breve momento de apertura democrática en casi toda Latinoamérica, cuando los populistas arrasaron con elecciones y tomaron el poder. Solo en Colombia ocurrió un agresivo asalto contrarrevolucionario católico contra los trabajadores organizados y los movimientos campesinos radicales.

1. W. John Green, "Sibling Rivalry on the Left and Labor Struggles in Colombia during the 1940s", *Latin American Research Review*, 35:1 (2000), 93, 115.
2. Para la extraordinaria apertura democrática que ocurrió en América Latina entre 1944 y 1946, antes de que se estableciera la Guerra Fría luego de 1948, ver Leslie Bethell y Ian Roxborough, eds., *Latin America between the Second World War and the Cold War, 1944-1948* (Cambridge: CUP 1992); Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 176.
3. Gonzalo Sánchez, "Las Ligas Campesinas en Colombia", en *Ensayos de historia social*, 152-68.
4. Marc Chernick y Michael Jiménez, "Popular Liberalism, Radical Democracy, and Marxism: Leftist Politics in Contemporary Colombia, 1974-1991", en Barry Carr y Steven Ellner, eds., *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika* (Boulder, CO: Westview Press 1993), 66.
5. En el Tercer Período de la Internacional Comunista (1928-1935) los partidos comunistas fueron instruidos por Stalin y por la burocracia soviética para competir con otras organizaciones de la izquierda y para evitar coaliciones entre clases. Ver C.L.R. James, *The Rise and Fall of World Revolution: The Third International, 1919-1936* (Londres: Furnell and Sons, 1937). Para la fundación de la Internacional Comunista, ver Edward Hallett Carr, *The Bolshevik Revolution, 1917-1923*, vol. 3 (Nueva York: Macmillan, 1953).
6. Para un punto de vista escéptico, ver Richard Stoller, "Alfonso López Pumarejo y el Radicalismo Liberal en la Colombia de los años 30", *Journal of Latin American Studies*, 27 (1995), 367-97.
7. En contraste con el Tercer Período de la Internacional Comunista, durante el Frente Popular (1935-1939) Stalin y la burocracia soviética ordenaron a

los partidos comunistas aliarse con los reformistas burgueses y competidores de la izquierda en nombre de la unidad contra el fascismo.

8. Nazih Richani, *Systems of Violence*, 20-23.
9. Charles Bergquist, "The Labor Movement (1930-1946) and the Origins of the Violence" 52, 62, 69-70. Christopher Abel y Marco Palacios ofrecen una interpretación similar en "Colombia: 1930-1958", en Leslie Bethell, ed., *The Cambridge History of Latin America* (Cambridge: CUP, 1991), vol. 8, 592.
10. Michael Jiménez, "The Many Deaths of the Colombian Revolution", *Columbia Papers on Latin America*, 13, 1990; W. John Green, "Sibling Rivalry on the Left", 99-112.
11. Ver Medófilo Medina, "Violence and Economic Development: 1945-1950 and 1985-1988", en Charles Bergquist *et al*, *Violence in Colombia: Historical Perspective* 157-58; Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, 58-59; y Eduardo Sáenz Rovner, *La ofensiva empresarial: industriales, políticos, y violencia en los años 40 en Colombia* (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1992).
12. W. John Green, "Sibling Rivalry on the Left", 103.
13. Daniel Pécaut, *Orden y Violencia*, vol. I, 286-302, argumenta de manera contundente este punto.
14. Para un recuento de estos eventos y de su trasfondo, ver James Henderson, *Modernization in Colombia: The Laureano Gómez Years, 1889-1965* (Gainesville, fl: uflp, 2001), 183-89.
15. La noción del pleito defensivo se desarrolla en James Payne, *Patterns of Conflict in Colombia*, 161-67.
16. W. John Green, "Vibrations of the Collective": The Popular Ideology of *Gaitanismo* on Colombia's Atlantic Coast, 1944-1948", *Hispanic American Historical Review* 76:2 (1996), 283-311.

capítulo

4

La Violencia,

1946-1957

La violencia es desencadenada, se ordena, se estimula, fuera de todo riesgo, por control remoto. La violencia más típica de nuestras luchas políticas es la que atrozmente produce víctimas humildes en las aldeas y los campos, en las barriadas de las ciudades... Pero el combustible ha sido expedido desde escritorios urbanos, trabajado con frialdad, elaborado con astucia para que produzca sus frutos de sangre.

Alberto Lleras Camargo, 1946

La Violencia (1946-1957) fue una mezcla de terror oficial, sectarismo partidista y políticas de tierra arrasada que

resultaron de la confluencia de la crisis de la *república cafetera*, la debilidad del Estado central y la competencia por los derechos de propiedad, sobre todo en el Eje Cafetero. Este periodo se distinguió por el “terror concentrado” que se usó para suprimir las políticas populares radicales y canalizar los crecientes conflictos raciales-étnicos y de clase entre los cauces del bipartidismo.¹ la violencia política, que siempre ha sido un elemento básico en las regiones y municipalidades, se desató por primera vez a nivel nacional contra las insurrecciones gaitanistas que estallaron en la capital, ciudades y pueblos provinciales en todo el país luego de que Gaitán fuera asesinado en 1948. Las juntas gaitanistas encarnaban para la autoridad del gobierno central y aun más para el gobierno regional —así como también para las jerarquías raciales y los derechos de propiedad— una amenaza fundamental, la cual nos deja ver la magnitud del revés sufrido por las fuerzas nacional-populares incipientes.

La Violencia comenzó en las zonas cafeteras de Santander y Boyacá, y se enfocó en el Eje Cafetero, norte del Valle del Cauca, Viejo Caldas y Tolima.² Las masacres, ahora entre los colonos mestizos, ocurrieron como durante la Guerra de los Mil Días, pero el derramamiento de sangre fue más duradero. Aproximadamente 300 000 personas, de las cuales el 80 % eran varones campesinos, analfabetas, fueron asesinadas; para 1964, cuando la guerra terminó oficialmente, 2 000 000 habían sido desplazadas.³ Estos fenómenos no pueden entenderse sin reconocer la incorporación dependiente de la mayoría de cultivadores de café al aparato clientelista de cada partido en las áreas minifundistas de Boyacá, Santander, Antioquia y a lo largo del Eje Cafetero.⁴

Mientras esto sucedía en el país, la participación de Colombia en la Guerra Fría comenzó a nivel internacional cuando el presidente Laureano Gómez envió el Batallón Colombia a pelear junto a la 31ª Infantería de los Estados Unidos en 1951. En 1952 el presidente despachó al primer grupo de colombianos entrenados en la Army Ranger School en Fort Benning, GA. Tres años más tarde, bajo el mando del general Rojas Pinilla, el gobierno de los Estados Unidos patrocinó la guerra química contra las “repúblicas independientes” comunistas del sur del país, las cuales fueron bombardeadas con napalm fabricado en Colombia con asesoría norteamericana. Los veteranos colombianos de la Guerra de Corea dirigieron la campaña en coordinación con asesores estadounidenses en lo que constituye el primero de muchos fracasos contrainsurgentes.

EL BOGOTAZO COMO REVOLUCIÓN FALLIDA

En abril de 1948, entre el creciente conflicto sectario y la polarización partidista, el presidente Mariano Ospina Pérez fue el anfitrión del IX Congreso Panamericano en Bogotá. El secretario de Estado de los Estados Unidos, George C. Marshall, junto a varios presidentes y diplomáticos de América Latina, asistieron a dicho congreso para aclarar el papel de los Estados Unidos en el periodo de posguerra. A pesar de que el supuesto propósito de la visita del secretario Marshall era fortalecer las alianzas y establecer la Organización de Estados Americanos, que iba a ser dirigida primero por el expresidente Alberto Lleras Camargo, la prioridad era mantener su poderío e influencia frente a una posible “amenaza” soviética. Los dirigentes colombianos estaban ansiosos por ser reconocidos como

actores regionales importantes en la escena mundial dominada por EE. UU. y como militantes anticomunistas que seguían fielmente los antecedentes establecidos por actitudes criollas de vieja data con respecto a las movilizaciones populares. Este fue el agitado panorama en el que Gaitán fue asesinado.

Mientras asistía a una conferencia de líderes estudiantiles antiimperialistas, Fidel Castro conoció a Gaitán en Bogotá y ambos planificaron reunirse nuevamente en la tarde del día siguiente, 9 de abril, pero Gaitán no pudo cumplir la cita pues fue asesinado ese mismo día cuando se dirigía a almorzar. Las noticias de su asesinato desencadenaron los mayores disturbios de la historia de Colombia del siglo xx: el llamado Bogotazo, una revuelta sociopolítica que arrasó tanto con las provincias como con la capital. En la capital, luego de sorprender a los débiles guardias del Palacio Presidencial, grandes multitudes de los barrios periféricos se reunieron en el centro de la ciudad. Los saqueadores de alimentos, como respuesta al hambre y la especulación, atacaron los negocios de venta de comida y mercados, especialmente los que pertenecían a comerciantes libaneses considerados como “extranjeros”. Mientras los disturbios continuaban, los saqueadores se apropiaron de alimentos, ropas, mercancías, herramientas y ferretería; incendiaron iglesias y edificios gubernamentales, al igual que el periódico de Gómez, *El Siglo*. Profesionales y estudiantes radicalizados gaitanistas de la Universidad Nacional dirigidos por Gerardo Molina tomaron las ondas radiales e hicieron llamados para establecer juntas revolucionarias en todo el país —una referencia a los cuerpos políticos formados durante las guerras de independencia del colonialismo español—. Como Rector de la Universidad Nacional, Molina

era uno de los intelectuales de izquierda con mayor peso y influencia.

Esta revuelta urbana alentó a las provincias. Luego del 9 de abril, la resistencia popular radical, sus organizaciones y rebeliones en áreas de asentamiento reciente, sembraron las bases de la crisis de la República. Así fue el caso en el Magdalena Medio, en los valles del Sinú y el San Jorge, en la frontera de Antioquia y Córdoba, al igual que al noreste de Antioquia, Cali, norte del Valle, Cundinamarca y Tolima. Sindicalistas y artesanos establecieron juntas revolucionarias en Bogotá, Cali, Remedios, Zaragoza, Puerto Berrío, Barrancabermeja y en docenas de municipios más.⁵ A pesar de que los objetivos eran modestos, la movilización popular luego de la muerte de Gaitán era tan intensa y generalizada que logró “transformar” el “contenido reformista” de las demandas — es decir que tenía, en el contexto colombiano, implicaciones revolucionarias—. Brevemente, el mundo se puso al revés en términos de poder y autoridad. Los perseguidos se convirtieron en poderosos, los prisioneros ejecutaban a los guardias, la Policía se puso del lado del pueblo gaitanista, los campesinos robaban ganado y se apoderaban de tierras, y los trabajadores del petróleo tomaron la refinería de Barrancabermeja. Los insurgentes hablaron de un nuevo orden revolucionario respaldado por milicias populares.⁶

Sin embargo, las juntas, por falta de apoyo de la capital y de cohesión entre ellas, fueron derrotadas rápidamente. A pesar de que el Bogotazo fue una expresión de ira popular no llevó a la toma del poder, excepto en las provincias y por muy poco tiempo. El populismo que Gaitán había esbozado desde la izquierda del liberalismo era una creciente amenaza para la oligarquía del país, la cual fue catalogada como tal por el mismo Gaitán. Desde un punto

de vista comparativo, sin embargo, dicho populismo era relativamente débil. En al menos cuatro centros regionales —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cuya población para 1940 no excedía el medio millón de habitantes en ninguno de los casos—, la dispersión de la población previno el florecimiento de un populismo colombiano entre una masa crítica de la clase trabajadora urbana. El mismo Gaitán notó en 1943 que solo el 5 % de la fuerza trabajadora del país estaba sindicalizada y a pesar de que las juntas gaitanistas tomaron el poder en el país después de la muerte de su líder, estas no fueron capaces de mantenerlo. El secretario Marshall vio a la Unión Soviética y a su herramienta, el “comunismo internacional”, como la mano invisible que dirigió el Bogotazo. Fidel Castro regresó a Cuba el 10 de abril pero presentó una interpretación diferente: “Nadie puede adjudicarse la organización de lo ocurrido el 9 de abril porque lo que menos estaba presente el 9 de abril era precisamente eso, la organización. Esa es la clave. No había organización en absoluto”.⁷ Sin preparación, liderazgo o un programa de autogobierno, las insurrecciones gaitanistas no lograron dirigir la revolución.⁸ Sin embargo, a la luz de nuevos estudios, la perspectiva clásica sobre *La Violencia* como una reacción en contra del empuje radical del gaitanismo sigue siendo persuasiva.⁹

LA RESISTENCIA Y LA RECONQUISTA

El conflicto entre partidos, en cambio, se expandió por todo el Eje Cafetero siguiendo el precedente que se inició en 1945 en Boyacá y los Santanderes. Los líderes liberales en los distritos cafeteros de Quindío y Tolima, por temor a una venganza conservadora debido al levantamiento, la cual se

materializó en una ola de asesinatos locales, convirtieron a los clientes campesinos en milicias guerrilleras con la esperanza de obtener un resultado diferente a aquel de la Guerra de los Mil Días. A diferencia de los conflictos militares del siglo XIX, dirigidos por líderes oligárquicos, durante La Violencia, los comandantes liberales eran campesinos con *noms de guerre* como *Sangrenegra* y *Capitán Desquite*.

La meta de dichas guerrillas liberales-comunistas era derrocar el gobierno conservador, mas no establecer una nueva sociedad. No obstante, esta resistencia sirvió de catalizador para la contrarrevolución en el interior del país. El “orden” se restauró en la capital cuando las tropas y voluntarios vinieron de la cercana Boyacá conservadora para reforzar el Ejército, el cual se mantuvo leal a los conservadores. Los voluntarios, conocidos como *chulavitas*, sirvieron en principio en el corregimiento Chulavita, en Boyacá, donde la violencia liberal se había esparcido en los años treinta. Los conservadores usaron a los *chulavitas* en Boyacá y en la capital durante y después del Bogotazo y posteriormente en el Eje Cafetero: Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas (Caldas, Risaralda, Quindío). Los *chulavitas* eran devotos de la Virgen del Carmen y la guerra que libraban era para ellos una “guerra santa” para liberar al país de ateos, masones y comunistas, en una palabra, de liberales¹⁰.

Apoyadas por el clero, en Antioquia las legiones católicas de Gómez se movilizaron a las municipalidades “conservatizadas” antes de las siguientes elecciones. Aunque en Nariño hicieron lo mismo, allí fueron reclutadas para ayudar a “conservatizar” la parte norte del Valle. Allí, donde la avanzada conservadora era total las comunidades liberales desertaron masivamente en un acto de autopreservación, una vez que la “policía civil

conservadora” reemplazó a la policía liberal entre 1947-1948, para luego organizarse en una fuerza profesional de asesinos políticos entre 1949-1950.

Cuando la guerra estalló luego de la muerte de Gaitán, el PSD, ya vetado por Ospina, se enfocó en el trabajo clandestino en el interior del país abogando por la autodefensa armada.¹¹ En 1949 los primeros grupos se formaron a lo largo de la línea del ferrocarril en Santander, en los enclaves petroleros de Shell, Socony y Tropical Oil en Norte de Santander y Ariari y, lo que es más importante dados los eventos subsiguientes, en Tolima y Cundinamarca en donde las ligas campesinas del PCC y de la Unir se habían consolidado en los años treinta. A finales de 1949, los jefes liberales, respaldados por el gobernador departamental y por liderazgos de comerciantes y propietarios, se acercaron al partido en busca de ayuda para establecer guerrillas. En 1950, con el sectarismo oficial operando de manera febril, los gaitanistas organizaron un frente guerrillero con combatientes del PSD en el sur de Tolima. La fuerza estaba dirigida por el clan Loayza, uno de cuyos miembros, Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda o *Tirolifijo*, lideró las Farc hasta su muerte en marzo de 2008.¹²

La respuesta al 9 de abril y a las juntas revolucionarias fue la represión sin cuartel. Los conservadores, por ejemplo, le cortaron la lengua y le sacaron los ojos a al menos cuarenta liberales y destriparon a otros en San Rafael, Valle del Cauca. Los pueblos gaitanistas de esta región, los cuales para 1948 se habían multiplicado, fueron sujetos a “trabajitos”: asesinatos selectivos llevados a cabo por *los pájaros*, asesinos que eran contratados por los conservadores y que circulaban en carros negros sin placas de identificación y “retornaban” a la vida cotidiana en los pueblos como carniceros, conductores, meseros, sastres,

lavaderos o inspectores de Policía, todos ellos católicos fanáticos. Su líder, León María Lozano, El *Cóndor*, comenzó su participación en la violencia contra los gaitanistas en Cali defendiendo una capilla donde él había erigido un altar a la Virgen María Auxiliadora. Muy pronto, Lozano dirigiría la pandilla más grande y mejor protegida de pistoleros conservadores católicos del norte del Valle, la cual engrosó con profesionales traídos de Boyacá, Antioquia, Santander, Tolima y Quindío y reclutando a otros en veredas y municipios cercanos a Tuluá.

El coronel Gustavo Rojas Pinilla, encargado de la Tercera Brigada en el Valle, apareció con El *Cóndor* en una fotografía. Rojas Pinilla y el gobernador conservador planificaron la supresión de la revuelta gaitanista que se había apoderado del Palacio de San Francisco, en Cali, acción que constituyó un paso importante en el ascenso político de Rojas, el cual aseguró a través de la “pacificación” de juntas revolucionarias en todo el departamento. De allí en adelante, Lozano y *los pájaros*, junto con la policía secreta, aterrorizaron la región. Bajo el mando del gobernador laureanista Nicolás Borrero Olano, dueño de la publicación de derecha *Diario del Pacífico*, la declaración de “neutralidad” de Rojas Pinilla frente a la proliferación de *los pájaros* permitió la libre circulación de asesinos anónimos contratados para liquidar liberales. La “neutralidad” militar era esencial para el éxito de los “trabajitos” en los cuales la nueva policía conservadora participaba en pandillas de tres o cuatro junto a *los pájaros*. Los comerciantes de café y ganado, al igual que los terratenientes medianos, crecieron bajo su sombra.¹³

El *Cóndor* era el más legendario de los que trabajaban en el negocio del asesinato político, pero contaba con contrapartes tanto en el Viejo Caldas como en Tolima. Al igual que en el Viejo Caldas, el negocio de la violencia creó

vías de ascenso para sectores medios rurales en el norte del Valle y Tolima. Las redes de patrocinio y protección en las que se movían *los pájaros* estaban dirigidas por políticos que ocuparon importantes puestos legislativos, diplomáticos y ministeriales después de finalizada La Violencia.¹⁴

Mientras más “se acentúa el contenido partidista de las oposiciones tanto más se despoja a estas de su potencial político”, lo que llevó a la “desagregación, desorganización, desarticulación de lo social”.¹⁵ La oligarquía intentó en vano, bajo la sugerencia de López Pumarejo y la insistencia de Carlos Lleras Restrepo, recuperar el resquebrajado consenso bipartidista. En 1949 en Bogotá, los conservadores incendiaron el periódico liberal *El Tiempo*, al igual que las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo, lo que demostró la imposibilidad de detener el *momentum* de los extremistas conservadores.¹⁶ En zonas minifundistas cafeteras el objetivo no era alcanzar la victoria en el campo de batalla, sino expulsar al enemigo de la región. La conquista de territorio —la acumulación de tierras, ganado y café— era la meta, mientras que los asesinatos obedecían a un cálculo siniestro de dolor y crueldad. Las mujeres embarazadas eran destripadas y sus fetos destruidos para evitar que nacieran nuevos miembros del partido opositor.

En Tolima se usaron diferentes tipos de cortes para enviar el mensaje de terror. En el *corte de corbata*, por ejemplo, se halaba la lengua de la víctima a través de una abertura en la garganta; en el *corte de florista* se insertaban los miembros cortados en el cuello luego de la decapitación; en el *corte del mono* se colocaba la cabeza de la víctima en el pecho.¹⁷ Las mutilaciones de orejas, dedos, penes y senos eran tan comunes como las violaciones. Miles y miles de personas fueron destripadas y lanzadas a ríos como el Cauca, del que se dijo que se había vuelto rojo

de tanta sangre. Los incendios provocados eran otra herramienta común de terror. Millones de campesinos tenían que ver cómo sus casas y cosechas ardían o tomar la decisión de dejarlas atrás.

En Antioquia, donde el consenso giraba en torno a una tradición elitista bien cimentada, los niveles de violencia fueron menores que en las regiones cafeteras del Valle del Cauca, Viejo Caldas y Tolima. El radicalismo político, el colonialismo interno y la ubicación de los recursos naturales determinaron cuándo y dónde el terror que aumentaba sin límites fue permitido por el Estado. Durante la segunda fase de La Violencia (1950-1953) aquellos que vivían en periferias regionales y no aceptaron las normas culturales blancas predominantes en el centro de Antioquia sufrieron las consecuencias de la violencia armada y policial —o como en los casos del este del departamento y Urabá, la violencia de los terratenientes armados— a un grado que no se había visto durante la primera fase (1945-1949), la cual estuvo concentrada en las municipalidades cafeteras ubicadas al sur y al suroeste, como Fredonia. Allí el conflicto se mantenía entre los límites estrictamente bipartidistas designados para “conservatizar” las municipalidades liberales localizadas en las áreas conservadoras. Políticos, periodistas e intelectuales de clase media ayudaron a polarizar la política según líneas bipartidistas.

En la segunda fase Laureano Gómez, presidente electo en 1950, estaba decidido a prevenir la repetición del Bogotazo y de sus variantes provinciales. Una vez que los laureanistas tomaron el poder, la violencia en Antioquia se concentró en regiones que eran geográficamente periféricas pero económicamente estratégicas, en donde los afrocolombianos que se habían organizado en los años cuarenta como trabajadores ferroviarios, viales y mineros

gaitanistas apoyaban las políticas de oposición radical y de insurgencia armada.

Gómez renunció poco después de que su periodo comenzara debido a problemas de salud y Roberto Urdaneta Arbeláez tomó las riendas del Gobierno en octubre de 1951, al tiempo que la violencia alcanzaba mayor intensidad, aparecía bajo nuevas formas y afectaba otras regiones. Gómez fue el primer presidente cuyo programa nacional sancionaba los desarrollos más reaccionarios en las regiones. El campesinado sufrió lo peor de La Violencia. Por ejemplo, una vez que regresó de Corea, el Batallón Colombia masacró a 1500 campesinos en un área rural a las afueras de Líbano, Tolima, en 1952.

La cooptación clientelista de pequeños productores minifundistas a través de la guerra civil en el Eje Cafetero no pudo detener las iniciativas de clase independientes, pero sí cambió su enfoque a fronteras establecidas más recientemente. Los llanos Orientales, por ejemplo, entre 1952-1953 evolucionaron hacia una sociedad agraria revolucionaria incipiente. La Ley 1 fue emitida en septiembre de 1952 luego de la reunión de los delegados de las organizaciones guerrilleras nacionales en el municipio "rojo" de Viotá (Cundinamarca) en agosto del mismo año, germen de lo que luego se convirtió en la Primera Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional. Se organizó un rudimentario sistema de justicia con autoridades civiles y militares autodesignadas, estipulando reglas para el uso de la tierra al igual que derechos y obligaciones individuales concernientes a la labor comunitaria. Además, se dieron directrices para el establecimiento de granjas de producción diaria, asentamientos agrarios "revolucionarios" y se reguló el mercado del ganado, elemento vital de la economía en los llanos Orientales. Mientras que los esfuerzos por establecer

una coordinación nacional de guerrillas avanzaban, la Ley 2 de los llanos Orientales, escrita por José Alvear Restrepo, regulaba la vida en las vastas zonas liberadas y presentaba esbozos de revolución y gobierno popular.¹⁸

La ley establecía un gobierno de asambleas populares y consejos distritales encargados de la planificación de producción, consumo y distribución. Dicha ley presentaba reglas concernientes a las relaciones entre los combatientes y los civiles y prohibía expresamente la tortura y las políticas de “tierra arrasada” que caracterizaron a La Violencia, además de que exigía un comportamiento humanitario para con los conservadores. Los enclaves comunistas eran los únicos territorios donde la vida no se regía por el terror. La Ley 2 también hablaba del matrimonio civil, del divorcio, la equidad de las mujeres y los derechos indígenas. Las Leyes 1 y 2 de los Llanos representaban “el proyecto democrático más completo del movimiento armado” y la “utopía de la resistencia”.¹⁹

DICTADURA DE GUERRA FRÍA

Cuando Gómez intentó retomar su cargo en 1953 fue derrocado por el único golpe de Estado ocurrido en Colombia en tiempos modernos, en parte porque los conservadores estaban divididos entre extremistas y moderados. Estos últimos aborrecían el para-Estado *contrachusma* y sus variantes, así como también la persecución e incriminación generalizada de intachables ciudadanos liberales. El general Rojas Pinilla, quien para el momento era jefe del Ejército, tomó el poder con el apoyo de los opositores a Gómez dentro del Partido Conservador, con quienes tenía conexiones personales y familiares. Rojas Pinilla comenzó a moldear los sindicatos para convertirlos

en un bloque clientelista. Su discurso antioligarca y nacionalista le permitió que algunos académicos lo vieran como una figura similar al argentino Juan Domingo Perón. Pero Rojas Pinilla participó en derramamientos de sangre como comandante conservador —incluso la Embajada de los Estados Unidos se quejó de que él “veía a un comunista detrás de cada cafetal”—, y como presidente, amasó una fortuna en negocios de ganado y bienes raíces de dudosa legalidad.²⁰ También intervino personalmente en la liberación de el *Cóndor*, el líder de *los pájaros*, de la cárcel de Buga, Valle del Cauca.

Con una mayor represión descentralizada, la violencia rural estaba lejos de extinguirse bajo el mandato de Rojas Pinilla. La Violencia, que comenzó con Gómez, se había convertido en parte de las políticas del gobierno central. El terror, que antes era únicamente regional, se había convertido en nacional por lo que en vez de disminuir, aumentaba incluso después de que la “amenaza guerrillera” estuvo ausente. Las bases de la doctrina de seguridad nacional de la Guerra Fría se erigieron en Colombia primero que en cualquier otro país de América Latina, en tanto que dichas bases se engranaban con las tradiciones criollas de sectarismo partidista.

Bajo el mandato de Gómez, el sectarismo había hecho aflorar las diferencias en el propio sistema bipartidista. Sin embargo, y para gusto de los liberales, Rojas Pinilla hizo de la “reconciliación” entre los dos partidos su prioridad máxima. En ese sentido, su acto más significativo como presidente fue declarar la amnistía general para las guerrillas liberales. La primera desmovilización, apoyada por comerciantes, propietarios y jefes políticos, ocurrió en el centro de Tolima y fue muy publicitada con el fin de invitar a los jefes guerrilleros del norte y sur de Tolima a seguir el ejemplo, lo cual hicieron. Comandantes como

Rafael Rangel, y el capitán Franco Yepes, quienes operaban en el Magdalena Medio y en Antioquia, respectivamente, no se quedaron atrás. Luego de cinco años de lucha entregaron sus armas las guerrillas liberales más fuertes: los aproximadamente diez mil hombres liderados por Guadalupe Salcedo en los llanos Orientales.

En respuesta a la oferta de Rojas Pinilla, el movimiento de resistencia de la izquierda armada se fragmentó y la desmovilización de la guerrilla de los Llanos le cortó las alas al “Ícaro revolucionario”. En este contexto, bajo una intensa presión militar, algunas milicias comunistas se desmovilizaron. Al sur de Tolima, una zona caracterizada por el liderazgo descentralizado, una guerra liderada por antiguos aliados liberales ya reintegrados en el aparato partidario (los *Limpios*) logró expulsar a los comunistas (los *Comunes*) de gran parte de la región.

Aquellos que habían mostrado un “exagerado apoyo o adhesión” al régimen de Gómez, es decir, las fuerzas paraestatales como la *contrachusma*, *los pájaros*, *los chulavitas*, etc., obtuvieron la amnistía en junio de 1954. Sin embargo, para erradicar a uno de los reductos comunistas que quedaba, Rojas Pinilla desató la “Guerra de Villarrica” en 1955. El Batallón Colombia, conformado por veteranos de Corea, tenía como objetivo tomar un municipio del norte de Tolima que había sido la sede de sindicatos campesinos y del Frente Democrático Comunista de Liberación Nacional. Rojas Pinilla ordenó un bombardeo aéreo con F-47 y B-26 donados por los Estados Unidos. Además, se estableció un centro de tortura conocido como “Campo de Concentración de Cunday” y se desplegaron 5000 soldados por toda la región. Se esparció napalm, como en Corea, mientras que las fuerzas del gobierno ocupaban el área. Alrededor de 100 000 campesinos fueron desplazados, mientras la mitad de las guerrillas comunistas

se trasladaron a Sumapaz. Otra columna, con 100 hombres armados y 200 familias, hizo la legendaria “marcha larga” desde la cordillera Oriental hasta las tierras bajas para fundar los asentamientos de Guayabero, al oeste de Meta, y El Pato, al noroeste de Caquetá. Los líderes sindicales y campesinos de las montañas se convirtieron en comandantes militares en las nuevas colonias agrícolas de frontera en tierras bajas, con lo que se estableció un patrón de lucha que se desarrolló a lo largo de los años sesenta y setenta.²¹

En general, La Violencia fue una gran regresión histórica en la que las hostilidades partidarias empantanaron no solo el legado del populismo de Gaitán, sino también la oportunidad de políticas de clase independientes basadas en el campesinado, los artesanos, el proletariado y fracciones importantes de la clase media.²² Este hecho engendró nuevas formas de terror. En el siglo XIX, los términos del combate militar fueron acordados, pero durante La Violencia ninguna regla o límite que protegiera a adultos no combatientes y niños fue respetado.²³ A pesar de que su geografía coincidía significativamente con las fronteras cafeteras establecidas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como lo demuestra el caso de Antioquia, La Violencia era más que un aumento generalizado de la competencia bipartidaria y del conflicto alrededor del clientelismo, el reparto de votos, la distribución de tierras y el control del trabajo y los recursos.²⁴ En Antioquia el colonialismo interno y la “racialización” de las periferias regionales a través del terror y la expropiación fueron cruciales en la derrota de la ola gaitanista.

A pesar de que La Violencia recibió un empuje decisivo a nivel nacional con la elección de Laureano Gómez como presidente en 1950, en general, este movimiento

contrarrevolucionario fue orquestado y controlado en el ámbito regional y local. Los movimientos guerrilleros regionales, algunos de los cuales dejaron retoños que florecieron en insurgencias comunistas duraderas a lo largo de la Guerra Fría, formaron alianzas con el Partido Liberal en todo el país. Las fuerzas paraestatales conservadoras ocuparon muchos cargos en municipios, corregimientos y veredas. En los años treinta y cuarenta, por medio de “la cuestión agraria”, el Partido Liberal hizo importantes avances en distritos rurales, lo que significó un reto al dominio conservador del interior del país por primera vez desde 1870.²⁵ Como sucedió setenta años antes con la Regeneración, la reconquista de Gómez tenía como objetivo volver a la sociedad colombiana una totalidad colonial idealizada en la que los subalternos sabían cuál era su lugar a fin de modernizar la economía capitalista con la industria y las exportaciones de café.

Fue durante La Violencia cuando se estableció el precedente de la resolución sangrienta de la cuestión agraria a través del terror y de la expropiación, con lo que se institucionalizaron formas de crueldad que se volvieron nacionales durante lo que fue el desarrollo histórico más retrógrado de América Latina a mediados de siglo. Estas nuevas formas de violencia se perpetuaron como parte del repertorio contrainsurgente de la Guerra Fría y ayudaron a preparar el terreno para el surgimiento de una insurgencia armada de características endémicas.

1. Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana* (Bogotá: El Áncora Editores, 1991), 31.
2. Charles Bergquist, “The Labor Movement” (1930-1946) and the Origins of the Violence, 60-61.
3. Mary Roldán, en *Blood and Fire*, 22-29, presenta una visión concisa y aguda de la bibliografía, la cual es demasiada vasta como para citarla por completo. Sin embargo, dos estudios clásicos merecen ser mencionados:

Orlando Fals Borda, Germán Guzmán, y Eduardo Umaña Luna, *La Violencia en Colombia* (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1962), por el impacto que desencadenó el debate del congreso; y *Violencia, conflicto, y política en Colombia* de Paul Oquist (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1978), donde se discute la violencia como resultado de un “colapso parcial del Estado”, lo que estimuló nuevas vías de investigación. Para una síntesis de los debates principales, ver Ingrid Johanna Bolívar, *Violencia política y formación del Estado: ensayo historiográfico sobre la dinámica regional de La Violencia en los años cincuenta en Colombia* (Bogotá: Uniandes, 2003).

4. La lucha agraria que ocurrió desde la primera década del siglo XX hasta los años cuarenta era individualizada y local, mientras que en Tolima y en Cundinamarca, era una lucha colectiva y trascendía lo local. Darío Betancourt y Martha L. García, *Matones y cuadrilleros: origen y evolución de La Violencia en el occidente colombiano, 1946-1965* (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1990), 19, 23-24, 177.
5. Gonzalo Sánchez, *Los días de la Revolución: gaitanismo y 9 de abril en la provincia* (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, 1983).
6. Gonzalo Sánchez, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, en Charles Bergquist, *et al.*, eds., *Violence in Colombia*, 77, 81-83.
7. Citado en Robin Kirk, *More Terrible than Death* (Nueva York: Public Affairs, 2003), 21.
8. Brevemente, el “sustitucionismo” puede definirse, como lo hizo Trotsky en 1903, como la noción de que un partido o ejército vanguardista organizado pueda hacer una revolución sin tener en cuenta la debilidad de la clase trabajadora y los movimientos campesinos.
9. Ver Antonio García, *Gaitanismo y el problema de la revolución colombiana* (Bogotá: Movimiento Socialista Colombiano, 1955).
10. Gonzalo Sánchez, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, 83-86.
11. El contraste con Chile es instructivo. Allí los comunistas eran expulsados del campo y, a partir de 1948, se orientaron estrategias hacia los sindicatos urbanos y las barriadas.
12. Medófilo Medina, “La resistencia campesina en el sur de Tolima”, en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, eds., *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, 233-65.
13. Darío Betancourt y Martha L. García, *Matones y cuadrilleros*, 76-127.
14. Gonzalo Sánchez, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, 88-89.
15. Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, 31-32.
16. Gonzalo Sánchez, “Raíces de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia”, en *Ensayos de historia social y política*, 215-75; Alfredo Molano, *Amnistía y violencia* (Bogotá: CINEP, 1978).
17. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 26-27; María Victoria Uribe, *Matar, rematar, contramatar: las masacres de La Violencia en el Tolima, 1948-64*

(Bogotá: CINEP, 1996); ver también, Orlandi Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña, *La Violencia en Colombia*.

18. José Alvear Restrepo era un “abogado del pueblo” y pensador radical cuyo legado ha sido honrado por el colectivo de abogados que lleva su nombre. Para el texto de las Leyes del Llano, ver Fals Borda, Guzmán y Umaña, *La Violencia en Colombia*, tomo II, primera parte.
19. Gonzalo Sánchez, “The Violence: An Interpretive Synthesis”, 95-97; Gonzalo Sánchez, *Guerra y política*, 39-42.
20. Ver James Henderson, *Modernization in Colombia*, 370, 366.
21. Ver Eduardo Pizarro, *Las Farc: de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha* (Bogotá: Norma, 1991); Alfredo Molano, *Selva adentro* (Bogotá: El Áncora Editores, 1987), 36-48; e *idem*, *Trochas y fusiles* (Bogotá: El Áncora Editores, 1994), 91-103; para Sumapaz, ver José Jairo González Arias y Elsy Marulanda, *Historias de frontera: colonización y guerras en el Sumapaz* (Bogotá: CINEP, 1990); para la prehistoria, ver Michael Jiménez, “Gender, Class, and the Roots of Peasant Resistance in Central Colombia, 1900-1930”, en Forrest Colburn, ed., *Everyday Forms of Peasant Resistance* (Nueva York: M. E. Sharpe, 1990), 121-50.
22. Ver Charles Bergquist, *Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia* (Palo Alto, CA: SUP, 1986), 276, 296, 312-14; Charles Bergquist, “The Labor Movement (1930-46) and the Violence”, en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia*, 51-72.
23. En este sentido, Colombia era normal dentro del patrón noratlántico. Eric Hobsbawm describe como una de las características distintivas de la guerra europea en el siglo XX, comparado con el siglo XIX, era la ausencia de límites, el establecimiento deliberado de objetivos militares entre la población civil y el recrudecimiento de la tortura. Eric Hobsbawm, *The Age of Empire: 1876-1913* (Nueva York: Vintage, 1987); Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991* (Nueva York: Vintage, 1992). Para una evaluación de las guerras del siglo XIX en Colombia y Europa, ver Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas, 1982-2003* (Bogotá: Iepri/Planeta, 2003), 51-53.
24. Catherine LeGrand, “Agrarian Antecedents of the Violence”, en Charles Bergquist *et al.* eds., *Violence in Colombia*, 31-50; Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales, y campesinos: el caso de La Violencia en Colombia* (Bogotá: El Áncora Editores, 1983).
25. Darío Betancourt y Martha L. García, *Matones y cuadrilleros*, 64.

capítulo

5

El Frente Nacional: cierre político,

1957-1982

¿No habría manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.

Gonzalo Arango, 1966

Con los conservadores vencidos y las expresiones radicales populares vetadas, los acuerdos del Frente Nacional firmados en 1958 reconstruyeron la *república cafetera*

alrededor de un nuevo eje, el Partido Liberal. El olvido era el *leitmotiv* del periodo con el cual se buscaba “matar la memoria” de La Violencia, “hacer de ella un muerto más”.¹ Los historiadores y demás investigadores sociales contribuyeron con “una especie de compromiso privado para crear una amnesia colectiva”.² Reinó el crecimiento sin equidad. Los patrones de desigualdad fueron mantenidos o profundizados y el clientelismo fue recreado.³ Cuando las dictaduras militares derechistas patrocinadas por los Estados Unidos arrasaron con América Latina durante los años sesenta y setenta, Colombia se mantuvo como principal muestra de democracia en el “mundo libre”. En contraste con Venezuela, cuyo sistema político también fue elogiado durante la Guerra Fría, el Estado colombiano no logró ni neutralizar, ni derrotar las guerrillas, las cuales se mantuvieron intactas a partir de 1960. Su longevidad se debe en parte a la exclusión de exigencias populares (particularmente campesinas) del sistema político y a la resolución de la cuestión agraria a favor de los terratenientes.

CONTRAINSURGENCIA

Cuando Rojas Pinilla dejó en claro su intención de quedarse indefinidamente en el poder, acabando con sus oponentes y simulando acciones populistas para el consumo urbano, la oligarquía, que siempre había apreciado las reglas civiles, cerró filas frente a la amenaza que representaba el intento de Rojas de construir bases clientelistas independientes. A principios de 1957, no solo ambos partidos políticos querían que Rojas Pinilla abandonara el poder, sino también los industriales, exportadores de café y la Iglesia. Una huelga general organizada por los empresarios lo

derrocó. Dos meses después, exiliado en la España de Franco, Laureano Gómez firmó el Pacto de Sitges con Alberto Lleras Camargo.

Este pacto comprometió formalmente a conservadores y liberales a crear un Frente Nacional que permitiera compartir equitativamente el poder entre los dos partidos, con la ocupación alternada de la Presidencia y la paridad en cuanto a la representación a todo nivel gubernamental. Apoyado por los gremios económicos, la Iglesia y las élites partidistas, el pacto se programó para durar hasta 1974, pero en la práctica se sostuvo, con modificaciones menores, hasta 1990. La Iglesia abandonó su afiliación exclusiva con el Partido Conservador para unificar ambas formaciones.⁴

Las esperanzas de unidad entre los grupos campesinos armados del país desaparecieron cuando Guadalupe Salcedo, exjefe de la guerrilla de los Llanos, fue asesinado en Bogotá en 1957. A pesar de que Laureano Gómez no asumió la presidencia, en 1958 regresó triunfante políticamente para presidir el Senado, en donde enjuició a Rojas Pinilla. Puesto que el anticomunismo era un pilar fundamental de su punto de vista como columnista político, líder del Partido Conservador y presidente, las obsesiones paranoicas de Gómez con los “masones” y los “ateos” fueron toleradas. Al igual que Rojas Pinilla, Gómez ayudó a institucionalizar la impunidad sobre la violencia política, y ello le permitió ser el más victorioso en la pugna de La Violencia. Pese a que los años cincuenta representaron un penoso retroceso al siglo XIX, Gómez y sus seguidores claramente se irguieron triunfantes dentro del marco histórico del siglo XX con su guerra total contra la población civil.⁵ El suyo era un olvido despiadado, impuesto y basado en un mito histórico y en fantasías de dominio total.

El sistema tradicional bipartidista había atrofiado y cambiado la expresión de las oposiciones políticas sin

poder represarlas en su totalidad. En los años treinta y cuarenta, en una repetición del periodo de hegemonía liberal del siglo XIX (1862-1875), se desarrolló una dinámica izquierdista, populista e incipiente mientras el conservatismo se reforzó con una defensa flamante de la propiedad privada, la familia y la fe católica. A su manera, cada una de esas dos facciones había escapado del control de las élites, lo cual desencadenó un conflicto sectario peor que el de la Guerra de los Mil Días que eventualmente resultó en una amenaza a la propia diarquía. El Frente Nacional restauró el sistema bipartidista una vez que se habían limado todas las asperezas entre sus componentes.

Bajo las condiciones de la Guerra Fría en Colombia, un referente compartido, el anticomunismo, fue suficiente para unificar a los dos partidos. El resultado fue la proscripción de la expresión política de las demandas radicales y reformistas estructurales, mientras que el Estado se convirtió en una maquinaria de los intereses comunes de las élites, las cuales se lo repartieron entre ellas en todas sus oficinas y puestos. Las exportaciones de café crearon la base de presupuesto estatal y subsidiaron una industria nacional protegida, mientras que los gremios del sector privado fijaron las líneas de la política económica. En 1941, la organización privada de comerciantes de café, Fedecafé, comenzó a dirigir el Fondo Nacional del Café sin supervisión pública, acuerdo que continuó hasta los años setenta. A pesar de los mecanismos intervencionistas reguladores introducidos por López Pumarejo en los años treinta y cuarenta, el Estado liberal se convirtió en un comité ejecutivo de una burguesía que no tenía fracción hegemónica ni proyecto nacional. Los soportes económicos del Frente Nacional tenían sus días contados desde el comienzo. ⁶

El poder político regional y local continuó siendo más importante que la autoridad del gobierno central en la mayor parte del país y, a pesar de que había sido oficialmente olvidada, “La Violencia... formó la esencia del discurso de la vida rural y la cultura política de los municipios” del Frente Nacional, en tanto que resultó imposible borrarla de la memoria.⁷ Los efectos se evidenciaron particularmente en la proliferación del bandolerismo. Conservadores como Efraín González dirigían pandillas de hombres jóvenes y solteros que recorrían las cordilleras Central y Occidental sembrando atrocidades, en busca de venganza por la muerte de sus seres queridos. Durante la segunda fase de *La Violencia* en Antioquia (1950-1953), las guerrillas liberales y la *contrachusma* conservadora nunca se enfrentaron entre sí sino que cada cual atacaba a la población civil. Esto mismo pasó con Efraín González y el *Capitán Desquite*, el bandido contratado por los dueños de haciendas cafeteras en Quindío para detener a Efraín González; el mismo *Capitán Desquite* que el escritor antioqueño Gonzalo Arango menciona en el epígrafe. Bandoleros y cuadrillas se movían constantemente entre las cordilleras Occidental y Central, entre Quindío y Tolima. Con pocas excepciones, los bandidos en el Eje Cafetero no duraban bajo los acuerdos del Frente Nacional. Las fuerzas armadas colombianas, dirigidas por el Batallón Colombia del Ejército, el cual fue apoyado, entrenado y financiado por asesores militares de los Estados Unidos, los eliminaba a través de la contrainsurgencia.⁸

Bajo el Frente Nacional los movimientos radicales populares fueron criminalizados por la legislación de estado de sitio que equiparó protesta y disidencia con “subversión” armada. Las fuerzas de oposición cuasioficiales, tales como el Movimiento Revolucionario

Liberal (MRL) dirigido por Alfonso López Michelsen, hijo de López Pumarejo, contaban con apoyo en el campo, mientras que la Alianza Nacional Popular (Anapo), dirigida por Rojas Pinilla luego de su regreso del exilio, tenía una base creciente en las ciudades; sin embargo, ambos tenían que postular candidatos en los frentes liberales y conservadores. El MRL atrajo a intelectuales marxistas, escritores radicales, estudiantes, trabajadores del sector público excluidos de las redes clientelistas bipartidistas, burócratas modernizantes y campesinos. La Anapo, en la cual el bandido conservador Efraín González participó activamente hasta su muerte en 1965, estaba basada en el clásico populismo de derecha: antiimperialismo combinado con ataques al control de la natalidad, con el apoyo a la Encíclica Papal de Pablo VI en 1968.⁹ Los comunistas, ya vetados de las elecciones, se adhirieron al Partido Liberal, el cual constituyó la “columna vertebral” de las políticas del Frente Nacional a la par que el patrón establecido bajo el mandato de López se institucionalizaba.¹⁰

El Frente Nacional consolidó entonces una democracia oligárquica y excluyente que persistió más allá de sus alcances oficialmente establecidos, en la que escasamente la mitad de la población votaba. Colombia tenía los menores índices de participación electoral del continente. Si Colombia se salvó de la experiencia de dictaduras militares que en los otros países de América Latina diezmaron el radicalismo campesino y de clase media y trabajadora durante los años sesenta y setenta, fue porque el Frente Nacional se constituyó como una dictadura parlamentaria semiautoritaria. Después de La Violencia, a pesar de que la militancia de los trabajadores aumentó con la crisis industrial de mediados de los años sesenta, el movimiento obrero se encontraba fragmentado y débil bajo una situación económica que se deterioraba rápidamente

por la caída de los precios del café. Con el cierre del espacio político en el escenario civil que bloqueaba la reaparición de un vibrante populismo urbano centrado en los sindicatos, parecía que solo quedaba una vía para la protesta social: la insurgencia armada.

En los años sesenta y setenta, justo cuando la mayoría del país pasó de rural a urbano, el vehículo preferido de las fuerzas de oposición se basó en las insurgencias armadas, a pesar de que estas no aportaban a la construcción de movimientos campesinos y obreros más fuertes y cohesionados, pero sí a su debilidad y fragmentación —con la excepción de las Farc, que se iban convirtiendo en el brazo armado de un movimiento de campesinos colonizadores de la frontera agrícola en Meta y Caquetá—. Las insurgencias jamás lograron superar la instrumentalización de los movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles, lo que expuso a los militantes civiles a la violencia contrainsurgente del Estado y de las fuerzas reclutadas por los terratenientes revanchistas.

Las raíces de la insurgencia armada se encontraban en la larga historia de las luchas campesinas y ocupaciones territoriales en la frontera cafetera, pero fueron engendradas por La Violencia, la cual persistió como bandolerismo en los primeros años del Frente Nacional. Aún existían enclaves de resistencia comunista, todas surgidas durante el curso de La Violencia. En 1961 el senador e hijo de Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, acuñó el término “repúblicas independientes” para referirse a las dieciséis áreas sobre las que el gobierno central no ejercía soberanía alguna. Bajo la presidencia liberal de Alberto Lleras Camargo —quién aplastó la huelga de los trabajadores del río de 1945 y fue escogido por Laureano Gómez como el candidato del Frente Nacional de 1958, además de participar en la elaboración de la Alianza

para el Progreso a partir de 1962— dichas “zonas rojas” estaban rodeadas por un cordón militar que las aislaba efectivamente del mundo exterior.

Una vez que la Revolución cubana puso a temblar a Washington, surgió una nueva urgencia por erradicar a las guerrillas en Colombia como parte de la Guerra Fría en la época de Vietnam. Durante la Alianza para el Progreso, la contrainsurgencia anticomunista se movió a la segunda fase, en tanto que la misión de los militares latinoamericanos cambió de la “defensa hemisférica” a la “seguridad nacional”.¹¹ Como se demostró en la crisis de los misiles en Cuba, la “amenaza externa” de la Unión Soviética iba a ser manejada directamente por los Estados Unidos, mientras que la “amenaza interna” de subversión comunista sería manejada por la policía y las fuerzas armadas de cada país. A partir de 1961 un joven veterano de contrainteligencia que había trabajado en Alemania y Camboya, el general William Yarborough, dirigió el Centro Especial de Guerra en Fort Bragg y fundó a los Boinas Verdes como unidad de fuerzas especiales contrainsurgentes dentro del ejército, para un año después, en 1962, pasar a dirigir una misión militar en Colombia. Además de quejarse de la falta de preparación y profesionalismo de la Fuerzas Armadas, Yarborough recomendó la organización de escuadrones de muerte (localizadores) que le rindieran cuentas únicamente al gobierno de los Estados Unidos.¹² También aconsejó la implementación de programas para registrar, vigilar e interrogar a la población civil de las “zonas comunistas”.

Pese a los mejores esfuerzos por parte de EE. UU. esta contrainsurgencia fragmentada territorialmente se enfrentó con el gobierno central cuando el presidente Lleras Camargo fundó una burocracia gubernamental, el Incora, en 1961, para poner en marcha una reforma

agraria. Este instituto sería dirigido por el primo del presidente, el senador Carlos Lleras Restrepo, quien para tal efecto creó un cuerpo de jóvenes economistas, muchos de ellos educados en los Estados Unidos. El poder de Lleras Restrepo dentro del Estado era apenas naciente y estaba restringido al Incora, pero su visión de progreso suponía la eliminación de las grandes haciendas, vistas como “feudales” y poco productivas, que mantenían “siervos” bajo una ciudadanía de vasallos.¹³ El proceso de reforma continuó lentamente con Guillermo León Valencia, abogado y periodista de la antigua ciudad colonial esclavista de Popayán. Pero Valencia simpatizaba con el general Franco y la Falange española y una de sus principales promesas de campaña fue la de eliminar las “repúblicas independientes”. Luego del crecimiento sostenido en el campo industrial y comercial de los años cincuenta, la crisis económica de 1962 producida a raíz de la caída de los precios del café condujo a los menores índices de crecimiento industrial desde principios de los años treinta. Para 1964 el desempleo urbano se había generalizado. En adelante se podrían garantizar las futuras fracturas del Frente Nacional.

El Plan Lazo, una estrategia contrainsurgente de “corazón y mente” que estaba enfocada en una fuerza cívico-militar y en unidades especializadas designadas para cazar y matar a los supuestos seguidores del comunismo, determinó que los civiles siempre serían colaboradores o blancos.¹⁴ Como lo explicó el general Alberto Ruiz Novoa en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Americanas en la zona del Canal de Panamá en 1963, la única manera de derrotar a las insurgencias era a través de la movilización y militarización de las comunidades rurales por medio de la “acción cívico-militar”.¹⁵ Ruiz Novoa había sido el jefe del Batallón Colombia en Corea y luchó contra el Ejército

Popular de Liberación chino con los Osos Polares de la 31ª Infantería del Ejército de los Estados Unidos. Ruiz estaba convencido de que para vencer a las guerrillas campesinas colombianas era necesario secarle el agua al pez. Para ello, el Estado tendría que invertir en regiones de influencia comunista, además de enlistar en las Fuerzas Armadas a colaboradores civiles. El general Ruiz consideraba a esas fuerzas “campesinas de autodefensa” como un grupo élite entrenado para coordinar con el Ejército, particularmente en trabajos de inteligencia, de manera similar a lo que el general Yarborough recomendó, pero en este caso bajo la orden de rendirle cuentas a las autoridades colombianas. El plan de Ruiz, conocido como Plan Lazo, aislaría a las guerrillas de su potencial base de apoyo a través de mejoras de infraestructura, salud y educación. ¹⁶

INSURGENCIA

Las operaciones de contrainsurgencia del Frente Nacional desataron una ola de migraciones armadas de la cordillera Central a las selvas del sur y a los llanos Orientales. El Plan Lazo falló dramáticamente a finales de mayo de 1964 cuando, en coordinación con sus aliados estadounidenses, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron la Operación Marquetalia para retomar la municipalidad del mismo nombre, una aldea comunista al extremo sur de Tolima, en la frontera entre Cauca y Huila. Otro veterano de Corea, el teniente coronel José Joaquín Matallana, dirigió el asalto en el que se usaron helicópteros Huey, aviones de combate T-33, siete batallones del ejército, dos compañías contrainsurgentes especializadas y grupos de inteligencia (GIL) designados para arrasar con la comunidad y con su legendario líder, *Tirolfijo*. En este y en otros ataques

militares coordinados lograron recuperar el territorio, pero por muy poco tiempo. “El enemigo” aún andaba suelto. Luego de Marquetalia, las familias que fueron forzadas una vez más a huir encontraron su camino hacia Cauca o hacia las tierras bajas tropicales de Caquetá y Meta. Los combatientes formaron una columna guerrillera ya que no podían establecerse en sus pueblos.

Tanto Matallana como *Tirofijo* se mostraron de acuerdo en que Marquetalia forzó a los comunistas agrarios a dejar de ser una milicia sedentaria de autodefensa para convertirse en una fuerza móvil.¹⁷ Asesores del gobierno de los Estados Unidos habían supervisado Operación Marquetalia, también conocida como Operación Soberanía, desde una base militar cercana. Justo después de que la operación fuera ejecutada, comandantes de Marquetalia, Río Chiquito y El Pato se reunieron como el Bloque Sur para emitir un nuevo programa agrario. Esta “respuesta popular a La Violencia y a la agresión militarista” sería luego conmemorada como el nacimiento de las Farc, grupo que fue nombrado oficialmente como tal en 1966. Según su historiador, las Farc funcionaron a lo largo de los años setenta como “una estructura regional de guerra social y de supervivencia colectiva e individual” y se desarrolló en el “escenario para la construcción del verdadero poder local”.¹⁸ El secreto del éxito temprano de las Farc era la subordinación de metas organizacionales insurgentes a las exigencias y movimientos de minifundistas, arrendatarios y obreros rurales en la frontera agrícola, lo que garantizaba la continuidad con las luchas agrarias del pasado.

Este éxito temprano se evidencia con especial claridad en comparación con los competidores de la izquierda encarnados por otras dos fuerzas guerrilleras que surgieron durante esos años. Generalmente, el ELN es caracterizado como un grupo compuesto por jóvenes

universitarios de clase media que siguió al pie de la letra la *teoría del foco* del Che. Un pequeño grupo de guerrillas móviles —en vez de la clase obrera o el campesinado en su conjunto— estaba convencido de que dada la cantidad de campesinos en Colombia y la reciente historia de movilización armada popular durante La Violencia, ellos podrían desencadenar una insurrección, que llevaría a la revolución socialista. Este convencimiento era típico de las organizaciones que seguían a Guevara en esos años. Para ellos la revolución era un acto de consciencia, el cual sería capaz de superar las determinaciones materiales y políticas. En otras palabras, enarbolaban un voluntarismo puro y bastante influido por la moral católica.

Sin embargo, apartando las diferencias estratégicas, el ELN, igual que las Farc, estaba arraigado en la historia del radicalismo popular, del comunismo y de la lucha proletaria y campesina de los años de la Pausa Liberal y La Violencia. El patriarca del clan Vásquez, los fundadores del ELN, había participado en la toma gaitanista de Barrancabermeja en 1948 y durante La Violencia dirigió las milicias liberales bajo el mando de Rafael Rangel, en donde murió. Los hermanos Vásquez, Fabio y Manuel, fueron a Cuba con un pequeño grupo de estudiantes becados durante la crisis de los misiles de 1962. A su regreso, establecieron el primer foco del ELN en San Vicente de Chucurí, Santander, donde las guerrillas de Rafael Rangel habían estado activas, como lo habían estado antes de ellos las guerrillas liberales de la Guerra de los Mil Días.

El ELN contaba con el apoyo de parte del sindicato de los trabajadores del petróleo, uso y en 1963, junto a los viejos campesinos colonizadores que habían liderado el “levantamiento bolchevique” en Líbano (Tolima, 1929), y a las juntas gaitanistas en 1948, se sumaron a la huelga en contra de la recién formada empresa petrolera estatal,

Ecopetrol. Algunos cuadros del ELN temprano habían luchado con la guerrilla liberal de Rafael Rangel, mientras que su líder, Fabio Vásquez, comenzó en el ala juvenil del MRL en busca de una manera de vengar la muerte de su padre. Otros como Manuel Vásquez y Rodrigo Lara llegaron a la guerrilla a través de la lucha estudiantil de la Universidad Industrial en Santander, UIS. El ELN anunció su presencia en la toma de Simacota, un pueblo de Santander, en enero de 1965 y más tarde ese mismo año aceptó al cura y sociólogo Camilo Torres Restrepo dentro de las filas. A principios de 1966 Torres murió en combate, hecho que le dio a la teología de la liberación su primer mártir.¹⁹

En 1967, se formó el Ejército Popular de Liberación (EPL) de tendencia maoísta y por tanto profesando la idea de radicalismo agrario armado. Uno de sus fundadores fue Pedro Vásquez Rendón, quien había sido el comisario político del PSD en el sur de Tolima durante La Violencia y quien le sugirió a Pedro Antonio Marín el nombre de Manuel Marulanda Vélez como su alias, en honor a uno de los líderes del PSR en los años veinte. El PC-ML (Partido Comunista Marxista-Leninista) surgió de las juventudes del PCC (Juco) en 1965, siguiendo la división sino-soviética. Con ayuda del antiguo comandante de la guerrilla liberal y militante del MRL, Julio Guerra, el EPL estableció un *foco* en Urabá con el fin de proseguir la guerra popular prolongada. Al igual que los Maoístas, ellos creían que el campesinado, dirigido por un partido vanguardista, jugaría un papel protagónico en la realización de la revolución socialista en países como Colombia, rurales y del “Tercer Mundo”—término utilizado por Mao en contra de la URSS —.²⁰

A pesar de la pátina internacionalista importada de Moscú y Beijing, está claro que los asuntos sin resolver de

La Violencia dieron pie a las tres insurgencias izquierdistas. Como gran parte del resto de los municipios y las veredas de la sociedad rural colombiana, las guerrillas se vieron enmarcadas por la experiencia de La Violencia, incluso décadas después de que esta terminara oficialmente. Quindío y Risaralda, por ejemplo, eran regiones cafeteras que habían sido el hogar de pistoleros conservadores y de cuadrillas de bandidos liberales, como la familia de Vásquez y de *Tirofijo*. El secuestro, la vacuna (impuesto) y el boleteo (impuestos extorsivos vía cartas de amenaza o boletas) se desarrollaron en principio en el Viejo Caldas y en el norte del Valle; luego, con nuevos nombres (retención, impuesto de guerra), se incorporaron al repertorio de las tácticas guerrilleras.

Tanto Fabio Vásquez como *Tirofijo* vieron cómo los conservadores asesinaron a sus padres. La venganza personal le dio a los movimientos guerrilleros continuidad con La Violencia, como lo hicieron también Ricardo Franco y Ericito Espitia. Ambos habían estado con el jefe liberal regional *Chispas* antes de tomar caminos diferentes. Espitia fue uno de los miembros fundadores del ELN y Franco se convirtió en comandante del IV Frente de las Farc en el Magdalena Medio.²¹

Con el fin de prevenir lo que correctamente se percibía como una amenaza de conflicto creciente en las fronteras agrícolas del país, el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), quien había sido uno de los oponentes acérrimos de Gaitán dentro del Partido Liberal y quien presidió su funeral, creó un nuevo programa de reforma agraria. Lleras también creó una organización campesina, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), para estimular el apoyo clientelista a la reforma agraria.²² Esta asociación se movía en direcciones radicales, mucho más allá de lo que Lleras Restrepo y los tecnócratas

liberales se habían imaginado, especialmente en la costa Atlántica, donde el latifundismo era más extensivo.²³ Sin embargo, bajo el Decreto 3398 de 1965 dictado por Valencia y la Ley 48, aprobada por el Congreso en 1968, los propietarios regionales organizaron escuadrones de muerte según el modelo de *los pájaros* para atender no solo contra campesinos, sino contra la izquierda obrera y estudiantil, quienes fueron blancos de asesinatos selectivos en las ciudades.²⁴ Esta continuidad se comparaba con una continuidad similar en la contrainsurgencia, cuya visión de guerra total con civiles era refinada y sistematizada bajo la Guerra Fría.

CONTRARREFORMA, REPRESIÓN, RESURRECCIÓN

La audacia ideológica y la relativa legitimidad popular de los grupos guerrilleros para entonces no deberían llevarnos a exagerar su tamaño o a pasar por alto el rápido cambio demográfico de las zonas rurales en relación con con urbanas en esta época. Para mediados de la década de los setenta, el EPL prácticamente no existía; Fabio Vásquez había pasado los primeros años purgando las escasas filas del ELN y los *foquistas* fueron casi eliminados por un ataque en Anorí, Antioquia, en 1973. Las Farc aún estaban confinadas principalmente a Meta y Caquetá, regiones de tierras bajas al sureste de Bogotá, las cuales habían ayudado a colonizar. En las ciudades, mientras tanto, donde ahora vivían dos tercios de los colombianos, el desempleo aumentó bruscamente durante la década de los sesenta, pese a que la educación superior y los servicios de salud también se expandieron. Las políticas industriales proteccionistas no lograron generar empleo, por lo que las

clases trabajadoras, clase media baja y media vieron sus esperanzas desvanecerse.

El deterioro del Frente Nacional era claramente visible. En 1969, la Anapo ganó la mayoría de los concejos municipales y las asambleas departamentales. En 1970 Rojas Pinilla se lanzó como conservador con un programa contra el Frente Nacional y un discurso antioligárquico que hacía reminiscencia al de Gaitán, complementado por una defensa reaccionaria de la tradición católica que perdía gradualmente terreno frente a la influencia de los medios de comunicación. Con esta plataforma ganó el 39 % de los votos, principalmente entre la clase obrera y media-baja de las ciudades.

El Frente Nacional recurrió al fraude de último minuto para negarle la victoria e imponer a su candidato, el conservador Misael Pastrana.²⁵ Una vez en el poder, este financió obras públicas y remodelación urbana en un intento por generar empleo y la apariencia de reforma, pero también apoyó un proceso de contrarreforma en el campo. Los gremios de ganaderos (Fedegan), empresarios de la agricultura y terratenientes (SAC), así como industriales (Andi), estaban unidos en su determinación de anular las reformas iniciadas bajo el periodo de Lleras Restrepo (o, como en Urabá hicieron los hacendados con la Ley 200 en 1936, volcarlas a su favor y para su beneficio). La reacción fue una respuesta a las tomas de tierras de la Anuc que azotaron a Boyacá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Magdalena Medio, los llanos Orientales y la costa Atlántica. En 1971, en Toribío, Cauca, se formó el Consejo Regional Indígena del Cauca para trabajar en propuestas de desarrollo local basadas en la recuperación de los resguardos que habían sido incorporados a grandes propiedades privadas. Por medio del proceso de definición de sus metas, como el logro de la autonomía indígena,

miembros del Cric se formaron en las luchas de Quintín Lame y del PCC entre 1914 a 1944. Posteriormente, se enfocaron en lucha por la tierra como la base de la vida y la cultura colectiva, por un autogobierno local, a través de cabildos, y la formación de amplias alianzas nacionales populares con intelectuales, obreros y especialmente campesinos no indígenas, con el propósito de superar las barreras regionales, étnicas y de clase que obstaculizaban la unidad popular.²⁶ En la frontera de Urabá, en extensas áreas ganaderas en el Valle de Sinú, en Córdoba donde la resistencia gaitanista fue fuerte en 1948, y en el vecino Sucre, la Anuc dirigió un tercio del total nacional de marchas y tomas de tierras entre 1970 y 1973. Las llanuras interiores de la costa Atlántica fueron así el semillero de la lucha agraria en este periodo. La Anuc, frustrada con los límites de cambio bajo el mando de Lleras, contaba con el firme apoyo de los partidos de izquierda, de un vigoroso movimiento universitario que para entonces estaba protestando en contra de la privatización de la educación pública, además de las insurgencias que buscaban canalizar el movimiento hacia fines sectarios.

En enero de 1972 Pastrana unió a líderes de ambos partidos, así como a los gremios claves a fin de forjar el *pacto de Chicoral*, que prometió a los propietarios de las tierras créditos fáciles, prestamos generosos y una redistribución de la tierra aún más limitada a quienes a cambio del pago de impuestos. También gratuitamente se les tendió una mano para organizar la violencia contra los campesinos y líderes de izquierda, coordinando sus esfuerzos con las Fuerzas Armadas, todo a muy baja escala. En 1971, diez años después de que Lleras Restrepo iniciara la reforma agraria con la Ley 135 y cinco años después de que la implementara como presidente, apenas el 1 % de las tierras que entraron en el ámbito de la reforma habían sido

expropiadas. Los terratenientes con bases de poder regional formaron un sólido muro de contención. Como aquellos experimentos realizados durante los años treinta, otros más se realizaron con la legislación progresista en la década de los sesenta poniendo de manifiesto que las facciones de la élite que concordaban con la reforma no contaban con la capacidad para alcanzar cierta hegemonía dentro de la clase dominante colombiana. El poder regional basado en el comercio y la tierra se interponía en el camino.²⁷

El presidente López Michelsen (1974-1978), hijo de López Pumarejo, había sido un intelectual e importante actor político por derecho propio durante décadas y, como fundador y líder del MRL, había sido un feroz rebelde contra su partido durante el Frente Nacional. Su mandato fue técnicamente el último bajo el Frente Nacional. Por medio de *caciques populares* como Alfonso Barberena, líder de los asentamientos de invasión en Cali, López Michelsen cortejó el distrito electoral urbano que había apoyado anteriormente a Rojas Pinilla. López esbozó dos Colombias. La primera, relacionada con el café y la industria, incluía a Antioquia, los departamentos occidentales andinos (Valle, Caldas, Risaralda, Quindío) y el puerto caribeño de Barranquilla, que recibía la mayor parte de la inversión gubernamental en infraestructura y servicios de gobierno. El 5 % de la población dueña de más de la mitad de la tierra recibía la mitad del ingreso nacional y vivía y gobernaba para la primera Colombia. La segunda Colombia, que cubría el 70 % del territorio nacional, estaba conformada por afrocolombianos, indígenas y pobladores fronterizos que vivían en los llanos y tierras bajas más al sur y al este y en las costas del Pacífico y el Atlántico. Estas regiones recibían poca inversión y contaban con escasa presencia estatal, electricidad, servicios públicos e incluso

mínima infraestructura. A pesar de ser esquemático, el discurso de López Michelsen esbozaba en grandes rasgos la realidad de la geografía política y económica de un país fracturado por un sinnúmero de fronteras internas fuera del alcance del Estado central, el cual concentraba su atención y dirigía la inversión hacia el corredor industrial-cafetero del interior andino.

Aunque los precios del café alcanzaron temporalmente nuevas alturas a mediados de la década de los setenta, los abultados presupuestos estatales, los requerimientos de servicio de la deuda externa, el casi colapso de las industrias tradicionales y la oposición de la élite hicieron que las promesas de reforma e integración nacional de López Michelsen se quedaran en el aire. Aunque él anunció su objetivo de convertir a Colombia en el “Japón de Suramérica”, fue el primer presidente del Frente Nacional en proponer medidas neoliberales. Con el Chile de Pinochet como modelo, López Michelsen exigió una liberalización del mercado, privatización de las empresas estatales y descentralización fiscal.²⁸ Los empresarios emergentes en el negocio de la marihuana y la cocaína ayudaron a este cambio de rumbo lavando dinero legalmente a través del Banco de la República y tomando ventaja de la política monetaria de bajas tasas de intereses que estimulaba a las empresas de seguros, hipotecarias y a la especulación en bienes raíces urbanos.

El general Álvaro Valencia Tovar, que había peleado en Corea, Marquetalia y Anorí, y era un seguidor de Ruiz, fue designado cabeza de las Fuerzas Armadas bajo el mando de López Michelsen. Como su mentor, Valencia Tovar recalcó la necesidad de la inversión social en educación, salud, infraestructura y crédito en áreas donde el apoyo comunista había predominado.²⁹ El general Luis Camacho Leyva, un abogado que veía las ideas radicales como un

cáncer que necesitaba ser extirpado, reemplazó a Valencia, lo que significaría el final de la “inversión social” como un componente de la contrainsurgencia de la Guerra Fría. Camacho propuso modificar la Constitución de 1886 con el propósito de pasar una ley respecto a “los delitos de opinión”, apuntando a aquellos académicos de izquierda e intelectuales afiliados al partido. Convencido de que la mayoría de los sindicatos de Colombia, las universidades, así como las comunidades y las organizaciones cívicas y barriales y las organizaciones campesinas estaban infectados de propaganda comunista, Camacho Leyva acusó públicamente a Gabriel García Márquez de tener vínculos con la guerrilla del ELN. Para 1974 la Anuc, principal movimiento radical de oposición, había sido reprimida, cooptada y dividida por el sectarismo de izquierda. Los otros movimientos se mostraban sin fuerzas para forjar una coalición nacional para un cambio radical. Apenas sobreviviendo su primera fase de desarrollo (1964-1974), las insurgencias rurales estaban inactivas.

El descontento urbano se cocinaba a fuego lento, asumiendo una forma dramática en 1974 cuando un nuevo grupo, el M-19 —llamado así por el 19 de abril de 1970, fecha en la que le arrebataron las elecciones a Rojas Pinilla— anunció su aparición robando la espada de Bolívar de un museo en el centro de Bogotá. Compuesto por anapistas de clase media, así como por jóvenes disidentes de las Farc y el PCC, el M-19 tuvo, desde el principio, un agudo sentido sobre cómo explotar mejor los medios de comunicación para cultivar la misma aura de bravuconadas románticas que rodeó a las guerrillas urbanas del Cono Sur, algunos de cuyos veteranos engrosaban las filas del *Eme*.

El M-19 era un movimiento explícitamente nacional-popular con ambiciones electorales siguiendo la tradición de Gaitán, cuyo objetivo no era el derrocamiento del

capitalismo o del Estado colombiano sino la apertura del sistema político existente para la competencia electoral — en este sentido el M-19 era semejante al M-26 de Castro en la Cuba prerrevolucionaria—. ³⁰ El M-19 generó un amplio aunque difuso apoyo entre las clases media y trabajadora que votaron por Rojas Pinilla y López Michelsen probando ser mucho más “popular” que las Farc o el ELN.

A mediados de la década de los setenta, nuevos focos de protestas urbanas comenzaron a proliferar por cuenta de deficiencias en los servicios públicos. Estos focos fueron dirigidos por la clase obrera subempleada o desempleada en las periferias de las ciudades y movilizados a través de asociaciones de vecinos y cooperativas, en vez de sindicatos. En 1977 las tres confederaciones sindicales más importantes se unieron para llevar a cabo un paro cívico respaldado por el nuevo movimiento de las periferias urbanas, razón por la cual el general Camacho aplicó castigos con extrema represión. De ahí en adelante, los altos índices de desempleo, los salarios cada vez más bajos, la decreciente seguridad social y el aumento del “sector informal” —en el que más de la mitad del proletariado colombiano estaría trabajando para 1985— debilitaron aun más un movimiento sindical ya débil y dividido. ³¹

La derrota del paro cívico estableció el escenario para la propagación de medidas enérgicas bajo el siguiente presidente liberal, Julio César Turbay Ayala (1978-1982). El general Camacho fue elegido para dirigir el asalto a las ciudades por parte del Ejército, la Policía, los servicios de inteligencia y un creciente número de organizaciones paramilitares. Comenzaron a proliferar los detenidos, torturados, encarcelados o “desaparecidos”, así como los escuadrones de la muerte al estilo argentino, como la AAA (Alianza Anti-Comunista Americana). ³² La violencia política se volvió mucho más intensa de lo que había sido durante

la década anterior y las fuerzas del general Camacho atacaron con particular fuerza al M-19. Por primera vez, las operaciones contrainsurgentes afectaban la vida diaria en las ciudades y, junto a los países del Cono Sur, Colombia comenzaba a recibir atención por parte del movimiento internacional de derechos humanos debido al terror estatal.³³

Con los sindicatos y los movimientos cívicos urbanos en retirada y la represión estatal en aumento, el clima general a finales de la década de los setenta y principio de los ochenta fue propicio para que la guerrilla creciera. Sin embargo, aún no había un discurso sobre los “actores armados de la izquierda y la derecha” como surgió por primera vez entre analistas de EE. UU. referente a El Salvador en la década de los ochenta. La represión brutal del gobierno de Turbay, asociada a las esperanzas desatadas por la revolución nicaragüense y los procesos en desarrollo en El Salvador y Guatemala, le dio a las guerrillas un nuevo soplo de vida. Al tiempo que en Nicaragua los sandinistas habían mostrado que la lucha armada era el camino para derrocar una dictadura, las guerrillas colombianas argumentaban que el gobierno de Turbay no era diferente a las juntas militares del Cono Sur, demostrando así un desprecio olímpico por la historia colombiana y latinoamericana.

A pesar de la represión dirigida al M-19, este comenzó sus primeras operaciones urbanas en 1978 bajo el régimen del general Camacho. El año siguiente los militantes del M-19 robaron cuatro mil pistolas de una armería en Bogotá y en 1980 ocuparon la Embajada de República Dominicana con el enviado de los EE. UU. adentro, operaciones típicamente llamativas y arriesgadas que no requerían de una amplia base social o movilización.³⁴ En 1980 el EPL, por su parte, dejó el maoísmo, que había provocado numerosas

divisiones internas, y se hizo camino en la zona ganadera de Córdoba y la zona bananera de Urabá, que luego disputaría con las Farc.³⁵

Sin embargo, esta última fase de crecimiento guerrillero tuvo lugar en un clima político-económico de cambios rápidos y radicales. Para este momento ya había comenzado la reestructuración dentro de la oligarquía fragmentada durante el largo estancamiento de la manufactura industrial en la década de los sesenta y setenta. Algunas facciones importantes movieron sus inversiones de la producción hacia la especulación y la captación de rentas. Se multiplicaron los nuevos enclaves dominados por capital extranjero, así como las economías monoproductoras, tales como las petroleras de Arauca y Norte de Santander, la carbonífera de la Guajira, la bananera en Urabá y la aurífera del sur de Sucre. Estos últimos cambios le dieron a las guerrillas las bases materiales para su expansión. El ELN fue el primer grupo en rediseñar su esquema de finanzas hacia la captación de rentas de estos sectores a través del secuestro y la extorsión.

El negocio de la marihuana, inicialmente organizado a baja escala por algunos veteranos de los Cuerpos de Paz y sus aliados nacionales, fue rápidamente tomado por contrabandistas colombianos en todas sus fases de exportación y floreció en los departamentos de Cauca, Cesar, Magdalena y Guajira.³⁶ Los negocios en el área de la construcción y de la banca se dispararon, puesto que una nueva capa de capitalistas bandoleros dependientes de las rentas y la exportación de narcóticos comenzó a adquirir la riqueza que les permitiría financiar la contrainsurgencia y enriquecerse a través de la economía de guerra.³⁷ La base conservadora continuó encogiéndose.

Aunque la fumigación de los campos de marihuana en Cauca y en la Sierra Nevada de Santa Marta y la extradición a los EE. UU. de los líderes traficantes de marihuana, comenzaron bajo el gobierno de Turbay y mostraron cierta efectividad en cuanto a resultados, la cocaína ya había reemplazado a la marihuana como la mercancía más rentable para la exportación. Para comienzos de los años ochenta, los mafiosos de la cocaína entraron en la política al tiempo que la lucha “antidrogas” se convirtió en el pivote de las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Colombia. El sector cafetero estaba al comienzo del fin de su predominio económico; el Partido Liberal tuvo un estímulo con el comercio de drogas que le permitió sobrevivir, mientras que el Partido Conservador casi desapareció. Los tecnócratas modernizadores en Bogotá vieron disminuir aún más su ya limitado poder sobre los departamentos como nuevos intermediarios políticos. Estos más corruptos y cínicos que algunos de los caciques tradicionales, estuvieron dispuestos a trabajar con la mafia de la cocaína para dominar los escenarios políticos regionales y locales. El clientelismo provincial se modernizó y tanto la Policía como el Ejército asumieron roles más prominentes como defensores del “orden público”.

Fue dentro de este nuevo contexto que el ELN renació después de su aniquilación en Anorí. Como parte de una novedosa estrategia basada en el nuevo patrón de extracción de recursos del país, desde comienzos de la década de los ochenta el ELN apuntó a los enclaves transnacionales de exportación. Células del ELN aparecieron en las regiones petroleras de Arauca y Norte de Santander, la zona minera de La Guajira, El Cerrejón y las regiones de minería de oro del sur de Bolívar y el noreste de Antioquia, ofreciendo un nuevo modelo de

revolución tomado de Centroamérica en vez de Cuba. Sobre la base de la teología de la liberación, el ELN se unió a movimientos populares y trabajó de cerca con los sectores más radicales del sindicato de los trabajadores del petróleo, uso, al tiempo que el petróleo alcanzaba al café como el producto colombiano legítimo de exportación más importante. Lo que las Farc habían hecho en sus primeros tiempos, el ELN lo hizo una vez que dejaron la teoría del *foco* del Che y se deshicieron de Fabio Vásquez. Más estrechamente vinculados a la exportación debido a su ubicación en la geografía económica del país, el ELN construyó poder local apoyado en los movimientos populares, estrategia que las Farc iban dejando atrás como parte de su transición hacia una guerrilla en expansión.

Esta jugada de las Farc surgió como respuesta a la competencia armada de la izquierda. En 1982, en su VII Congreso Nacional, las Farc abandonaron su estrategia defensiva en teoría —ya lo estaban haciendo en la práctica— para proyectarse a través de todo el territorio nacional; un cambio simbolizado por las iniciales EP (Ejército del Pueblo) que fueron añadidas al nombre del grupo. Las Farc ya se habían expandido desde sus bases en Caquetá, Meta y Putumayo hacia Urabá, Magdalena Medio y algunas áreas de los llanos selváticos al sureste (Guaviare, Vichada y Vaupés), zonas vastas y escasamente pobladas con mayoría indígena. Este fue el punto decisivo a partir del cual se alimentaron de los impuestos recaudados de la nueva y próspera industria de la cocaína. Las Farc se convirtieron en una empresa militar dedicada a la expansión territorial y al control de la población y movilidad de los civiles dentro de sus zonas de operación.

Durante el Frente Nacional, los gobiernos liberales trataron y fallaron de implementar la reforma agraria y no lograron derrotar a las insurgencias armadas en las

regiones recientemente colonizadas. Por medio del terror sancionado por el Estado en forma de escuadrones de la muerte, desde mediados y hasta finales de la década de los setenta se trató de detener y hacer retroceder una nueva ola de protestas populares radicales por parte de sindicatos, estudiantes y vecinos de la frontera urbana, junto a una nueva insurgencia urbana. Estos escuadrones, diseñados para lidiar con la incapacidad del gobierno colombiano para detener la expansión de la insurgencia, estaban estructurados de manera similar a aquellos que destruían a las sociedades de Centroamérica y el Cono Sur. El anticomunismo, santificado por la Iglesia católica, unió las piezas rotas del sistema bipartidista.

Sin embargo, a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta, la represión intensa disminuyó la autoridad estatal y creó un clima en el que las insurgencias prosperaron. Este florecimiento planteó un desafío a los escuadrones de la muerte, los cuales se consolidaron como fuerzas paramilitares regionales. Las violencias política y criminal, alimentándose la una de la otra, y el homicidio se convirtieron en las causas principales de muerte entre varones, especialmente en las crecientes periferias urbanas. Un importante cambio económico hacia la captación de renta, la especulación de tierras y bienes raíces urbanos, así como hacia las exportaciones de marihuana y cocaína, anunciaron la muerte de la *república cafetera*. Al mover la base productiva de la industria manufacturera y las exportaciones de café hacia los enclaves de exportación y las fronteras cocaleras, las corporaciones multinacionales, la narcoburguesía y los tecnócratas encargados de “modernizar” el Estado colombiano crearon las condiciones necesarias para el resurgimiento de la guerrilla. La aceleración de la represión estatal y paraestatal abonaron el terreno.

1. Gonzalo Sánchez, *Guerra y política en la sociedad colombiana*, 222-23; Gonzalo Sánchez, "Intelectuales...Poder...Cultura Nacional", 84.
2. Álvaro Tirado Mejía, "Introducción", en Álvaro Tirado Mejía *et al.*, eds., *Nueva historia de Colombia*, vpl. 1 (Bogotá: Planeta, 1989), xi.
3. Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila, *Clientelismo: el sistema político y su expresión regional* (Bogotá: Iepri, 1990).
4. En Colombia solo la teología de la liberación se oponía a la jerarquía *en bloque* de la Iglesia (con la excepción de Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura), y aquellos que escogían seguir este camino terminaban muertos o exiliados o, como los españoles Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, aumentando las exiguas filas del ELN. Ver Walter J. Broderick, *El guerrillero invisible* (Bogotá: Intermedio, 2000), 117.
5. Gonzalo Sánchez, "The Violence", 110-11; Gonzalo Sánchez, "Reseña: *Entre la legitimidad y la violencia*, por Marco Palacios", *Análisis Político* 27 (enero-abril 1996), 104.
6. A pesar de que Gonzalo Sánchez, "Reseña: *Entre la legitimidad...*, 84, se refiere al esfuerzo de moldear al Estado en "la mano derecha de las clases capitalistas", la efectividad del Estado en proteger los intereses burgueses era cuestionable, aunque estaba planteada como meta de primera categoría de manera más o menos explícita. Pécaut y Richani han demostrado convincentemente que la ineffectividad del Estado central colombiano como un vehículo para una agenda burguesa nacional y unificada conllevó a la regionalización del poder de las élites y a la proliferación de la violencia privada vinculada con la estatal, es decir la delegación de la represión.
7. Gonzalo Sánchez, "Reseña: *Entre la legitimidad...*, 120.
8. Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales, y campesinos*; Darío Betancourt y Martha L. García, *Matones y cuadrilleros*, 137-75. En principio, *Desquite* tenía la protección oficial de los líderes liberales en los pueblos y de los propietarios en el interior del país pero, eventualmente, tanto *Desquite* como Efraín González intensificaron sus redes privadas de extracción en las haciendas cafeteras, lo que llevó a una guerra en contra de sus antiguos protectores y, una vez más, en contra de sus bases de apoyo. Este era el patrón característico de la involución política en Tolima, Viejo Caldas y el norte del Valle del Cauca, es decir, gran parte del Eje Cafetero.
9. César Augusto Ayala Diago, *Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional: los orígenes de la Alianza Nacional Popular (Anapo), 1953-1964* (Bogotá: UN, 1996).
10. Marco Palacios, *Entre La legitimidad y la Violencia*, 258, 261-62.
11. Francisco Leal Buitrago, *El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia* (Bogotá, Iepri, 1994).

12. Francisco Leal, "Defensa y seguridad nacional, 1958-1993", en Francisco Leal y Juan Gabriel Tokatlian, eds., *Orden mundial y seguridad: nuevos desafíos para Colombia y América Latina* (Bogotá, IEPRI, 1994), 131-72.
13. Albert O. Hirschman, "Land Use and Land Reform in Colombia", *Journey Toward Progress: Studies in Economic Policymaking in Latin America* (Nueva York: W.W. Norton, 1977[1963]), 102-3.
14. Citas de Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 47-50.
15. Gonzalo Sánchez, "The Violence", 117.
16. "Plan Link", o "Plan Latin American Security Operation" en inglés.
17. Para un informe escrito por el estratega e ideólogo de las Farc, ver Jacobo Arenas, "La resistencia de Marquetalia", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 68-74. Ver también, José Joaquín Matallana, "El operativo", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 74-77.
18. Pizarro Leongómez, "Revolutionary Guerrilla Groups", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia*, 181-82.
19. Torres, quien estudió con el peruano Gustavo Gutiérrez en la universidad de Louvain, en Bélgica, inspiró el texto de Gutiérrez de 1967, *Liberation Theology*, como es discutido por Penny Lernoux en *Cry of the People* (Nueva York: Penguin, 1980), 29-31. Ver Alfonso Ojeda Awad, "El ELN", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 51-67; Carlos Medina Gallego, *ELN: una historia en dos voces contadas* (Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1996); Fabiola Calvo Ocampo, *Manuel Pérez: un cura español en la guerrilla colombiana* (Madrid: Vosa, 1998); Walter J. Broderick, *El guerrillero invisible*.
20. Para este grupo, ver "Ernesto Rojas", "EPL", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 43-50; Fabiola Calvo Ocampo, *EPL: una historia armada* (Madrid: Vosa, 1987) Álvaro Villarraga y Nelson Plazas, *Para reconstruir los sueños: una historia del EPL* (Bogotá: Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar, 1994). Para Julio Guerra, ver Jaime Zuluaga Nieto, "La metamorfosis de un guerrillero: de liberal a maoísta", *Análisis Político* 18 (enero-abril 1993), 103-16.
21. "Antonio", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 270-71; Pizarro, "Revolutionary Guerrilla Groups", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia*, 174-78.
22. Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, 256; Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, 77.
23. Leon Zamosc, *The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981* (Cambridge: CUP, 1986); Silvia Rivera Cusicanqui, *The Politics and Ideology of the Colombian Peasant Movement: The Case of Anuc (National Association of Peasant Smallholders)* (Bogotá: ONU/CINEP, 1987).
24. Fernando Cubides, "From Private to Public Violence: The Paramilitaries", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, 131;

Darío Betancourt y Martha L. García, *Matones y cuadrilleros*, 135.

25. César Augusto Ayala Diago, *El populismo atrapado, la memoria, y el miedo: el caso de las elecciones de 1970* (Bogotá: UN/Carreta Histórica, 2006).
26. Sutti Ortiz, *Uncertainties in Peasant Farming: A Colombian Case* (Londres, Athlone, 1973); Cinep, *Consejo Regional Indígena del Cauca: diez años de lucha, historia, y documentos* (Bogotá: Cinep 1978); Cristian Gros, *Colombia indígena: identidad cultural y cambio social* (Bogotá, CEREC, 1991); Jasmin Hristov, "Indigenous Struggles for Land and Cultura in Cauca, Colombia", *Journal of Peasant Studies* 32:1 (Enero 2005), 88-117.
27. Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, 255.
28. Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, 269-70.
29. Como *Tirofijo*, el general Valencia Tovar consideraba que la oligarquía colombiana había cometido un error estratégico al lanzar la Operación Marquetalia en 1964. Gonzalo Sánchez, "Guerra prolongada y negociaciones inciertas", en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región Andina*, 41-42.
30. Eduardo Pizarro, "Elementos para una sociología de la guerrilla colombiana", en *Guerra en Colombia: Actores armados* (Bogotá: UN, 2004), 66.
31. Pierre Gilhodes, "Movimientos sociales en los años ochenta y noventa", en Álvaro Tirado Mejía, ed. al., eds., *Nueva historia de Colombia*, vol. VIII (Bogotá: Planeta, 1995), 171-90.
32. Sobre el uso de la tortura bajo el gobierno de Turbay, ver Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 165-88.
33. Gonzalo Sánchez, "Intelectuales...Poder...Cultura Nacional", 54-55; Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 62.
34. Sobre M-19, ver Israel Santamaría en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, 78-86; Darío Villamizar, *Aquel 19 será* (Bogotá, Planeta, 1995); Laura Restrepo, *Historia de un entusiasmo* (Bogotá: Punto de Lectura, 2010[1986]); María Eugenia Vásquez Perdomo, *Escrito para no morir: bitácora de una militancia* (Bogotá: Intermedio, 2006 [1998]).
35. Ana María Bejarano, "La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá", *Análisis Político* 4 (mayo-agosto 1988), 56-70; Fernando Botero Herrera, *Urabá: colonización, violencia, y crisis del Estado* (Medellín: Udea, 1990); María Teresa Uribe, *Urabá: ¿Región o territorio?* (Medellín: INER, 1992); Clara Inés García, *Urabá: Región, actores y conflicto, 1960-1990* (Bogotá: CEREC, 1996); William Ramírez Tobón, *Urabá: los inciertos confines de una crisis* (Bogotá: Planeta, 1997).
36. Darío Betancourt y Martha Luz García, *Contrabandistas, marimberos y mafiosos: historia social de la mafia colombiana (1965-1992)* (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994), 47.

37. Sobre capitalistas rentistas bandidos, la política y formación del Estado en el sur de Italia y Sicilia, ver Pino Arlacchi, *Mafia Business: The Mafia Ethic and the Spirit of Capitalism* (Londres: Verso, 1986). Ver también Ciro Krauthausen, *Padrinos y mercaderes: crimen organizado en Italia y Colombia* (Bogotá: Espasa Hoy, 1998).

capítulo

6

Negociar la guerra sucia,

1982-1990

Es una guerra de todos contra todos... Es una guerra no solo punitiva sino también una guerra preventiva contra quien se supone puede llegar a ser subversivo... Es una guerra que juega con los que no están en ella, una guerra sucia... No es solo una guerra contra el Estado o del Estado contra la sociedad; es una guerra de la sociedad entera consigo misma. Es un suicidio colectivo.

Gonzalo Sánchez, "La degradación de la guerra" (1991) En 1982 el presidente conservador Belisario Betancurt dio inicio a un proceso de paz con los grupos insurgentes, iniciativa de la cual emergió una izquierda electoral amplia vinculada a la guerrilla, la primera expresión popular nacional desde el gaitanismo. En respuesta, redes paramilitares locales y regionales desafiaron a Bogotá al desatar una "guerra sucia" que se caracterizó por altos niveles de impunidad y prácticas como torturas, masacres, desapariciones y asesinatos políticos. Una vez rotas las

negociaciones de paz, la violencia política contra esta izquierda amplia —sancionada por el ejecutivo *ex post facto*— se disparó en proporción directa al poder creciente de los empresarios exportadores de cocaína en su condición de terratenientes.

NARCOPOLÍTICA Y PARAMILITARISMO

Similar al caso de la economía exportadora cafetera, el negocio del transporte y procesamiento de cocaína halló su eje central en Medellín con una sucursal muy importante en Cali. Esta nueva economía consiguió articular a la Colombia de las cordilleras Central y Occidental con la Colombia de los llanos Orientales y las costas del Pacífico y el Atlántico por medio del despegue de ciudades intermedias, como Florencia y Villavicencio, así como por la apertura de nuevos caminos y aeropuertos. Medellín, punto nodal, recobraba así su gloria industrial desvanecida, al convertirse en el centro del único producto de exportación que los colombianos fabricaban y controlaban a cabalidad, y sobre el cual se construyó un monopolio que se favoreció y consolidó con la migración antioqueña y caleña al sur de la Florida y Jackson Heights, en Queens. Esta situación facilitó redes de distribución propias a los reconocidos carteles de Medellín y Cali.¹

El creciente poder de la mafia se hizo público por primera vez en las elecciones de 1982 cuando Pablo Escobar y otros traficantes incursionaron en la política nacional, principalmente a través del Partido Liberal. Para entonces la cocaína ya había superado al café con aproximadamente el 30 % de las exportaciones colombianas totales.² En el Congreso Escobar se convirtió en diputado suplente por el Partido Liberal, bajo la tutela

de Alberto Santofimio, uno de los caciques más corruptos y reconocidos.³ Esta alianza se desarrolló después de que Escobar fuera expulsado del Nuevo Liberalismo fundado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, políticos de nueva generación que se oponían públicamente a la creciente influencia de los empresarios de la cocaína y dentro de su partido se disputaban la legitimidad con los caciques tradicionales, tales como Santofimio.

Vinculados a los órganos represivos del Estado, la Iglesia y los dos partidos, los paramilitares emergentes fueron capaces de beneficiarse de las exportaciones de cocaína a una escala mucho mayor que las Farc, aunque no de manera inmediata. Este aspecto tan lucrativo de su cruzada fue asumido desde sus mismos orígenes como escuadrones de la muerte de los carteles de droga y en las haciendas ganaderas del Magdalena Medio. En 1981 narcotraficantes como Escobar, los Ochoa, Carlos Lehder, Víctor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha organizaron el MAS (Muerte a Secuestradores), una fuerza paramilitar dedicada a librar al Magdalena Medio de “subversivos”. Basándose en los hallazgos del informe del procurador general de la República sobre el MAS, el entonces ministro de Justicia Lara Bonilla sacó a luz pública las conexiones en la formación de dicha agrupación entre oficiales del Ejército y policías activos y retirados, caciques electorales, ganaderos y narcotraficantes.

Al igual que *los pájaros* de la década de los cincuenta, el radio de acción del MAS en sus comienzos fue estrictamente regional, pero pronto se extendió. Gonzalo Rodríguez Gacha había trabajado en las minas de esmeralda de Boyacá como teniente bajo el mando de Gilberto Molina, región en donde cada *capo* tenía un aparato militar rudimentario para hacer cumplir el control sobre el trabajo y los competidores. Debido a esta trayectoria tanto

Rodríguez Gacha como Víctor Carranza sirvieron de puentes entre el paramilitarismo financiado por el narcotráfico en el Magdalena Medio y en las tierras bajas del sureste de Meta y Caquetá —es decir, entre lo que López Michelsen había llamado la primera Colombia y la segunda; entre el país de las Farc y el del Frente Nacional—. En 1983, como jefe de la Federación de Ganaderos (Fedegan) en Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa defendió al MAS en un debate público con Lara Bonilla en Puerto Berrío, con lo que construyó otro puente que se extendía desde Magdalena Medio hasta el noreste de Antioquia y Urabá⁴. Un esbozo regional de un narcoparamilitarismo era cada vez más visible.

El líder paramilitar que logró unificar los grupos regionales dispersos bajo un solo mando nacional, Carlos Castaño, describió una formación más internacionalista en su autobiografía del año 2001, *Mi confesión*. Cuenta Castaño que en 1983, siendo un exmiembro de la patrulla de reconocimiento del Ejército, con 18 años y sirviendo en las filas del MAS, su familia lo envió a Tel Aviv, Israel, para que recibiera entrenamiento. Al dar detalles de cómo ordenó y participó en masacres de civiles, Castaño insiste en que copió “el concepto de las fuerzas paramilitares de los israelíes”. Como lo describe más adelante, las lecciones aprendidas en el Líbano, la ribera Occidental (Cisjordania) y Gaza fueron aplicadas en el Magdalena Medio. Castaño trabajaba bajo la dirección de su hermano narcotraficante, Fidel, también conocido como *Rambo*, un socio de Pablo Escobar, que luego se dedicaría tiempo completo a comandar los escuadrones de la muerte paramilitares y a cultivar su colección privada de arte moderno. La *Casa Castaño*, como Fidel llamaba a su movimiento contrainsurgente regional, había comenzado su ascenso.⁵

En 1984 Escobar ordenó el asesinato de Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Betancur. La ofensa de Lara Bonilla había sido resistirse a la influencia de la mafia de la cocaína sobre la política del Partido Liberal al exigir que los jefes narcotraficantes como Escobar fueran extraditados a los EE. UU. La represión al negocio de la cocaína después del asesinato de Lara Bonilla ayudó a que esta economía ilegal saliera de la crisis en la que había caído durante este año. El día del entierro de Lara Bonilla, por ejemplo, en Calamar, Guaviare, el precio de un kilo de pasta de coca era de 200.000 pesos; una semana más tarde costaba 800.000. Las inversiones del narcotráfico en tierras, las cuales inicialmente se concentraron en el Magdalena Medio, crecieron rápidamente.⁶

En el ámbito regional los exportadores de cocaína, quienes para entonces habían invertido también en el área de las finanzas, la construcción y las comunicaciones, se fusionaron con las fuerzas de autodefensa campesina a fin de proteger sus propiedades recién adquiridas, mientras a la par se alineaban con los jefes del Partido Liberal en las regiones, así como con miembros del Ejército y la Policía activos y retirados. Cada vez más, esa nueva alianza de derecha fijaría los parámetros de la política colombiana.⁷

APERTURA

Apoyado por el Nuevo Liberalismo, el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) hizo el primer intento de negociar un cese al fuego y una agenda de paz con las insurgencias, mientras que su oponente liberal, López Michelsen, exigía la derrota militar de estas en la frontera con Venezuela.⁸ En algún momento seguidor de Laureano Gómez, a Betancur, por su temperamento

solitario dentro del establecimiento, lo conmovía la difícil situación en la que se encontraba la mayoría de los colombianos. Todo parece indicar que su aspiración de mejorarla no respondía a cinismo alguno. En 1982, como un primer paso, declaró una amnistía y liberó a más de mil presos políticos y guerrilleros encarcelados bajo el draconiano Estatuto de Seguridad del gobierno anterior de Turbay Ayala y el general Camacho. Betancur señaló que la desigualdad social era la culpable de las enfermedades producidas por las guerrillas e insistió en la supervisión a nivel ejecutivo, en vez de legislativo, de las negociaciones de cese al fuego (aunque finalmente cualquier reforma propuesta tendría que pasar primero por el Congreso). A la luz del presente y del pasado de la Guerra Fría colombiana, Betancur aparece como uno de los presidentes más lúcidos de la segunda mitad del siglo xx.

Esta serie de iniciativas fueron apenas el comienzo del periodo que Betancur llamó “apertura política”, concebido como una ventana a través de la cual podía vislumbrarse la desmilitarización de la vida política y social y producirse una discusión seria de problemas tales como la exclusión política, la falta de educación, de servicios e infraestructura, la expropiación violenta y la negligencia gubernamental en el campo, el desempleo y la caída de empleo en la industria manufacturera.

El fracaso del proceso puede explicarse fácilmente. Las guerras de contrainsurgencia financiadas por los EE. UU. en Centroamérica estaban entrando en fases críticas, por lo que el contexto internacional le puso freno a una solución política negociada al conflicto armado en Colombia. El embajador de los EE. UU., Lewis Tambs, acuñó el término *narcoguerrilla* en 1984, año en el que se implementó el cese al fuego, con lo cual sugería que las Farc eran una organización criminal, no política, y por tanto, no podía

entrar en una negociación⁹. Tras la visita de Ronald Reagan a Bogotá en diciembre de 1982, la “guerra contra las drogas” se convirtió en el tema principal en la diplomacia entre EE. UU. y Colombia, énfasis que repercutió en la política impulsada por Betancur puesto que esta no recibió nunca el apoyo del Ejército colombiano, institución que se oponía a las negociaciones de paz y a una salida política al conflicto.¹⁰ Por si fuera poco, Betancur tampoco recibió un apoyo decidido por parte de ninguna fracción de la clase dominante y su política de paz quedó entonces dependiente de la voluntad de un Congreso reacio a cambios estructurales.

Términos favorables a que las guerrillas se sumaran formalmente a la esfera política pública desencadenaron reacciones por parte tanto de las élites terratenientes locales como del alto comando de las Fuerzas Armadas colombianas, que lucharon contra la política del gobierno central usando el terror contrainsurgente financiado, en parte, por los ingresos de la exportación de cocaína —de manera similar a como los Contra nicaragüenses lucharon por derrocar el régimen nacional popular de los sandinistas—. ¹¹ En el extenso valle del Magdalena Medio, en los llanos Orientales, noreste de Antioquia y sur de Córdoba, las élites agrarias tradicionales junto a las nuevas élites comerciales, financieras e industriales de la cocaína, establecieron cabeceras regionales que operaban como centros de protección y operaciones de ejércitos privados e imperios rurales de contrainsurgencia al margen de la ley.

Así como durante La Violencia, más que las guerrillas en sí mismas presentes en las regiones mencionadas anteriormente, lo que irritaba a los narcotraficantes y a los terratenientes tradicionales por igual, eran los procesos de autoorganización de las clases subalternas de los cuales la insurgencia guerrillera era solo una faceta. La

autoorganización conducía a exigencias cada vez mayores de redistribución de la tierra, reorientación de los créditos y nuevas mejoras tecnológicas subsidiadas por el Estado. Encabezados por la Federación de Ganaderos (Fedegan), a través de la cual se organizaban las relaciones entre paramilitares y sociedad civil, los oligarcas terratenientes decidieron que ya era tiempo de callar las demandas populares. Esto significaba muerte a los campesinos sin tierra, a los pequeños agricultores endeudados, a los proletarios rurales y a los movimientos urbanos que exigían mejoras en la vivienda, los servicios y la educación pública.

Las tres agrupaciones insurgentes que entraron en negociaciones (Farc, EPL y M-19) previeron la represión pública y privada sancionada por el Estado y encausaron sus fuerzas en explotar las contradicciones del proceso de paz, para avanzar su propia posición en el ajedrez de la guerra, mientras llamaban la atención sobre los crecientes abusos militares y paramilitares. Firmemente arraigado en las sabanas de Córdoba y en las zonas bananeras de Urabá, el EPL puso énfasis en su fuerte presencia en los sindicatos y comunidades de estas dos regiones. Las Farc, por su parte, para el momento en que se había alcanzado un acuerdo, finales de 1984, habían logrado doblar su número de frentes: pasaron de catorce a veintiocho. Al año siguiente, 1985, el M-19 se retiró de la tregua no sin antes denunciar las violaciones del Ejército al cese al fuego pactado y esperar infructuosamente que una huelga general en junio de ese año se convirtiera en insurrección urbana. Para noviembre de ese año sus comandos organizaron un ataque al Palacio de Justicia en pleno centro de Bogotá, apresando a la Corte Suprema adentro y exigiendo negociaciones. Esta operación concluyó como uno de los mayores desastres históricos de la insurgencia armada en Colombia. Betancur cedió frente al alto mando

militar, que hubiera derrocado al Ejecutivo de haber sido ignorado.¹² El Ejército respondió entonces con un asalto de tanques y hombres que finalizó con la matanza de todos los allí retenidos. Esta masacre marcó el principio del final del M-19 como fuerza políticomilitar en tanto que su equivocación táctica fue tan grave en términos políticos como humanos.

Dentro del Gobierno la persona encargada de manejar los contactos con las insurgencias fue Jaime Castro Castro, cuyo padrino político era Pablo Emilio Guarín, cacique del Partido Liberal a cargo de la supervisión de la contrainsurgencia anticomunista en Puerto Boyacá, zona ganadera y principal puesto de avanzada paramilitar en el Magdalena Medio. Uno de sus campos de entrenamiento paramilitar, posteriormente provisto de mercenarios israelíes y británicos, fue nombrado en honor a Guarín. Durante el proceso de paz de Betancur el Magdalena Medio se convirtió en el corazón territorial del sector de la economía de la cocaína que controlaba el Cartel de Medellín. Allí se llevaba a cabo una “fumigación de la subversión” a través de desapariciones, desplazamientos y torturas; y oficiales militares y de la Policía activos y retirados, así como ganaderos y terratenientes, coordinaban acciones con la XVI Brigada en Puerto Berrío a lo largo de la frontera departamental de Boyacá y Antioquia.¹³

El arquitecto de la “paz” en el Magdalena Medio, general Farouk Yanine Díaz, era un oficial graduado de la Escuela de las Américas, partidario de retomar el área en manos de las Farc y el PCC por medio de una estrategia contrainsurgente que incluyera “corazones y mentes”, es decir, integrando al campesinado en el aparato represivo, bien fuese como informantes o como combatientes.¹⁴ Bajo este principio, el general Yanine Díaz tuvo éxito allí donde

el general Ruiz y otros fallaron durante las décadas de los sesenta y setenta. Pablo Emilio Guarín lo consideraba, por tanto, una superestrella del Ejército.

A medida que el proceso de paz se degeneraba, los desarrollos en el Magdalena Medio encontraban aprobación oficial. En 1985, en un discurso en la plaza Jorge Eliécer Gaitán de Puerto Boyacá, Betancur declaró al pueblo “un ejemplo para todos los colombianos de que la paz se puede lograr”. También destacó al general Yanine como “símbolo...de la resurrección del Magdalena Medio”.¹⁵ Para este año la paz fue entonces entendida de manera oficial como contrainsurgencia exitosa basada en la “limpieza política” y en la colaboración cercana entre civiles y Fuerzas Armadas. Las demostraciones ejemplares de violencia pública y privada se volvieron cada vez más comunes a medida que el MAS, siguiendo el patrón establecido en la Guerra Fría, hacía comulgar terror con impunidad.¹⁶

En el contexto del descalabro del cese al fuego y la “apertura política” a finales de 1985, las Farc conformaron la Unión Patriótica (UP) junto al PCC, partido diseñado como un frente civil que ayudara a consolidar una base de poder dentro del sistema político formal con miras a deponer las armas.¹⁷ La estrategia de política electoral armada trajo consigo grandes riesgos para los que apoyaban la UP, especialmente sindicalistas y cuadros del PCC. Pero para los activistas de casi todas las corrientes ideológicas comprometidos con el cambio social, la UP se convirtió en un terreno de encuentro para un radicalismo amplio profesado por una nueva generación que buscaba superar el sectarismo de la década de los setenta. La mayoría de ellos no tenía nada que ver con las Farc o el PCC, así que no se unieron a la doctrina leninista criolla de la “combinación

de todas las formas de lucha”, ni a la burocratización del partido. Los militantes de la UP trabajaban por la paz, la justicia social y el “cambio revolucionario” desde el terreno electoral. En su compromiso por encontrar un camino democrático a la revolución, se asemejaron a la UP chilena de los años sesenta y setenta, con la diferencia que su fracaso se tornaría aun más trágico.

Debido a la correlación de fuerzas, esta política electoral socialdemócrata, vinculada a la formación guerrillera más grande del país, resultó en el aumento del número de ejecuciones extrajudiciales de activistas políticos y militantes de izquierda, sobre todo en regiones fronterizas. La facción “ortodoxa” de las Farc así lo entendió y dio la batalla dentro de las filas por una militarización aun mayor.¹⁸ *Jacobo Arenas*, el único proletario en un Secretariado de abrumadora mayoría campesina, fue la fuerza motriz detrás de la UP. Su sueño no era encontrar un camino parlamentario al socialismo, como en el caso de Salvador Allende, sino construir una máquina moderna de guerra con la cual luchar contra el Estado colombiano y el imperialismo estadounidense.¹⁹ Dos años después de su fundación y en trágica confirmación de la posición ortodoxa de las Farc, la cual terminó convertida en premonición, habían sido asesinados alrededor de quinientos militantes de la UP, incluido el candidato presidencial Jaime Pardo Leal, quien en 1986 ganó más votos que cualquier otro candidato de izquierda en la historia colombiana.

Pardo supo que tanto la UP como los sindicatos tenían que ser independientes de las Farc si querían que las reformas buscadas se llevaran a término. Un disidente del PCC reflexionó de la siguiente manera: “Si no adoptábamos la democracia y la paz en una manera que fuera perfectamente abierta, sino que continuábamos jugando en

los dos niveles, con la UP y el partido en la esfera legal y las Farc en la guerra, estábamos destinados al holocausto”.²⁰ El ala ortodoxa de las Farc no tenía ninguna intención de dejar que su “instrumento político” se independizara, una estrecha visión que ganó adeptos a medida que los cuerpos asesinados se apilaban. En adelante y sin un análisis crítico, las Farc justificaron su existencia usando el término que las familias de las víctimas de la UP utilizaban para referirse a los homicidios en cadena: *genocidio político*.

Ahora se sabe que la mayoría de los asesinatos a los seguidores de la UP fueron responsabilidad de Rodríguez Gacha, Víctor Carranza y los hermanos Castaño, quienes tras adherirse a la posición que las Fuerzas Armadas colombianas asumieron frente a la UP, considerada el “ala desarmada de la subversión”, le declararon una guerra sin cuartel como forma oblicua de enfrentarse con las Farc. Los hermanos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado y asesinado por las Farc después de haber pagado el rescate, tenían razones personales para proseguir su guerra contra civiles. Inicialmente, al menos, Rodríguez Gacha y Carranza, su socio en la mafia de las esmeraldas, vengaron asuntos de negocios que salieron mal.²¹ Con estas venganzas a cuestas, los tres financiaron operaciones de “limpieza política” para eliminar físicamente o desplazar forzosamente a aquellos que abogaban por reformas democráticas radicales.

CLAUSURA

Dentro de las Farc solo Alfonso Cano, único intelectual en el Secretariado, veía cómo por medio del paramilitarismo la élite emergente exportadora de cocaína comenzaba a suplantarse a las viejas y atacadas clases dirigentes

terratenientes en las regiones fronterizas. El narcoparamilitarismo se compactó rápidamente como bloque opositor a las negociaciones de paz y a la apertura democrática de Betancur, ya que desde ese ámbito la movilización de masas y la política electoral progresista era prueba de un grado inaceptable del avance político insurgente. Con facciones en su contra dentro de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sectores ganaderos, narcotraficantes, políticos liberales y escuadrones de la muerte organizados, a Betancur le faltó el poder para insistir en la reforma social, la cual habría permitido aplacar las insurgencias. Al proceso de “apertura política” emprendido por el Estado central se le oponían las élites regionales reagrupadas en defensa de la “propiedad privada” y el “orden público”. Finalmente, el Estado central derrotado en sus iniciativas de paz, sancionaba “la paz” de los pacificadores.

La comunidad política nacional no fue ampliada para incluir a afrocolombianos, grupos indígenas, mestizos de la frontera agrícola, habitantes de las zonas periféricas de las ciudades, feministas, defensores de los derechos humanos o ambientalistas que trabajasen con la UP y, mucho menos, con la izquierda comunista que había forzado la apertura. En Urabá y Chocó, las comunidades campesinas, afrocolombianas o con una fuerte presencia afrocolombiana hicieron de la UP su vehículo político, al igual que las comunidades mestizas de fronteras en aquellas zonas controladas por las Farc tanto en el sur como en el sureste (Meta, Caquetá). Las insurgencias respaldaban muchas de las demandas de los ya mencionados grupos populares radicales. A pesar de los esfuerzos de las Farc por instrumentalizar esas luchas para sus fines organizativos, las movilizaciones de bases amplias fueron en su mayoría

autónomas, sin embargo, tachadas como “subversivas” y suprimidas con terror.

Una resistencia armada hipertrofiada contribuyó a la debilidad y vulnerabilidad de aquellos movimientos que contaban con mayores posibilidades de aportar a los cambios necesarios para una paz negociada y una salida política al conflicto armado. *Los pájaros* renacieron, esta vez bajo la apariencia del MAS y de los adolescentes asesinos que volvieron famosa a Medellín en el ámbito mundial. A diferencia de *los pájaros* de los cincuenta y sesenta, los sicarios de los años ochenta y noventa fueron contratados, protegidos e incluso asesinados por la mafia de la cocaína y no por el Partido Conservador.²² Con la “guerra contra las drogas” de Reagan —organizada desde Miami por el entonces vicepresidente George H. W. Bush, con el fin de combatir las insurgencias— el narcotráfico y la extradición serían el objetivo principal de las relaciones entre los gobiernos de los EE. UU. y Colombia.

Bajo la presión de Washington, el gobierno de Virgilio Barco —quien tomó posesión en 1986 con una victoria liberal baja en votos— buscó la extradición del Cartel de Medellín. En una frase muy citada, Escobar declaró que prefería una “tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos”. Él y el grupo de traficantes que lideraba, conocidos como los *Extraditables*, dependían de sus infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia (DAS, DOC, F-2) y respondían ordenando ataques a jueces, políticos y funcionarios. Aun así, algunos ministros de alto perfil, periódicos y facciones políticas dentro de ambos partidos expresaron su apoyo público a las fuerzas de “autodefensa” paramilitar, algunas de ellas con vínculos directos con el Cartel de Medellín.

Cuando el movimiento paramilitar cobró mayor intensidad entre 1987 y 1988, el homicidio ya se había

convertido en la principal causa de muerte entre la población masculina. Los movimientos sociales protagonizaron marchas masivas en las ciudades y en el campo. Exigían un cambio radical y en algunos casos se acercaron a la insurgencia guerrillera, particularmente a las Farc y al ELN. El alcance de los ataques de la derecha incluía a estudiantes, profesores y distinguidos profesionales tales como el Dr. Héctor Abad Gómez, médico y activista de derechos humanos del ala progresista del Partido Liberal. Para entonces el senador liberal y perenne candidato presidencial, Horacio Serpa señaló:

En Colombia realmente se ha instituido, por la vía de los hechos, el delito de opinión y se lo ha venido sancionando drásticamente, nada menos que con la pena de muerte. Esto es de una extraordinaria gravedad. Creo que es algo inaudito, consecuencia del radicalismo y de la forma extrema como se han llegado a tratar las confrontaciones políticas en Colombia.²³

Además de aquellos cuyas palabras e ideas eran consideradas “subversivas”, *los desechables* también estuvieron en la mira. Prostitutas, homosexuales, travestis, personas con enfermedades mentales y sin hogar, ladrones, vendedores de droga al detal y consumidores fueron asesinados en operaciones de *limpieza social* que llegaron a generalizarse en Medellín, Cali, Pereira, Bogotá y Barranquilla. Oficiales de policía activos y retirados se destacaron en estas actividades de *limpieza*, tanto como traficantes y paramilitares. La violencia urbana comenzó a pulular vertiginosamente.

Entretanto en muchas áreas rurales del sur las Farc habían comenzado su metamorfosis hacia un pequeño *Estado tributario*, al tiempo que secuestros, extorsiones, asesinatos selectivos y desplazamiento forzoso se integraron a su repertorio en aquellas zonas a donde

llegaron a asentarse.²⁴ A su vez, el ELN también crecía rápidamente. Para mediados de los años ochenta, el ELN encontró un renovado soporte material en la expansión del cobro de impuestos de protección tanto a la compañía alemana contratada para la construcción del oleoducto Caño Limón en Arauca, así como a las empresas petroleras transnacionales. El ELN encontró seguidores y reclutas en las universidades, en organizaciones comunales y vecinales y en sindicatos. Entre 1983 y 1988, creció de manera dramática y luego del proceso de paz se distinguió por su habilidad en el uso de tácticas terroristas, como sustituto de la insurrección, las cuales habían sido perfeccionadas en primera instancia por el narcotráfico e incluían secuestro, carros bomba y sabotajes a oleoductos e infraestructura en general.

Aunque en menor escala que las Farc, el ELN ejercía soberanías locales y regionales en amplias regiones de frontera agrícola y en zonas de enclave de las multinacionales. En un ataque solapado al ELN el cual no se había unido al cese al fuego y comenzaba a practicar el secuestro en proporciones aberrantes, las Farc denunciaron “el secuestro y todas las formas de terrorismo que atenten contra la dignidad y libertad humana”.²⁵ En 1987 las Farc y el ELN fundaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) con el M-19, el EPL, Quintín Lame y el pequeño grupo trotskista llamado PRT.²⁶ Sin embargo, las promesas de una unidad insurgente no duraron mucho tiempo, ya que el ambiente de competencia sectaria que había adoptado la izquierda desde la década de los treinta, perduraba.²⁷ No obstante, la CGSB le dio voz a un movimiento guerrillero que, al menos en términos económicos y militares, se había convertido en un formidable desafío para el ejercicio del gobierno central.

Aunque hemos visto que para ese momento ya las Farc habían iniciado su transformación organizacional hacia un pequeño Estado tributario perdiendo gran parte de su apoyo moral en las ciudades, es importante recordar cuánto se deterioró el conflicto a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, después del fracaso del proceso de paz con Betancur.

En 1988, por primera vez desde 1886, se institucionalizaron las elecciones locales como parte de un esfuerzo oficial por democratizar la política regional por medio de la limitación del control central. La UP obtuvo 16 alcaldías y 256 concejos municipales, un resultado inesperado que conllevó el aumento de la violenta competencia electoral, en otras palabras, del incremento de operaciones de limpieza política. Estas operaciones buscaban lidiar con el avance de la UP, que amenazaba con romper el monopolio bipartidista en el ámbito local, sobre todo en regiones fronterizas o periféricas. Los blancos de los ataques eran sindicalistas, organizadores comunitarios, estudiantes, profesores, activistas indígenas, periodistas de radio, maestros y, como siempre y sobre todo, campesinos.

En la región bananera, maderera y ganadera de Urabá, las masacres empezaron en abril de 1988, específicamente en La Mejor Esquina, donde murieron 36 campesinos bajo las órdenes de Fidel Castaño y del alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio.²⁸ En Remedios, área minera al noreste de Antioquia, donde las fuerzas de la *contrachusma* habían arremetido contra los gaitanistas en los años cincuenta, la UP ganó la alcaldía en 1988. Ese mismo año Fidel Castaño envió a su más metódico asesino, un viejo combatiente de las Farc del Magdalena Medio, para una arremetida desenfrenada.²⁹ Según investigaciones realizadas por la fiscalía, César Pérez, congresista liberal del pueblo vecino de Segovia, había sido uno de los autores intelectuales;

también se encontró que las fuerzas paramilitares de Puerto Boyacá habían participado.³⁰ En el valle del Sinú, en Córdoba, donde las juntas gaitanistas se habían formado luego del *Bogotazo*, el ELP y las Farc habían proliferado junto a fervientes movimientos cívicos, estudiantiles y campesinos. En 1987 Fidel Castaño compró tierras en Valencia, mandó a asesinar al alcalde de la UP, desplazó a sus seguidores y desde allí expandió su dominio político a través del terror y las masacres.³¹ De esta manera, los municipios de Valencia y Tierralta les fueron arrebatados a la UP y reconquistados por el Partido Liberal.

Los líderes del Partido Liberal se negaron a desaparecer de la política ante la presencia de un partido fundado por las Farc y el PCC. Si bien el Partido Liberal tenía mucho que perder con el surgimiento de la UP al aliarse tan estrechamente con la contrainsurgencia en el ámbito regional cayó en los mismos errores que el gobierno conservador durante La Violencia. En la masacre de La Rochela, en 1989, bajo las órdenes de Rodríguez Gacha, un grupo de sicarios asesinó a nueve investigadores judiciales que trabajaban sobre una masacre paramilitar cometida en el Magdalena Medio, acción que cambió las relaciones de los paramilitares con el gobierno central, el cual ahora declaraba ilegales a más de doscientos de estos grupos.

Posteriormente, en agosto de 1989, un sicario al servicio de Escobar asesinó al candidato presidencial de centroizquierda y líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán.³² Así como Lara Bonilla, Galán, tras haber sido presionado para recibir financiamiento de Escobar para su campaña, continuó denunciando públicamente a traficantes y expresándose a favor de la extradición a los Estados Unidos. Como gran favorito de las elecciones en 1990, el funeral de Galán se convirtió en motivo de luto nacional.

Precisamente en 1990, sicarios que trabajaban para Fidel Castaño y Rodríguez Gacha asesinaron a los dos candidatos presidenciales de izquierda: Carlos Pizarro, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo, de la UP.³³ En ambos casos el tema no era dinero o extradición, como en el caso de Galán, sino las exigencias que estos candidatos habían elevado en sus campañas a favor de la justicia social, la democratización del sistema político y la transformación de las estructuras económicas.

En 1989 uno de los enemigos más férreos de la UP, Rodríguez Gacha, fue dado de baja después de que el Cartel de Cali infiltrara su organización con las mismas fuerzas que cuatro años más tarde harían caer a Escobar sobre un tejado en Medellín. Fidel Castaño, responsable de las muertes de Pizarro y Jaramillo, continuó concentrando fuerza, fortuna y tierras en Antioquia y Córdoba, mientras a su vez cultivaba sus gustos por el arte moderno en París, Nueva York, Londres y Madrid. De los 42 cadáveres de la masacre de Puerto Bello, Urabá en 1990, 20 se hallaron en su hacienda de Córdoba, Las Tangas. Un paramilitar declaró haber torturado allí a las víctimas durante toda una noche.³⁴ En varias regiones tales como el Magdalena Medio (centro nacional de extracción petrolera y haciendas ganaderas), el noreste de Antioquia (sede de la Frontino Gold Mines y numerosas haciendas), las sabanas ganaderas del sur de Córdoba y los llanos Orientales, en donde también se extienden plantaciones de coca, la derecha paramilitar regional evitó que nuevas expresiones entraran a la política formal. Las bases de un movimiento nacional de contrainsurgencia habían sido establecidas sobre los cuerpos de los torturados, masacrados y desaparecidos, tan numerosos como para ser contados, tan peligrosos como para ser investigados.

Para finales de la década de los ochenta los paramilitares habían borrado del mapa electoral a la izquierda amplia, con lo cual reforzaron los controles políticos clientelistas y comenzaron el avance de la adquisición sistemática de vastas extensiones de territorio, principalmente a través de masacres y expropiación forzada. A la par, se enredaron cada vez más en el negocio de la cocaína, lo cual explica en parte la cercanía entre política y crimen organizado. Este proceso se vivió con particular intensidad en las tres regiones ya mencionadas con estrecha conexión con la violencia: el Magdalena Medio, el noreste de Antioquia y Urabá, tres laboratorios regionales de lo que más tarde se convertiría en un proyecto de contrainsurgencia nacional. Para finales de la década de los ochenta era evidente que a diferencia de las insurgencias, las mafias de la cocaína habían desarrollado la capacidad de infiltrarse en ambos partidos, la Policía, el Ejército y los servicios de inteligencia del gobierno. Con el uso sistemático de terrorismo urbano y asesinato de jueces y políticos, estas fuerzas al margen de la ley pusieron de rodillas al gobierno nacional. Antes de que el “ajuste estructural” neoliberal bajo la tutela del FMI debilitara de raíz la autoridad del Estado, un nuevo polo de soberanía ya había virado el centro del campo político hacia la derecha.

1. De hecho, el Cartel de Medellín era una serie de círculos concéntricos y traslapados; los vínculos entre ellos eran contingentes y frecuentemente efímeros. Para evitar confusiones, me ciño al uso convencional.
2. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 82.
3. Nacido en el municipio de Rionegro, Escobar y sus socios, entre ellos su primo, Gustavo Gaviria y el *Negro* Galeano, se criaban en barrios de la clase obrera y media baja en Envigado y habían ganado experiencia de negocios en las guerras de tabaco en Urabá a comienzos de la década de setenta. La élite de Medellín inicialmente les prohibió que compraran dentro de la industria y les negó la membresía en sus clubs exclusivos. Los capos de Cali, que venían de clase media y clase media alta, tuvieron mucho más éxito en integrarse discretamente en la oligarquía regional,

aunque Chepe Santacruz tuvo que construir su propio club después de que le fuera prohibida la entrada al Club Colombia.

4. Sobre Rodríguez Gacha, ver Jorge Enrique Velásquez, el *Navegante*, Cómo me infiltré y engañé al Cartel (Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1992).
5. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas*, pp. 124-40; Mauricio Romero, "Democratización política y contrareforma paramilitar", en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en los Andes*, pp. 337-76.
6. Alfredo Molano, *Selva adentro*, p. 100.
7. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas*, pp. 339, 345, 373.
8. Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia*, p. 275.
9. En 1989, el ex-embajador Tambs junto a Oliver North, el Mayor Gen. Richard Secord, John Poindexter (antiguo consejero de Seguridad Nacional), fueron declarados *personas no gratas* en Costa Rica bajo el gobierno del presidente ganador del Premio Nobel de la Paz, Arturo Arias. Como embajador, Tambs coordinó y cubrió a los Contra nicaragüenses (una fuerza contrainsurgente irregular financiada por el narcotráfico). Luis A. Restrepo, "The Equivocal Dimensions of Human Rights in Colombia", en Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 102.
10. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 182. Betancurt ofendió al alto comando designando a un general de la Fuerza Aérea para que dirigiese a las Fuerzas Armadas y tratando de reducir el poder del Ejército frente al de la Policía.
11. Para la geografía cambiante de la producción de narcóticos y la contrainsurgencia anticomunista en la Guerra Fría, comenzando con el apoyo de la CIA a la mafia Corsa en los muelles de Marsella hasta los nacionalistas chinos en la frontera birmana de Yunnan, China, ver Alfred W. McCoy, *The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade* (Nueva York: Lawrence Hill, 2003). Lo que es interesante para nuestros propósitos es que en Colombia, los terratenientes fundaron la contrainsurgencia rural, por supuesto a una escala mucho menor, décadas antes de que el negocio de la droga se convirtiera en la fuerza motriz económica.
12. Ver Ana Carrigan, *The Palace of Justice: A Colombian Tragedy* (Nueva York: Four Walls Eight Windows, 1993); para la versión de un sobreviviente, ver Humberto Murica Ballén, "Palacio en llamas", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 405-13.
13. El XI Frente de las Farc, caracterizado por su violencia arbitraria, secuestros e insoportablemente altos niveles de impuestos, creó un clima de hostilidad tal que las Fuerzas Armadas y los paramilitares fueron capaces de obtener la colaboración de aquellos civiles más opuestos a las extorsiones de las Farc. Ver Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares, y narcotráfico*, pp. 142-47.

14. Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares, y narcotráfico*, pp. 159-66. Curiosamente, este capítulo de la contrainsurgencia es pasado por alto en Charles Bergquist, "Waging War and Negotiating Peace: The Contemporary Crisis in Historical Perspective", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 208; y Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, pp. 300-305.
15. Charles Bergquist, "Waging War and Negotiating Peace", pp. 163, 232-33; también Alejandro Reyes Posada, "Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias", *Análisis Político* 12 (enero-abril 1991), pp. 35-41; Charles Bergquist, "Propiedad de la tierra y narcotráfico en Colombia", en Álvaro Tirado Mejía, *al.*, eds., *la Nueva historia de Colombia*, vol. VIII (Bogotá: Planeta, 1995), pp. 23-33; Fernando Cubides, "From Private to Public Violence: The Paramilitaries", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 127-49.
16. Yanine volvió a la Escuela de las Américas después de su triunfo en el Magdalena Medio, esta vez como profesor invitado. Más adelante, fue declarado culpable por planificar la masacre de veinte trabajadores bananeros en 1988 en Urabá. Garry Leech, *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention* (Nueva York: Information Network of the Americas, 2001), p. 27.
17. Estoy en desacuerdo con lo expresado por Alfredo Molano en ("Fórmulas", *El Espectador*, 15 de septiembre de 2002), quien argumenta que fue una estrategia "sabia". Aunque no es fácil explicar en detalle una alternativa viable, las Farc podrían haber aplicado las medidas estrictas de seguridad que la situación requería, para proteger así a su gente y a sus aliados en la UP de riesgos innecesarios. "Cuando comenzaron a asesinarnos, todos nos preguntamos: '¿Por qué no nos dieron entrenamiento militar?' Como un exmilitante de la UP expresó: "Nos están matando y ellos ¿qué hacen? Nada, es la respuesta". Steven Dudley, *Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia* (Nueva York: Routledge, 2004), p. 133.
18. Esta facción fue altamente dominante dentro del Estado Mayor de las Farc y su mayor representación estuvo en Jorge Briceño, también conocido como *Mono Jojoy*, el comandante militar de las Farc.
19. Este es el planteamiento del libro de Steven Dudley, *Walking Ghosts*, que ofrece una mirada más profunda a los debates que dividieron a los radicales de las Farc (también conocidos como los *Ortodoxos*) de los social demócratas (los *Perestroikas*) agrupados bajo la bandera de la UP.
20. Steven Dudley, *Walking Ghosts*, p. 82.
21. Steven Dudley, *Walking Ghosts*, p. 101. Aunque la contienda entre los narcotraficantes y las guerrillas generalmente se apunta a los secuestros, lo que llevó a la formación del MAS, las ganancias del negocio de la cocaína se encuentran en la raíz de la disputa. Aparentemente, las Farc habían robado mercancía de Rodríguez Gacha en uno de sus más grandes laboratorios de cocaína, Tranquilandia, descubierto en Meta por la Policía Nacional colombiana y la dea en 1984. Las 13.8 toneladas métricas de

- cocaína calculadas en 34 millones de dólares representaron la redada más grande de la historia. Ver Alonso Salazar, *La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo de narcotráfico* (Bogotá: Planeta, 2002), p. 111; Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 86.
22. Para sicarios y guerra urbana en Medellín, ver Alonso Salazar, *No nacimos pa' semilla* (Bogotá: CINEP, 1990); Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, "El sicariato en Medellín: entre la violencia política y el crimen organizado", *Análisis Político* 14 (septiembre-diciembre 1991), pp. 68-84; Ana María Jaramillo et al., *Cultura política y violencia en Medellín en los 90* (Medellín: Corporación Región, 1999); Ramiro Ceballos Melguizo, "The Evolution of Armed Conflict in Medellín: An Analysis of the Major Actors", *Latin American Perspectives* 28 (2001), pp. 110-131; Gilberto Medina Franco, *Historia sin fin: las milicias en Medellín en la década de los noventa* (Medellín: Instituto de Capacitación Popular, 2006).
 23. Horacio Serpa, "Guerra sucia, autodefensa y guerrilla", *Análisis Político* 2 (marzo-abril 1987), p. 140.
 24. Para un testimonio acerca del desarrollo de estas prácticas durante los inicios de la década de 1970 en el Frente VII de las Farc, controlado por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda, y el Estado Mayor, ver "Antonio", en Olga Behar, ed., *Las guerras de la paz*, pp. 267-75. El hecho de que Antonio haya terminado trabajando para la inteligencia colombiana no significa que su testimonio sobre su vida dentro de las Farc en los años setenta sea menos convincente.
 25. Alfredo Molano, "Fórmulas". El examen más minucioso del proceso de paz es "Insurgency and Negotiations: Defining the Limits of the Political Regime in Colombia", de Mark Chernick, Ph. D. Dissertation, Columbia University, 1991. Ver también, Olga Behar, *Las guerras de la paz*.
 26. A mediados de los años ochenta, en el Cauca, las Farc y la violencia militar y paramilitar en contra de las comunidades indígenas condujo a la formación de un grupo guerrillero regional, Quintín Lame, que depuso sus armas en 1991.
 27. Las relaciones entre las Farc y el ELN variaban en el tiempo y según la región. En 2005, en algunas áreas, tales como el sur de Bolívar o la Sierra Nevada de Santa Marta, las Farc y el ELN efectuaron ataques en conjunto sobre bases paramilitares, mientras que en el este (Antioquia y Arauca), las Farc le declararon la guerra al ELN.
 28. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 152. Cometidas durante la noche por hombres vestidos de civiles que llevaban capuchas, veinte masacres más sucedieron en Urabá para 1990.
 29. Dejó 43 personas muertas y 50 heridas en una noche. Hubo 154 soldados acuartelados en el Batallón Bomboná. En 1983 Fidel Castaño había sido acusado de masacrar a 20 personas en Remedios y en Segovia, para el momento en el que él y Carlos servían como informantes de dicho batallón.
 30. Mauricio Romero, *Paramilitares*, pp. 200-201.

31. Steven Dudley, *Walking Ghosts*, pp. 111-112, 147. En 1988 los paramilitares que trabajaban para los zares de la esmeralda (Rodríguez Gacha y Víctor Carranza), en coordinación con la VII Brigada del Ejército afincada en Villavicencio, asesinaron en Meta a 142 militantes de la UP [vers.] y desaparecieron a 11.
32. El padrino político de Escobar, Alberto Santofimio, fue arrestado en mayo de 2005 bajo los cargos de ser el autor intelectual del golpe, después de que el jefe de seguridad de Escobar, John Jairo Velásquez Vásquez, alias *Popeye*, ofreciera su testimonio en el Ministerio Público. *BBC News*, 12 de mayo de 2005. En 1994, Luis Carlos Aguilar, alias *El Mugre*, quien llevó a Santofimio al encuentro con Escobar, hizo lo mismo. *El Tiempo*, 16 de mayo de 2005.
33. Para un relato escalofriante de Carlos Castaño y su admisión abierta sobre la responsabilidad por las muertes de Jaramillo y Pizarro, ver Steven Dudley, *Walking Ghosts*, pp. 203-4.
34. Steven Dudley, *Walking Ghosts*, p. 151.

capítulo

7

Paz fragmentada, soberanía parcelada,

1990-1998

Si no podemos ni queremos modificar las circunstancias que determinan estas manifestaciones de miseria, marginalización y desesperanza, ¡entonces eliminemos a las víctimas!

Estanislao Zuleta, en Camacho y Guzmán, *Ciudad y violencia* (1990) La política electoral armada desatada al final de la “apertura política” siguió operando luego del cierre de este proceso, tras la eliminación de la izquierda amplia, lo que consolidó el avance de la derecha paramilitar. Para entonces grandes esperanzas se invertían en la Constitución progresista de 1991, aunque su aprobación coincidía con la tasa de homicidios más alta de la historia colombiana y la *bandolerización* del conflicto en las periferias urbanas y rurales. Paralelamente, grandes

extensiones de territorio se disputaban entre una pluralidad de “actores armados”, concepto que algunos analistas comenzaron a aplicar en el debate público, mientras el ajuste estructural neoliberal envolvía a las fronteras urbanas y rurales en una crisis económica. La falta de empleo, especialmente entre hombres jóvenes, hacía del negocio de los narcóticos la principal fuente generadora de empleos del país, y contribuía a los altos niveles de reclutamiento tanto por parte de las guerrillas como del paramilitarismo. En lugar de que las expectativas de empleo, educación, propiedad privada y participación política se vieran cumplidas, estas se fueron desvaneciendo al paso de violentas expropiaciones. Más y más personas fueron desplazadas de sus lugares de origen y residencia por la guerra civil y, en vez de traer consigo la apertura del sistema bipartidista, a la desmovilización de varios movimientos guerrilleros de pequeña envergadura le siguió la desaparición física y política de sus miembros o la incorporación de los mismos a las fuerzas paramilitares, responsables de cometer la gran mayoría de masacres y actos de violencia política de estos años.

Sin embargo, a pesar de las derrotas locales y la violencia masiva casi indiscriminada e infligida sobre sus seguidores civiles, la expansión insurgente sobrepasó el récord anterior. Lo que la insurgencia ganó en cuanto al control territorial y crecimiento numérico, lo perdió en legitimidad política; no obstante, las fuentes renovables de ingreso le permitieron prescindir de aquella legitimidad para consolidarse ni en el ámbito organizacional ni en el territorial. Así pues, la “paz fragmentada” no condujo al ejercicio de una mayor soberanía por parte del gobierno central, sino a lo contrario, a la “parcelización de la soberanía”.

NEOLIBERALISMO A LA COLOMBIANA

Así como las múltiples soberanías y los territorios fragmentados habían sido un rasgo característico del escenario político de los años ochenta, los saltos cualitativos por parte de las insurgencias y el paramilitarismo en cuanto al control de los recursos, la población, el territorio y las rutas de transporte marcaron los años noventa. Este avance fue el resultado de la aplicación del terror en conjunción con la puesta en marcha de operaciones de contrainsurgencia que progresivamente se fueron privatizando y subcontratando. Las élites tecnocráticas y modernizadoras vinculadas al capital estadounidense y sus instituciones de altos estudios contribuyeron activamente con este desarrollo en su búsqueda por reducir el papel directo del Estado en la represión. La “promoción de la democracia” fue el nombre dado a la mezcla de medidas económicas neoliberales, reformas políticas y “guerra contra las drogas” que caracterizó la situación del periodo posterior a la Guerra Fría.¹

César Gaviria, tecnócrata educado en Harvard y elegido presidente en 1990 como reemplazo de la candidatura del asesinado Luis Carlos Galán, convocó a una Asamblea Constituyente para producir una nueva y más democrática constitución política. Esta iniciativa constituiría el segundo intento por romper el largo estancamiento político característico de estas últimas décadas del siglo XX. Los grupos guerrilleros EPL, M-19, Quintín Lame y el PRT depusieron sus armas para participar en el proceso de paz y, como resultado de una renovada movilización indígena, la Constitución de 1991 otorgó derechos históricos de reconocimiento territorial a estos pueblos.² La nueva Carta Magna también buscó hacer más eficiente el sistema

judicial y limitar la autoridad del ejecutivo al introducir la representación proporcional para la elección del Senado, así como la elección popular de gobernadores departamentales, la cual estaba anteriormente en manos del presidente. Sin embargo, esta Constitución no apuntó a frenar los poderes militares y policiales arbitrarios, ni a romper el dominio del sistema bipartidista, ni a ponerle frenos a la violencia de los terratenientes en las regiones.

Los esquemas de Gaviria tenían muy poco del impulso moral que caracterizó los esfuerzos de Betancur; es más, produjeron resultados amargos. Los rígidos suministros para la descentralización que la Constitución determinó, los cuales incluían transferencias obligatorias del gobierno central hacia las regiones, fortalecieron el poder de los dirigentes locales de los partidos, en especial a los liberales, e incrementaron la corrupción política que finalmente condujo al país a un déficit fiscal.³ Por otra parte, la descentralización abrió un espacio para la contienda electoral armada, puesto que ahora los gobernadores departamentales así como los alcaldes debían ser elegidos en las urnas. Gracias a este nuevo requisito, los paramilitares entraron a competir con el poder insurgente tomando el control de las instituciones y puestos regionales y locales a través del Partido Liberal, principalmente, tal como los conservadores lo habían hecho décadas antes, después de 1946.

El Partido Liberal recuperó todos los municipios donde la UP había dominado a finales de los años ochenta, en coalición con el nuevo EPL, movimiento que una vez en la vida civil a mediados de la década de los noventa trabó alianza con dueños de empresas bananeras, el Ejército, los paramilitares y los dirigentes del Partido Liberal. Este bloque aceptó tanto el nuevo vehículo político del EPL como un sindicato fortalecido a cambio de que estos no

disputaran su monopolio sobre la política regional o fueran en contra de la concentración de la riqueza y la tierra.⁴ Aunque gracias a este nuevo entramado de alianzas políticas el Partido Liberal recuperó su posición en regiones fronterizas tales como Urabá, también es cierto que paulatinamente se fue volviendo más dependiente de su alianza con los paramilitares vinculados al tráfico de drogas.

Los artículos más democráticos y progresistas de la Constitución de 1991 eran en la práctica letra muerta, en tanto que no había un *sujeto político* suficientemente poderoso que garantizara su ejecución.⁵ La Alianza Democrática M-19 perdió importancia una vez que sus antiguos militantes fueron asesinados o cooptados por la política tradicional. En Urabá, los antiguos cuadros políticos del EPL se integraron al aparato de seguridad paramilitar de Fidel Castaño.⁶ El terror sectario sobre la izquierda fortaleció las posiciones paramilitares y militares en enclaves estratégicos como Urabá. Después de la desmovilización del EPL en 1991, las Farc lucharon por ocupar sus territorios y hacerle frente a su influencia en el sindicato de los trabajadores bananeros, estrategia que empujó a los militantes del EPL a los brazos de su antiguo enemigo, Fidel Castaño, y condujo al incremento de los ataques contra el sindicato desde ambos lados. Entre 1991 y 1994, solo en Urabá cayeron abatidos 274 militantes de Paz y Libertad (el partido político del EPL), principalmente a manos de las Farc.⁷ En otro trágico episodio, las milicias urbanas del EPL asesinaron a 17 activistas del PCC en diciembre de 1993, por lo que las Farc masacraron a 35 seguidores del EPL.

Los signos de “bandolerización” y “lumpenización” del conflicto armado eran inequívocos. A finales de la década

de los ochenta e inicios de los noventa, las tasas de secuestro y homicidio batían récord mundial y los límites entre violencia política y criminal se volvían cada vez más borrosos. En 1991, aproximadamente 4000 homicidios fueron la causa del 42 % de todas las muertes en Medellín, lo que representó una tasa de 325 personas asesinadas por cada cien mil habitantes, es decir, cinco veces más que Río de Janeiro y ocho veces más que São Paulo.⁸ En América Latina solamente Perú había sido testigo de un grado comparable de ascenso y descenso del conflicto armado, con la diferencia de que la economía de Perú, al igual que la de otros países de la región tras la crisis financiera de 1982, colapsó, mientras que la colombiana se conservaba dentro de los estándares de crecimiento neoliberales.

Gaviria puso en marcha la plataforma que López Michelsen anunció en los años setenta: transformar la economía nacional hacia un modelo de negocios agrícolas de exportación, manufactura con capital intensivo, especulación de bienes raíces rurales y urbanos y explotación de recursos naturales por parte de empresas multinacionales tales como petróleo, carbón y oro. A pesar de la multiplicidad de tipos de violencia, y en contraste con el resto de Latinoamérica, la entrada de narcodólares en la economía permitió un crecimiento sostenido en los años ochenta. Sin embargo, Gaviria consideraba que Colombia aún no había absorbido por completo el mensaje del *Consenso de Washington*, por lo que lanzó un programa de reestructuración neoliberal a gran escala dirigido a disciplinar a la clase media del sector público, a la clase trabajadora organizada y al campesinado. Con la ayuda de Álvaro Uribe, para entonces senador del Partido Liberal, Gaviria degolló la fuerza laboral del sector público al privatizar la salud y la seguridad social, estableció la autonomía del Banco de la República, liberó la moneda y el

sector financiero, redujo los aranceles y las cuotas de importación, incrementó el impuesto sobre el volumen de ventas y flexibilizó el trabajo. También se firmaron contratos de exploración de petróleo con multinacionales, sobre cláusulas incluso más permisivas que las anteriores.

Un efecto inicial de dicha reestructuración neoliberal fue alimentar el *boom* de la construcción financiado por el narcotráfico, lo que produjo un aumento de la inflación. Un reporte de la Ocede sobre las reformas de Gaviria concluía que, de todos los sectores productivos, los carteles de la droga estaban entre los que se mostraban más a favor de las políticas neoliberales, incluso mucho más que otros grupos, como industriales, terratenientes, exportadores o proveedores de servicios financieros, con excepción de las Fuerzas Armadas o la Iglesia.⁹ Estos sectores prosperaron a expensas del dinero y el alimento de los productores agrícolas, quienes se vieron amenazados con la ruina debido a los bajos aranceles sobre las importaciones. La narcoburguesía también ayudó a sepultar lo que quedaba de la industria manufacturera nacional, en tanto que las importaciones de contrabando a través de Colón, Panamá, demostraron ser la principal salida del lavado de dinero.¹⁰ En 1988, se estimó que mil millones de dólares, es decir, el 22 % del total de importaciones, ingresaban por esta vía con el apoyo o complicidad de políticos y oficiales aduaneros. Las políticas industriales, agrarias y financieras eran dictadas en gran medida de acuerdo con los intereses de la narcoburguesía, con lo cual se aceleró la reorientación hacia un capitalismo rentista basado en la reacción organizada en los ámbitos regionales. Bajo el gobierno de Gaviria la llamada apertura económica fue un "*fait accompli* años antes de que esta se institucionalizara formalmente".¹¹

Aunque a primera vista Gaviria buscó negociar con las Farc, para mayo de 1992 estaba produciendo un giro a la derecha al impulsar una “guerra integral” basada en el bombardeo y ocupación de sus cuarteles generales. A la par buscó negociar con los traficantes, a quienes se les habían dado ligeras sentencias e inmunidad de extradición a cambio de confesiones y colaboración con el gobierno colombiano. Luego de recibir garantías de que la extradición sería prohibida en la nueva Constitución en 1991, Escobar se rindió y fue puesto en una prisión que él mismo construyó: la *Catedral*, una penitenciaría dotada con sus propios guardaespaldas y de la cual escapó en septiembre de 1992. Para ese momento, paralizado por la paranoia, Escobar ya había asesinado a muchos de sus socios más cercanos y los había enterrado en los alrededores de su cárcel. Los sobrevivientes de esta persecución se unieron en su contra junto al Cartel de Cali, la DEA, la CIA, el FBI, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia colombianos, sectores del Ejército, el DAS (equivalente de la CIA en Colombia) y los Servicios de Inmigración y Aduana de EE. UU.¹²

Si bien el ataque frontal de Escobar sobre el Estado forzó a este último a ceder, el poder no se encontraba lo suficientemente fragmentado como para que un solo empresario aguerrido pudiera sobrevivir a las fuerzas combinadas de sus numerosos enemigos. El Cartel de Cali empleó una estrategia distinta a la empleada por Escobar, lo que garantizó su supervivencia temporal en la guerra en su contra. En vez de basarse en el terrorismo urbano para luchar contra su extradición a los Estados Unidos, como lo había hecho Escobar, el Cartel de Cali se infiltró en la política, las instituciones y la alta sociedad. Sus inversiones tenían más diversidad, su comportamiento era discreto y, a diferencia de Escobar, nunca experimentaron con el

populismo antiimperialista, ni donaron viviendas o patrocinio disperso a clientes subalternos o movimientos políticos regionales.¹³

La muerte del Cartel de Medellín fue acelerada por las inclinaciones izquierdistas de Escobar, pero, por encima de todo, por su incapacidad para impedir que este se fracturara ante la presión de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Escobar aterrorizó a viejos socios de los cuales sospechaba que trabajaban con las autoridades, mientras los que lograron sobrevivir conformaron el grupo de Perseguidos por Pablo Escobar, *los Pepes*, en alianza con el Cartel de Cali y las ya mencionadas agencias gubernamentales de Colombia y Estados Unidos. Como en temporada de cacería, *los Pepes* dirigieron operaciones de terror en Medellín: bajo el liderazgo de Fidel y Carlos Castaño torturaron, asesinaron y desaparecieron a familiares, amigos y empleados de Escobar, a las familias de estos y, en general, a todo aquel que permaneciera leal al capo.

En esta confrontación entre el barón de la cocaína y poderosos latifundistas, el gobierno colombiano delegó la represión a estos grupos, los cuales también venían encargándose de la lucha contra las insurgencias en coordinación con los organismos de seguridad de EE. UU., el Estado colombiano y las fuerzas de inteligencia. Esta asociación entre gobierno, contrainsurgencia y crimen organizado debilitó la autoridad y soberanía estatales, a la vez que consolidó la influencia de los empresarios de los narcóticos en la política nacional. La muerte de Escobar en 1993 solo significó que el negocio quedó acéfalo provisionalmente.

Gracias al futuro presidente Andrés Pastrana y al gobierno de los Estados Unidos, la presidencia del liberal Ernesto Samper (1994-1998) estuvo envuelta en

acusaciones sobre contribuciones multimillonarias a su campaña por parte del Cartel de Cali. Los nexos de Samper con los estupefacientes permitieron a los Estados Unidos negar la certificación a Colombia en su lucha contra las drogas, dismantelar el Cartel bajo la supervisión estadounidense e inclusive suspenderle la visa a Samper. A mediados de la década de los noventa, luego de que los dos carteles fueran dismantelados, cientos de sindicatos pequeños y descentralizados proliferaron y su influencia siguió ejerciéndose, especialmente en el Partido Liberal. Colombia se había convertido en el segundo productor más grande de hojas de coca después de Bolivia, cuya producción cayó vertiginosamente a partir de 1997 como resultado del Plan Dignidad, un programa de erradicación manual patrocinado por el gobierno estadounidense y llevado a cabo por “el dictador elegido”, presidente Hugo Banzer Suárez.

Tal como sucedió durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos y el Ejército colombiano abogaron por una solución militar al conflicto político de Colombia. El futuro de la “guerra contra las drogas” se apostó en Guaviare, Caquetá y Putumayo entre 1995 y 1996 bajo la Operación Esplendor (antesala del Plan Colombia), una campaña de fumigación que usaba glifosato sin desarrollo alternativo. Como respuesta, entre 1996 y 1997, las Farc organizaron a los cultivadores de coca para protestar en contra de las fumigaciones y las promesas de inversión social incumplidas, lo cual demostró que aún tenían fuertes nexos con los pobladores de la frontera y los recolectores de coca (*raspachines*). En Putumayo, los cultivadores de coca fueron acusados de “amenazar la seguridad nacional”. La idea era presentar a las Farc como una narcoguerrilla a fin de descalificarla como potencial interlocutor en negociaciones de paz, táctica empleada por primera vez

por el embajador Lewis Tambs a principios de los años ochenta. Bajo este esquema, las Farc debían considerarse como un “cartel” más, por tanto, un actor criminal en vez de político.¹⁴ Al menos en teoría, las fumigaciones menoscabarían su base económica.

Entretanto, un severo ajuste de la política monetaria por parte del Banco de la República afectó la inversión llevando a la industria de la construcción a una recesión. El FMI, que en 1998 hizo un llamado para superar la peor crisis económica de Colombia desde los años treinta, no pudo mostrarse más compasivo: su programa de reforma estructural de 1999, el cual estuvo acompañado de un préstamo de cerca de 1900 millones de dólares, apuntó a la “flexibilidad” en vista de los “eventos que estaban fuera del control gubernamental”. Como muestra del colapso de la base productiva en las áreas rurales, el porcentaje del PIB arrojado por la producción agrícola descendió del 43 % en 1980 al 13 % en 1998, mientras que en 1996 las exportaciones de café representaron solo el 3 % del PBI. Durante la década de los noventa, las importaciones de alimentos se triplicaron de 215 millones de dólares a 715 millones.¹⁵ El área de cultivos de coca también se triplicó en la segunda mitad de aquella década. La producción de amapola pasó de 0 toneladas métricas en 1989 a 61 en 1998, al tiempo que Colombia seguía aportando el 40 % de las importaciones de marihuana a los Estados Unidos, así como el 90 % de las de cocaína.

Debido al efecto conjunto de la constante demanda de consumo en los EE. UU., la “guerra contra las drogas” y las políticas neoliberales, el crecimiento de la economía fue fenomenal. Los agricultores de la coca se convirtieron en la solución no deseada a la prolongada crisis del campo. El fracaso de la economía en los cultivos comerciales comenzó en la década de los sesenta y se deterioró a lo largo de los

años setenta con el cambio hacia la agroindustria (soya, algodón, arroz). Dentro de este contexto y tras dos décadas de intensificación de la violencia política en el campo, para los años noventa, la coca ya se había coronado como el único cultivo suficientemente rentable para superar los altos costos de transporte producto de la falta de infraestructura en regiones de frontera interna como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar, Santander y, en menor medida, Antioquia, Huila, Tolima, Cauca y Meta.¹⁶ Esta expansión de los cultivos produjo hasta tres cosechas por año permitiendo que los campesinos recuperaran sus inversiones en uno o dos años. Para 1998, el 80 % de la superficie de las áreas controladas por las Farc en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés estaban cubiertas de coca.¹⁷

La conexión entre las políticas agrícolas neoliberales, las cuales exacerbaron el declive del campo a largo plazo, y la expansión de cultivos ilícitos bajo la soberanía insurgente no pudo haber sido más directa. Un campesino del sureste de Bolívar señaló brevemente:

Para comercializar un saco de papa o de yuca al campesino le cuesta entre tres mil y cinco mil pesos (alrededor de \$3,50) y se vende en el mercado entre diez mil y doce mil pesos, dependiendo de la demanda... la coca es mucho más fácil de sembrar y procesar... no hay necesidad de transporte ya que los narcotraficantes la compran en el pueblo a 1000 pesos el kilo de pasta y lo exportan a otros destinos.¹⁸

En este contexto, las Farc suministraron estabilidad mínima para aquellos que de algún modo pudieron haber perecido ante la liberalización de la agricultura y el huracán de la violencia rural.

AVANCE INSURGENTE

Durante la década de los noventa, tanto las Farc como el ELN, las dos organizaciones insurgentes que aún sobrevivían, encarnaron la paradoja central que significaba su creciente deslegitimación política acompañada de un sorprendente crecimiento organizacional. Entre 1970 y 1980, las guerrillas contaron con la simpatía de una significativa minoría de referentes culturales colombianos, mientras mantenían vínculos con algunos sindicatos. En noviembre de 1992 un grupo de escritores e intelectuales progresistas de gran renombre en el país, entre los que se contaba al laureado Gabriel García Márquez, escribió una carta abierta a ambas organizaciones en la que se les hacía un llamado a reconocer que era hora de pasar la página de la historia, deponer sus armas y seguir la reforma por vías pacíficas.¹⁹

La coyuntura pos Guerra Fría se inauguró con la derrota electoral de los *sandinistas* y el triunfo de los neoliberales financiados por los EE. UU., en Nicaragua, el estancamiento del FMLN en El Salvador, la decadencia de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y, por supuesto, distante pero no menos importante, el colapso de la Unión Soviética. Mientras que en otros lugares los insurgentes tendieron a hacer tratos con gobiernos neoliberales en nombre de la democracia electoral, el libre mercado y la globalización, las Farc y el ELN por el contrario, se concentraron en el aumento de la extracción de rentas y en el ejercicio del poder político en el ámbito local. Como en el pasado, su respuesta al aislamiento en el que las tendencias globales y hemisféricas los ubicaban fue aislarse aún más en los laberintos del poder local. La búsqueda del poder estatal se perdió de vista para darle

paso a la posibilidad de controlar concejos municipales y alcaldías.

A las Farc, específicamente, el cobro de impuestos al mercado de pasta de coca las posicionó en los primeros eslabones del circuito de mercancías que culminaban en las narices de Estados Unidos y Europa. Durante el largo reinado de los carteles de Medellín y Cali la producción de pasta base se llevó a cabo en las tierras bajas cocaleras de Bolivia y Perú —y en un grado mucho menor en el territorio de las Farc al sur de Colombia— en donde la hoja de coca era transformada en pasta por familias de agricultores y trasladada por vía aérea a laboratorios atiborrados de productos químicos en medio de las selvas. Allí era convertida en cocaína para luego ser transportada a depósitos de almacenamiento y, finalmente, hasta las ciudades de Colombia y Estados Unidos en carros, camiones, autobuses, botes, aviones privados y comerciales. Debido a que las Farc eran quienes ocupaban el territorio por fuera de los centros urbanos, fueron ellas quienes impusieron las reglas de las transacciones, sin poder con ello, sin embargo, supervisar directamente la producción de cocaína o asegurar las redes de distribución en el exterior. Así pues, contrario a lo que el término *narcoguerrilla* sugiere, las Farc eran todo menos un cartel en el sentido estricto de la palabra.

Por el contrario, las Farc lograron consolidarse como un pequeño Estado paralelo en las regiones cocaleras, en donde estaban a cargo de recolectar impuestos e impartir justicia, por lo que muchos narcotraficantes establecieron relaciones de trabajo con ellas, lo cual puso de manifiesto el papel que jugaban en el proceso general de refinamiento de pasta de coca y cocaína. Sin el surgimiento de la economía de la pasta de coca en el sur y sureste del país durante los años setenta y ochenta las Farc no habrían

tenido ni una red geográficamente extensa de clientes semi-dependientes en las fronteras, ni un fondo de guerra multimillonario con el cual expandir sus operaciones. En esta medida, el Ejército colombiano se habría visto enfrentado a la tarea de tomar una región aislada, en vez de alrededor del 40 % del territorio nacional dividido por tres cordilleras e innumerables ríos.

Durante muchos años, las Farc regularon el mercado de la pasta de coca y sin su monopolio relativo sobre la violencia los traficantes habrían podido destruirse entre sí en interminables guerras en la selva. La imposición de la ley y el orden, así como el mantenimiento de una reserva de apoyo en las regiones fronterizas, le permitió a las Farc obtener exorbitantes sumas por medio del cobro del impuesto a la pasta de coca conocido como el gramaje. Esta táctica vino a sumarse a un patrón de extorsión establecido durante *La Violencia* y bajo el cual eran empleados métodos como el secuestro, la *vacuna* (un impuesto de guerra) y el *boleteo* (cartas amenazantes exigiendo dinero) a fin de conseguir fondos.

Sin embargo, para explicar por qué década tras década el Estado había fracasado en el debilitamiento y ruptura de las bases de la resistencia armada, otros aspectos más cruciales deben sumarse al análisis. Aunque basadas en el clientelismo y las rentas, los lazos de las Farc con muchas comunidades en las regiones del sur y sureste eran de vieja data. Ellas habían sido por décadas la fuerza armada del movimiento campesino en territorios escasamente poblados de los cuales el gobierno colombiano nunca se había encargado, lugares sin infraestructura ni servicios públicos que no contaban siquiera con clientelismo partidista, pero que habían experimentado sucesivos auges de productos naturales como quinina y caucho; territorios poblados como resultado de olas migratorias recientes, particularmente a

partir de la década de los cincuenta cuando se llenaron de individuos y familias que escapaban de la violencia de las tierras de montaña. Para mediados de la década de los sesenta, las Farc respaldaron el agrarismo radical que había marcado la década de los treinta y cuarenta y, con la excepción del pcc, al cual estaban orgánicamente vinculadas, antes de la creación de la Anuc en 1968 y del Cric en 1971, las Farc eran la fuerza más importante haciendo un llamado al gobierno para que cristalizara las promesas de reforma agraria y desarrollo de infraestructura, para que creara cooperativas de crédito y proporcionara asistencia técnica y protección de precios.

Las Farc conservaron el legado de la democracia social agraria de los años treinta y cuarenta combinándolo con las tradiciones de venganza propias del periodo de La Violencia de los años cincuenta y sesenta, formas políticas que también aplicaron en sus reductos históricos en Meta, Guaviare y Caquetá, donde su autonomía estaba más consolidada. Esta democracia social autoritaria, en el contexto de la economía ilícita de la cocaína de las décadas de los setenta y ochenta, proporcionó una medida de seguridad y una garantía de los medios de subsistencia para aquellos que, de lo contrario, no las habrían tenido. La ausencia del Estado permitió a las Farc establecer redes verticales de clientelismo armado, pero además las condujo a convertirse en constructoras y garantes de la escasa infraestructura de estas zonas (puentes, caminos, sistemas de riego, etc.), así como en supervisoras del suministro limitado de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, atención médica, educación, etc.), de modo que gobernaban vastos territorios y sus poblaciones dispersas.

En la década de los ochenta la genuina simpatía en algunas de las “zonas liberadas” dio a las guerrillas un apoyo social importante. En esa misma década, en Meta,

Guaviare, Caquetá y Putumayo la esperanza de la reforma agraria fue echada al olvido en la medida en que la economía de la coca desató una “fiebre del oro”. Tanto en Meta como en Guaviare las Farc se constituyeron en la única protección disponible contra la brutalidad y arbitrariedad de los traficantes.²⁰ Los mecanismos de control laboral establecidos por medio del endeudamiento y los contratos que se hacían valer so pena de asesinato (fueran estos heredados del boom del caucho en el sureste del país o trasplantados de las minas de esmeraldas del altiplano de Boyacá) hacían de las Farc árbitros indispensables de los mercados laborales.²¹

Hasta hace poco, la violencia de las Farc se había desarrollado según reglas predecibles, si bien implacables, bajo las cuales se garantizaban el “orden” y la “estabilidad” en la frontera ante el “caos” y la “incertidumbre” que el terror de los narcotraficantes desencadenaba, particularmente en cuanto a precios de la pasta de coca. En aquellas zonas fronterizas del sur y el sureste pobladas por campesinos que huían de la violencia política y la crisis agraria de las tierras altas, las Farc se asignaron tareas que el Estado no había sido capaz de llevar a cabo. Allí, ellas eran el gobierno local y regional y medidos por la vara de la selectiva memoria colectiva, inclusive en sus peores momentos, eran preferibles al gobierno nacional o a los traficantes. Pero su expansión territorial y financiera vino acompañada de mayor número de secuestros, asesinatos selectivos y carros bomba, tácticas que Escobar había convertido en rutina. Como en otros casos, el terror estatal proporcionó el combustible sin el cual el terrorismo insurgente no habría podido esparcirse, ambos complementados por el narcoterrorismo de la mafia.

Mientras que para 1978 las Farc tenían 17 frentes en regiones periféricas, en 1994 ya contaban con 105, los

cuales operaban en un 60 % de los 1071 municipios colombianos.²² Su liderazgo seguía estando dominado por minifundistas campesinos (un intelectual de clase media y un banquero oligarca eran las únicas excepciones). Solo el 10 % de las filas de las Farc eran de “clase media”, un 20 % era clasificado como “clase trabajadora”, “estudiantes” o “maestros de escuela” y un 70 % de sus miembros eran considerados “campesinos” —principalmente proletarios rurales que trabajaban como agricultores recolectores de coca—. Mientras que entre 30 % y 40 % de los combatientes y líderes de los niveles medios eran mujeres, los hombres mantenían el control sobre el alto mando.

Para 1996, el ELN tenía entre 4000 y 5000 combatientes, grandes milicias urbanas y redes de apoyo, así como una presencia en 350 municipios. Sus principales fuentes de ingreso provenían de los impuestos de protección, extorsión, robos de bancos y secuestros.²³ Debido al rechazo que el ELN mostró frente al negocio de la cocaína, desarrolló una notable dependencia a los secuestros, con lo que ganó eternas enemistades en las clases media y dominante, particularmente en el ámbito regional. Al igual que en organizaciones guerrilleras latinoamericanas anteriores (con las excepciones de las Farc y el EZLN en México), las posiciones de liderazgo de alto nivel eran del dominio casi exclusivo de intelectuales de clase media, mientras que los comandantes eran casi exclusivamente campesinos. Los reclutas provenían principalmente de familias minifundistas, aunque también se tuvo éxito atrayendo a estudiantes y jóvenes desempleados de ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Valledupar y Cúcuta. Con la excepción del Comité Central —que al igual que el Estado Mayor de las Farc, continuaba siendo bastión de exclusividad masculina—, el 20 % de los líderes

del ELN eran mujeres, una cifra a duras penas proporcional al número de mujeres combatientes en sus bases.

Al tiempo que se expandían, tanto las Farc como el ELN sufrieron procesos de racionalización burocrática. El principal objetivo de cada organización era consolidarse y proyectarse a sí misma.²⁴ Ante la carencia de redes de transporte y distribución amplias, las Farc se encontraron en posición de desventaja para competir con las AUC en los mercados internacionales de la cocaína, sin embargo, estaban en capacidad de ofrecer alimentos, vestido, empleo, armamento de alta tecnología, un teléfono celular y un salario mensual a aquellos jóvenes campesinos empobrecidos que no querían ser soldados del gobierno colombiano, ni colaboradores, ni paramilitares. A finales de los años noventa, la edad promedio entre los combatientes de las Farc era de diecinueve años y el salario mensual era de noventa dólares.²⁵

Otro elemento que contribuyó con el crecimiento de las guerrillas fue la ruptura de las familias rurales en tanto unidad económica-cultural capaz de dar sustento y protección a sus miembros. El neoliberalismo había creado una generación de jóvenes rurales sin horizontes futuros ni seguridad personal; las Farc y el ELN les ofrecían la posibilidad de obtener ambos.²⁶ Puesto que en el campo las opciones eran extremadamente limitadas para las mujeres jóvenes, las Farc, en mayor medida que el ELN, ofrecieron oportunidades para el ejercicio del poder políticomilitar, especialmente para aquellas que no tenían educación secundaria. Muchas mujeres jóvenes sin estudios en las áreas rurales prefirieron la guerrilla a las posibilidades de desplazamiento, desempleo o prostitución.

En 1996 y 1997 las Farc lanzaron una serie de ofensivas militares sin precedentes en su escala y en su alcance, lo

cual puso dramáticamente de manifiesto la fragilidad de la soberanía del Estado. Con divisiones de entre 300 y 1000 guerrilleros, atacaron las bases del Ejército en Las Delicias, Patascoy, San Miguel, Puerres, Caguán, San Juanito y San José. Las dudas existentes alrededor de la habilidad del Ejército colombiano para responder se revelaron bien fundadas. No solo el Ejército tenía poca motivación para derrotar a las guerrillas, sino que además la proporción promedio de personal administrativo por cada soldado era de 6:1, mientras que a nivel mundial se sostenía en 3:1.²⁷ En tanto que una amenaza guerrillera mayor, fuera esta real o no, representaba mayor presupuesto militar, mínima supervisión regulatoria, protección del escrutinio público y un centralismo institucional indiscutible, el Ejército terminó siendo el principal beneficiario de su propia ineffectividad.

Al igual que en el gobierno de Turbay (1978-1982), durante el periodo de Samper (1994-1998), las Fuerzas Armadas colombianas se presentaron como el último baluarte del Estado. Los gastos de defensa se dispararon a partir de 1995 y para el año de 1998 eran tres veces más altos de lo que habían sido en 1994. Aún así, esto no generó una mayor efectividad en el combate, algo nada sorprendente debido a que la mayoría del dinero fue destinado a gastos administrativos. En 1997, de un total de 131 000 soldados, solo 22 000 (el 20 %) estaban listos para el combate. Entre 1991 y 1996 la ayuda militar de los EE. UU. presentó una caída, puesto que la mayoría de la "ayuda" antidroga estuvo destinada a la Policía, ante la crítica constante a las Fuerzas Armadas por parte de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos y Europa.

Con el Ejército lisiado por su propia incompetencia, las organizaciones insurgentes no solo proporcionaron

servicios públicos en sus zonas de influencia sino que comenzaron a custodiar las comunidades ofreciendo supervisión general, determinando las asignaciones presupuestales, influyendo en la participación electoral, restringiendo o permitiendo la movilidad, e incluso arbitrando para bien y mal disputas entre vecinos, amigos y familiares. Lo que es más importante, aumentó la recolección de impuestos a narcotraficantes, ganaderos, pequeños negociantes y propietarios grandes y medios. Junto a los secuestros, la recolección de impuestos se convirtió en una de las tácticas guerrilleras menos aceptadas. Aunque las AUC también cobraban impuestos, la mayoría de inversionistas, dueños de propiedades y negocios preferían pagar altas tasas por protección a estos fervientes defensores de la “propiedad privada” y la “libre empresa” que a las fuerzas insurgentes.

Lo mismo sucedía con las corporaciones extranjeras, particularmente en el sector petrolero, quienes además de tener que pagar altas sumas a las guerrillas, estaban sujetas a sus exigencias de inversión social en las áreas de salud, educación e infraestructura. En Casanare y Arauca, por ejemplo, las insurgencias obligaron a la *British Petroleum* a invertir en escuelas, capacitación vocacional y proyectos de desarrollo local. Las compañías petroleras y otras corporaciones multinacionales preferían invertir en ejercer presión sobre el gobierno norteamericano para que incrementara la ayuda militar a Colombia, que seguirle pagando impuestos a las organizaciones insurgentes. Los dos actores más grandes en el mercado petrolero colombiano, Occidental y B. P.-Amaco, se fusionaron con otras firmas del área energética, incluida Enron, para formar una sociedad comercial colomboamericana en Washington. En la actualidad, su apoyo financiero al Ejército y a los paramilitares se encuentra documentado.

Debido a que los derechos de propiedad privada estaban impugnados en gran parte de Colombia, no fue una sorpresa que algunas corporaciones extranjeras decidieran pagar impuestos de protección a los paramilitares como una especie de “seguro capitalista”.²⁸

AVANCE CONTRAINSURGENTE

Aunque la expansión guerrillera en la década de los noventa fue excepcional, el avance paramilitar fue aún más impresionante. Como hemos visto, la extorsión que practicaba la guerrilla, y la amenaza que su presencia representaba para la propiedad y la seguridad de las élites, explica parte de la reacción paramilitar, la cual empezó como una respuesta política al proceso de paz de Betancur entre 1982 y 1983, posteriormente creció en la lucha por impedir la democratización que la descentralización política apuntaba conseguir bajo el gobierno de Barco entre 1987 y 1988, y finalmente se contrajo después de la desmovilización de la guerrilla y la Asamblea Constituyente bajo el gobierno de Gaviria entre 1991 y 1992. Aunque la reacción paramilitar surgió nuevamente con el gobierno de Samper, el ritmo fue menor del que sostuvo bajo el gobierno de Barco y, puesto que durante este Gobierno las insurgencias tuvieron pocos avances en lo político (no así en lo territorial y militar), faltaron iniciativas para impulsar la expansión e integración política de las organizaciones paramilitares dispersas.

Cuando Fidel Castaño desapareció, en 1994, Carlos Castaño se encargó del negocio familiar y fundó las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). Durante el período de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, bajo el liderazgo de las ACCU

y por medio de alianzas con el Ejército y otros bloques paramilitares regionales, estas organizaciones triunfaron en su empeño de arrebatarse a las Farc el corredor estratégico de Urabá hacia el Caribe. Alentado por la victoria en Urabá y los resultados esperados tras la masacre de Mapiripán, Meta, Carlos Castaño, ahora jefe de las AUC, predijo que en el futuro abundarían hechos como este.²⁹

Ubicado en el corazón del territorio de las Farc, en un cruce vital para la economía de la coca en la frontera de Meta y Guaviare, Mapiripán era literalmente un caso de muertes anunciadas. El 12 de julio de 1997 dos vuelos chárter de cincuenta “soldados” paramilitares volaron de Urabá al aeropuerto de San José del Guaviare, el cual estaba bajo control del Ejército y justo al lado de la base antinarcóticos del batallón Joaquín París —para entonces la única base en Colombia desde donde se dirigían las operaciones de fumigación llevadas a cabo por los EE. UU.—. En presencia del sargento a cargo de la seguridad del aeropuerto y un oficial de inteligencia del Ejército, los paramilitares descargaron armas, uniformes y equipos de comunicación, y luego recibieron ayuda de los soldados para cargar todo en camiones que los llevarían a las embarcaciones que los remontaron río arriba hasta Mapiripán, pasando por el punto de control de la Escuela Especial de Entrenamiento del Ejército colombiano en Barracón. Entrenadores norteamericanos del 7º Grupo de Fuerzas Especiales ayudaron a instruir a su contraparte colombiana de la II Brigada Móvil en planificación militar. La presencia paramilitar, reforzada con 180 tropas reclutadas localmente, pasó “desapercibida” porque el comandante de Barracón, el coronel Lino Sánchez, graduado de la Escuela de las Américas, había ayudado en la planificación de la masacre. Una vez en Mapiripán los

paramilitares se dedicaron a cinco días de torturas y asesinatos, y llevaron al matadero del pueblo a las víctimas de su lista de “seguidores de la guerrilla”. Allí, entre llantos y gritos de auxilio, fueron destripados para que quedaran flotando luego de ser arrojados al río. El juez Leonardo Iván Cortés, quien luego huyó del país bajo amenazas de muerte, llamó por teléfono y escribió cartas al Ejército en varias oportunidades a lo largo de los días que duró la masacre. El coronel Hernán Orozco afirmó que no tenía tropas disponibles, pero prometió avisar de ello a su superior, el general Uscátegui, quien estaba encargado de la VII Brigada en Meta y Guaviare, con cuarteles en Villavicencio. Pero ni la Policía ni el Ejército llegaron al pueblo sino hasta después de la matanza.³⁰

Irónicamente, como un eco del pedido del *Ché* Guevara de “muchos Vietnams”, la oscura profecía de Carlos Castaño se hizo realidad. Las masacres paramilitares se multiplicaron de 286 en 1997 a 403 en 1999, principalmente en áreas de concentración de tierra y diferenciación de clase.³¹ Luego de la ofensiva en Meta y Guaviare en 1997, las AUC se mudaron a Norte de Santander, Santander, sur de Sucre y Urabá chocoano. La curva del crecimiento paramilitar coincidió en gran medida con la de las hectáreas destinadas al cultivo de coca, puesto que bajo la dirección de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, las AUC expandieron infinitamente su control sobre el proceso de producción, transporte y distribución de cocaína. Para la segunda mitad de la década de los noventa, el número de masacres se cuadruplicó, la mayoría, aunque no todas, cometidas por paramilitares trabajando conjuntamente con el Ejército o abriéndoles camino.³²

Lo que pasó en Urabá muestran cómo el desarrollo agroindustrial, las extensas haciendas ganaderas y la producción y el transporte de cocaína iban de la mano con

un proyecto paramilitar de conquista del territorio regional, el cual consolidó los patrones de dominio racial y explotación de clases derivados del colonialismo. Como gobernador de Antioquia, Uribe comenzó a legalizar y regular grupos de seguridad privada denominados Convivir (Cooperativas de Vigilancia). Las Convivir, idea defendida por Rafael Pardo, para entonces ministro de Defensa de Gaviria, eran estructuralmente similares a las *rondas campesinas* peruanas o las *guardias civiles* guatemaltecas de la década de los ochenta. El programa piloto se había desarrollado en Córdoba, el cual había agrupado a 950 hacendados en un sistema de vigilancia conectado por una red de comunicaciones de alta tecnología. Vinculado tanto al AAA del general Camacho como al MAS, el general Harold Bedoya, cabeza de las Fuerzas Armadas de Colombia entre 1994 y 1997, apoyó abiertamente la iniciativa que para él tenía en el Magdalena Medio su referente principal.³³ Para Bedoya, la colaboración civil con las Fuerzas Armadas era obligatoria.

Durante los dos años en los que Uribe fue gobernador de Antioquia, las Convivir desplazaron a 200 000 campesinos, principalmente en Urabá. Más que ningún otro departamento, Antioquia contó con el 18 % de los desplazados a nivel nacional. El senador conservador antioqueño Fabio Valencia Cossio —en 2008 nombrado por Uribe como su ministro del Interior y de Justicia— acusó a Uribe de estar “auspiciando a los paramilitares con las cooperativas de seguridad Convivir”, que habían contribuido a un incremento de casi 400 % en la tasa de homicidios.³⁴ En la vecina región de Córdoba, donde el caudillo paramilitar Salvatore Mancuso dirigía una Convivir, solo en 1995 tales cooperativas desplazaron al 10 % de la población. Uribe y Carlos Vuelvas, el gobernador de Córdoba, le enviaron una carta al presidente Samper, en la

que señalaban “la tranquilidad que hoy se respira en Urabá, la entrada en funcionamiento de las Convivir, crea un clima para que retornen los empresarios y los ganaderos, nosotros por nuestra parte, cumplida nuestra misión en la región buscaremos abrir nuevos frentes de trabajo, en otros lugares”. El futuro se divisaba: la nacionalización de lo ocurrido en Urabá.

Bajo las provisiones de un estado de sitio y con la aprobación de Samper, Uribe creó en 1996 las zonas de Orden Público bajo el mando de la XVII Brigada y del general Rito Alejo del Río, otro veterano del MAS y protegido de Bedoya. El general Bedoya declaró que aquellos que se opusieran a estas zonas “defendían los intereses de los narcotraficantes o de los subversivos”.³⁵ De acuerdo con el coronel Carlos Velásquez, quien sirvió bajo su mando, la primera jugada del general Del Río fue retirar las tropas de las áreas donde protegían a los civiles de las incursiones paramilitares.³⁶ En los cuatro municipios del eje bananero, la tasa de homicidios era de 500 por cada 100 000 habitantes, en contraste con 60 por cada 100 000 a nivel nacional. Aunque el número total de homicidios en la zona bananera de Urabá era ya alto antes de que Uribe fuera electo gobernador (400 en 1994), durante su periodo empeoró: en 1995 se duplicó a 800; en 1996 aumentó a 1200; y en 1997 fue de 700. En 1998, el año después de la salida de Uribe, la cifra cayó a 300.³⁷

En las décadas de los cincuenta y sesenta el general Ruiz había sido enfático sobre la importancia de la inversión social en la lucha contrainsurgente, pero en la era neoliberal de la década de los noventa esa variable fue extraída de la ecuación. Bajo los dictámenes de la *doctrina de la seguridad nacional*, una vez el Plan Cóndor había lanzado su larga y sangrienta sombra sobre Suramérica, el general Camacho creó y promovió grupos paramilitares

que operaron clandestinamente como parte del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay. La meta era aniquilar a la subversión mientras se reducía el número de violaciones a los derechos humanos atribuibles a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, durante los periodos de Turbay, Betancur, Barco y Gaviria, la presencia paramilitar se propagó progresivamente, sin embargo, dada la fragmentación regional del poder, no se desarrolló como una fuerza unificada sino hasta mediados de la década de los noventa.

En adelante, las contrainsurgencias se volvieron más efectivas en cuanto a generación de empleo, mientras servían de agentes redistribuidores de la riqueza, el poder político y la propiedad hacia los niveles más altos de la pirámide social. El Estado en el ámbito regional estaba preparado para buscar formas de “legalizar y regular” las milicias contrainsurgentes, erosionando aún más la línea que separa la política del crimen organizado. A finales de los años ochenta las agencias de represión estatal habían cometido más del 75 % de las violaciones a los derechos humanos; para finales de los noventa, las AUC eran responsables de casi el mismo porcentaje, mientras que al Ejército y la Policía se les atribuyó apenas un 5 % del total de violaciones.³⁸ Desde 1997 hasta 2000, el número de paramilitares se duplicó en el país.

Este era el modelo ideal bajo el cual se suponía que la contrainsurgencia debía trabajar de manera privatizada y subcontratada. Amnistía Internacional, Americas Watch y otros grupos de derechos humanos señalaron conexiones estrechas entre las Convivir y los paramilitares. La unidad orgánica entre ambos era evidente: a fines de 1999, cuando la Corte Constitucional proscribió a las Convivir por numerosas masacres de civiles indefensos, su infantería pasó sencillamente a las filas de las AUC.

Las víctimas eran todo menos pasivas. Con el apoyo de grupos estadounidenses de derechos humanos como las Brigadas Internacionales de Paz, la Red de Apoyo de Colombia y la Fraternidad de Reconciliación, un movimiento de *comunidades de paz* recobró fuerzas en Urabá a mediados de la década de los noventa.³⁹ La violencia política contra los civiles alcanzó niveles impactantes, incluso para los estándares colombianos, ubicándose posteriormente entre los niveles más altos del mundo. Luego de que las ACCU desplazaran a 15 000 personas de las áreas alrededor de las haciendas de Apartadó, Urabá, en marzo de 1997 los campesinos que se resistieron a ser desplazados fundaron la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con una población de 1 200 personas y la ayuda de la diócesis católica regional y algunas ong colombianas. Las comunidades de paz como San José se establecieron como zonas neutrales multiétnicas fuera del sistema de guerra. Las adversidades, particularmente el asesinato de líderes, las masacres y los bloqueos económicos, no frenaron el trabajo de las comunidades para vivir en paz sin tener que pagar tributo a la autoridad militar. Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó, ganó reconocimiento internacional por sus esfuerzos para proteger a la población civil. Fue ella misma quien acusó a soldados del Gobierno de permitir a las ACCU decapitar al niño César Augusto Rivera en frente de ella y de mil niños más durante la inauguración de la Semana de la Paz en agosto de 1996. En una reunión de oficiales departamentales, el secretario de Gobierno de Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, públicamente acusó a Cuartas de ser vocera de las Farc, mientras que el general Del Río la demandó por difamación.⁴⁰

En vista de la represión masiva que provenía del paramilitarismo de derecha y de la insurgencia de

izquierda, las comunidades de paz, como la de San José de Apartadó, lucharon por una visión diferente de soberanía, entendida como paz y autodeterminación, al igual que por los derechos sociales colectivos y los derechos políticos y civiles individuales. Sin embargo, a finales del siglo xx, la represión organizada de la derecha y la hipertrofia militar de la izquierda armada condujeron a una relativa debilidad y fragmentación de los movimientos sociales de Colombia, los cuales no estuvieron en capacidad de aglutinarse en un bloque nacional-popular. Como eran considerados el “ala desarmada de la subversión”, desde finales de la década de los setenta los activistas de estos movimientos fueron convertidos en blanco de asesinatos sistemáticos por parte del Ejército y de los paramilitares. Una década después, con un partido político de izquierda eliminado, ni las insurgencias ni la contrainsurgencia consideraron válida la distinción entre combatientes y civiles.

En las fronteras urbanas y agrarias prevaleció el individualismo anárquico y atomizado bajo una economía de guerra capitalista y liberal que tenía en el crimen organizado, la violencia, la intimidación y la eliminación física de la izquierda amplia el eje central por medio del cual la energía antisocial se transformó en valor.⁴¹ Con la caída de los precios del café en 1989, los nexos entre las mafias de la droga y los paramilitares le pusieron el último clavo al ataúd de la *república cafetera* nacida a finales del siglo xix. Las mafias de la cocaína le inyectaron sangre fresca a las viejas élites terratenientes del campo, hicieron de los dos partidos tradicionales sistemas de apoyo a este nuevo estado de cosas y revitalizaron el latifundio como concentración geográfica del poder político y económico en regiones y municipios. Las corporaciones multinacionales descubrieron que esa “seguridad” narcoparamilitar les

ofrecía las únicas garantías para la propiedad privada y el control laboral.

La descentralización política y la delegación de la represión, ambos rasgos característicos de la década de los noventa, debilitaron y deslegitimaron la autoridad del gobierno central, la cual se suponía que debían fortalecer. La descentralización, proyecto favorito del Banco Mundial, significó que tanto gobernadores como alcaldes fueran elegidos popularmente por primera vez desde 1886; sin embargo, en la práctica solo exacerbó aún más la falta de autoridad del gobierno central estimulando la concentración del poder regional en manos de los narcoterratenientes del Partido Liberal.

Por medio de la aplicación de tácticas de terror inauguradas en la década de los cincuenta, este nuevo bloque de poder aisló exitosamente el desafío electoral de la izquierda amplia, lo cual contribuyó a que durante la primera mitad de la década de los noventa las insurgencias aceleraran la tendencia hacia una expansión territorial, mientras que durante la segunda mitad de la misma década, los grupos paramilitares regionales anteriormente dispersos se unieran en una organización integrada nacionalmente. La guerra química financiada por los EE. UU. había regresado —ahora se rociaba con glifosato o Round-up Ultra de Monsanto las áreas tomadas por la insurgencia al sureste del país— y la presión del gobierno estadounidense sobre casi todos los aspectos de la vida política se incrementó a la par que los fondos para la “guerra contra las drogas”. Tanto el gobierno de Colombia como el de EE. UU. hicieron caso omiso respecto al alcance cada vez mayor de los paramilitares y prefirieron enfocarse en eliminar las insurgencias por medio del fortalecimiento de la policía y el Ejército colombiano.

1. William Avilés, "Paramilitarism and Colombian's Low-Intensity Democracy", *Journal of Latin American Studies* 38 (2006), pp. 381-84.
2. Ver Christian Gros, "Derechos indígenas y una nueva constitución en Colombia", *Análisis Político* 19 (mayo-agosto 1993), pp. 3-22. Dos años más tarde, en 1995, los afrocolombianos obtuvieron similares derechos bajo la Ley 70.
3. Unidad de Inteligencia Economista, *Colombia: perfil del país, 2002-2003*.
4. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas*, pp. 178-89. Ver también Avi Chomsky, *Linked Labor Histories: New England, Colombia, and the Making of a Global Working Class* (Durham, NC, DUP, 2008), pp. 181-221.
5. Camilo Castellanos, "A la nueva república le falta sujeto". en *Colombia: análisis al futuro* (Bogotá: CINEP, 1992), pp. 9-28.
6. Sobre la eliminación del M-19, el EPL y el Quintín Lame, ver Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero, *De las armas a la política* (Bogotá: IEPRI, 1999); Lawrence Boudon, "Colombia's M-19 Democratic Alliance: A Case of New Party Self-Destruction", *Latin American Perspectives* 116, 28:1, (enero 2001), pp. 73-92.
7. Gonzalo Sánchez, "Introduction: Prospects for Peace", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 25-29.
8. Gonzalo Sánchez, "Guerra prolongada y negociaciones inciertas", en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, p. 61.
9. Sebastian Edwards, *The Economics and Politics of Transition to an Open Market Economy: Colombia* (París: OECD, 2001), pp. 39-41 y tabla 3.3.
10. Nazih Richani, *Systems of Violence*, pp. 101-9. Ver también, Francisco Thoumi, *La economía política del narcotráfico* (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1994).
11. En *Ibíd.*, p. 196 n. 53, una economía rentista se define como "aquella donde la formación de capital está basada principalmente en la extracción de recursos naturales y la especulación de la tierra [...] y en el desarrollo de la infraestructura comercial en oposición a la economía diversificada basada en la producción de bienes. El libre mercado y el proceso de incorporación a los mercados mundiales facilita las economías rentistas".
12. Mark Bowden, *Killing Pablo: The Hunt for the World's Greatest Outlaw* (Nueva York: Atlantic Monthly, 2002).
13. Escobar se consideró a sí mismo un hombre de izquierda, un enemigo del imperialismo y la oligarquía, tuvo vínculos con el M-19 a principios de la década de los ochenta y con el ELN a comienzos de los noventa. Alonso Salazar, *La parábola de Pablo*, pp. 85-87, 103, 268. Para el Cartel de Cali, ver Ron Chepesiuk, *Drug Lords: The Rise and Fall of the Cali Cartel* (Nueva York: Maverick House, 2003).
14. Ver William Ramírez Tobon, "¿Un campesino ilítico?", *Análisis Político* 29 (septiembre-diciembre 1996), pp. 67-72.

15. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 145.
16. Para la colonización del Guaviare y Vaupés, ver Alfredo Molano, *Selva adentro*; y de Vichada y Guainía, Alfredo Molano, *Aguas arriba* (Bogotá: El Áncora Editores, 1990). La historia de la frontera cocalera es estudiada en William Ramírez Tobón, “La guerrilla rural en Colombia: ¿Una vía hacia la colonización armada?”, *Estudios Rurales Latinoamericanos*, 4:2 (1981), pp. 199-209; Fernando Cubides *et al.*, *Colonización, coca, y guerrilla* (Bogotá: Alianza Editorial Colombiana, 1989); Alfredo Molano, “Algunas consideraciones sobre colonización y violencia”, en Catherine LeGrand *et al.*, eds., *El agro y la cuestión social* (Bogotá: Banco Ganadero, 1994), pp. 27-41; y para un resumen del debate, ver Catherine LeGrand, “Colonización y violencia en Colombia: perspectivas y debate”, en *El agro y la cuestión social*.
17. Ricardo Rocha García, *La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2000), p. 143.
18. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 71.
19. “The Letter of the Intellectuals”, en Charles Bergquist *et al.*, *Violence in Colombia, 1990-2000*, pp. 214-16. Para la respuesta guerrillera, ver Charles Bergquist *et al.*, *Violence in Colombia*, 216-20. También, Gonzalo Sánchez, “A Response to the Guerrillas”, en Charles Bergquist *et al.*, *Violence in Colombia*, pp. 220-23, publicado originalmente en *El Espectador*.
20. Para Caquetá, ver Juan Guillermo Ferro Medina, “Las Farc y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: testimonios de colonos y guerrilleros”, en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas en la región Andina*, pp. 411-42. Las Farc se opusieron inicialmente al cultivo de coca, pero la desesperante situación económica de los pobladores de la frontera los convenció de que lo habría que tolerar.
21. María Victoria Uribe, *Limpiar la tierra: guerra entre esmeralderos* (Bogotá: CINEP, 1992).
22. El número de frentes de las Farc es tomado de Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, 41.
23. A diferencia de las Farc, el ELN se benefició mínimamente de la narcoeconomía —un legado de su trayectoria en la teoría de la liberación—. Las plantaciones de coca florecieron en áreas donde el ELN tenía presencia al sur de Bolívar y en las montañas del Catatumbo en norte de Santander. Tales plantaciones fueron tomadas por las AUC a finales de 1990.
24. Fernando Cubides, *Burocracias armadas* (Bogotá: Norma, 2005). Ver también, Francisco Gutiérrez, “Prólogo”, en Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón, *El orden de la guerra: las Farc-EP entre la organización y la política* (Bogotá: Ceja, 2002), p. 10.
25. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 148.
26. Ferro Medina y Uribe, *El orden de la guerra*, pp. 66-74. Las mujeres campesinas buscan caminos de ascenso a través de un mayor dominio del

alfabetismo básico y de la tecnología de las comunicaciones.

27. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 184 n. 23.
28. La frase es tomada de Fernando Cubides, "From Public to Private Violence", en Charles Bergquist *et al.*, eds., *Violence in Colombia, 1990-2000*, p. 133. Sobre las corporaciones multinacionales y los paramilitares, ver Nizah Richani, *Systems of Violence*, pp. 113-16; y Grace Livingstone, *Inside Colombia: Drugs, Democracy and War*, pp. 80-99.
29. Bibiana Mercado, "Va a haber muchos más mapiripanes", *El Tiempo*, 28 de septiembre de 1997.
30. *El Tiempo*, 26-28 enero de 2005; *Semana*, 30 enero de 2005; *El Espectador*, 6 febrero de 2006; "El secreto de los militares", *Semana*, 6 febrero de 2005. Para una descripción más detallada de la masacre, ver Robin Kirk, *More Terrible than Death*, pp. 250-56. En marzo de 2005, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA declaró al Estado colombiano responsable por la masacre de Mapiripán. Junto con Carlos Castaño y otro líder paramilitar, el coronel Lino Sánchez fue sentenciado a 40 años, mientras que el sargento a cargo del aeropuerto de San José recibió 32 años de sentencia. Uscátegui y Orozco cumplieron 40 y 38 meses de cárcel, respectivamente.
31. Grace Livingstone, *Inside Colombia*, p. 10.
32. Nazih Richani, *Systems of Violence*, p. 120.
33. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 192-93. Bedoya, para quien Human Rights Watch era una organización "al servicio directo" de las Farc, renunció en 1997 luego de que el presidente Samper rechazara tomar medidas mucho más represivas en contra del movimiento cocalero.
34. Citado en Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas* 195.
35. Citado en *Ibíd.*, 218.
36. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, p. 194. Luego de archivar un informe sobre la implicación de Del Río con los paramilitares, Velásquez fue despedido por el General Bedoya por falta de *esprit de corps*.
37. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas* p. 181.
38. Alfredo Molano, "División creadora", *El Espectador*, 8 de febrero de 2003.
39. El movimiento de comunidades de paz en Urabá comenzó a finales de la década de los ochenta cuando los *tangueros*, paramilitares de Fidel Castaño, conducidos por su hermano menor, Carlos, masacraron a civiles y despojaron a las comunidades por su apoyo a la UP
40. Mauricio Romero, *Paramilitares*, pp. 212-14.
41. Fabio López de la Roche, "Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas", en Fabio López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, p. 181.

capítulo

8

Involución,

1998-2002

*La guerra se paga en tierras...
Nuestra historia es de desplazamiento
constante.*

Alfredo Molano, *Los desterrados* (2002) Desde finales de la década de los noventa, la intensificación de la guerra contrainsurgente en las selvas y llanos del sur y el sureste del país se constituyó en el eje de las políticas públicas, a la par que la expansión de los paramilitares y el crecimiento acelerado del aparato militar de las Fuerzas Armadas acompañaron el atropellado proceso de negociaciones de paz con las Farc. En 1998, la creación al sur del país de una “zona de despeje del tamaño de Suiza”, como solía decirse en los medios de comunicación, gobernada oficialmente por la insurgencia más grande y más antigua del país, las Farc,

causó alarma en el resto de las regiones colombianas así como en Washington. En medio de la puesta en marcha de esta iniciativa, durante las administraciones de los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia implementaron el Plan Colombia, un paquete de ayuda de cuatro mil millones de dólares por cinco años, del cual el 80 % estaba destinado al Ejército y a la Policía. La meta explícita del Plan Colombia era conseguir que en seis años la producción de narcóticos se viera reducida a la mitad mientras se reconquistaba el 40 % del territorio nacional en manos de grupos insurgentes. Lograron lo segundo, no lo primero.

PACTOS ELECTORALES, PAZ ESCURRIDIZA

De la misma manera en la que los pactos de paz con la guerrilla determinaron los resultados de las elecciones de 1998, los tratos políticos con paramilitares definieron la pugna electoral de 2002. Las diversas estrategias de campaña y programas políticos de los candidatos de entonces compartían una meta común, la de fortalecer la autoridad del gobierno central subrayando la prominencia de nuevas formas de clientelismo armado. El cambio en las políticas de paz, que de pactar con las guerrillas se viró a pactar con los paramilitares, condujo finalmente al declive total del monopolio bipartidista sobre la representación política y a la intensificación de la participación del gobierno estadounidense en la guerra civil colombiana.

Las insurgencias y la contrainsurgencia, a pesar de estar excluidas de la política formal, ayudaron a determinar los resultados electorales tanto en el ámbito nacional como regional y local (alcaldes, concejales, gobernadores, ediles, representantes a la Cámara y senadores). Cuando el

candidato conservador Andrés Pastrana (1998-2002) fue electo presidente, los analistas no demoraron en asegurar que fue la promesa de negociar la paz con las Farc lo que le aseguró el triunfo, olvidando, sin embargo, que el candidato liberal Horacio Serpa también había hecho de la “paz” un eje central de su plataforma de campaña. A diferencia de Pastrana, Serpa había prometido negociar con el ELN antes que con las Farc. En total contravía con los principios de la contrainsurgencia, ambos candidatos reconocieron el carácter político de las guerrillas, como también lo hicieran los críticos más perspicaces de la izquierda: “no son simples bandidos, terroristas o narcoguerrilleros, sino rebeldes con ideología, recursos y objetivos específicos en contra del orden existente”.¹ La reforma agraria, por ejemplo, fue una exigencia no negociable, al igual que la reorientación de la economía de un modelo de exportación neoliberal a un desarrollismo de carácter nacionalista que se ajustara a grandes rasgos al modelo sueco. Bajo estas directrices, el Estado colombiano era un enemigo con el cual, al menos en teoría, era posible negociar. Sin embargo, mientras las Farc consideraran inválida la distinción entre paramilitares y Ejército, las negociaciones de paz serían incompatibles con la expansión paramilitar. La mejor manera de describir la ideología de las Farc sería definiéndola como un marxismo militarista fosilizado, de manual, sin ningún aporte ni teórico ni empírico, combinado con liberalismo progresista criollo. En breve, su ideología era la de una socialdemocracia autoritaria propia de un pequeño Estado tributario con arraigo en el campo, en los municipios y las veredas.

A diferencia de Pastrana y las Farc, Serpa y el ELN habían prometido ampliar la discusión sobre guerra, paz y cambios sociales para incluir a “la sociedad civil”, un concepto en el cual las Farc no creían en tanto su

entendimiento de la política provenía de una reducción maniqueísta entre “amigos y enemigos”, en la cual no cabe la posibilidad de autonomía.² La propuesta de negociaciones entre un posible gobierno de Serpa y el ELN estaba basada en la idea, quizás poco real, de que agroempresarios y hacendados, campesinos, sindicalistas, estudiantes, organizaciones comunitarias, desempleados y profesionales de clase media llevarían sus demandas y propuestas a la mesa de diálogo. De manera similar a la iniciativa de Pastrana y las Farc, el ELN pidió que numerosos municipios del Magdalena Medio fueran “desmilitarizados” y oficialmente reconocidos como territorio del ELN, a fin de dirigir las negociaciones lejos del campo de batalla. El acuerdo forjado en Mainz, Alemania, en julio de 1998, fue diseñado para dar pie a debates y discusiones sobre inversiones y desarrollo regional en el valle del Magdalena Medio.

Como era previsible, el proceso de paz con el ELN fue saboteado por las AUC y el movimiento civil que dirigió. Un posible acuerdo con esta organización habría favorecido a pequeños y medianos productores campesinos y demostrado la viabilidad de acuerdos regionales apoyados por la “comunidad internacional”, con inversiones en salud, educación e infraestructura. También constituía una oportunidad para implementar una reforma agraria a pequeña escala que abordara no solo el problema de la distribución de la tierra y títulos, sino también asuntos relacionados con créditos, distribución y transporte, lo cual pudo servir para demostrarle a los escépticos que en los ámbitos locales y regionales el cambio progresista era posible. Pero las AUC movilizaron a sus clientes y bloquearon las rutas de transporte en las principales arterias del país repitiendo la experiencia de Puerto Boyacá

durante el gobierno de Betancur.³ La derrota electoral de Serpa sirvió como manto de olvido para esta propuesta. Pastrana favoreció entonces la “paz fragmentada” que había prevalecido durante el gobierno de Gaviria al negociar exclusiva y directamente con las Farc, lo cual prolongó la guerra y el dominio tecnocrático neoliberal.

Como concesión preliminar a las Farc, en noviembre de 1998 Pastrana retiró a las Fuerzas Armadas de una zona de aproximadamente 16 200 hectáreas conocida como el Caguán, en el departamento de Caquetá. Pastrana también reconoció que la soberanía de las Farc en esta región era apenas lógica, dado que estas habían sido el único grupo que por años había administrado dicho territorio. Para finales de 1999, Pastrana y las Farc habían aprobado un programa de negociación de 20 puntos que incluía asuntos tales como reforma agraria, derechos humanos, recursos naturales y reestructuración socioeconómica. Sin embargo, además de los compromisos adquiridos con las medidas neoliberales austeras exigidas por el FMI a cambio de un préstamo de 1900 millones de dólares, Pastrana carecía del poder o la voluntad necesarios para cumplir con las reformas. El proceso de paz nació muerto, con la excepción de unas cuantas ocasiones relevantes cuando, por ejemplo, a principios de 2000, representantes de las Farc y el gobierno colombiano llevaron a cabo un “tour de aprendizaje” por las capitales europeas; o cuando en junio de 2001 las Farc liberaron a 363 Policías y soldados capturados a cambio de 11 de los suyos, y no de 50 como había sido prometido. Las Farc se retiraron de las negociaciones preliminares entre finales de 1999 y comienzos de 2000 alegando poca voluntad e incapacidad del gobierno central para dirigir al Ejército y controlar a las fuerzas paramilitares en expansión en las regiones. Una vez rotas las negociaciones la zona desmilitarizada sería

utilizada como retaguardia en la que se mantenía a las víctimas de secuestros, las cuales ascendían a varios cientos, y desde la que se alistaban futuras batallas.

El 20 de febrero de 2002, bajo una intensa presión por parte del Ejército, del bloque reaccionario en ascenso político y de los medios de comunicación, Pastrana ordenó a las Fuerzas Armadas retomar la zona de despeje. A pocos meses de los atentados del 11 de septiembre, que ayudaron a deslegitimar aun más a las Farc tanto en Colombia como en el exterior, la ofensiva militar de Pastrana contó también con el respaldo internacional. Las Farc, por su parte, perdieron una gran oportunidad para legitimarse políticamente al echar mano de tácticas de guerra que alentaron un profundo rechazo general y al desconocer el papel de las relaciones públicas en la política contemporánea. A pesar de que Pastrana dejó el cargo en medio de altos índices de impopularidad, la mayoría de los colombianos tanto en zonas urbanas como rurales estaba convencida de que el problema del país era la “inseguridad”, entendida como la extendida práctica del secuestro, el tráfico de drogas, la extorsión y el terrorismo. Las guerrillas, especialmente las Farc, eran por lo general vistas como las mayores responsables.

Pastrana pavimentó entonces el camino para el ascenso de Uribe logrando lo que ningún otro presidente había podido hacer antes: conseguir que *Tirofijo*, el legendario y septuagenario líder de las Farc, se convirtiera en el único político más impopular que el mismo Pastrana. Así pues, entre 2001 y 2002, con el incremento de los secuestros, la extorsión y los asesinatos selectivos en proporciones atroces, las Farc y en menor medida el ELN, ayudaron al ascenso de un gobernante de mano dura como Uribe. Entre 1997 y 2001, las Farc secuestraron a 3343 civiles y el ELN a 3412, haciendo de esta práctica el principal recurso de

financiamiento para el ELN y el segundo más importante para las Farc.⁴ Junto al secuestro, las nuevas tácticas de guerra puestas en marcha por las Farc, tales como el uso de cilindros bomba de gas para uso doméstico —el cual alcanzó su punto máximo de atrocidad en la masacre de Bojayá, Chocó, en abril de 2002, en la cual murieron incinerados 119 afrocolombianos dentro de la iglesia del pueblo, entre hombres, mujeres y niños—, les valieron el rechazo y la pérdida total del respaldo por parte de la población a lo largo y ancho del país.

Los únicos integrantes de la clase dominante que apoyaron el proceso de paz con las Farc fueron los *Cacaos*, un grupo de conglomerados financieros, industriales y mediáticos que aunque era económicamente prominente en la década de los noventa, para comienzos del nuevo siglo ya no estaba en condiciones de dirigir como un todo cohesionado a esa misma clase a la que pertenecía. La importancia económica de los *Cacaos* no se tradujo en mayor influencia política, menos ante un proceso de paz que para entonces ya había generado un repudio vehemente por parte del Partido Liberal y los grupos que una década antes se habían mostrado contrarios a las negociaciones de paz bajo el mandato de Betancur.

Los terratenientes, cuya composición de clase cambió a medida que los especuladores narcotraficantes ascendían en la escala socioeconómica, se comportaban como antes, usando la violencia para concentrar tierra y dominar la política local y regional. En asocio con el Partido Liberal, las élites terratenientes tradicionales se fundieron con los nuevos ricos mercaderes de la droga, con agroempresarios y con el Ejército y la Policía. Políticamente, este bloque contrainsurgente fue mucho más fuerte que el de los *Cacaos*.⁵ Dentro de este panorama, la actitud de las Farc frente a las negociaciones de paz puede calificarse como

“cinismo escéptico”. La historia colombiana había producido innumerables lecciones sobre la “negociación” como preparación para la guerra y sobre la “amnistía” como sinónimo de ejecución extrajudicial. Durante la presidencia de Pastrana, las AUC, en alianza con ganaderos, agroexportadores, facciones del Ejército y la Policía, grupos de negocios e industriales y sectores influyentes de la Iglesia católica y los dos partidos políticos masacraron la base social de las Farc y el ELN en cifras récord.⁶ En varios sentidos, este nuevo ciclo de guerra y paz era una repetición de la guerra orquestada durante el proceso de paz con Betancur en tono mayor, con una más amplia participación por parte del gobierno norteamericano y una escalada de atrocidades por parte de las fuerzas paramilitares.

PLAN COLOMBIA

En medio de las protestas populares, la movilización y los triunfos electorales de la centro-izquierda a lo largo de Sudamérica a partir de 1998, Colombia se convirtió en un aliado “geoestratégico” cada vez mayor para el gobierno de los Estados Unidos. Bajo los gobiernos de Clinton y Bush, Colombia y EE. UU. implementaron el Plan Colombia, un paquete de “ayuda” de 4000 millones de dólares a 5 años, del cual aproximadamente 80 % de los recursos estaba comprometida para el Ejército y la Policía. El Plan Colombia estaba aparentemente diseñado para combatir la nueva bonanza de producción de narcóticos que estalló a finales de la década de los noventa, pese a la desaparición del Cartel de Cali en 1996, en la medida en que nuevos grupos de traficantes, particularmente del norte del Valle, conseguían hacer que “el negocio” estuviera mejor

organizado que nunca. Tras la caída de los dos carteles más importantes del país, la delegación de la represión y la descentralización política estuvieron acompañadas por la dispersión de la industria de los narcóticos. Para 1999, los ingresos por venta de cocaína, marihuana y heroína colombianas generaron aproximadamente 46 mil millones de dólares, de los cuales 3500 millones quedaban en el país, es decir, una suma casi equivalente a los 3900 millones de dólares provenientes del principal producto de exportación colombiano, el petróleo. Este incremento en los ingresos responde, en parte, a las alianzas que se formaron entre traficantes y las AUC —y, con menos frecuencia, con las Farc—, difíciles de dismantelar por parte de oficiales no corruptos.

Por su parte, como ingreso estimado del impuesto a la producción cocalera, se calcula que a las arcas de las Farc ingresaron 900 millones de dólares en 1999; para 2000 el total de la producción de coca alcanzó las 136 200 hectáreas, 70 % de las cuales estaban en el corazón de los territorios de las Farc en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Putumayo.⁷ El general retirado Barry McCaffrey, zar antidrogas del presidente Clinton y antiguo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, instó a los legisladores norteamericanos a sumarse a la lucha contra el “narcoterrorismo” argumentando que en tanto que las Farc operaban como cartel, la lucha frontal contra este grupo se libraba también como guerra contra las drogas.⁸ En teoría, en la lucha antidrogas serían empleados helicópteros, tanques, aviones, radares, comunicaciones satelitales y entrenamiento de vanguardia para combatir la producción y exportación de narcóticos, pero en la práctica serían utilizados para atacar a las Farc y su economía de guerra. Esta estrategia fue diseñada bajo recomendaciones de Rand, corporación de investigación y desarrollo que en

un informe urgió a derrotar a las guerrillas en vez de simplemente contenerlas y citó las *rondas campesinas peruanas* y las *guardias civiles* guatemaltecas como evidencias de una estrategia contrainsurgente militar-paramilitar exitosa.⁹ En otro informe la Rand usó como ejemplo El Salvador de la década de los ochenta, para ilustrar cómo debería ser la política de Estados Unidos hacia Colombia.¹⁰

Aunque con anterioridad al Plan Colombia la “guerra contra el terrorismo” hacía parte sustancial de la “guerra contra las drogas”, su puesta en marcha en pleno en 2002 incorporó además la problemática del petróleo:

Después de Venezuela y México, Colombia es la tercera fuente más grande de petróleo latinoamericano para EE. UU. —responsable por cerca del 3 % de consumo estadounidense— aunque la mayoría de los recursos petroleros del país permanecen inexplorados hasta ahora[...]Podríamos añadir que, contrario a las percepciones populares, los Estados Unidos importan para su consumo interno más petróleo de Latinoamérica que del Medio Oriente y que Colombia comparte con Venezuela y Ecuador la Faja Petrolífera del Orinoco venezolana de la que se sospecha posee el yacimiento de hidrocarburos más grande del mundo. El futuro de las relaciones entre Venezuela y EE. UU. y, consecuentemente, del petróleo venezolano para el consumo estadounidense, es incierto. La importancia del suministro de Colombia, presente y futuro, aumenta proporcionalmente.¹¹

En esta nueva fase de intensificación del conflicto y mayor participación directa por parte de EE. UU. se ponía en juego el control del futuro de las reservas de petróleo de Colombia, las cuales se han probado ubicadas en territorio de las Farc. Además se apostaba por hacer del país un muro de contención para la Revolución bolivariana de Hugo

Chávez en la vecina Venezuela. A partir de entonces Colombia ha recibido más ayuda que ningún otro gobierno fuera del foco principal de las nuevas y viejas guerras coloniales en los territorios ocupados de Irak, Afganistán, la Ribera Occidental y el Este de Jerusalén.¹²

El Plan Colombia exigía una “arremetida hacia el sur”, es decir, hacia Caquetá y Putumayo, zonas de cultivo de coca bajo control de las Farc, lo que implicaba que la “ayuda antidrogas” norteamericana sería empleada, por lo tanto, en la contrainsurgencia. John Kerry argumentó desde el Senado que aunque “la línea entre los antinarcóticos y la contrainsurgencia no es del todo clara en Colombia”, el gobierno de los Estados Unidos “no puede permitir que esto detenga[...] la extensión de la ayuda”.¹³ Para las Fuerzas Armadas y la Policía colombianas esta aquiescencia por parte de los gobiernos norteamericanos significó que los recursos recibidos se duplicaran cada año, desde 1997 hasta 2000.

El Bloque Oriental de las Farc fue objeto de una gran protesta internacional cuando asesinó a tres activistas norteamericanos de derechos indígenas que trabajaban con el pueblo u’wa en su lucha por mantener a Occidental fuera de su territorio.¹⁴ Poco tiempo después, el ministro de Defensa colombiano, quien no era amigo de los u’wa ni de su causa, renunció en protesta contra las negociaciones de paz en curso con las Farc.

Aunque el Plan Colombia se venía discutiendo desde mediados de 1998, no llegó a ser prioridad para el Congreso estadounidense dominado por republicanos sino hasta mediados de 1999, a raíz de estos asesinatos cometidos por las Farc. En agosto de 2000, el general McCaffrey visitó Bogotá acompañado por el subsecretario de Estado Thomas Pickering con el fin de solicitarle al presidente Pastrana que diseñara una propuesta para

fortalecer a las Fuerzas Armadas, profundizar la guerra contra las drogas y detener la hemorragia económica que había empezado en 1998. Menos de dos meses más tarde, el Plan Colombia circulaba en inglés y para julio de 2000 se había firmado como ley en Washington en vez de en Bogotá. Un mes después, finales de agosto de 2000, el presidente Clinton canceló las disposiciones respecto a derechos humanos que la Enmienda Leahy prescribe, concediéndole una tácita aprobación a la oscura colaboración militar-paramilitar y abriendo con ello la puerta para el desembolso de 1300 millones de dólares en “ayuda”.

Con el Plan Colombia a punto de entrar en vigencia, las AUC anunciaron su llegada a Putumayo con una serie de “limpiezas políticas” y masacres. Evidentemente, su misión era despejar el terreno para una avanzada militar, la cual, como era de esperarse, se materializó en diciembre de 2000 con la llegada de un batallón antinarcóticos de mil hombres que tenía por tarea principal asegurar los cultivos de coca por un tiempo suficiente para que pilotos colombianos y mercenarios norteamericanos los fumigaran desde el aire. Al cabo de un año, las AUC se habían convertido en los amos de la cocaína en Putumayo.¹⁵ Con el respaldo que el Plan Colombia les proveía, las tropas paramilitares se movilizaron posteriormente hacia los departamentos vecinos de Nariño y Caquetá, zonas que luego se convertirían en dos de los departamentos más conflictivos del país, regidos por la economía de la coca.

Si bien el Plan Colombia tuvo éxito en cuanto a la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como en la fumigación de grandes áreas sembrados con coca, hasta 2006 no logró debilitar a la guerrilla ni resquebrajar el negocio de los narcóticos. Por el contrario, al no poner en la mira aquellas áreas en el norte

del país en donde las AUC supervisaban el cultivo de coca, protegían pistas de aterrizaje y daban seguridad al transporte, y al fortalecer a los principales aliados de las AUC dentro del Ejército y la Policía, el mayor logro del Plan Colombia fue generar condiciones para el florecimiento de los paramilitares. En una entrevista pública en 2000, Carlos Castaño estimó que el 70 % de los ingresos de las AUC provenían del negocio de las drogas. El embajador de Pastrana en Washington, Luis Alberto Moreno, había estimado por su parte que la cifra alcanzaba un 75 %.

En otras palabras, en vez de ponerle freno a esta dinámica de guerra, el Plan Colombia la profundizó. Desde 1998 hasta el fin de las negociaciones de paz en 2002, los paramilitares incrementaron las mascaras, la expropiación y el desplazamiento a menudo trabajando en coordinación con el Ejército colombiano, hasta el punto que, sin renunciar al terror como su táctica predilecta, el tráfico de narcóticos y la expropiación se convirtieron en sus principales fuentes de poder. El incremento de los secuestros por parte de las guerrillas creció paralelo al aumento de las masacres paramilitares; pero mientras la primera práctica estaba dirigida principalmente a la clase media y propietarios, la segunda afectaba exclusivamente a minifundistas campesinos, habitantes de la frontera agrícola, trabajadores rurales y comunidades indígenas y afrocolombianas.

LAZOS FAMILIARES

Al hacer del secuestro su caballito de campaña, Álvaro Uribe Vélez, candidato favorito de las AUC, sacó partida de los temores de los propietarios rurales y urbanos, a quienes se les ofreció “seguridad” ante las amenazas guerrilleras,

mientras a los jóvenes desempleados del campo y la ciudad se les abrieron frentes de trabajo en el floreciente negocio de la seguridad privada. Igual que el padre de Castaño, el de Uribe Vélez también había sido asesinado por las Farc. Los fantasmas de La Violencia reaparecían: la superación del trauma personal y la restauración del honor familiar por medio de la guerra contrainsurgente fueron rasgos distintivos de los personajes políticos y figuras públicas que Uribe y Castaño encarnaron.¹⁶ Estas historias personales fueron llevadas al poderoso escenario de la retórica, sufriendo con lo que la mayoría de las clases media y dominante se identificaron, de la misma manera que lo hicieron las familias de soldados, policías o paramilitares.

En consecuencia, el apoyo a Uribe y a un “proceso de paz” con las AUC se difundió ampliamente y este fue elegido a la presidencia con un programa aunque simple, bien definido: no más intentos de negociar con la subversión, “mano firme”. La solución era eliminar las guerrillas y tras esta apuesta se alineaban el Partido Liberal, el alto mando militar, las compañías bananeras multinacionales y procesadoras de aceite de palma, magnates floricultores, barones del narcotráfico y hacendados ganaderos. Pese a financiar la parcial privatización de la contrainsurgencia, estos sectores apoyaron los clamores por una mayor violencia estatal contra las guerrillas, definidas como tales de manera vaga y amplia para incluir a cualquiera que trabajase por el cambio social.¹⁷ En las elecciones de 2002 Álvaro Uribe Vélez encarnó las esperanzas tras esta nueva aproximación a la guerra y la paz en Colombia, un candidato que si bien había surgido de las filas del Partido Liberal se presentaba como independiente y, en palabras del propio Carlos Castaño, como “el hombre más cercano a nuestra filosofía”.

El germen de esta filosofía radica en una visión particular del papel de los ciudadanos en el conflicto. Tal como Castaño lo planteó, “en guerra, un civil desarmado es un término relativo. Dos tercios de la guerrilla son miembros desarmados que operan como población civil y colaboran con la guerrilla”.¹⁸ En el centro de la política de “seguridad democrática” de Uribe yace esta noción de que el Estado necesita de ciudadanos que colaboren con las Fuerzas Armadas. Un señalamiento muy similar al del general Bedoya cuando declaró que “con respecto a los criminales, nadie puede ser neutral[...] La neutralidad no es posible. O estás con los terroristas, o estás en contra de ellos”.¹⁹ La visión de Bedoya, vale aclarar, fue publicada antes del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, similar al gobierno de Bush en Washington, el de Uribe en Colombia se erige como un gobierno parlamentario semiautoritario que no respeta ni derechos individuales ni leyes internacionales.

En otras palabras, este giro en la política colombiana representa una extensión de la Guerra Fría. En la construcción de una red nacional de informantes, “soldados campesinos” y “familias guardabosques”, Uribe siguió las ideas articuladas y practicadas por el general Ruiz en la década de los sesenta y actualizadas durante las décadas de los setenta hasta los noventa por generales como Yanine, Camacho, Bedoya y Del Río. Mientras el general Yanine y Pablo Guarín la pusieron en práctica por primera vez en el Magdalena Medio a comienzos de la década de los ochenta, su desarrollo más a fondo tuvo lugar al noreste de Antioquia y sur de Córdoba entre 1987-1990 bajo la égida de Fidel Castaño, hasta alcanzar su posterior perfeccionamiento en Urabá bajo el liderazgo de Carlos Castaño y el general Del Río durante el mandato de Uribe Vélez como gobernador de Antioquia. En vista de que el

objetivo era lograr que los civiles colaboraran con las Fuerzas Armadas, especialmente recolectando información de inteligencia, una de las principales metas del gobierno nacional de Uribe fue reclutar un millón de informantes pagos, meta rebasada para agosto de 2004, con 1 500 000 registros más de los planificados. El Ejército de 20 000 “soldados campesinos” que Uribe proyectó se apoyó en redes de inteligencia articuladas por el parentesco y la amistad, lo que significaba que por cada soldado campesino había quizás cuatro informantes no pagados. Lo mismo sucedió con las familias de los 36 500 “guardabosques” a lo largo de la costa Atlántica, área dominada por las AUC.

Apenas cuatro días después de la ceremonia de posesión, durante la cual varias explosiones de mortero impactaron los alrededores de la Casa de Nariño en un ataque subcontratado por las Farc, Uribe, en calidad de presidente, determinó como primer paso la declaratoria de estado de emergencia en todo el país y la apertura formal de “negociaciones” con las ACCU (bloque dirigente de las AUC). Con el fin de llevar esto a cabo revocó la Ley 418 de 1997, que estipulaba que el Gobierno no podía firmar acuerdos ni diálogos con un grupo carente de estatus político y la reemplazó con la Ley 782 que eliminaba dicha cláusula de un plumazo.²⁰ Uribe además estableció un impuesto especial destinado a cubrir los esfuerzos de guerra abierta contra la subversión y como complemento a los recursos del Plan Colombia. Tropas, aviones y tecnología de vigilancia estadounidenses operaban como instrumento de apoyo y orientación durante las diferentes campañas de “exterminio de bandidos” llevadas a cabo en zonas ricas en hidrocarburos tales como Arauca, Sucre y Bolívar, así como en regiones con cultivos de coca al sur y sureste del país.

La Ley de Justicia y Paz, aprobada en junio de 2005, confirió impunidad a los paramilitares desmovilizados (ver capítulo 9), dando pie a preguntas sin respuesta acerca de la historia familiar de Uribe. El congresista Gustavo Petro, antiguo militante del M-19, fue uno de los políticos opositores que denunció los vínculos de Uribe con el narcoparamilitarismo. Estos alegatos salieron a flote mientras las AUC se preparaban para entrar en la política formal en el ciclo de elecciones de 2006 con sus recursos y armamentos intactos. Cuando el senador opositor Gustavo Petro señaló que uno de los hermanos de Uribe y dos primos segundos tenían mucho que ganar con la nueva legislación, *The Miami Herald* difundió dichos alegatos y mencionó la conexión del padre de Uribe con los Ochoa y Pablo Escobar, y del hermano de Uribe Vélez con grupos paramilitares (Los 12 Apóstoles, Los R), además de propiedades específicas —una de ellas, *La Carolina*, copropiedad del presidente Uribe con el hermano en cuestión—. ²¹

Aunque circunstancial, la evidencia resulta sumamente interesante para cualquier investigador. A mediados de la década de los setenta el padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, se encontraba endeudado sobreviviendo en Laureles, un barrio de clase media de Medellín, cuando un extraño revés de la fortuna lo catapultó a la riqueza, y lo convirtió en un influyente intermediario político, corredor de bienes raíces y “traficante reconocido”. ²² Se jactaba de poseer extensas haciendas de ganado en las sabanas del norte de Antioquia y Sur de Córdoba, y era además parte de un grupo de narcoespeculadores antioqueños que compraba tierras baratas en áreas en donde la activa presencia de las Farc y el EPL había provocado el colapso de los precios. Uribe Sierra estaba además conectado por alianzas matrimoniales con el clan Ochoa, familia

antioqueña de oligarquía involucrada en el tráfico de drogas y que en asocio con los mafiosos más descollantes formaron el Cartel de Medellín y posteriormente el mas en los años ochenta. Cuando Pablo Escobar lanzó su campaña “Medellín sin tugurios” en 1982, Uribe Sierra organizó una carrera de caballos para recoger fondos para esta iniciativa. Ese mismo año, cuando los mandatarios regionales y locales eran todavía elegidos por el ejecutivo en vez de en elecciones populares, Uribe Vélez fue designado alcalde de Medellín como un favor a su padre por haber financiado la campaña de Belisario Betancur. Sin embargo, fue rápidamente destituido por el entonces gobernador de Antioquia.

Pese a la brevedad de su mandato como alcalde de Medellín, los narcotraficantes se referían a esta ciudad bajo la administración de Uribe Vélez como “el santuario”. Cuando Uribe Sierra fue asesinado en su hacienda en 1983, el joven Álvaro voló hasta el lugar en un helicóptero propiedad de Pablo Escobar. El presidente Betancur junto a importantes miembros de la élite regional asistieron al funeral de Uribe Sierra, lo que demostró cuán dispuestos estaban a pasar por alto dudosas operaciones de negocios de las cuales algunos de ellos se habían beneficiado.

Similar a los oscuros vínculos de su padre con sectores de la ilegalidad, en la fortuna y trayectoria personal de Uribe Vélez sobresalen ciertas coincidencias. Por ejemplo, una de sus haciendas en Córdoba limitaba con una propiedad de Salvatore Mancuso, comandante paramilitar “empresario de la coerción” que sirvió como líder de las Convivir en Córdoba y posteriormente se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las AUC. Uribe dijo conocerlo en calidad de hacendado y ganadero, al igual que a los Ochoa solo los conocía como caballistas.²³ Un ex jefe de la DEA de EE. UU. alegó hace unos años que entre 1994 y

1998, periodo que coincide con la administración de Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia (1995 a 1997), Pedro Juan Moreno Villa, entonces secretario de Gobierno y, tomando prestada una frase del columnista Alfredo Molano, *el Montesinos de la Gobernación*, se convirtió en el principal importador de permanganato de potasio del país, precursor químico fundamental para el procesamiento de cocaína.²⁴ Moreno Villa fue además uno de los asesores de campaña de Uribe en 2002 y junto al general Bedoya, líderes del movimiento político Fuerza Colombia, organizaron en mayo de 1999 un acto de desagravio para el general Del Río en el Hotel Tequendama, tras haber sido destituido por el presidente Pastrana por vínculos con los paramilitares. Este evento finalmente sirvió de plataforma de lanzamiento de la campaña presidencial de Uribe Vélez. Junto a Moreno Villa, el general Del Río asumió como asesor de campaña.²⁵ En 2005, el caso contra Del Río fue desechado. Sin embargo, fue apresado en septiembre de 2008 por órdenes de la Fiscalía a raíz de las declaraciones en su contra realizadas por jefes paramilitares como Éver Veloza, alias *H.H.*, y Salvatore Mancuso, el primero esperando ser extraditado a EE. UU. y el segundo enfrentando cargos de lavado de dinero y narcotráfico desde una cárcel en Florida.

Basándose en su selección de amigos, vecinos, asesores y ministros, Antonio Caballero, posiblemente el humorista político más destacado de Colombia después del asesinato en 1999 de quien gozara de tal reconocimiento, notó que Uribe parecía aficionado a las malas compañías.²⁶ Cualquiera que fuese la naturaleza de la relación de Uribe Vélez con el narco-paramilitarismo en Córdoba y Antioquia, la persecución desatada por el gobierno de Clinton y los medios norteamericanos y colombianos en general en contra de Ernesto Samper (1994-1998) por haber recibido

financiamiento del Cartel de Cali para su campaña, si acaso parece cómica en comparación.

Aunque las cifras demuestran que Uribe Vélez ha extraditado a más narcotraficantes que cualquier otro presidente en la historia colombiana, los nexos con las redes más íntimas del narcoparamilitarismo y sus peculiares formas de terrorismo lucen mucho más estrechos que los de Samper. Hasta hace muy poco, ni uno solo de los traficantes extraditados bajo su administración era un paramilitar con jerarquía. Este patrón se rompió con la sorpresiva decisión de dar luz verde a la extradición en un solo embarque de toda la cúpula de las AUC, algunos de cuyos miembros amenazaban con “cantar”. Inicialmente Uribe fue cálidamente acogido por el gobierno de los Estados Unidos, así como por la oligarquía colombiana y la clase media, al punto que la revista *Semana*, una de las publicaciones de mayor circulación e influencia, lo declaró en 2002 como el “Hombre del Año”. Su imagen, a los ojos de la mayoría de los colombianos y políticos norteamericanos, estaba muy lejos de aquella proyectada por narcoparamilitares o por políticos curtidos en el teje maneje del clientelismo. Su imagen pública era la de un verdadero creyente en la contrainsurgencia como extensión del poder estatal.

Al igual que en coyunturas previas, para finales de la década de los noventa, la fracción reformista de la clase dominante no logró representar a su clase como a un todo, mucho menos a la nación. En su guerra contra el Estado y sus aliados narco-paramilitares, las guerrillas intensificaron las campañas de secuestro, extorsión, ataques con explosivos —conocidas como cilindros bomba o pipetas— e incluso masacres, las cuales hicieron de la guerra el día a día de habitantes de ciudades y municipios, sin distinción de clase, raza, género o generación. Avivadas por la

histeria mediática, estas tácticas hicieron que una mayoría de votantes optaran por la quijotesca búsqueda de la “seguridad”, encarnada en el autoritarismo de la derecha *uribista* alineado de acuerdo con los principios de contrainsurgencia de la Guerra Fría.

1. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”, 64.
2. Ferro Medina y Uribe Ramón, *El orden de la guerra*, 129-30.
3. Omar Gutiérrez, “La oposición regional a las negociaciones con el ELN”, *Análisis Político* 52 (septiembre-diciembre), 34-50. Cabe señalar que la imagen del ELN ya estaba muy desprestigiada por el sabotaje de los oleoductos en Machuca, Antioquia en 1998, que dejó un saldo de setenta muertos.
4. Grace Livingston, *Inside Colombia*, 24-25. El ELN había secuestrado un avión comercial en Venezuela en 1999 y secuestrado a una congregación entera en una iglesia en Cali en el 2000, mientras que las Farc comenzaban sus expediciones de “pesca milagrosa”, estableciendo bloqueos al azar en todo el país con la esperanza de encontrar “gente secuestrable”.
5. En *Systems of Violence*, Nazih Richani escribe, “la nueva falla del conflicto que empezó a tomar forma en la década de 1980 está entre una economía rentista y una [...] economía campesina representada por campesinos pobres, colonos y comunidades indígenas y afrocolombianas cuyas tierras se convirtieron en el blanco de los especuladores [...] y de las compañías multinacionales”, 35
6. Muchas de las ganancias organizativas y territoriales del ELN del periodo entre 1983 hasta 1996 estaban agotadas para el 2000. Estas fueron efectivamente sacadas de sus bases tradicionales en el noreste de Antioquia y en el sur de Bolívar, donde se había regulado por mucho tiempo la producción de la coca así como las relaciones de mercado entre pequeños mineros del oro, comerciantes y el capital extranjero; en la región del Catatumbo en Norte de Santander, donde el ELN reguló el mercado de la coca; en el valle de Cimitarra, en Santander, donde el grupo nació; y en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, y Barrancabermeja, feudos del ELN hasta finales de 1990.
7. Bruce Bagley, “Drug Trafficking, Political Violence, and US Policy in Colombia in the 1990s”, 7 de febrero de 2001: www.mamacoca.org.
8. En junio de 2005, McCaffrey fue enviado para evaluar prospectos para la ocupación norteamericana y la contrainsurgencia en Irak.
9. Angel Rabasa y Peter Chalk, *Colombian Labyrinth: The Synergy of Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability* (Santa Monica: Rand, 2001).

10. Gabriel Marcella, *Plan Colombia: Strategic and Operational Imperatives* (Santa Monica: Rand, 2001).
11. Aijaz Ahmad, "Colombia's Lethal Concoction", *Frontline* (Delhi) 23:6, (7 de abril de 2006), 59.
12. Adam Isacson, "Number Three No More", 19 de abril de 2005: cipcol.org.
13. Citado en Adam Isacson, "John Kerry's Statement", 15 de octubre de 2004: cipcol.org.
14. A diferencia del ELN, las Farc querían que continuaran las perforaciones sobre el territorio u'wa con el fin de sacarle rentas de protección a Occidental. Las Farc habían ejecutado anteriormente a combatientes del ELN por apoyar las exigencias de los u'wa. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 227.
15. *Ibíd.*, 260. Para un análisis de la fallas del Plan Colombia, ver Adam Isacson, "Putumayo, 5 Years into Plan Colombia", 1 de agosto de 2005: cipcol.org; *ídem*, "Did Plan Colombia Work? A Look at the Numbers", 18 de enero de 2006: www.democracyarsenal.org
16. Gonzalo Sánchez, "Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia", en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, 50.
17. Ver Garry Leech, *Killing Peace: Colombia's Conflict and the Failure of US Intervention* (Nueva York: Inota, 2001).
18. *El Tiempo*, 18 de enero de 1997. Citado en Mauricio Romero, "Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia", en Gonzalo Sánchez y Eric Lair, eds., *Violencias y estrategias colectivas*, 367.
19. Citado en Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 193.
20. Garry Leech, "Reinventing Carlos Castaño", 30 de septiembre de 2002: www.colombiareport.org; Jaime Zuluaga Nieto, "Del paramilitarismo a la parapolítica", *El Espectador*, 24 de julio de 2005.
21. *El Tiempo*, 19 de mayo de 2005; "Investigarán relación de congresistas y 'paras'", *El País*, 20 de mayo de 2005; "Uribe niega tener vínculos con los 'paras' de derecha", *El Nuevo Herald* (Miami), 22 de mayo de 2005; Gonzalo Guillén, "Acusan a Uribe de proteger a un hermano y a dos primos, presuntamente asesinos", *El Nuevo Herald*, 23 de junio de 2005.
22. Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína* (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987), 72. Castillo fue tres veces ganador del premio Simón Bolívar, el más prestigioso del periodismo investigativo de Colombia. Él se enfocó principalmente en Uribe Sierra y su discusión sobre los narcotraficantes de derecha, pero también mencionó a Uribe Vélez con relación a los caballos y las pesebreras, en una época en la que ninguno de los dos era reconocido fuera de Antioquia y Córdoba.
23. Joseph Contreras, con la colaboración de Fernando Garavito, *El Señor de las Sombras: biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez* (Bogotá:

Editorial Oveja Negra, 2000), 35-43, 65-72, 92, 167. Contreras es el editor para Latinoamérica de la revista *Newsweek* y Garavito un columnista político colombiano lanzado al exilio por amenazas paramilitares.

24. Jeremy Bigwood, "Doing the US's Dirty Work: The Colombian Paramilitaries and Israel", citando un reporte de la DEA de 1998: www.narconews.com. Para Alfredo Molano, ver "Peor el remedio", *El Espectador*, 1° de septiembre de 2002.
25. Mauricio Romero, *Paramilitares y autodefensas*, 193-94.
26. Ver Antonio Caballero, "Amenazas, malentendidos, y malas compañías", *Semana*, 3 de julio de 2005; Ramiro Bejarano Guzmán, "El amigo secreto", *El Espectador*, 3 de julio de 2005; Gerardo Reyes y Gonzalo Guillén, "Amistad con un narco pone en aprietos a Uribe", *El Nuevo Herald*, 5 de julio de 2005; Adam Isacson, "President Uribe's Shady Friend", 12 de julio de 2005: cipcol.org. Ver Fernando Garavito, *El señor de las sombras*, 62.

capítulo

9

El filo del precipicio,

2002-2005

El presidente Uribe ha hecho de la sociedad colombiana una que profesa la cultura del paramilitarismo...

Por eso en Colombia vamos hacia un Estado mafioso.

Ramiro Bejarano, exjefe del DAS, abogado y columnista (2006) Si bien el Plan Colombia fracasó en términos de erradicación de narcóticos, triunfó en cuanto a la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas, las cuales carecían de armamento, particularmente helicópteros, así como de unidades de combate entrenadas.

Sin embargo, también tuvo éxito en cuanto a la consolidación de la influencia política, social y territorial

del paramilitarismo en áreas anteriormente dominadas por las guerrillas. Al señalar como objetivos casi exclusivos las zonas de las Farc, el Plan Colombia colaboró para que los paramilitares integraran verticalmente su empresa criminal y la convirtieran en un instrumento político.¹ El debate alrededor de la Ley de Justicia y Paz, la cual apuntaba a regular la participación paramilitar dentro de la política oficial y la sociedad civil, se estructuró en torno a dos ideas opuestas: memoria y justicia versus paz y olvido. Una muy extraña forma de determinar el destino de un grupo que públicamente admitió haber hecho de las masacres, el tráfico de drogas y la expropiación su *modus operandi* en su afán por erradicar las guerrillas.²

La necesidad de perdón y olvido antes que de verdad o justicia estaba relacionada con dos aspectos que dicha ley necesitaba abordar. Primero, con la iniciativa de las AUC de ingresar plenamente a la política formal y, segundo, con los estrechos vínculos entre el paramilitarismo, la Policía y las Fuerzas Armadas, documentados en múltiples informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los EE. UU.³ Al tiempo que aquellos que lucharon junto al Estado desde la ilegalidad iban siendo incorporados políticamente, el ELN, acorralado hasta el límite, iniciaba conversaciones preliminares con el gobierno de Uribe, mientras que las Farc quedaban excluidas y sometidas al Plan Patriota, la mayor ofensiva militar de la historia, respaldada por los EE. UU. y puesta en marcha sobre el terreno con 18 000 efectivos.

UN NUEVO FEUDALISMO

Entre 2003 y 2005, el poder electoral de la derecha armada puso en peligro el monopolio bipartidista por primera vez

desde 1848. Al buscar la reelección y crear una estructura legal para legitimar la participación paramilitar dentro del Estado y la sociedad —ahora fusionados bajo el concepto de *Estado comunitario*—, Uribe dividió a su partido y fortaleció el gobierno central por medio de vínculos con centros de poder regionales dispersos. En la medida en la que Uribe no tenía en mente negociar con las guerrillas sino inflingirles una decisiva derrota militar, su elección marcó el final del ciclo histórico iniciado en 1982. Desde Laureano Gómez ningún presidente se había identificado tanto con puntos de vista que tuvieran influencia sobre el alto mando militar, las élites regionales y sus aliados en el Gobierno. La coalición contrainsurgente surgida durante el proceso de paz de la administración de Betancur se endureció frente a las reformas municipales de Barco y las departamentales de Gaviria. Por medio del paramilitarismo, las élites terratenientes y los gobiernos locales y regionales, esta coalición logró bloquear tanto las reformas del gobierno central como las iniciativas de paz. Ahora, además, contaba con un aliado en la Casa de Nariño.

Luego de la llegada de Uribe a la presidencia, los paramilitares intensificaron su control clientelista y político.⁴ En las altas esferas del paramilitarismo comenzaron a proliferar los líderes que a través de la compra de bloques y tropas se volvieron comandantes como forma de echar tierra sobre sus historiales como narcotraficantes. Nombres como Francisco Javier Zuluaga, José Vicente Castaño (hermano de Fidel y Carlos), Hernán y Jesús Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo (alias *Jorge 40*) y Diego Fernando Murillo (alias *Don Berna*), habían sido principalmente reconocidos por su reputación en los bajos mundos de la mafia.⁵ Una vez iniciadas las negociaciones, todos excepto Castaño, aparecieron vistiendo uniformes de comandantes paramilitares de una manera tan oportuna

que dentro del debate público terminaron bautizados con el apodo de *paracaidistas* y hasta se sostuvo que lo que estaban tratando de hacer era obtener pasaportes para evitar la extradición a los EE. UU.⁶ La mayoría de ellos, sin embargo, fueron extraditados en mayo de 2008 después de que Salvatore Mancuso amenazara con hablar sobre sus vínculos con empresarios, políticos y las Fuerzas Armadas.

Córdoba, bastión de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, fue el lugar de nacimiento de Colombia Viva, un movimiento político diseñado para conseguir apoyo para la incorporación de las AUC a las instituciones del Estado. Santa Fe de Ralito, ubicado al sur del departamento, fue escogido por las AUC como lugar de negociaciones con el Gobierno. Colombia Viva consiguió dos curules por la circunscripción de Córdoba en las elecciones de 2002. Las AUC ejercieron vigilancia sobre la Universidad de Córdoba y administraron el único hospital al sur del departamento. En los municipios de Tierralta y Valencia, considerados las capitales políticas de las AUC, ambos alcaldes electos en el 2003 pertenecían a Colombia Viva. Los demás candidatos se retiraron debido a las amenazas paramilitares. Junto a otros dos diputados, el 10 de abril de 2005, el miembro de la asamblea departamental, Orlando Benítez Palencia, fue asesinado en Valencia por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, de *Don Berna*. Benítez hizo caso omiso de las advertencias de no lanzar su candidatura a la alcaldía de este municipio.⁷

Según Enrique Santos Calderón, editor de *El Tiempo*, narcotraficantes, paramilitares y jefes políticos (*gamonales*) se habían fusionado a lo largo de la costa Atlántica.⁸ El departamento de Magdalena, controlado por Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar (alias *Jorge 40*), fue uno de los mejores ejemplos. El candidato de las AUC a la Gobernación,

Trino Luna Correa, ganó en 2003 sin oposición. Otros candidatos renunciaron debido a amenazas y hostigamientos de los paramilitares y hubo más votantes que dejaron sus votos en blanco que los que sufragaron por Luna. Las AUC aseguraron la victoria de tres senadores así como de tres representantes a la Cámara. Cuando Efraín Escalante insistió en postularse como alcalde de Concordia, a pesar de las amenazas de las AUC, fue asesinado. En la capital de Magdalena, Santa Marta, los paramilitares rápidamente amasaron una fortuna cobrando impuestos a los camiones que transportaban mercancías hacia los barcos contenedores que atracaban en los muelles del puerto. Todo tipo de comerciantes, desde vendedores ambulantes hasta dueños de tiendas, les pagaban impuestos.⁹ A través de Dibulla, Mingueo y Palomino, pueblos ubicados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta a lo largo del departamento fronterizo de La Guajira, los paramilitares exportaban drogas y armas sin ser molestados, pese a la presencia considerable de Policía y Ejército en los caminos.

En Magdalena y La Guajira, los paramilitares que trabajaban para Giraldo y *Jorge 40* controlaban los servicios de inteligencia, las apuestas, la prostitución, la seguridad privada, el contrabando, el lavado de dinero y la mayor parte del negocio de la cocaína. La situación era similar en Cesar, departamento vecino esencialmente ganadero en donde *Jorge 40* alguna vez sirvió como secretario de Hacienda. Allí, como en Magdalena, en las elecciones de 2003 el gobernador se postuló sin oposición alguna, luego de que otros candidatos reclinaran su aspiración bajo amenazas de las AUC. Y allí también el candidato único ganó las elecciones con un número de votos en blanco que superaba lo sufragado a su favor. En Riohacha, capital de La Guajira, el alcalde y diez miembros

del concejo municipal fueron arrestados en septiembre de 2004 por presunta desviación de recursos destinados al sector salud hacia los paramilitares bajo el mando de *Jorge 40* y Jesús Giraldo (hermano de Hernán Giraldo, también pedido en extradición por los Estados Unidos acusado de narcotráfico).¹⁰

Antioquia, cuna del presidente Uribe, también constituyó otro ejemplo de control paramilitar flagrante.¹¹ A pesar de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en noviembre de 2003, Diego Fernando Murillo (alias *Don Berna* en el bajo mundo y alias *Adolfo Paz* dentro de las AUC) continuó mandando sobre la ciudad a un grado que Escobar apenas soñó. Nacido en Tulúa, Valle del Cauca, centro de operaciones de *los pájaros* en la década de los cincuenta, después de abandonar el EPL, Murillo se transformó en uno de los asesinos a sueldo o sicario que más rápidamente ascendió en la organización de Escobar, sobreviviendo a varios ciclos de guerra sangrienta hasta convertirse en el jefe indisputable de la mafia de Medellín.¹² En 2005, desde la mesa de negociación en Santa Fe de Ralito, comandó los bloques Héroes de Granada, Calima, Libertadores del Sur, Pacífico y Héroes de Tolová hasta que finalmente se entregó a finales de mayo de 2005. A cambio de beneficios políticos bajo la Ley de Justicia y Paz, que apenas estaba en trámite, estuvo inicialmente de acuerdo con permanecer bajo la supervisión del Gobierno en una hacienda en Córdoba, cercana a la sede de la mesa de negociaciones. Posteriormente, en respuesta a las presiones del gobierno de EE. UU. luego del asesinato de un diputado del departamento de Córdoba, Murillo fue llevado a una cárcel de máxima seguridad para luego volver a una prisión local justo al sur de Medellín, en su propio territorio, desde donde siguió administrando sus negocios.

En 2004, mientras su Ejército privado trabajaba para tomar el control de los servicios de televisión por cable, los candidatos de *Don Berna* obtuvieron treinta puestos en diferentes Juntas de Acción Comunal en Medellín y se apoderaron de la construcción, los bienes raíces, las finanzas, el transporte y el comercio al por mayor y al detal. Por medio de la llamada Oficina de Envigado, *Don Berna* supervisaba la extorsión, la recolección de información de inteligencia, la vigilancia, el reclutamiento y entrenamiento de sicarios, los robos de autos, los asaltos bancarios, el juego de azar, la prostitución, la venta de drogas, el lavado de dinero y la seguridad privada. A través de su ONG, Corporación Democracia, *Don Berna* había comenzado a seleccionar los candidatos para las elecciones legislativas nacionales de marzo de 2006.¹³

La expansión paramilitar fue tan extensa que incluso en Bogotá se comenzaron a hacer públicos procesos similares en curso. Los paramilitares controlaban el mercado principal de alimentos al por mayor, así como los mercados *duty-free* (conocidos como *sanandresitos*), y le sacaron provecho a la producción campesina local, a las redes de informantes no oficiales y a las ventas de CD piratas y de llamadas a celular. Se estima que los paramilitares percibieron alrededor de 400 millones de pesos mensuales (más de 160 000 dólares) por concepto de extorsión a los *sanandresitos*. Con el fin de expandir sus propiedades también llegaron a controlar muchas de las redes de prostitución y a participar en secuestros, extorsión y sicariato —las mismas tácticas contra las cuales se suponía que estaban luchando—. Estuvieron involucrados en la trata de blancas e invirtieron en tiendas, concesionarios de autos, estaciones de gasolina, construcción, juegos de azar, contrabando y moteles. Según un informe oficial, los paramilitares dominaban distritos marginales completos,

tales como Ciudad Bolívar en el sur, por medio de bandas o pandillas de jóvenes locales para tomar el control de la economía. Para ilustrar la situación con mayor claridad, uno de los autores de dicho informe advirtió que Bogotá se estaba convirtiendo en algo similar a la Medellín de *Don Berna*.¹⁴

En Bucaramanga, un delegado que participó en un proyecto de investigación comparativa sobre el paramilitarismo habló sobre la “donbernización” de la ciudad, debido a la puesta en marcha del reclutamiento de jóvenes pobres de los barrios del norte de la ciudad, en las comunas 1 y 2 (53 vecindarios en total), para trabajar en la economía ilegal dominada por la mafia paramilitar. El área metropolitana de Bucaramanga (AMB) estaba controlada conjuntamente por el Bloque Central Bolívar (BCB) bajo el mando de Iván Duque (alias *Ernesto Báez*) y el Bloque Norte (BN) de *Jorge 40*. Almacenes y tiendas de todo tipo en La Cumbre y Bucarica, en las comunas 1 y 2, pagaban 6000 pesos diarios en impuestos (2.50 dólares); mecánicos y zapateros en la comuna 3 debían aportar sumas similares. Adicionalmente, las estaciones de lavado automático de vehículos le cobraban a los conductores de buses de servicio público 2000 pesos diarios, 8000 si deseaban contratar seguridad contra robos y atracos. Por el uso del espacio público los taxistas pagaban 3000 pesos y los vendedores ambulantes 500. El toque de queda empezaba después de las 9 de la noche y a las jóvenes les estaba terminantemente prohibido usar minifaldas o ropa con escote. Drogadictos, delincuentes menores, mujeres adúlteras y prostitutas fueron “limpiados”. Sin embargo, paralelamente, al igual que en el resto del país, hombres y mujeres jóvenes terminaron reclutados en las lucrativas redes de droga y prostitución controladas por los paramilitares.¹⁵

Con el paso del tiempo, la mafia paramilitar organizó a la juventud desempleada en un Ejército laboral contrainsurgente móvil y disciplinado —lo cual superó con creces lo que alguna vez Marx concibió cuando describió el papel del lumpenproletariado en la Francia de mediados del siglo XIX—. Habitantes desempleados de los barrios pobres especialmente de Antioquia, los diferentes municipios del Eje Cafetero y los Santanderes poblaron gran parte de la costa Atlántica a lo largo del siglo XX. Mientras la colonización de la frontera cafetera en el siglo XIX llevó a la fundación de nuevos municipios bajo el auspicio de los partidos Conservador y Liberal; la segunda oleada de colonización fue hecha desde barrios pobres o municipios en el interior del país hacia otros pueblos y barrios marginales, principalmente ubicados en la periferia nacional, lo que favoreció el proyecto de las AUC. Mientras las Farc abandonaron la “combinación de todas las formas de lucha”, sus oponentes la emplearon más efectivamente que nunca.¹⁶ La primera victoria clave de los paramilitares tuvo lugar con las elecciones al Congreso en marzo de 2002, en las cuales obtuvieron entre el 30 % y el 35 % de los escaños.

Sin embargo, una nueva generación de soldados había reemplazado a los viejos veteranos de guerra moldeados por los parámetros establecidos por los Castaño y Mancuso. La nueva camada no llevaba uniformes ni vivía en remotas regiones montañosas o de tierras bajas, más bien se desplazaba anónimamente en ciudades y cabeceras municipales desempeñando tareas cotidianas de administración, ocupación y acumulación. Esta generación surgida del ascenso del paramilitarismo era más parecida a *los pájaros* de los años cincuenta que a las tropas de Castaño de los noventa. Muchos de los nuevos reclutas andaban desarmados y, a diferencia de las Convivir, no

portaban equipos de radiocomunicación en sus cinturones. En Valledupar, Santa Marta, Cartagena y en general en las ciudades costeñas al norte del país; en Bucaramanga y Barrancabermeja en los Santanderes; en Villavicencio y Puerto Asís en las selvas del sur; en Medellín, Cali y Bogotá en el corazón andino; y en Pereira, Armenia y Manizales en el Eje Cafetero los miembros de esta nueva generación de paramilitares podían ser vistos arrendando teléfonos celulares, atendiendo puestos de frutas, vendiendo CD y gafas, manejando taxis, a cargo de talleres de mecánica, vigilando edificios públicos y negocios privados, cobrando facturas, supervisando los movimientos de las gentes dentro y fuera de los vecindarios, protegiendo a políticos y hombres de negocios, conduciendo sus motos en diligencias y encomiendas varias o sentados en restaurantes, bares, panaderías y cafés, escuchando a hurtadillas las conversaciones ajenas.

“BLINDAJE JURÍDICO”

A finales de junio de 2005, el Congreso colombiano (35 % del cual estaba controlado por paramilitares, según los propios comandantes paramilitares Mancuso y José Vicente Castaño) aprobó la Ley de Justicia y Paz; a finales de julio, Uribe la firmó a pesar de la controversia nacional e internacional. El director de la organización Human Rights Watch-Americas Watch advirtió que la ley “lavaría los registros criminales de los altos comandantes paramilitares, incluyendo a algunos de los señores de la droga más poderosos del país, al tiempo que les permite conservar sus riquezas y mantener su control sobre la mayoría del país”.¹⁷ Un “violentólogo” respetado y veterano predijo un escenario de italianización que

“produciría un orden basado en el crimen y la crueldad” en el cual el “terror y concentración extrema de la riqueza” serían los rasgos distintivos.¹⁸

Así como el discurso “antiterrorista” les negaba a las guerrillas la posibilidad de lograr reconocimiento político como actores alzados en armas en contra del Estado, bajo el artículo 72 de la Ley de Justicia y Paz, las AUC se aseguraron un estatus político como “subversivos” y “rebeldes”.¹⁹ Esto permitiría a los altos comandantes evitar sentencias prolongadas de cárcel o la extradición. Las sentencias serían de un máximo de seis años y medio. A un grupo de veinte fiscales se le daría un máximo de sesenta días para investigar los crímenes. No se desenmarañarían aspectos del paramilitarismo que pudieran revelar su parentesco con el poder oficial, tales como estructuras de mando, logística, rutas de transporte, finanzas, inversiones, alianzas políticas u otros.

El senador Rafael Pardo, antiguo seguidor de Uribe y quien como ministro de Defensa de Gaviria defendió la idea de las Convivir, ayudó en la coautoría de una ley que establecía la investigación de las estructuras financieras, militares y políticas de las organizaciones paramilitares, junto con alguna forma de compensación para las víctimas de sus crímenes contra la humanidad. Sostuvo además que la legislación de Justicia y Paz hacía “una farsa de justicia” y advertía que esto podría “establecer de manera legal un modelo político basado en el crimen organizado”.²⁰ El expresidente Gaviria, que buscaba salvar al Partido Liberal del colapso bajo la presión del uribismo, hizo eco de lo expresado por Pardo. “Las mafias se están apoderado de varios departamentos del país”, insistió, y denunció en una entrevista con la emisora La W, de Caracol Radio: “Ya no solo en temas de drogas sino de administración pública, y uno no ve ninguna acción, ve al presidente como muy

cómodo con esas situaciones”. “Son mafias como la italiana con tentáculos en el Estado”, agregó.²¹ Tanto Gaviria como Pardo consideraban que la Ley de Justicia y Paz de Uribe garantizaría la impunidad a los líderes del crimen organizado y facilitaría la penetración de la mafia en las regiones, ciudades y municipios.

Puesto que el gobierno de Bush no financiaría sino una fracción del improvisado y legalmente dudoso proceso de desmovilización, cuyos costos el embajador estadounidense William Wood estimó en 170 millones de dólares, Uribe inicialmente fijó su atención en Europa y el resto del mundo. El embajador Wood calificó la aparición de Mancuso ante el Congreso colombiano en julio de 2004 como “absurda” e insistió en que los paramilitares no eran actores políticos, sino más bien “criminales, narcotraficantes, asesinos y ladrones”. Aun así, en 2006, el gobierno estadounidense apartó 20 millones de dólares para destinarlos al proceso de desarme.²²

Durante una reunión en Cartagena en febrero de 2005, los gobiernos europeos y las agencias multilaterales pidieron que los crímenes paramilitares contra la humanidad fuesen castigados, con lo cual se hizo evidente el poder relativo con el que las organizaciones de derechos humanos cuentan en la Unión Europea, a diferencia de lo que sucede en EE. UU. El desembolso de los fondos dependía de la aprobación de una legislación que ordenase la investigación, encarcelación y alguna forma de compensación para las víctimas. Siguiendo lo posición de la ONU, la Unión Europea rechazó contundentemente la Ley de Justicia y Paz de Uribe calificándola de inaceptable de acuerdo con los estándares internacionales.²³ En todo caso, el apoyo a regañadientes de Europa a las políticas de “seguridad democrática” y negociaciones de paz con los paramilitares, cualquiera fuese su estatus político, fue un

sorprendente giro en la diplomacia de la UE en el país. Desde la década de los ochenta hasta los primeros años del gobierno de Pastrana el apoyo de Europa a un proceso de paz negociada con las Farc y el ELN fue el eje central de su política internacional hacia Colombia.

En una muestra de cuánto había cambiado la política exterior de la UE luego de haber accedido a la ocupación angloestadounidense de Irak, el viceministro de Defensa alemán Hans Georg Wagner expresó en abril de 2005 su entusiasmo por la “seguridad democrática”. El contraste entre el trato ofrecido a las AUC y a las Farc no podía ser más notable. Las Farc nunca habían aceptado un cese al fuego con el gobierno de Pastrana, por lo que no se desprestigiaban al violarlo, como hacían las AUC a diario. El territorio de las Farc estaba en la mira para ser tomado a través del Plan Patriota, una iniciativa que ayudó a convertir el conflicto colombiano en una fuente de continua tensión diplomática regional. Aunque este plan de 700 millones de dólares fue en mayor parte financiado por el gobierno colombiano, también fue supervisado por 800 consejeros estadounidenses y 600 mercenarios que apoyaron tanto en las áreas de logística como de inteligencia militar. Adicionalmente, contó con más de 100 millones de dólares en “ayuda” anuales.

El Plan Patriota se inició a finales de 2003 con el objetivo de expulsar a las Farc de una zona de aproximadamente 187 kilómetros de extensión entre los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare y Vaupés, y conseguir la captura y extradición de sus líderes a los Estados Unidos. Con el componente de la extradición, el Plan Patriota se puso en marcha como una especie de Operación Marquetalia aumentada y robustecida en hombres, recursos y tecnología, que amenazaba con expandir la guerra hasta Venezuela y Ecuador. Cerca de 20

000 tropas ecuatorianas se agruparon a lo largo de la frontera colombiana en abril de 2006, mientras que en Venezuela, más de 100 colombianos estuvieron en la cárcel por conspirar para asesinar a Hugo Chávez en coordinación con los paramilitares y el DAS, servicio de inteligencia que solo respondía a la Presidencia colombiana.

En contraste, a los paramilitares se les permitió quedarse con las mejores tierras del país, junto con las redes más rentables de producción, transporte y distribución de narcóticos, sin mencionar los negocios legales fachada. De acuerdo con la Contraloría General de la República, la arremetida paramilitar de finales de los años noventa y principios del nuevo siglo culminó con la concentración de cerca de la mitad de toda la tierra cultivable del país en sus manos. El proceso de desmovilización paramilitar comenzó en noviembre de 2003, se aceleró a finales de 2004 y dejó a más de 30 000 excombatientes desmovilizados para marzo de 2005.²⁴ Los comandantes declararon que en vez de ir a la cárcel por los “excesos” cometidos en “defensa de la patria”, tomarían las armas nuevamente. La extradición a los Estados Unidos era impensable, al igual que las compensaciones a las familias de las víctimas. En abril de 2005, con las negociaciones a punto de resolverse, el vocero político de las AUC, Iván Duque (alias *Ernesto Báez*) amenazó con “volver al monte”. Una vez Uribe firmó la Ley de Justicia y Paz, *Báez* convocó a la formación de un movimiento político y describió con candor el proceso de formación paraestatal: “Hemos penetrado, de forma permanente, en el proceso político, construyendo las estructuras de poder regional y local[...] Nuestra meta es sobrevivir a la guerra y transformarnos en un movimiento democrático que le ofrezca a los votantes una alternativa”.²⁵

Salvatore Mancuso anunció sus intenciones de hacer carrera política y elogió la ley de Uribe, por reconocer a las AUC como “actores políticos” —un objetivo mencionado por primera vez en la conferencia paramilitar protonacional de 1994—. ²⁶ Mancuso argumentó que en tanto que la ausencia del Estado en las zonas guerrilleras había obligado a los paramilitares a tomar las armas en “autodefensa”, las tropas de las AUC eran víctimas y por consiguiente tan merecedoras de las compensaciones como las víctimas de las atrocidades paramilitares. ²⁷ José Vicente Castaño lo secundó, enfatizando los nexos familiares de las AUC con la política oficial colombiana y exigiendo que a los paramilitares se les diera un “blindaje jurídico” contra la extradición y las sentencias judiciales. Predijo también que las AUC mejorarían su ya fuerte posición en el Congreso en las elecciones legislativas de marzo de 2006, predicción que se hizo realidad pues en 22 de los 32 departamentos de Colombia los votantes sufragaron más hacia la derecha de lo que lo habían hecho en 2002. ²⁸ Al discutir sus planes para postularse a cargos públicos una vez que los “obstáculos judiciales” se esclarecieran, Mancuso instó a los antiguos comandantes de las AUC a seguir su ejemplo.

Los resultados de las elecciones legislativas de marzo de 2006 sugerían que, temiendo la extradición, los paramilitares siguieron las señales del gobierno estadounidense. Por un lado, cincuenta órdenes de extradición para igual número de comandantes de las Farc fueron emitidas por un gran jurado federal en el distrito de Columbia, mientras que el fiscal estadounidense Alberto Gonzales declaraba en contra de toda evidencia que las Farc eran responsables de la mayoría de la producción de cocaína en Colombia. Gonzales añadió que la acusación “atacaba el propio centro de operaciones de narcóticos de

las Farc que ha inundado nuestras comunidades con cocaína”.²⁹ Por otro lado, la expulsión de un puñado de candidatos abiertamente paramilitares de los partidos de la coalición de Uribe, condujo a un apoyo paramilitar mucho mayor a la maquinaria política tradicional. Esta expulsión camufló, sin disminuir, el dominio paramilitar sobre la política en las regiones. Justo antes de las elecciones en marzo de 2006, *Jorge 40*, amo y señor de la costa norte, se desmovilizó tras cerciorarse de que los lineamientos políticos estuvieran en su lugar. Por mantener un bajo perfil político, *Jorge 40* obtuvo los resultados electorales más favorables de cualquier caudillo paramilitar.³⁰

TIERRA ARRASADA EN LA REPÚBLICA GANADERA

Se estima que los paramilitares expropiaron cerca de 5 millones de hectáreas entre 1997 y 2003 en lo que es la más grande toma de tierras en la historia de Colombia. Un analista colombiano aseguró que el poder de la clase dominante terrateniente hizo a Colombia sencillamente atávica. Otros apodaron al país como una “república ganadera”.³¹ La contrarreforma agraria llevada a cabo por fuerzas de “autodefensa”, como los paramilitares se llamaban a sí mismos, favoreció a las plantaciones bananeras, azucareras y palma, así como también a las compañías madereras y las haciendas ganaderas.³² Los números hablan por sí solos: en 1987, 35 millones de hectáreas fueron consagradas a la ganadería y en el 2001, 41.7 millones. En 1984, las haciendas con más de 500 hectáreas ocuparon el 32.7 % de la tierra, en 1996, ocuparon el 44.6 % y en 2001 eran el 61.2 %. Ya para 2004, el 0.4 % de los terratenientes poseían el 61 % de todas las

tierras con títulos, mientras que la pobreza rural se incrementó de 82.6 % en 2001 a 85 % en 2003.

Por supuesto, los números no pueden contar las historias de los desplazados, quienes en su mayoría, además del trauma, viven persecución y discriminación políticas en los nuevos asentamientos.³³ Pese a declaraciones públicas por parte del Gobierno, era poco probable que más de un puñado de desplazados regresara a su lugar de origen y aun menos probable que sus tierras, la mayoría sin títulos de propiedad, fueran devueltas. Solo una de cada tres personas desplazadas recibió ayuda de cualquier tipo por parte del Gobierno; y aunque se ha hablado mucho de los 15 millones de hectáreas de selva tropical destruida y sembrada de coca, entre 75 y 100 millones de hectáreas de selva se habían despejado para abrirle paso a la ganadería. El contralor General habló del “poder señorial” antidemocrático en el campo, calificando a los narcoparamilitares como los que ejercen el “poder real” en regiones y municipios.³⁴

Junto al incremento de la concentración de tierras, la expropiación y el desalojo, las fumigaciones aéreas bajo el Plan Colombia han sido una iniciativa tan costosa como destructiva. Las aspersiones han causado la propagación de infecciones respiratorias y de la piel en la población civil, especialmente en niños y ancianos, destruyen cultivos lícitos e ilícitos y envenenan ríos y suelos.³⁵ No obstante, desde 2002 hasta 2004, Washington y Bogotá alegaron haber tenido un éxito sin precedentes en su campaña contra la coca. En diciembre de 2002 un estudio de la ONU demostró que la extensión sembrada había sido reducida en aproximadamente un 30 %, es decir, a 102 000 hectáreas.³⁶ Durante 2003, se destruyeron mensualmente más de 14 000 hectáreas, incluso en áreas de reserva de parques nacionales que contienen 70 % del agua en

Colombia, todo siguiendo la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a comienzos de diciembre de 2003, que estipula que aun los 10 millones de hectáreas de selva protegidas por el Estado deben hacer parte del juego. En 2005 se llevó a cabo la fumigación o erradicación manual en el parque Tayrona, Magdalena, La Macarena, Caquetá y Catatumbo, en Norte de Santander, en donde menos del 1 % de la superficie estaba dedicada al cultivo de coca.³⁷

En Putumayo, al sur del país en frontera con Perú y Ecuador, “los pueblos dedicados a la cosecha y producción de la cocaína han sido abandonados como si fuesen pueblos fantasmas del viejo oeste norteamericano, sus almacenes están vacíos y su gente se ha esfumado”.³⁸ Como parte integral del Plan Colombia a partir de 2000, se usaron dosis altamente concentradas del herbicida Roundup Ultra de Monsanto mezclado con Cosmo-Flux, un compuesto químico antiguamente suministrado por el ici que se usaba para que el glifosato se adhiriera a toda superficie sobre la que fuera esparcido. Al rociar este componente tóxico, los pilotos colombianos y mercenarios estadounidenses destruyeron junto a los campos de coca, peces, vida silvestre, ganado, ríos y cultivos legales.³⁹ En muchos casos, los habitantes de zonas cocaleras simplemente volvieron a sembrar más allá de la zona fronteriza.

La guerra química necesita ser vista como parte de una estrategia más amplia de la contrainsurgencia: De entrada hay que considerar que la fumigación es una modalidad de guerra química cuyo objetivo escondido es sacar a los colonos y campesinos de sus regiones para impedir que apoyen —obligada o voluntariamente— a la subversión. En alguna medida cumplen la misma función que el terror paramilitar: sacar el agua de la pecera.⁴⁰

Aun cuando la fumigación alcanzó niveles récord con aproximadamente 136 000 hectáreas rociadas, en 2004

todavía quedaban 114 000 hectáreas. No hubo “mejoría”, ya que la producción neta de coca seguía siendo cercana a los niveles de 1999, contrario al 50 % de reducción estipulado en las metas de los autores del Plan Colombia. Los precios de la cocaína y la heroína en las calles estadounidenses continuaron en descenso, mientras que por cada 32 hectáreas de coca fumigada, solo una fue erradicada. La producción de coca en Colombia, incluyendo el número de hectáreas fumigadas, fue mayor en 2005 que en 2003, manteniéndose apenas por debajo del registro establecido en 2002. Para 2006, era evidente que pese a las reducciones registradas entre 2002-2003, el cultivo de coca había alcanzado niveles récord nuevamente. Los agricultores aprendieron prontamente a recurrir a la resiembra, reubicación o ambas. La fumigación aérea de más de 4 mil kilómetros cuadrados de territorio colombiano, la mayoría del cual era selva y bosques tropicales, a un costo de 160 000 dólares por milla cuadrada, a menudo solamente tuvo éxito de manera temporal y muy localizada.

Por supuesto, en ausencia de programas sostenidos y bien diseñados de sustitución de cultivos, el terror de la guerrilla y de la contrainsurgencia en las fronteras cocaleras solo pudo aumentar —tal como lo reconocen hasta los estudios realizados por la Corporación Rand—. Además de los problemas locales que ha generado, esta aproximación a la producción cocalera y de cocaína también ha desatado fricciones diplomáticas con los gobiernos vecinos en Quito y Caracas, los cuales aseveran que tanto el Plan Colombia como el Plan Patriota han conducido a crecientes y constantes violaciones de su soberanía. Al parecer, un costo adicional que no ha hecho que al régimen Bush-Uribe le tiemble la mano.

1. Alfredo Molano predijo esto en "El día antes", *El Espectador*, 14 de mayo de 2000. Para todo esto, ver también Mario Murillo, *Colombia and the United States: War, Terrorism, and Destabilization* (Nueva York: Seven Stories Press, 2004).
2. Ver Carlos Castaño, *Mi confesión* (Bogotá: Editorial Oveja Negra, 2001).
3. Ver Human Rights Watch, "State of War: Political Violence and Counterinsurgency in Colombia" (1993); "Colombia's Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States" (1996); "The Sixth Division": Military-Paramilitary Ties and US Policy in Colombia" (2001); "Colombia: Letting the Paramilitaries off the Hook" (2005).
4. *El Tiempo*, 27 de marzo de 2002. Según el ministro del Interior del momento, Armando Estrada, candidatos simpatizantes de los paramilitares obtuvieron un tercio de los puestos del Congreso y del Senado.
5. Las políticas extranjeras de los EE. UU. dieron un giro momentáneo contra los paramilitares en febrero de 2004, y siguiendo el patrón de su hermano Fidel en 1994, Carlos Castaño "desapareció" en abril de ese mismo año. Coincidentalmente, Carlos, quien se había comparado con Houdini en su autobiografía, predijo su propio acto de desaparición en una entrevista con un periodista norteamericano. En otro contexto, un consejero político de la Embajada de EE. UU. le predijo a un investigador de derechos humanos que Castaño desaparecería una vez que hubiese cumplido su misión. Ver Steven Dudley, *Walking Ghosts*, 198, 206; Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 247.
6. *El Tiempo*, 12 de febrero de 2005.
7. *El Tiempo*, 23 de mayo de 2005.
8. Alfredo Molano, "Sentando bases", octubre de 2004: www.mamacoca.org
9. Adam Isacson, "Peace - or 'Paramilitarization'-?", julio de 2005: cipcol.org
10. *Ídem*, "Paramilitarism's Inexorable Progress", 28 de marzo de 2005: cipcol.org
11. *El Tiempo*, 20 de julio de 2005.
12. Adam Isacson, "Don Berna in Custody", 31 de mayo de 2005: cipcol.org
13. Garry Leech, "An Unjust Demobilization", 20 de junio 2005: www.colombiajournal.org
14. *El Tiempo*, 2 de julio de 2005.
15. *Vanguardia Liberal*, 19 de julio de 2005.
16. Álvaro Delgado, "El problema de fondo", *Actualidad Colombiana*, 27 de abril de 2005: <http://www.voltairenet.org/article124924.html>.
17. José Miguel Vivanco y Maria McFarland Sánchez-Moreno, "A Bad Plan in Colombia", *International Herald Tribune*, 16 de mayo de 2005.
18. Álvaro Camacho Guizado, "Paras y parapolítica", *El Espectador*, 12 de junio de 2005. *Violentología* es un campo inter-disciplinario que ha sido el centro de gravedad de la historia y las ciencias sociales en Colombia desde la década de los ochenta. Camacho es un sociólogo pionero de la

investigación de la política, el crimen organizado y la violencia urbana, autor del informe de la Comisión de Memoria Histórica sobre la masacre de Trujillo (norte del Valle), publicado en septiembre de 2008.

19. Javier Zuluaga Nieto, "Del paramilitarismo a la parapolítica", *El Espectador*, 24 de julio de 2005.
20. *El Tiempo*, 10 de abril de 2005. Ver también, "Subido de tono", *Semana*, 20 de mayo de 2005; John Otis, "Colombia podría sacrificar la justicia para buscar la paz", *Houston Chronicle*, 21 de mayo de 2005; Alfredo Molano, "El delete", *El Espectador*, 22 de mayo de 2005.
21. *El Nuevo Herald*, 14 de junio de 2005.
22. *Semana*, 10 de octubre de 2004.
23. En julio de 2005, Uribe hizo un tour diplomático a Madrid y Londres para pregonar el esquema, calculando, correctamente que encontraría "caballos de Troya" en la periferia de Europa, a través de los cuales pasar de contrabando la desmovilización en la agenda de política extranjera de la UE. En una discusión acrítica sobre la lucha contra el terrorismo en Londres, Madrid y Bogotá, el *Financial Times* reconoció que "algunos políticos europeos" habían destacado las conexiones entre el Ejército colombiano y los paramilitares.
24. Para el fracaso de las desmovilizaciones iniciales, ver Human Rights Watch, "Smoke and Mirrors: Colombia's Demobilization of Paramilitary Groups", 2005: www.hrw.org; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Oficina de los Derechos Humanos en Colombia, "Consideraciones sobre la ley de, Justicia y Paz, 27 de junio de 2005.
25. Citado en Luis Jaime Acosta, "Feared Colombian Militias Want Political Party", *Reuters*, 21 de julio de 2005.
26. "No voy a volver al monte", *Semana*, 16 de abril de 2005.
27. Para un análisis del discurso, ver Fernando Estrada Gallego, "La retórica de paramilitarismo: análisis del discurso en el conflicto armado", *Análisis Político* 44 (septiembre-diciembre 2001), 44-66.
28. *Semana*, 5 de junio de 2005.
29. Jerry Seper, "US seeks Colombian Rebels Extradition", *The Washington Times*, 18 de abril de 2006.
30. Forrest Hylton, "Colombia: Politics as Organized Crime?", *Nacla Report on the Americas* (mayo-junio 2006).
31. Héctor-León Moncayo, "Las máscaras del poder", *Le Monde Diplomatique-Colombia* (julio 2002), 4-5; Alfredo Molano, "República ganadera", *El Espectador*, 10 de noviembre de 2002.
32. Codhes, "¿Penas, tierras y extradición?": www.codhes.org.co; "¿Hasta cuándo?", *El Tiempo*, 13 de junio de 2005.

33. Para algunas de estas historias, ver Alfredo Molano, *los Desterrados* (Bogotá: 2002). Para estadísticas, ver Darío Fajardo, *Tierra, poder político y reformas agraria y rural* (Bogotá: 2002), citado en Héctor-León Moncayo, "Las Máscaras del poder"; Alfredo Molano, "Políticas enlatadas", *El Espectador*, 24 de noviembre de 2002.
34. "Autodefensas se apropiaron de las tierras en Urabá por la fuerza", *El Tiempo*, 2 de julio de 2005. En San Pedro de Urabá, donde había sido planificada la masacre de Mapiripán, las AUC hicieron una oferta que pocos jefes de hogar podían rechazar: "¿Nos vende o prefiere que le compremos después a su viuda?" Los compradores potenciales en Urabá eran todos de la "empresa" —código para las AUC (tomado prestado, a propósito de las insurgencias)—.
35. Para fumigación, ver Hugh O'Shaughnessy y Sue Branford, *Chemical Warfare in Colombia: The Costs of Coca Fumigation* (Londres: Latin American Books, 2005).
36. "Colombia's Politics", *Economist*, 5 de junio de 2003.
37. Alfredo Molano, "Fumigación de parques", *El Espectador*, 17 de diciembre de 2003; *idem*, "A dos fuegos", *El Espectador*, 1 de mayo de 2005.
38. T. Christian Miller, "Major Cocaine Source Wanes", *Los Angeles Times*, 8 de junio de 2003.
39. Darío González Posso, "Armas químicas y biológicas en el Plan Colombia. Interrogantes sobre 'la estrategia antinarcóticos'", en Jairo Estrada Álvarez, ed., *El Plan Colombia y la intensificación de la guerra* (Bogotá: UN, 2002), 421-49.
40. Alfredo Molano, "A dos fuegos", *El Espectador*, 1 de mayo de 2005.

capítulo

10

La guerra como paz,

2005-2006

*Durante los últimos cinco años los colombianos
han producido el éxito más grande de
Latinoamérica.*

R. Nicholas Burns, subsecretario de Estado para Asuntos
Políticos de EE. UU. (2006)

UNIFICAR TEORÍA Y PRÁCTICA

El poder ejecutivo en Washington aclamó como un modelo para la contrainsurgencia las políticas de “seguridad democrática” de Uribe basadas en la incorporación de civiles en las actividades represivas del Estado a fin de vencer las insurgencias y extender la autoridad del

gobierno central. Pese a que no han tenido éxito en derrotar las afianzadas insurgencias guerrilleras, las políticas de “seguridad democrática” han permitido que las fuerzas paramilitares extiendan su control sobre la vida política, económica y social a nuevas regiones. Asimismo, estas políticas han reforzado el colonialismo interno y violado el Protocolo de Ginebra al controlar las relaciones entre civiles y combatientes.

Cualquier interpretación del conflicto armado lleva consigo ramificaciones específicas legales, políticas y militares. Como lo dijo un experto en la historia de la seguridad nacional en Colombia,

cualquier política de paz tiene que ver con la interpretación del conflicto armado. Y si esta no es adecuada, se cae en costosos errores [...]. Así mismo, el degradante lenguaje de las autoridades oficiales, como parte de la cruzada mundial contra el terrorismo, refuerza este problema.¹

Usando argumentos presentados en un libro escrito por uno de sus asesores, el presidente Uribe anunció a su cuerpo diplomático a finales de enero de 2005 que en Colombia no existía ninguna guerra ni conflicto armado.² Mas, lo que sucedía era que un Estado preparado militarmente estaba luchando contra “el terrorismo”, codo a codo con la sociedad civil y la ayuda de la “comunidad internacional” guiada por los Estados Unidos. El debate público en Colombia frecuentemente gira en torno a semántica, por lo que para nadie pasan desapercibidos los variados y diversos sentidos de los términos usados.³ Redefinir el problema en Colombia como “terrorismo” significa el final de las presiones para una solución negociada, es decir, política, al conflicto armado con las Farc. Sin embargo, más allá de estas muecas semánticas, Uribe avanzó en conversaciones preliminares con el ELN en

La Habana, dando continuidad al modelo de paz fragmentada instaurado por primera vez por Gaviria.

La circulación de nuevas nomenclaturas de clasificación de los conflictos en la época de Guantánamo y Abu Ghraib le ha permitido a Uribe ignorar el Protocolo II de la Convención de Ginebra, el cual obliga tanto a gobiernos como a insurgentes a distinguir entre civiles y combatientes. Después del 11 de septiembre de 2001, antes de convertirse en el fiscal general de los Estados Unidos, Alberto Gonzales, en calidad de consejero especial de la Casa Blanca, calificó al Protocolo IV de la Convención de Ginebra de “arcaico”. En junio de 2005, el presidente Bush llamó “absurdo” un informe de Amnistía Internacional sobre la tortura y abuso a los derechos humanos en Guantánamo. En este contexto, Uribe ha sabido sacarle provecho a las nuevas doctrinas imperiales en lo referente a antiterrorismo, derechos humanos y leyes internacionales.⁴

Aunque no es el objetivo de este libro, la relación entre anticomunismo de Guerra Fría y antiterrorismo de pos-Guerra Fría es digna de al menos breves consideraciones. Los líderes de la “guerra mundial contra el terrorismo” del presidente George W. Bush libraron viejas batallas bajo nuevos títulos, tal como los contrainsurgentes de la Guerra Fría durante la presidencia de Ronald Reagan lo hicieron en su momento. Las guerras coloniales en Irak y Afganistán se han venido peleando de manera similar a las de Vietnam, Guatemala y El Salvador, en el sentido que tanto estrategias como comandantes convirtieron a los civiles en blancos a manera de lucha legítima contra las insurgencias armadas. El núcleo contrainsurgente del anticomunismo de Guerra Fría se conservó en la “guerra mundial contra el terrorismo”, convirtiendo a Uribe y a los generales

colombianos en actores contemporáneos antes que anacrónicos.⁵

URABÁ: EL CAMBIO REGRESIVO

La teoría de la contrainsurgencia sostiene que en una guerra de guerrillas la distinción entre civiles y combatientes es insostenible. En la práctica, el Ejército colombiano, que no ha tenido respeto por los derechos humanos o la Convención de Ginebra, no se enfrentó a un tribunal civil hasta 1991. El Ejército colombiano consideró la supervisión civil como un obstáculo para librar la guerra contrainsurgente contra el pueblo colombiano y la posición de Uribe coincidió con la de los militares. Luego de la desintegración de la Unión Soviética y del bloque tras la Cortina de Hierro, tanto Uribe como el alto comando colombiano conservaron una filosofía política arraigada en la Guerra Fría, pero reciclada bajo la rúbrica del “antiterrorismo”.

Un prominente sociólogo notó que las “hipótesis de guerra” de los generales eran “inmunes al cambio”.⁶ Como si ilustrase las consecuencias de este enfoque, el 21 y 22 de febrero de 2005, cerca de la Comunidad de Paz San José de Apartadó, varios de sus miembros —incluidos Luis Eduardo Guerra (uno de sus líderes y fundadores) tres niños de 2, 6 y 11 años y un adolescente de 17— fueron asesinados, algunos degollados con machetes y sus cuerpos desmembrados.⁷ De acuerdo con residentes locales, quienes se rehusaron a testificar ante las autoridades correspondientes por temor a represalias, los responsables fueron soldados del Ejército. Una serie de declaraciones confusas y contradictorias fue la respuesta que el Ejército suministró acerca de sus acciones durante la masacre.

Algunos líderes, Luis Eduardo Guerra entre ellos, habían viajado a los Estados Unidos y Europa para explicar su situación y los esfuerzos por mejorarla. Como resultado de la presión internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que los miembros de San José de Apartadó recibieran garantías de seguridad por parte del gobierno colombiano. La masacre de febrero, sin embargo, elevó a 152 el número total de miembros de la comunidad asesinados (19 de ellos a manos de las Farc), estadística que puso a prueba los límites de la solidaridad internacional.⁸ Sin embargo, los habitantes de esta Comunidad de Paz, como practicantes de la neutralidad militante no violenta con fuertes vínculos con las organizaciones internacionales de derechos humanos, continúan insistiendo en que para vivir y producir necesitan que todas las Fuerzas Armadas, incluidas tropas del Ejército y policías, permanezcan fuera de sus áreas. Por ello, sus miembros amenazan con recoger todo y marcharse si el Gobierno insiste en montar estaciones de Policía en el pueblo, ya que la presencia de estas podría hacerlos blanco de las incursiones de la Farc. Sin embargo, el exministro de la Defensa, Jorge Alberto Uribe, dijo que no era posible que hubiese paz sin la protección de la Policía y de las Fuerzas Armadas. En un consejo de seguridad en Carepa, municipio del Urabá antioqueño, sede de la XVII Brigada, el presidente Uribe fue más allá diciendo que

las comunidades de paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la Fuerza Pública, prohibir el comercio de artículos lícitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista.⁹

Bajo esta filosofía política, todas las formas de movilización y protesta social han sido tildadas de sospechosas, incluso criminales, puesto que se cree que los insurgentes las dirigen secretamente. De esta idea se desprende la conclusión de que si los civiles que apoyan a las guerrillas no son identificados y luego cooptados, o elegidos como blanco legítimo, ni el Estado ni sus tropas financiadas y entrenadas en los EE. UU. podrán ganar la guerra. A principios de abril de 2005, una estación de Policía fue instalada en San José de Apartadó, por lo que la mayoría de los cuatrocientos habitantes que aún quedaban abandonaron el lugar para fundar un nuevo municipio, La Holandita, el cual no contaba con escuela, servicios médicos, electricidad, agua potable o alcantarillado y apenas tenía un baño para toda la comunidad. En mayo de ese mismo año, solo cinco familias permanecían en el poblado original, mientras la Policía se desplegaba en grandes números.¹⁰

Conforme a un modelo de desarrollo económico basado en la generación de empresas de agroindustria financiadas por capital extranjero, las tierras de la antigua comunidad de San José de Apartadó fueron dispuestas para ser utilizadas en el desarrollo de plantaciones de palma africana, cultivos que requieren de deforestación y fuerte irrigación y por tanto representan una amenaza para ríos, selvas y comunidades.¹¹ En su primera intervención pública, José Vicente Castaño se acreditó el aumento de las extensiones de palma africana y la incursión de la agroindustria en Urabá. Además de haber invertido en el negocio, Castaño convenció a otros de invertir y se encargó de buscar nuevas regiones para la inversión.

Conocido como el estratega tras bastidores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Castaño, alias *El Profesor*, ofreció una rudimentaria teoría sobre la

formación del Estado colombiano, según la cual las AUC abrían y aseguraban regiones para la inversión a fin de que el Gobierno siguiera a los inversionistas.

En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí a los empresarios para invertir en esos proyectos, que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas, llegan las instituciones del Estado.¹²

De esta manera, la palma africana, implantada como herramienta de la soberanía del Estado por la vía del terror y la expropiación, representó una amenaza para la supervivencia de afrocolombianos y mestizos en San José de Apartadó y en las reservas indígenas a lo largo de los ríos Atrato, Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó y Salaquí.¹³

Este exterminio al que hemos sido sometidos por parte de una Fuerza Pública que ha actuado en forma descarada con el paramilitarismo - declaró la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en un comunicado público- no es una invención nuestra ni es cuestión de estadísticas. Nuestras víctimas tienen rostros, historias, familias; ahora yacen en tumbas que evidencian indudablemente un crimen de lesa humanidad contra la comunidad".¹⁴

CAUCA: EL RETORNO A LOS ORÍGENES

Los grupos indígenas del Cauca están actualmente a la cabeza de los movimientos populares en Colombia. En septiembre de 2004 sus organizaciones encabezaron la marcha más grande en la historia de Cauca (60 000 personas) contra la política de "seguridad democrática" y la propuesta del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.¹⁵ En marzo de 2005, estos grupos indígenas organizaron un referéndum sobre el tratado de libre comercio en el que el 70 % de la población participó con un resultado del 98 % de los votos en contra, en un proceso

que fue considerado transparente por los observadores internacionales asistentes. Un ex alcalde de Caldon, Vicente Otero, fue uno de los organizadores claves de la campaña. El 21 de mayo agentes del das allanaron su casa y arrestaron a 20 personas. La orden de allanamiento fue emitida para otros 200 pobladores.¹⁶ Caldon, localizado en la misma zona de guerra de Toribío, Jambaló y Tacueyó, fue entonces destruido por un cilindro bomba de las Farc en julio de 2005.

En vista de que el Plan Patriota eligió como blanco el costado oriental de la cordillera, en los departamentos de Caquetá y Meta, se tomó como retaguardia estratégica el segmento norte del costado occidental, en jurisdicción del departamento de Cauca, en donde las insurgencias se habían incrustado por más de veinte años. Los generales colombianos sostuvieron que la región del macizo, donde las cordilleras Central y Oriental se bifurcan, se había convertido en un “segundo Caguán”. La escuela de Caldon fue consecuentemente convertida en cuartel y sus campos deportivos fueron adecuados como helipuertos. De acuerdo con la oficina del alcalde, durante esta etapa unas 2 400 personas fueron desplazadas, de los cuales más de la mitad fueron mujeres y niños.¹⁷

Cuando en abril de 2005 la secretaria de Estado Condoleezza Rice visitó Bogotá, no se mostró muy consciente de la importancia de su inquebrantable apoyo a las causas contrainsurgentes. A su arribo las Farc ya habían invadido el pueblo de Tacueyó.¹⁸ Mientras tanto, las Fuerzas Armadas tomaban Toribío tras nueve días de combate sostenido con las Farc, el cual comenzó el 14 de abril y se extendió a lo largo de más de veintidós kilómetros al norte de los Andes.¹⁹ Ignorante de los eventos en el norte de Cauca y de la conmoción en el alto mando militar, Rice repitió sin sentido crítico las artificiosas declaraciones

de Uribe en las que aseguraba haber tomado control sobre todos los municipios colombianos. Hablar de una solución definitiva al conflicto armado en Colombia fue, en el mejor de los casos, un acto de desinformación y, en el peor, una movida siniestra. Siguiendo la iniciativa de Rice, Uribe prometió emprender “acciones definitivas” para “derrotar a los terroristas” en el norte de Cauca.²⁰

Aunque Rice declaró que “las mejoras concretas en seguridad e imperio de la ley están fomentando una cultura de legitimidad en Colombia y un sentido de seguridad para sus ciudadanos”, los titulares de prensa la contradijeron rotundamente. El único grupo que implementó el imperio de la ley, las autoridades indígenas del Cauca, fue inmovilizado en el fuego cruzado entre las Farc y el Ejército. Tras la renuncia de cuatro de sus miembros, obligados a hacerlo luego de discrepar acerca de la efectividad de las operaciones conjuntas en tareas de fuerza, el alto mando militar fue catalogado de torpe. La arremetida de las Farc en el norte de Cauca fue una demostración más que convincente de que eran tan militarmente capaces en 2005 como en 1995, y que la efectividad de la “seguridad democrática” en derrotar a las insurgencias había sido sobrestimada.²¹

Ataques como los de Toribio, al igual que los ocurridos en San José de Apartadó, asestaron golpes profundos en el corazón de los movimientos sociales en Colombia. Pero mientras los hechos de San José no podían adjudicárseles a las Farc, los de Toribío servían con creces de ejemplo de la actitud criolla colonial hacia los indígenas que esta organización guerrillera ha venido desplegando consistentemente tanto en Cauca como en otras partes del país.²² La muerte de un niño de nueve años y los daños causados con cilindros bomba fueron transmitidos por todo el mundo. Los hombres y mujeres nasa movilizaron sus

“guardias indígenas”, en un total de 7000, y armados con bastones de mando, símbolos de liderazgo, caminaron hasta el puesto de comando de las Farc al filo de la montaña para pedirles que no lanzaran bombas en el poblado.

Esta clase de acciones comunitarias constituyen verdaderas políticas de seguridad democrática en tanto están basadas en tradiciones comunitarias no-liberales de resolución de conflictos por vías no violentas que promueven el imperio de la ley, la protección gubernamental de derechos fundamentales estipulados en la Constitución, la participación política y democrática y la soberanía popular. Sin embargo, en vez de reconocimiento, la respuesta de Uribe fue insinuar vínculos entre las comunidades y las Farc, tal como lo hizo luego de la masacre de San José de Apartadó. Para finales de mayo de 2005 ya habían sido expedidas doscientas órdenes de arresto en contra de un mismo número de miembros del pueblo nasa acusados de mantener vínculos con la Farc.²³ Como lo hicieron con las Farc y previamente con las AUC, los líderes de la comunidad le reiteraron al presidente Uribe y al cuerpo militar la necesidad de librar sus territorios de todo grupo dentro del sistema de guerra.

En protesta contra la incompreensión del presidente sobre los modos nasa de resolución de conflicto y en rechazo a sus insinuaciones sobre presuntos nexos con la insurgencia, un grupo liderado por el congresista nasa Daniel Piñacué abandonó el recinto de un “consejo comunitario” liderado por Uribe, en el cual se discutía la presencia de policías y militares en el área. Posteriormente, el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (Cric) explicó que:

La metodología, estructura, contenido y dinámica del Consejo Comunitario de Gobierno demuestran que se trata de un espectáculo

mediático por medio del cual el presidente, el gobernador del Cauca y los representantes de las distintas instancias del Gobierno, orquestados por el presidente, dialogan entre sí, imponen su posición, sus informes sesgados, sus políticas e intereses, impiden que estas sean refutadas o cuestionadas y constituyen por ello un ejercicio soberbio y testarudo de imposición de la palabra del establecimiento sobre la realidad que vivimos los pueblos y que no es reconocida ni respetada.²⁴

Claramente Uribe y el pueblo nasa desplegaron visiones incompatibles de autoridad, democracia, seguridad y soberanía popular. Como en San José, la Policía llegó a Toribío para quedarse.²⁵ El Estado no permitiría la neutralidad de los ciudadanos en la guerra que había prometido ganar y demandaba la colaboración contra las Farc. Aquellos que se mantuvieran serían recompensados, mientras que los que no, serían tildados de sospechosos. El líder comunitario Ezequiel Vitonás, quien viajó a Nueva York para pronunciar un discurso ante las Naciones Unidas en mayo de 2005, criticó a Uribe diciendo: “Identidad, unidad, territorio y cultura, esos son los cuatro pilares básicos de una palabra que está contemplada en la Constitución, pero que no se cumple: la autodeterminación de los pueblos aborígenes e indígenas”. Vitonás especificó que *autodeterminación* significaba desarrollar una forma de vida y subsistencia basada en la tradición y defensa ante cualquier amenaza.²⁶

Los derechos indígenas y la autodeterminación merecieron ser mencionados en el Senado estadounidense durante su reunión de ayuda exterior de 2006. Pero no estaba en la lista de prioridades de Bush en Colombia. Haciendo eco de la justificación sobre la política exterior estadounidense en El Salvador a principios de la década de los ochenta, la secretaria de Estado Rice repetía que mientras continuaran los avances en cuanto a derechos humanos, erradicación de cocaína y otros aspectos, Colombia estaba “en camino”. Esta comprensión del

conflicto en Colombia es consistente con la visión que el gobierno de Bush tenía de Irak, formada en parte por veteranos de campañas contrainsurgentes en Centroamérica para quienes El Salvador era usado como ejemplo de éxito imperialista. En enero de 2006 la secretaria Rice y el presidente Bush mencionaron a Colombia como modelo de democracia contrainsurgente. Independientemente, cada uno hizo alusión a la supuesta necesidad del gobierno iraquí de

“limpiar” el territorio de insurgencias y “asegurar” las áreas libres de amenazas, exactamente el mismo lenguaje usado para explicar los objetivos del Plan Patriota y que a partir de octubre de 2005 se convirtió en “estrategia” en Irak.²⁷ En diciembre de 2005, en el noticiero de MacNeal y Lehrer, *News Hour*, el presidente Bush puso a Colombia como ejemplo de éxito imperialista de lo que él llamó: el frente de lucha por “almas y corazones”. Posteriormente, en enero de 2006, Bush empleó los términos “despejar y asegurar”, en su Estrategia Nacional para la Victoria en Irak.²⁸ Un año después, en enero de 2007, ratificó que, como en 2005 y 2006, la estrategia frente a la insurgencia iraquí era “despejar”, “asegurar” y “construir”. Aparentemente, nada tiene tanto éxito como el éxito mismo.

1. Francisco Leal, “La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, *Análisis Político* 50 (enero- abril 2004), 96. Para una mirada al primer año de Uribe en el gobierno que examina las consecuencias prácticas de interpretaciones erróneas, ver Daniel Pécaut, *Midiendo fuerzas* (Bogotá: Planeta, 2003). Ver también, Eduardo Pizarro Leongómez, *Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia* (Bogotá: Norma, 2004).
2. José Obdulio Gaviria, *Los sofismas de la guerra en Colombia* (Bogotá: Planeta, 2005). Gaviria, primo del fallecido Pablo Escobar, es un antiguo ideólogo que de la izquierda liberal se pasó del M-19 a la derecha. Para una discusión sobre cómo llamar la actual fase de guerra, ver Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*; Eduardo Posada Carbó, ¿Guerra civil? El

lenguaje del conflicto colombiano (Bogotá: Alfaomega, 2001); Álvaro Camacho Guizado, William Ramírez Tobón, y Eduardo Pizarro Leongómez en *Análisis Político* 46 (mayo-agosto 2002), 137-80; Eric Lair, "El terror, recurso estratégico de los actores armados en Colombia", *Guerra en Colombia*, 131-39; y Eduardo Pizarro, "¿Conflicto armado o amenaza terrorista?", *El Tiempo*, 26 de abril de 2005.

3. Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 99. La apreciación le pertenece a Antonio Caballero.
4. Isabel Hilton, "Colombia's Drug Untouchables", *The Guardian*, 13 de julio de 2005.
5. Romero, *Paramilitares y autodefensas*, 235-37. Ver también Daniel Pécaut, *Midiendo fuerzas*; Christan Parenti, *The Freedom: Shadows and Hallucinations in Occupied Iraq* (Nueva York: The New Press, 2004), 206; Greg Grandin, *Empire's Workshop: Latin America and the Roots of US Imperialism* (Nueva York: Metropolitan, 2006).
6. Eduardo Pizarro, citado en Robin Kirk, *More Terrible than Death*, 113.
7. Ver Adam Isacson, "San José de Apartadó: Jesús Abad's Disturbing Account", 1º de abril de 2005: cipcol.org
8. SOA Watch, citado en Bill Weinberg, "Uribe's Counter-Guerrilla Campaign Targets Indigenous Models of Demilitarization", 6 de junio de 2005. El 9 de marzo de 2005, 32 congresistas norteamericanos, incluidos líderes republicanos de la Cámara y del Senado, enviaron al presidente Uribe una carta expresando su preocupación de que junto a los paramilitares locales, miembros de las XI y XVII brigadas pudieran estar involucrados. El jefe de la xvii Brigada, el general Héctor Jaime Fandiño Rincón, había estudiado en la Escuela de las Américas durante la era del Plan Cóndor en los años setenta. En una carta con fecha de 1º de julio de 2005, el demócrata Patrick Leahy y el republicano Richard Lugar, jefe del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, junto con otros 20 senadores, solicitaban a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, no certificar al gobierno de Uribe por progreso en los derechos humanos. Entre otras atrocidades citaron la masacre en San José. Adam Isacson, "Human Rights Certification? Not Yet", 16 de julio de 2005: cipcol.org
9. En respuesta, la Alta Comisión de la ONU recordó a Uribe que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la oea pidió al gobierno colombiano garantizar la seguridad de todos los miembros de las comunidades. *El Tiempo*, 23 de marzo de 2005.
10. Hugh Bronstein, "Police in, Population out after Colombian Massacre", *Reuters*, 10 de mayo de 2005; Winifred Tate, "A Visit to San José de Apartadó", 13 de junio de 2005: cipcol.org; Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Comunicado público: la verdad y la transparencia no son ambigüedad ni confusión", 14 de junio de 2004: www.codhes.org.co; Colombia Support Network, "The Massacre at Mulatos in Colombia", 26 de junio de 2005: colombia-support.net

11. Las cabeceras de cinco ríos se unen en San José: Apartadó, Carepa, Currulao, Mulatos y Riogrande.
12. *Semana*, 5 de junio de 2005.
13. Alfredo Molano, “¿Qué hay detrás de San José?”, *El Espectador*, 12 de marzo de 2005; Consejo Comunitario de Curvaradó y Jiguamiandó, “Avanza la palma, la siembra ilegal con la complicidad de la Brigada 17”, 21 de julio de 2005: www.indymediacolombia.org. Los ríos mencionados arriba están situados en Urabá.
14. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunicado público, “la verdad y la transparencia no son ambigüedad ni confusión”, 12 de junio de 2005: www.codhes.org.co
15. Justin Podur, “Will People Power Have a Chance?”, 23 de abril de 2005: www.zmag.org
16. Bill Weinberg, “Uribe’s” Counter-Guerilla” Campaign Targets Indigenous Models for Demilitarization”, 6 junio 2005.
17. *Vanguardia Liberal*, 7 de julio de 2005.
18. En 1985, Tacueyó fue el sitio de la masacre más horripilante que se haya registrado. Paralizado por la paranoia, el comandante del Frente Rodrigo Franco, integrado por disidentes de las Farc cercanos al M-19, liquidó cerca de 180 de sus propios soldados, muchos de ellos de origen nasa.
19. Karl Penhaul, “Colombia Troops Take Rebel-held Town”, 28 de abril de 2005: www.cnn.com. Juan Forero, “Colombia War Spills Into Indians”, *Peaceful World*, *New York Times*, 2 de mayo de 2005.
20. “Uribe ordena una guerra sin cuartel para aplastar a las Farc”, *El Nuevo Herald*, 1 de mayo de 2005.
21. Para una crítica de la eficacia militar de las políticas de seguridad democrática, ver Francisco Leal, “La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”, *Análisis Político* 50 (enero-abril 2004), 97-98.
22. Para un resumen de las relaciones de las Farc con los pueblos indígenas en el Cauca, ver Nazih Richani, *Systems of Violence*, 188 n.15; Pablo Tattay, “Farc y población indígena: una muestra de la relación con la población civil”, en *Las verdaderas intenciones de las Farc* (Bogotá: Corporación Observatorio para la Paz, 1999), 194-98. Tattay fue el vocero para el grupo guerrillero Quintín Lame en las negociaciones con el gobierno de Gaviria.
23. *El Tiempo*, 19 de mayo de 2005.
24. *El Tiempo*, 3 de mayo de 2005.
25. “Indígenas dejan consejo por diferencias con el presidente”, *El Colombiano*, 1 de mayo de 2005.
26. “No vamos a obedecerle a nadie”, *Vanguardia Liberal*, 3 de mayo de 2005.

27. Es un lenguaje reciclado de la Guerra de Vietnam después de la Ofensiva del Tet en 1968, cuando el general Creighton Abrams reemplazó al general William Westmoreland. Ver Marilyn B. Young, "Counterinsurgency, Now and Forever", en Marilyn B. Young and Lloyd C. Gardner, eds., *Iraq and the Lessons of Vietnam: Or, How not to Learn from the Past* (Nueva York: New Press, 2007), 226.
28. Adam Isacson, "Clear and Hold", 5 de enero de 2006: cipcol.org

Conclusión: amnesia por decreto

Solo queremos olvidarnos del pasado.
Manuel Mariano, paramilitar desmovilizado (2006)

Hasta finales del siglo XIX, las frecuentes pero circunscritas guerras civiles hicieron de Colombia un caso representativo y poco excepcional de la política en Latinoamérica; sin embargo, a partir de La Violencia de las décadas de los cuarenta y cincuenta, un conflicto que dejó al menos doscientos mil muertos, su curso histórico se ha venido desarrollando con mayor violencia que en los países vecinos. A pesar de lo divergente de las trayectorias, se puede decir que la política electoral social demócrata apoyada por movimientos sociales ha caracterizado el escenario actual en Suramérica. En Colombia, por el contrario, los movimientos sociales han sido debilitados por el actuar de las insurgencias fuertemente militarizadas, la Policía y las Fuerzas Armadas apoyadas por el imperio y una semiautónoma y crecientemente poderosa coalición de

narcoejércitos privados de derecha. Luego del 11 de septiembre de 2001, las dinámicas de ejercicio del terror contrainsurgente que hace de los civiles blancos de guerra, establecidas durante La Violencia y reforzadas durante la Guerra Fría, fueron reempacadas bajo la rúbrica de antiterrorismo. No es la primera vez que el terror y la amnesia oficialmente declarada se han convertido en *lengua franca* de la sociedad y la política colombianas en respuesta a luchas por lograr paz y justicia.¹

La primera derrota histórica de las fuerzas populares radicales se dio en 1879. Aunque la lucha en Cauca fue regional, los *independientes* liberales respaldaron la búsqueda por predominio de Rafael Núñez y lograron que las implicaciones políticas de su accionar fueran nacionales. Durante la *Era del Capital* (1848-1876), la política oficial en Colombia estuvo marcada por las continuas movilizaciones populares de grupos subordinados que buscaban redefinir ciudadanía y soberanía popular tanto en el discurso como en la práctica. En Cauca, exesclavos, libres de color, comunidades indígenas y pobladores de la frontera agrícola provenientes de Antioquia construyeron una vigorosa cultura política republicana en la que equidad, fraternidad y libertad se convirtieron en ideas por las cuales lucharon, en abierto desafío a la dominación racial y burocrática, los modos de explotación colonial y la configuración espacial del territorio. El Estado fue llamado a mediar, pues estos grupos subordinados exigieron su intervención en los conflictos locales y regionales con los hacendados oligarcas. El hecho que el Estado pudiera abrirse a las demandas políticas de los grupos populares radicales, provocó un miedo tremendo entre la élite regional del Cauca, el cual sirvió de aglutinante para superar las pronunciadas diferencias políticas entre sus diversos

segmentos, lo cual ayudó a unirlos en torno a un conservadurismo autoritario e hispanófilo que asumió el mando del país por medio siglo.

Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y con una producción de café nacional que no dejaba de superar récords previos, las resistencias y rebeliones campesinas e indígenas continuaron desafiando las políticas de monopolio bipartidistas con acciones directas, experimentos locales de autogobierno y nuevos partidos socialistas revolucionarios. Basados en el lema “la tierra es para quien la trabaja”, también desafiaron el dominio de los terratenientes por medio de tomas. Respaldados por el recién formado Partido Comunista y por los sindicalistas de los enclaves de exportación de banano, aceite y oro, estos grupos presionaron a la administración liberal para promulgar un programa de reformas sociales y económicas de redistribución de tierras y riqueza, regulación de las relaciones entre mano de obra organizada y capital, y arbitraje de conflictos entre gobernantes y gobernados. La Ley 200 de 1936, diseñada para conceder títulos a los ocupantes de tierras, no fue ni burguesa —en tanto que no eliminó el desafío a los derechos de propiedad privada— ni democrática puesto que no logró que el derecho a la tierra se difundiera más entre campesinos, excepto a lo largo del Eje Cafetero en donde un campesinado minifundista adquirió títulos para sus parcelas y acceso a intermediarios clase media de los partidos políticos y la asociación de cultivadores.

Para explicar las peculiaridades colombianas, he enfatizado cómo las experiencias de la Guerra Fría se han superpuesto, como en un montaje, con los patrones criollos de gobierno oligárquico anclados en un catolicismo ultramontano, predominio conservador y exportación cafetera a partir de la década de 1880, lo cual, por medio

de políticas reaccionarias, logró integrar parcialmente a los subalternos tanto a la economía como a la sociedad. Puesto que los liberales pretendieron anular cincuenta años de dominio conservador una vez llegaron al poder, el sectarismo partidario se propagó con sed de venganza en las décadas de los treinta y los cuarenta, y engendró formas de guerra total que hicieron de los civiles blancos. La emergencia de un segmento de clase media de políticos, periodistas e ideólogos estimuló esta respuesta sangrienta, en la medida en que estas nuevas voces públicas hicieron de la provocación política y de las ideas extremas su modo de subsistencia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la política agraria en Colombia fue similar a la que luego Samuel Huntington llamaría, en el contexto de la guerra de Vietnam, “proyecto de urbanización forzado”, es decir, obligar al campesinado a migrar a las ciudades por medio de guerras de contrainsurgencia en el campo.² Luego de la década de los cincuenta el sectarismo interno entre las diversas élites fue finalmente conjurado y la contrainsurgencia anticomunista curó las heridas inflingidas unos a otros. Una vez que la élite civil renunció a la resolución militar de los conflictos partidistas, preservar el orden público se convirtió en asunto militar. Como sucedió con la Escuela de las Américas, en donde aproximadamente un tercio más de oficiales colombianos estudiaron en comparación con sus pares de El Salvador, su más cercano competidor. La guerra de Corea sirvió de escuela para hombres que luego ocuparon posiciones de liderazgo dentro del ejército colombiano durante las guerras imperialistas que Estados Unidos librara en Vietnam, Centroamérica y los Balcanes.

El “Estado de terror contrainsurgente” colombiano fue construido por políticos civiles quienes delegaron la

represión a las Fuerzas Armadas, no así por dictadores militares que a fin de salvar a sus sociedades las destrozaron desde adentro, como fueron los casos de Centroamérica y el Cono Sur. Pese a que durante el Frente Nacional el uso del estado de sitio fue regla en vez de excepción, han sido las permanentes guerras civiles en conjunción con una muy puntual democracia electoral parlamentaria antes que dictaduras militares, los rasgos que han hecho sobresalir a Colombia dentro del contexto continental. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el rol directo de los militares en la contrainsurgencia disminuyó y la función paramilitar se incrementó. La trayectoria del ejército colombiano y las élites civiles que gobernaron durante y después de la Guerra Fría conforman solo un lado de la historia de la endémica guerra colombiana y de su generalizado terror político.

Desde la Primera Guerra Mundial hasta mediados de la década de los cuarenta, mientras la inversión de los Estados Unidos aumentaba y los gobiernos de Suramérica se expandían, las movilizaciones populares radicales desafiaron los privilegios y derechos de propiedad de las élites criollas regionales, y socavaron la dominación racial y de clase a un nivel no visto desde la segunda mitad del siglo XIX. Como en la década de 1860, la movilización, acompañada por una reforma moderada, encontró una fiera represión a gran escala. Sin embargo, en tanto que desde mediados del siglo XX la guerra total se había desatado en Europa y Asia, la segunda oleada de reacción fue infinitamente más sangrienta y escasamente más sofisticada en lo tecnológico que la primera. Irónica y perversamente, los gobiernos de derecha y sus para-Estados del terror contribuyeron en gran medida a estimular las movilizaciones armadas de la izquierda en las décadas de los sesenta y setenta al generar migraciones en

dos direcciones: hacia las fronteras urbanas de las ciudades de mayor crecimiento y hacia las fronteras agrarias, especialmente en las selvas del sur y los llanos Orientales. En aquellos lugares el poder del Estado, aun en su aspecto represivo, era muy débil para gobernar. Hasta que las operaciones de contrainsurgencia militar y paramilitar se aceleraron después de 2000 a raíz del lanzamiento del Plan Colombia, financiado por los Estados Unidos, dichas áreas demostraron ser terreno fértil y propicio para el crecimiento de las insurgencias.

Gracias al giro que se produjo en la base productiva del país entre las décadas de los ochenta y noventa hacia una economía extractiva de enclaves y extensas agroindustrias y ganadería, las guerrillas de izquierda lograron avanzar en cuanto a proyección militar, extensión territorial y poder local, a la vez que perdieron alcance político nacional al hacer uso de tácticas de terror que tradicionalmente habían sido empleadas contra ellos por sus oponentes. En Colombia ha habido insurgencias guerrilleras desde 1948, pero sus años de florecimiento tuvieron lugar entre 1978 hasta 1998, es decir, su mayor momento de crecimiento sucedió a la par que su imagen pública se iba deteriorando irremediabilmente.

Este contradictorio desarrollo explica en gran medida por qué, con el apoyo institucional de muchos tipos, los opositores de la contrainsurgencia se propagaron e incrementaron con asombrosa velocidad y aceptación social entre 1997 y 2005, usando como puntos de apoyo las privatizaciones, diversas formas de represión descentralizada y expropiaciones violentas del territorio, y fomentando con ello una masiva concentración de tierra, riqueza y poder político. Durante la prolongada agonía que siguió a la conclusión del Frente Nacional, cuando el gobierno central intentó implementar reformas o negociar

la paz con los insurgentes entre 1983-1984, 1987-1988, 1991-1992 y 1998-1999, los gobiernos regionales y locales, además de los viejos y nuevos latifundistas, unidos de pies y manos con los paramilitares emplearon el terror concentrado contra individuos y comunidades percibidas como enemigos.

Por ser considerados “el ala desarmada de la subversión”, los activistas que buscaban cumplir la promesa del socialismo democrático revolucionario, por la que Salvador Allende entregó su vida en Chile, se convirtieron en blancos de una campaña sistemática de exterminio militar y paramilitar a finales de la década de los setenta. Una década después, con la fundación del partido político Unión Patriota (UP), exterminado en su mayoría, y con los candidatos de izquierda asesinados, ni la insurgencia ni la contrainsurgencia consideraban válida la distinción entre combatientes y civiles. Durante la guerra económica neoliberal de la década de los noventa, un individualismo anárquico y atomizado prevaleció en las fronteras rurales y urbanas, junto al crimen organizado canalizando por medio de la violencia, la intimidación y el exterminio de la izquierda electoral toda la energía antisocial en la creación de capital.³

Las mafias de la cocaína inyectaron sangre fresca a las más antiguas élites de hacendados del campo y comerciantes de las ciudades, poniéndolos a ellos y a los dos partidos tradicionales en respiración artificial en regiones y municipios. Las corporaciones multinacionales encontraron que los narcoparamilitares ofrecían la única garantía de “seguridad” a la propiedad privada y control sobre la mano de obra. Junto con el colapso de precios de 1989, los nexos entre los carteles de la droga y los paramilitares asestaron el último golpe mortal a la *república cafetera* construida desde finales del siglo XIX.

Los traficantes se convirtieron en los más poderosos latifundistas del país. En el nuevo orden instalado por ellos en diversas regiones del país, “la tierra pertenece a quien la expropia”.⁴ Después de China, Colombia es quizá el país con la más grande contrarreforma agraria del mundo; pero, a diferencia de China, en Colombia esta nunca estuvo precedida por una reforma agraria de envergadura.⁵

Diversos mecanismos de tortura, asesinato, masacre y expropiación, similares a los promovidos durante La Violencia, fueron revividos a finales del siglo xx bajo nuevas formas organizativas. Las dinámicas de comienzos del siglo xxi eran nuevas, debido principalmente al tremendo impacto del comercio de narcóticos, al avance político-territorial del paramilitarismo y al incremento de la intervención militar estadounidense. Sin embargo, la vitalidad del pasado, particularmente de La Violencia, seguía siendo palpable.⁶

Sin haberlo advertido hasta entonces, nos encontrábamos con que solo habíamos escrito la introducción al análisis del momento actual. En ningún otro campo de reflexión, el pasado ha tenido tanta fuerza del presente, o el presente, tanta fuerza de pasado,

explicó el historiador Gonzalo Sánchez a finales de los años ochenta.⁷

En regiones periféricas donde la producción de mercancías de exportación y la extracción de recursos naturales predominaba, afrocolombianos, indígenas y colonos mestizos vivieron bajo terror ilimitado, tanto durante La Violencia como nuevamente a finales del siglo xx.⁸ En cierto modo, esta atmósfera fue también una realidad para aquellos que vivían en los centros cafeteros, en donde muchas tácticas de terror fueron ensayadas por primera vez allí en la década de los cincuenta. La proliferación del sicariato, el secuestro y la extorsión

dieron origen a una concepción histórica de trágica circularidad y repetición. Para muchos, la esperanza de un futuro era difícil de sostener, existían motivos de sobra para un profundo pesimismo. Fue este vacío el que Álvaro Uribe entró a llenar con su política de “seguridad democrática”, no exenta de mesianismo y un aura de milagrosa efectividad que pide de gobernados fe y obediencia.

La represión por parte de la derecha y el crecimiento desmedido de la resistencia armada explican la relativa debilidad y fragmentación de los movimientos sociales en Colombia, los cuales jamás lograron articularse como un bloque nacional popular capaz de quebrar el monopolio oligárquico sobre las políticas económicas. En retrospectiva, es claro que siempre que el centro gubernamental se ha inclinado por una política de redistribución —de riqueza, recursos, poder político, etc.— o hacia negociaciones de paz con grupos insurgentes, la respuesta de las élites regionales ha sido producir contundentes virajes hacia la derecha. En esta medida, el poder político ha permanecido enlazado al capital terrateniente y al control del territorio. A mediados de la década de los noventa, el emporio de capos de la droga paramilitarizados se volvió más incluyente, mejor organizado y más estrechamente ligado a funcionarios públicos. El negocio de la cocaína ya no dependía de los carteles centralizados; bajo estos nuevos arreglos organizativos, el negocio del narcotráfico logró vincular los mundos urbanos y rurales mejor que ningún otro sector industrial nacional. Hasta el momento, ninguna fracción de la oligarquía colombiana había conseguido reunir a otros grupos en torno a un proyecto de hegemonía nacional; tampoco ninguno segmento había liderado o dirigido a otras fracciones en el fortalecimiento del Estado-nación, los

derechos de propiedad y el control de la mano de obra. Como resultado de este logro pionero, para principios del siglo XXI los narco-paramilitares en tanto defensores del Estado y la propiedad privada, definieron los límites de la política electoral en los ámbitos locales, regionales e incluso nacional.

El poder disperso de un centro político débil constituye un testimonio de la soberanía parcelada. Aun si los precedentes no significasen nada, emular los hechos de la contrainsurgencia venezolana en Falcón a principios de la década de los sesenta o los de Fujimori en Ayacucho y el Alto Huallaga en la década de los noventa, requeriría una capacidad para movilizar unas bases campesinas amplias hostiles a las guerrillas y simpatizantes del clientelismo anticomunista. Sin embargo, este nunca fue el caso en las selvas y llanos del sur y sureste de Colombia. Falta ver si la llegada del ejército colombiano, antecedida o seguida por la ocupación paramilitar, logrará crear estas bases simpatizantes. Arrasar con la tierra desde el cielo para hacer imposible la vida económica en las zonas rebeldes es una táctica con antecedentes en los inicios de la Guerra Fría, que el epígrafe del capítulo 7, del crítico cultural Estanislao Zuleta, encapsula vívidamente: “Si no podemos ni queremos modificar las circunstancias que determinan estas manifestaciones de miseria, marginalización y desesperanza, ¡entonces eliminemos a las víctimas!” No obstante, vale anotar que esta estrategia, exitosa en cuanto a la destrucción siempre temporal de los síntomas, no ha alterado la condición primera del surgimiento y persistencia de las guerrillas y las movilizaciones populares radicales en Colombia, es decir, el orden político excluyente. En el mejor y peor de los casos podría decirse que lo ha rodeado de una armadura impenetrable.

Aunque Colombia es hoy en día excepcional dentro del contexto de América Latina gracias a su irresuelta guerra civil, en el ámbito mundial es mucho más representativa que Bolivia, por ejemplo, en donde las movilizaciones populares han establecido fuertes restricciones a la violencia estatal y han permitido la nacionalización de los hidrocarburos, así como un cambio en las formas de representación política para incluir más que a las minorías dominantes de criollos y mestizos. En este libro me he enfocado en explicar el carácter excepcional de la violencia política de Colombia desde los años cuarenta, para en el capítulo final sugerir que con los presidentes Bush y Uribe, Colombia ha estado a puertas de convertirse en un modelo para el mundo de contrainsurgencia “exitosa” y democracia de “baja intensidad”.

Con la venia de Washington y las instituciones financieras internacionales en la década de los noventa, la riqueza y el poder se concentraron a niveles extraordinarios en aquellos países con sistemas parlamentarios democráticos excluyentes, caracterizados por elecciones regulares y políticas económicas neoliberales. El Salvador, Nicaragua y Guatemala son ejemplos claros de cómo en Latinoamérica el crimen organizado disparado, la impunidad y los asesinatos políticos con oscuros tentáculos en el mundo de la mafia, le siguieron a la etapa de contrainsurgencia “exitosa”. Salvo que tanto el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) resistieron exitosamente la transición de ejército a partido electoral, aunque de manera casi irreconocible.⁹ Como muchas democracias de mercado emergentes por fuera de las fronteras del Atlántico norte, los conflictos de clase y étnico-raciales endémicos son una característica de sus sistemas políticos, los cuales se sostienen sobre altos

niveles de violencia, impunidad y una fusión entre política y crimen organizado. Irak y Afganistán podrían constituir otros dos ejemplos de sociedades donde las insurgencias, las políticas neoliberales y las elecciones “democráticas” toman lugar en medio del reino de la impunidad y el crimen organizado, si no fuera porque ambos países están bajo ocupación de Estados Unidos/Otan y son, por consiguiente, excepcionales dentro del escenario mundial actual.

Como parte de la formación de Estados-naciones liberales, otras “democracias de baja intensidad” en Latinoamérica han establecido comisiones de la verdad tras periodos de terror político y estatal patrocinados por los Estados Unidos.¹⁰ En el caso colombiano, la incorporación de los paramilitares a la política electoral y a la vida pública ha tenido como premisa la amnesia oficialmente sancionada con precedentes en la Guerra Fría. Con la Ley de Justicia y Paz, Álvaro Uribe ha permitido que criminales paraestatales difuminen su accionar delictivo tras una bruma de olvido y prosperen tal como lo hicieron aquellos amnistiados por Rojas Pinilla en la década de los cincuenta.

Tres diferencias significativas sobresalen entre aquel momento y el presente. Primero, la falta de vínculos de mecenazgo con cualquiera de los partidos políticos que caracteriza a las guerrillas de izquierda actuales hace muy probable que estas tengan pocas posibilidades de sacar partido de dicha ley de amnistía. Con el gobierno de Uribe, las Farc estarán en la mira como “terroristas” y destinadas a la eliminación. Segundo, la coalición regional de bloques paramilitares es mucho más fuerte con relación a los dos partidos y al gobierno central de lo que fue hace cincuenta años. Su estrategia de acumulación de capital y su evolución como Estado paralelo les ha concedido considerable autonomía del Estado que los creó y protege. Tercero, el sistema bipartidista está colapsando ante el

impacto del *uribismo*. Cualquiera que sea el futuro de conservadores y liberales, es poco probable que sobrevivan intactos al proceso de integración paramilitar al Estado y a la sociedad.

A fin de examinar el pasado para analizar el presente, he introducido una serie de debates públicos acerca de la memoria y la justicia a la luz de lo acontecido anteriormente. Los modos coloniales de dominación política, explotación económica y discriminación étnico-racial no tuvieron fin con las guerras de Independencia, sino que ingresaron en una nueva etapa de desarrollo de la cual todavía no terminan de emerger. El momento actual es ciertamente uno de los más sombríos de la historia de Colombia, pero si el pasado sirve de guía, este nos enseña que así como ha venido también se irá.

Si algo han demostrado los diferentes movimientos sociales en Colombia ha sido una gran capacidad de persistencia para recrearse a sí mismos bajo las más adversas de las circunstancias y a pesar de las sucesivas oleadas de terror estatal, paramilitar e insurgente. Estos movimientos han luchado por hacer al Estado responsable frente a sus ciudadanos y por fortalecer el imperio de la ley de acuerdo con los derechos constitucionalmente establecidos. Por lo tanto, con sus discursos y acciones han ofrecido un modelo diferente de autoridad que echa raíces en formas colectivas noliberales de democracia, modelo radicalmente opuesto al ofrecido por el Estado o las insurgencias, ni hablar del para-Estado. En comparación con el pueblo nasa en Cauca, las comunidades de paz como la de San José de Apartadó o los afrocolombianos e indígenas de Chocó, tanto las Farc como las contrainsurgencias gozan de visiones tremendamente empobrecidas de democracia, seguridad, autonomía y soberanía. Tras observar el pasado colombiano, lo que

florece es esperanza por el hecho de que, de tiempo en tiempo, los movimientos sociales han sabido hacer acopio de fuerzas para levantarse bravíos en pos de la autodeterminación en una polis más pacífica, equitativa y justa.

1. Sobre la amnesia colombiana, ver Antonio Caballero, "Prólogo", en Olga Behar, *Las guerras de la paz*, pp. 7-9.
2. Noam Chomsky, *At War with Asia: Essays on Indochina* (Nueva York, Vintage, 1972), p. 55; Mike Davis, *Planet of Slums* (Nueva York, Verso, 2006), p. 56.
3. Fabio López de la Roche, "Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas", en Fabio López de la Roche, comp., *Ensayos sobre cultura política colombiana*, p. 181.
4. Alfredo Molano, "La tierra es para quien la expropia", *El Espectador*, 17 de octubre de 2004.
5. Para el proceso dirigido por el Estado en China, que se basa en la deuda y los impuestos en vez de en la expropiación violenta, ver Yiang Lin, "Dark Side of the Chinese Moon", *New Left Review* 32 (marzo-abril 2005), pp. 131-40.
6. Para una nota sobre la legalidad de la violencia, ver Álvaro Camacho Guizado, "El ayer y el hoy de la violencia en Colombia: continuidades y discontinuidades", *Análisis Político* 12 (enero-abril 1991), pp. 27-42.
7. Gonzalo Sánchez, "Reseña: *Orden y violencia*, por Daniel Pécaut", *Análisis Político* 2 (septiembre-diciembre 1987), p. 164.
8. Gonzalo Sánchez, 'Guerra prolongada y negociaciones inciertas', p. 25.
9. William I. Robinson, *Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization* (Nueva York, Verso, 2003).
10. Greg Grandin, "The Instruction of Great Catastrophe: Truth Commissions, National History, and State Formation in Argentina, Chile, and Guatemala", *American Historical Review* 110: 1 (febrero 2005), 46-67. Para un estudio comparativo de comisiones de la verdad y legislación sobre crímenes contra la humanidad, ver Iván Cepeda Castro y Claudia Girón Ortiz, "Procesos públicos de esclarecimiento y justicia de crímenes contra la humanidad", *Análisis Político* 50 (enero-abril 2004), pp. 52-71.

EPÍLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

Después de la publicación del libro en inglés una serie de acontecimientos que jamás hubiera podido anticipar tuvieron lugar en la esfera pública en Colombia. De igual manera, una serie de investigaciones históricas salieron a la luz, las cuales me obligan a unas palabras.

Me refiero específicamente a los libros de Alfonso Múnera y Marixa Lasso, por los que ahora sabemos mucho más sobre la transición de la colonia borbónica a la nación republicana. De haber empezado a escribir en 2007 y no años antes, hubiera intentado incorporar estos nuevos descubrimientos históricos sobre la formación de la nación con relación a clase, raza y región. También hubiera periodizado el libro de otra manera, para comenzar la narrativa en la costa Caribe setenta años antes que los dos partidos políticos surgieran claramente diferenciados a mediados del siglo XIX. El horizonte que hubiera trazado en el tiempo y el espacio hubiera comenzado con estas luchas populares anticoloniales caribeñas de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Por otra parte, en el recuento del auge cafetero y de la clase dirigente paisa a finales del siglo XIX el texto original publicado en inglés, quizá por su brevedad, tiende a pasar por alto matices importantes. En los hechos, la transición hacia una economía cafetera derivó en la guerra civil más

sangrienta de América Latina en el siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, como lo demuestra cabalmente el trabajo de Charles Bergquist. A la par del faccionalismo de las élites y la incorporación de clientelas campesinas a los dos partidos, Colombia se jugaba con la economía cafetera la construcción de una identidad nacional mestiza, la cual es dominante hasta hoy. Estos hechos hacen de la expansión del café un proceso más complejo, dilatado y conflictivo que lo que yo logré reflejar en el libro. Y es ese proceso de mestizaje lo que diferencia claramente a Colombia de países con poblaciones indígenas o africanas más numerosas, como Bolivia, Perú, Guatemala, Cuba o Brasil.

Del mismo modo extiendo un mea culpa por no prestarle suficiente atención a la resistencia de los artesanos en Bogotá en el siglo XIX, bien documentada en el libro y múltiples ensayos de David Sewall.

Más allá de estas correcciones a posteriori, quisiera resaltar una falla de mayor envergadura. El enfoque centrado en la dinámica entre la insurgencia armada y la contrainsurgencia no me permitió incorporar los resultados de las investigaciones de Mauricio Archila y Renán Vega en cuanto a los movimientos sociales, incluyendo a los sindicatos, durante el siglo XX. En este sentido, la narrativa sobre la evolución de la guerra y la paz hubiera podido ser más rica al introducir los hallazgos de Archila y Vega respecto a procesos de formación y evolución de los distintos movimientos sociales, los cuales son el objeto de preocupación de los primeros y últimos capítulos de este libro. De haberlo hecho, hubiera podido explicar mejor el desfase entre una insurgencia fundamentalmente rural y fronteriza, y una población cada vez más numerosa en los grandes centros urbanos. Sin subestimar los estragos del terror contrainsurgente, ese desfase es lo que mejor explica la debilidad crónica de los movimientos sociales y la

izquierda en Colombia, algo que salta a la vista en comparación con los países vecinos. Cabe decir que esa debilidad crónica es una de las consecuencias no buscadas de la estrategia fallida de la insurgencia armada, basada en una lectura equivocada de la resistencia popular en la historia colombiana.

Por último, junto al trabajo editado por León Valencia y Claudia López sobre paramilitarismo, además de la compilación de Claudia López y Mauricio Romero, los informes de la Comisión de Memoria Histórica respecto a las masacres más representativas del país de finales de siglo xx serán una fuente indispensable para historiadores del futuro, igual que el informe final de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV).

Estas son apenas algunas de las limitaciones de las que estoy consciente gracias a discusiones con colegas y a la lectura de trabajos recientes. Es de esperar entonces que más salgan a la luz con la publicación del texto en español. Sin embargo, a manera de disculpa preventiva, quisiera recordarle a los lectores que los libros son, como todo en la historia, criaturas ancladas en las coordenadas de su propio tiempo. Esta no es una excepción.

Chicago, febrero de 2015

ÍNDICE ANALÍTICO

“Aviso: En esta versión ePub de la obra no hay números de página fijos. Los números que aparecen a continuación corresponden a las páginas de la versión impresa, por lo cual podrían no dirigir al pasaje del texto correcto. Sin embargo, estas listas de términos funcionan como un índice de palabras clave”.

A

activistas 9, 25, 147

afrocolombianos 14, 19, 20, 37, 40, 41, 48, 52, 53, 66, 76, 94, 144, 177

amenazas 149, 152, 159, 160, 181

América Latina 16, 24, 26-30, 37, 48, 50, 59, 60, 70, 78, 80, 83, 86, 88

Amnistía Internacional 157, 174

Análisis Político 23, 26, 30, 48, 84, 91, 97, 143, 166, 173, 174, 179

Anapo 86, 93

antinarcóticos 147, 148, 169

Antioquia 11, 21, 27, 39, 40, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 85, 92, 94, 98, 143, 145, 150, 152, 153, 160, 162

antiterrorismo 174, 175

aparceros 29, 43, 47, 50, 53, 55, 59, 62, 63

Apartadó 175-177, 179, 180
Asamblea Constituyente 20
asesinato 21, 71, 74, 153, 161
AUC 21, 143, 145, 146, 148, 149, 151-153, 157, 159, 160,
162, 163, 165-167, 177, 180
autodefensa 166, 167
Ayala Diago, César Augusto 86, 93

B

Bandoleros 79, 85, 86
Behar, Olga 89, 91, 92, 96, 97
Bergquist, Charles 9, 19, 23, 25, 27, 48, 50, 53, 63, 69, 72,
79, 90, 92
Betancourt, Darío 26, 70, 74, 80, 86, 92, 98
Bogotazo 70-73, 76
Botero Herrera, Fernando 52, 97
Boyacá 54, 65, 69, 70, 72-74, 93, 143
Bush 141
Bushnell, David 25, 27, 28, 54

C

Caballero, Antonio 22, 153, 174
café 22, 28, 31, 32, 38, 49, 50-53, 62-64, 70, 74, 75, 80, 84-
86, 88, 94, 95, 99, 100
Caguán 143, 178
Caquetá 78, 87, 89, 92, 99, 143, 146-148, 165, 168, 178
Cartel de Cali 146
Cartel de Medellín 152
Castaño, Fidel 150
Cauca 37, 38, 40-43, 47, 50, 51, 54, 60, 62, 69, 73-75, 77,
86, 89, 93, 98, 160, 178-180
clase obrera 28, 29, 90, 93, 96
clientelismo 28, 29, 32, 44, 47, 49, 53, 55, 79, 83, 98, 141,
154

coca 22, 24, 145-148, 151, 168, 169
cocaína 24, 31-33, 95, 98, 99, 146, 148, 152, 153, 160, 167,
169, 170, 181
colonialismo 24, 31, 52, 71, 75, 79, 173
colonos 14, 51, 69, 145, 169
comerciantes 31, 39-41, 49, 50-52, 60, 63, 71, 73, 74, 78,
85, 145, 160
Comunidad de Paz 176, 177
comunistas 60, 61, 70, 73, 77-79, 86, 88, 89
conflicto colombiano 14, 20, 165, 174
Conquista 20, 24, 26
contrabando 31, 50, 160, 161, 165
contrainsurgencia 15, 22-25, 29, 30, 32, 86-89, 92, 95, 98,
142, 146, 147, 150, 154, 169, 170, 173, 175
Convivir 152, 163, 164
Córdoba 71, 93, 97, 150, 152, 153, 159, 161
corruptos 98, 146
Corte Constitucional 23, 33
Cubides, Fernando 92
Chávez, Hugo 147, 165

D

DEA 152, 153
Deas, Malcolm 27, 38, 48
derechos humanos 9, 21, 24, 25, 97, 143, 148, 159, 164,
174-176, 181
desarme 23, 164
desmovilización 23, 78, 160, 164-166
desplazados 23, 78, 168
Dudley, Steven 159

E

El Espectador 26, 151, 153, 157, 163, 164, 167-169, 177

élites 14, 23, 26, 28, 30, 31, 38, 41-43, 47, 49, 51, 52, 66,
84, 85, 145, 158
El Líbano 76, 90
ELN 20, 21, 84, 90-92, 95, 96, 98, 99, 142-145, 148, 158,
165, 174
El Tiempo 26, 75, 150, 158-161, 164, 167, 168, 174, 176,
180
EPL 91, 97, 152, 160
esclavitud 24, 37, 40, 41
Escobar, Pablo 151, 152, 174
Estado 11, 14, 21, 22, 24-26, 29, 30, 32, 33, 40, 50, 53, 61,
69, 70, 75, 77, 83, 85, 87, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
142, 148, 150, 151, 154, 157-159, 163, 164, 166, 168,
173, 174, 176-178, 180, 181
Estados Unidos 16, 60, 61, 70, 77, 78, 83, 86-89, 141, 145-
147, 153, 160, 165, 166, 168, 174, 175, 178
expropiación 14, 20, 22-25, 29, 30, 79, 80, 149, 157, 168,
177
extradición 11, 98, 153, 159, 160, 164-167

F

Fajardo, Darío 26, 31, 168
Fals Borda, Orlando 70, 75, 77
Farc 11, 20, 21, 24, 74, 79, 87, 89, 90, 92, 96, 97, 99, 141-
149, 151, 152, 157, 158, 162, 165, 167, 174-176, 178-
180
FMI 143
Franco 66, 78, 84, 88, 91, 92, 178
Frente Nacional 31, 32, 81, 83-89, 93-95, 99
Fuerzas Armadas 20, 22, 24, 86-89, 141, 143, 144, 147,
148, 150, 157
fumigación 98, 148, 168, 169

G

Gaitán, Jorge Eliécer 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71-73, 79, 92, 93, 96
ganaderos 93, 145, 150
García Márquez, Gabriel 11, 54, 95
Gaviria, César 120-123, 133, 134, 136, 143, 158, 164, 174, 179
Gaviria, Gustavo 104
Gaviria, José Obdulio 174
Gómez, Laureano 15, 65, 70, 76, 79, 84, 87, 158
Gramsci, Antonio 28, 31
Green, John 54, 59, 63, 64, 66
Guerra de los Mil Días 31, 48, 53, 54, 64, 69, 73, 85, 90
Guerra Fría 15, 25, 26, 30, 32, 59, 70, 77-80, 83, 85, 87, 92, 95, 150, 154, 174, 175
guerras civiles 14-16, 25, 27, 40
guerrillas 14, 21, 32, 73, 76, 78, 83, 85, 88-91, 96-98, 141, 142, 144, 146, 149, 150, 154, 157, 158, 163, 175, 176
Guha 13, 31

H

Henderson, James 65, 77
Hobsbawm, Eric 13, 15, 16, 37, 59, 79
Human Rights Watch 23, 157, 158, 163, 166

I

Iglesia 38, 39, 40, 43, 47, 48, 51, 53, 60, 61, 63, 84, 99, 145
impunidad 23, 24, 84, 151, 164
indígenas 14, 19-21, 24, 25, 29, 30, 40-43, 47, 48, 52, 53, 55, 62, 77, 93, 94, 145, 147, 149, 177, 178, 179, 180
industriales 31, 51, 84, 92, 93, 144, 145
industria manufacturera 22, 51, 52, 100
informantes 21, 150, 151, 161
insurgencias armadas 20, 87, 99, 174
intelectuales 9, 26, 48, 55, 71, 76, 86, 93, 95

izquierda 25, 32, 54, 55, 61, 71, 72, 78, 90, 92, 94, 95, 97,
99, 142, 145, 174

J

Jiménez, Michael 50, 60, 63, 79

K

Kirk, Robin 72, 75, 88, 97, 148, 150, 159, 174, 175

L

lavado de dinero 153, 160, 161

López Michelsen, Alfonso 86, 94, 95, 96

López Pumarejo, Alfonso 61, 64, 65, 75, 85, 86, 94

llanos Orientales 76, 77, 78, 89, 93

Lleras Camargo, Alberto 63, 64, 69, 70, 84, 87, 88

Lleras Restrepo, Carlos 75, 88, 92, 93, 94

M

M-19 96, 97, 151, 174, 178

mafia 98, 159, 160, 162, 164

Magdalena Medio 54, 71, 92, 93, 99, 142, 143, 150

Mancuso, Salvatore 152, 153, 159, 166

marihuana 95, 98, 99, 146

masacre 54, 64, 144, 163, 168, 175, 176, 178, 179

mestizaje 19, 24, 28, 51, 55

milicias 20, 32, 48, 64, 72, 73, 78, 90

Molano, Alfredo 26, 31, 75, 79, 141, 152, 157, 159, 164,
167-169

movimientos populares 26, 29, 30, 55, 86, 98, 99, 178

MRL 86, 90, 91, 94

multinacionales 20, 23, 55, 100, 145, 149

N

narco-paramilitarismo 11, 151, 153

narcotraficantes 14, 145, 152, 153, 158, 159, 164
negociaciones de paz 141, 142, 145, 148, 149, 165

O

oligarquía 27, 28, 31, 37, 72, 75, 84, 95, 97, 153
Ospina Pérez, Mariano 51, 64, 70

P

pájaros 74, 75, 77, 78, 92, 160, 163
Palacios, Marco 25, 28, 31, 40, 54, 63, 84, 86, 94, 95
Panamá 23, 38, 48, 88
paramilitar 20-23, 142, 146, 148, 150, 152, 153, 157, 158,
160-162, 166, 167, 169
parapolítica 11, 151, 163
Partido Conservador 28, 47, 60, 77, 84, 98
Partido Liberal 40, 43, 54, 59-64, 79, 83, 86, 92, 98, 145,
149, 150, 164
Paz 48, 91, 98, 157, 160, 166, 176, 177, 179
PCC 60, 61, 64, 73, 93, 96
Pécaut, Daniel 26, 28, 38, 39, 63, 64, 92, 173, 174
Peñaranda, Ricardo 25, 27, 74
Pizarro, Eduardo 79, 96, 173, 174, 175
Plan Colombia 21, 26, 141, 145-149, 151, 157, 168, 169,
170
Plan Patriota 158, 165, 170, 178, 181
Primera Guerra Mundial 49, 52, 54
privatización 15, 30, 42, 94, 95, 150

Q

Quintín Lame 53, 93, 179

R

Regeneración 14, 15, 27, 44, 47-49, 52, 53, 80

represión 20, 30, 54, 64, 74, 77, 85, 92, 96, 97, 99, 100,
146
resistencia popular 13, 71
revolución social 15, 29, 59
Richani, Nazih 25, 62, 145
Rojas Pinilla, Gustavo 70, 74, 77, 78, 84, 86, 93, 94, 96
Romero, Mauricio 79, 150
Roldán, Mary 27, 53, 70

S

Samper, Ernesto 153
Sánchez, Gonzalo 9, 13, 26, 27, 33, 48, 55, 60, 69, 71, 72,
75, 77, 79, 83-86, 88, 95, 97, 142, 149, 150
secuestro 21, 91, 98, 144, 149, 154
Segunda Guerra Mundial 15, 30, 60
seguridad democrática 150, 165, 173, 178, 179
Semana 22, 153, 164, 166, 177
sicarios 161
sindicatos 14, 50, 55, 59, 61-64, 66, 73, 77, 78, 87, 95, 96,
97, 99

T

terratenientes 28, 29, 31, 32, 39, 40, 42, 49, 50, 53, 61, 62,
74, 76, 83, 87, 93, 94, 145, 158, 167
terror 21, 24, 26, 27, 29, 30, 42, 60, 66, 69, 75, 77, 79, 80,
97, 99, 149, 163, 169, 170, 174, 177
terroristas 21, 142, 150, 179
Tirado Mejía, Álvaro 27, 83, 96
Tirofijo 74, 89, 91, 95, 144
Torres, Camilo 91
tráfico de drogas 22, 144, 152, 157
Turbay Ayala, Julio César 15, 96

U

Unión Soviética 15, 72, 87, 175

Unir 63

Urabá 76, 91, 93, 97, 99, 150, 168, 175-177

Uribe, álvaro 11, 13, 15, 20, 21, 149, 150, 152, 173, 179

V

Violencia, La 13-16, 23, 25-28, 31, 32, 54, 62-65, 67, 69, 70, 72-77, 79, 80, 83-87, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 145, 149, 163

violencia política 25, 26, 69, 70, 84, 96, 99

W

Washington 27, 60, 63, 87, 141, 148-150, 167, 168, 173

La horrible noche El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica Este libro forma parte de la colección Folios y fue editado por la Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Se imprimieron 300 ejemplares en septiembre de 2017, en la Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas, Javegraf.

Fuentes: principal Joanna MT Std y secundaria Univers LT Std, en el interior se utilizó papel Holmen Book 60 g, y la cubierta en Propalcote 240 g.

Bogotá, D. C., Colombia.

Forrest Hylton

Enseña la historia de América Latina, el Caribe y los pueblos indígenas de las Américas en Northwestern University (Chicago). Durante el año académico 2016-17 ha sido investigador del Charles Warren Center en Harvard University. Ha sido profesor en Harvard y la Universidad de los Andes. Su tesis de doctorado en New York University, donde también recibió un beca posdoctoral, fue premiada. Es autor y coautor de varios libros y ensayos sobre la autoridad, el poder, y el autogobierno indígena en Bolivia en el siglo XIX y La Guajira en el siglo XVIII, además de la insurgencia y la contrainsurgencia en Colombia en los siglos XX y XXI. Con Lina Britto, es coproductor, coautor e investigador del documental *Espíritus guerreros: la presencia de las luchas del siglo XVIII* (Universidad de los Andes / Northwestern University, 2014). Es autor de *Vanishing acts: A tragedy* (2010), una novela bilingüe sobre la guerra urbana en

Medellín a principios del milenio.



Otros libros de la
colección Folios

Los poderes en la frontera
Misiones católicas y protestantes,
y Estados en el Vaupés colombo-brasileño,
1923-1989.
Gabriel Cabrera Becerra

Babilonia y el teatro de la máquina parásita
Metáforas en el tiempo para pensar
la ciudad latinoamericana.
Manuel Bernardo Rojas

Un edén para Colombia al otro
lado de la civilización

Los Llanos de San Martín
o Territorio del Meta, 1870-1930.
Lina Marcela González Gómez

El encantamiento de Forrest Hylton le llevó a buscar la lógica o, si se quiere, la crítica de la razón del conflicto en Colombia. A la postre, y seguramente muy a pesar de su espíritu combativo, la pesquisa le dejó la sensación de que la historia colombiana está dominada por un insuperable movimiento pendular que oscila entre la irrupción de la protesta y la demanda radical-popular, y la subsiguiente oleada represiva, cuya respuesta inevitable es a su vez la rebelión armada. Esta última se traduce, por la vía de la recurrencia, en lo que el autor llama *hipertrofia militar de la resistencia popular*. Esa es al menos una de las facetas que deja entrever este libro, profundo y militante... El texto es una búsqueda clara de la sustancia del conflicto colombiano.

Gonzalo Sánchez Gómez, director del Centro de Memoria Histórica.

edito
UNAL

